LA SUBLEVACIÓN DE LA ESCUADRA

Y EL PERÍODO REVOLUCIONARIO 1924-1932

Germán Bravo Valdivieso

EDICIONES ALTAZOR

LA SUBLEVACIÓN DE LA ESCUADRA
Y EL PERÍODO REVOLUCIONARIO 1924 - 1932

© GERMÁN BRAVO VALDIVIESO, año 2000

© EDICIONES ALTAZOR, año 2000
Arlegui 595 / Telefax (32) 486456
Viña del Mar
e-mail: altazor@terra.cl

•LA SUBLEVACIÓN DE LA ESCUADRA
Y EL PERÍODO REVOLUCIONARIO 1924-1932•

Segunda Edición, año 2001

Derechos reservados
Inscripción N° 106.235
I.S.B.N. 956-7472-15-7

Edición al cuidado de:
Patricio González

Diseño y diagramación:
Ediciones Altazor

Impreso en:
Altazor Impresores

Impreso en Chile / Printed in Chile

LA SUBLEVACIÓN DE LA ESCUADRA Y EL PERÍODO REVOLUCIONARIO 1924 - 1932

Germán Bravo Valdivieso

EDICIONES ALTAZOR

Agradecimientos

Este libro me significó la lectura de todo lo que llegó a mi conocimiento que se haya escrito sobre el doloroso episodio de la sublevación de las tripulaciones de la escuadra en 1931, pero, lamentablemente, la mayor cantidad de ello no es objetivo, debido a que se publicó en momentos de efervescencia política y de acuerdo a las conveniencias de algún sector.

En la difícil tarea de interpretar los episodios descritos en forma distinta por diferentes autores, tuve una gran ayuda al poder entrevistar a las escasas personas que aún viven y que fueron actores presenciales de los hechos. Asimismo tener acceso a documentos personales, inéditos, que me fue permitido por descendientes de los actores principales.

En este sentido quiero agradecer al almirante don Jorge Swett Madge, que era alumno del último curso de la Escuela Naval y que se encontraba embarcado en el acorazado «Almirante Latorre».

Al abogado don Jorge Guarello Fitz Henry, que falleció antes de que concluyera el libro, quien me facilitó el conocimiento de todos los radiogramas cursados entre los buques sublevados.

Al capitán de navío, en retiro, don Carlos Aguirre Vío, que era oficial del destructor «Hyatt».

Al coronel, en retiro, don Carlos Vío Valdivieso, que era teniente del regimiento de caballería Coraceros cuando tomaron la sublevada base aérea de Quintero.

Al capitán de navío, en retiro, don Guillermo Leyghton Leyghton, quien era oficial de guardia del crucero «O'Higgins» la noche de la tragedia.

Al almirante don Ernesto Huber Von Appen, quien tuvo la gentileza de facilitarme la correspondencia familiar de su padre, capitán de fragata Leonardo Huber E., comandante del destructor «Orella» a su hermano, contando los hechos.

A la señora Valeria Rossi, hija del almirante don Raúl Rossi Contreras, oficial del destructor «Hyatt», quien me permitió el acceso a los recuerdos de su padre, cuando vivía sus últimos días y falleció antes de la publicación de este libro.

Al reverendo padre don Juan Agustín Rodríguez Gazitúa, quien me facilitó el acceso a la defensa del comodoro Hozven, que presentó su padre el capitán de fragata don Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda, al Consejo de Guerra.

Al contraalmirante don Paul Balaresque Walbaum que me aclaró aspectos que tuvo la oportunidad de conocer de la lectura de los sumarios guardados en la base naval de Talcahuano.

Y a todos aquellos que, involuntariamente, he omitido mencionar

Muchas gracias

Introducción

El primero de septiembre de 1931 se produjo un motín en los buques de la escuadra chilena, el cual, con el correr de las horas, se fue extendiendo a otras reparticiones navales e incluso afectó a unidades del Ejército y de la joven Fuerza Aérea Nacional que nacía en esos días de la fusión de las armas aéreas militar y naval.

Este hecho es el más grave acto de indisciplina castrense que ha conocido nuestra república en toda su vida cívica y siempre han constituido un tema de discusión y apasionamiento su génesis, sus fines, quienes fueron sus instigadores y como pudo suceder en la rama de las fuerzas armadas que había demostrado una disciplina más férrea y una mayor independencia de la política contingente.

Mucho escribieron los contemporáneos y testigos de los hechos atribuyendo sus causas a motivos que a cada autor le convenía hacer resaltar y culpar de ellos a movimientos, instituciones, grupos o personas según sus ideas y simpatías y acallar la participación o influencia de otros.

Pretende este libro, sesenta y nueve años más tarde, relatar los hechos y buscar las causas de ellos sin abanderamiento alguno; pero relatando actuaciones que hicieron posible la existencia de una situación política y militar que permitió llegar a la sublevación, aunque deban figurar personajes que, antes o después, alcanzaron alta figuración histórica.

Para poder describir el escenario en que se desarrolló el drama es preciso remontarse a los años que siguieron a la guerra civil de 1891, pues los gobiernos constitucionales entre ella y el golpe militar de 1924 hicieron a los partidos políticos, a través de su control del parlamento, los dueños de un feudo, llamado Chile, que lo gobernaron a sus anchas, sordos a las necesidades de sus conciudadanos y a las nuevas inquietudes sociales que surgían por la crisis que nos afectaba y por las nuevas ideas políticas que traían los vientos europeos que vivieron la caída de la dinastía Romanoff y el triunfo de las ideas de Lenin.

El primer campanazo de alarma lo dio la elección senatorial de Tarapacá en 1915, pero los partidos no entendieron su advertencia y siguieron administrando el país para su conveniencia, desconociendo el drama que estaban viviendo los obreros que habían quedado cesantes a causa de la crisis en el mercado salitrero, el cual era pasto fácil para las llamas de los movimientos socialista y anarquista.

Hoy nos cuesta entender como ninguno de los presidentes de la república que rigieron Chile en ese período se presentó con un programa de gobierno definido que mostrara cuales

eran las realizaciones que haría, sino que solamente representaba a alguno de los dos grupos mayoritarios que se disputaban los cargos y posiciones públicas.

La elección presidencial de 1920, que llevó a la primera magistratura a Arturo Alessandri Palma, tampoco hizo reaccionar al status político y continuaron en su deporte favorito de hacer caer ministerios para negociar con el Presidente los nuevos nombramientos.

El país vivía una generalizada crisis económica que afectaba a gran parte de la población, la cual azotaba, con virulencia, a las fuerzas armadas que alcanzaron a estar seis meses impagas y los proyectos de mejoramiento de sueldos eran desechados por falta de dinero; en estas circunstancias el Congreso Nacional, violando la Constitución, decretó que los cargos de diputado y senador fueran rentados, con efecto inmediato, lo cual produjo la protesta de la oficialidad del Ejército y el movimiento militar de 1924.

Aquí se encuentra el primer eslabón de la cadena que va concatenando los hechos que desembocaron en el motín, pues el desquiciamiento político a que se había llegado produjo la actuación del Ejército para poner fin a los excesos y arbitrariedades que se cometían; lo que relatamos en capítulo primero[1].

Cuando la Presidencia de la República pasó a Arturo Alessandri, quien representaba muchos de los cambios que los postergados reclamaban, buscó el apoyo de la oficialidad joven del Ejército para quebrar la mano al parlamento y los hizo intervenir en su favor en las elecciones parlamentarias de 1924. Esto no significaba otra cosa más que sacarlos de sus labores profesionales para hacerlos partícipes de la confrontación política.

Alessandri trató de aprovechar el movimiento militar de 1924 para continuar gobernando con el apoyo de los mandos castrenses y así desentenderse de las trabas que le ponían sus enemigos políticos en el parlamento; pero cuando vislumbró que el Ejército no se convertiría en un manso instrumento y tuvo miedo de él, buscó el apoyo de la Armada.

Sabía el Presidente que la oficialidad naval era mayoritariamente conservadora y no contaría con su apoyo, por lo que recurrió a la masonería para tratar que oficiales miembros de la logia asumieran los mandos esenciales; pero se encontró con una institución bien cohesionada y disciplinada que seguía lealmente a sus jefes.

La actuación del Ejército en 1924 no significó solamente que esta institución asumiera de hecho el poder sino que, una vez obtenidas las reinvidicaciones que se buscaban, la Junta Militar que formaban oficiales de baja graduación no se disolvió, transformándose en el organismo rector de la Junta de Gobierno que había sucedido a Arturo Alessandri.

Luego surgieron las ambiciones personales y el caudillismo, los cuales poco a poco fueron destruyendo las virtudes militares de obediencia, disciplina, subordinación y verticalidad del mando.

La Armada, siempre constituyó un escollo para los que querían constituirse en nuevos mesías por lo que era necesario producir en ella divisiones internas que la debilitaran. La labor no era difícil, pues esta institución no había tenido cambios importantes en su

[1] El desquiciamiento político ha sido reconocido como una de las causales que llevó al motín por la Cámara de Almirantes de Santiago en un documento de fecha 24 de mayo de 1973; en él le hace presente al Comandante en Jefe de la Armada que, frente a la caótica situación que estaba viviendo el país durante el régimen de la Unidad Popular, debía tenerse presente que el convulsionado período de 1924 a 1932 había tenido el desgraciado epílogo de la sublevación de la escuadra.

organización, a pesar de las lecciones que había dejado la Primera Guerra Mundial y en ella los oficiales ejecutivos gozaban de un status muy superior al de los ingenieros y oficiales mayores. Se hizo una labor de zapa que enfrentó a ambos y como consecuencia se descabezó el alto mando naval.

La marina no fue cogida por sorpresa, sino que sus almirantes previeron los hechos; pero para evitarlos podrían llegar a un enfrentamiento con el Ejército. El fantasma de 1891 rondó en tres oportunidades por los mandos navales que prefirieron no repetir la sangrienta experiencia.

El Ejército tampoco vivió cohesionado, pues la rivalidad entre sus diferentes armas fue utilizada para el control de unas a otras y para el alejamiento de la oficialidad que no estaba de acuerdo con seguir a los caudillos y buscaba el retorno de la institución a sus cuarteles.

Cuando en 1924 los militares doblaron la mano a los políticos y controlaron el Gobierno, tomaron conciencia de su poder, lo que produjo la aparición de mesías y caudillos; pero la indisciplina que se había manifestado en la oficialidad, muy pronto pasó a la tropa, lo que quedó en evidencia con el levantamiento de regimientos en la capital. No podía ser ajeno a sus mentes el ejemplo dado por sus tenientes o capitanes que podían alzarse contra sus generales, porque tenían el mando de tropas, así también ellos encerraban un poder que podía actuar.

Es necesario conocer hasta que nivel había caído la disciplina y la subordinación para comprender por qué pudo suceder el motín, lo que constituye el segundo eslabón de la cadena que nos acerca a la tragedia. Ello está relatado en el capítulo segundo.

Mucho se ha discutido sobre la génesis del motín y la participación que en él tuvo el Partido Comunista, pues estos siempre la han negado. Está demostrado que los amotinados tuvieron su apoyo recibiendo miembros de él a bordo, enviando a buscar obreros armados a Lota, aceptando sus proclamas de lucha de clases, reforma agraria, revolución social, etc. Pero ¿En qué momento empezaron a actuar? ¿Promovieron la infiltración o aprovecharon el movimiento ya producido? Esto ha sido siempre el motivo de la discusión.

En un espectro más amplio de nuestra historia podemos afirmar que si Chile no hubiera sufrido el desquiciamiento político que relatamos y hasta que extremos había llegado la indisciplina castrense, lo más probable es que un movimiento de infiltración política no habría tenido mayor éxito y habría sido denunciado a tiempo; pero la realidad del país era muy distinta.

Son conocidas las tácticas de este partido en el sentido de actuar solamente en escenarios que pueda asegurarles el éxito y a medida que iban rodando cuesta abajo los valores nacionales, los comunistas empezaron a actuar.

Talcahuano era una de las ciudades más pobres del país, donde convivían en condiciones míseras obreros y tripulaciones y es allí donde se produce el primer apoyo de elementos obreros a los marineros en un conato, años antes del motín.

La presentación de un avezado organizador sindical, que había sido enviado a formar sindicatos en las salitreras y había sido redactor de dos periódicos, para postular a una modesta plaza de cabo despensero en la Armada, tampoco hace dudar que la labor venía desarrollándose desde mucho antes del primero de septiembre de 1931.

El aprovechamiento político de la desmedrada situación que vivía el país por elementos anárquicos, comunistas y socialistas constituyen el último eslabón de la cadena que precipitó los acontecimientos.

Capítulo I
El desquiciamento político

Los excesos de los políticos

La Constitución política de 1833 había organizado la república bajo un régimen fuertemente presidencial, el cual constituía la tónica del sistema impuesto por don Diego Portales, y fue la herramienta maestra para sacar a Chile de la incipiente anarquía, a la cual alcanzó a estar sometido. Así pudo librarse del flagelo que azotó a las hermanas repúblicas latinoamericanas.

La aristocracia santiaguina, que se sentía heredera de una supuesta nobleza europea, veía con malos ojos un régimen de esta naturaleza y abogaba por un pretendido sistema parlamentario en el cual estuvieran representados los dos partidos políticos en que se hallaba dividida. En esta forma uno de ellos no quedaría excluído del gobierno y desde el Congreso Nacional se tomarían las decisiones políticas de su conveniencia. Como el cohecho electoral era abierto y masivo, cada elección constituía prácticamente la compra de los sillones parlamentarios por las clases poderosas santiaguinas. Es interesante hacer notar que las altas esferas sociales provincianas, salvo raras excepciones, no participaban en el juego político de la capital, que consistía en hacer y deshacer gobiernos.

La forma más práctica para satisfacer la ambición oligárquica era introducir reformas constitucionales e interpretaciones a la carta fundamental, lo que ocurrió en la década de los años setenta hasta mediados de los ochenta. Ello hizo totalmente irreconocible el espíritu que había animado a los constituyentes de 1833, creando una seudo república parlamentaria.

La guerra civil de 1891 fue la primera vez en que un gobierno de Chile fue derribado por la violencia; pero por la forma como ello se produjo más pareció tratarse de la restauración del régimen parlamentario por los vencedores en los campos de batalla de Concón y La Placilla, que tan caro era a los partidos políticos y que Balmaceda había tratado de cambiar.

Esta reimplantación terminó con los últimos atisbos de presidencialismo y comenzó para Chile un largo y decadente peregrinar impulsado por los vientos de fronda que soplaban desde los partidos políticos tradicionales, que no eran otra cosa más que el instrumento de la aristocracia reinante para mantener sus privilegios.

Desde el mismo instante en que concluyó la guerra civil los políticos se dieron a la tarea de reinterpretar la misma Constitución para dar al país un gobierno parlamentario, donde las principales decisiones saldrían del Congreso.

La búsqueda del presidente de la república que sucedería a Balmaceda no estuvo exenta de problemas, aunque era un cargo decorativo que ya nadie quería.

Se logró aunar voluntades en la persona del vicealmirante Jorge Montt Álvarez, jefe de la escuadra revolucionaria, hombre totalmente desprovisto de ambiciones políticas, civilista y que daba confianza a todos. No hubo en ello ni imposición militar ni caudillaje.

La clave del nuevo régimen era ganar la mayoría del Congreso, pues la Presidencia de la República constituía una especie de árbitro pasivo, similar al existente, hasta hoy, en las monarquías europeas.

Hacia ese objetivo se orientó entonces la estrategia de los políticos y la compra de los sillones parlamentarios por medio del cohecho.

El país se sumió en un largo letargo que duraría más de un cuarto de siglo donde todo permaneció inmutable y se perdió el impulso creador que le había dado a Chile Diego Portales.

La inoperabilidad del sistema impuesto después de la revolución de 1891

El régimen nacido de la guerra civil no tuvo el control que da a los gobiernos la opinión pública, ésta era indiferente a la realidad que se viviera y a los verdaderos problemas de Estado; fueran los gobiernos buenos o malos, eficientes o incapaces, resbalaban al sentir nacional.

En los treinta años corridos desde 1891 a 1920 no existió ni una sola mayoría parlamentaria que hubiera obtenido su triunfo electoral basada en el proyecto de realizar algún determinado programa efectivo, ni mucho menos que tuviera relación con las necesidades nacionales de la época.

Los partidos políticos se organizaron en los grupos llamados Alianza Liberal y Coalición Conservadora, a los cuales los seguían dos quintos de los electores a cada uno, quedando el saldo para el Partido Radical. La diferencia entre ellos estaba en que la Alianza podía estar formada por cualquiera agrupación de partidos donde no se encontrara el Partido Conservador y por su parte la Coalición también podía estar constituída uno o muchos partidos, siempre que se contara entre ellos el Partido Conservador.

Ambas agrupaciones tenían significado solamente para ganar elecciones y formar mayorías parlamentarias; pero estaban desprovistas de algún sentido político práctico. Solo es, en las postrimerías del régimen, cuando empezó a emerger la clase media al escenario nacional y la Coalición pasó a representar a la derecha chilena.

La «paz de la tarde» que vivía el país era posible debido a que no existían problemas económicos ni había espíritu emprendedor alguno para encauzar la riqueza hacia proyectos que dieran un mayor bienestar cuando terminara el período de las «vacas gordas». Las riquezas conquistadas en la Guerra del Pacífico permitían gozar de ellas sin necesidad de acudir a impuestos impopulares.

A menudo las grandes tempestades son precedidas de calma; pero esto no lo atisbaron los políticos de la época creyendo que habían clavado, para siempre, la rueda de la fortuna.

Llegó el tiempo de las «vacas flacas» y comenzó el éxodo del proletariado desde el campo a las ciudades. Salieron a la luz rencores, envidias, injusticias, etc.

La industria salitrera, debido a su necesidad de abundante mano de obra produjo la concentración de obreros en nuevos centros urbanos, los que recibieron inmigrantes de otras regiones del país. El fenómeno demográfico se vio acrecentado por la incipiente industria complementaria conexa con la producción de salitre, el aumento de los funcionarios públicos,

establecimiento o crecimiento del comercio, de la banca, etc. La consecuencia fue la creación de grandes núcleos de población proletaria.

Las fuerzas populares fueron adquiriendo peso político. A pesar que estaban representadas, desde antes de la guerra civil, por el Partido Demócrata, habían quedado en una precaria situación al finalizar la contienda de 1891 a causa de su división entre ambos bandos en lucha. Este partido mantenía en estado latente las aspiraciones de los obreros, pero sin que ello significara una lucha frontal contra el status existente, hasta la irrupción en el escenario político del líder Luis Emilio Recabarren, el que puede ser considerado el iniciador de la lucha de clases en el país.

La «cuestión social», como ha sido llamado el proceso de cambios en la estructura de la sociedad chilena, empieza a hacerse notar con fuerza a comienzos del siglo. Entre 1903 y 1905 se produjeron paros y huelgas, con sangrientos resultados en algunos casos, en las faenas mineras del norte, en los ferrocarriles, en los gremios de estibadores, de pintores, de curtidores, del personal de correos y telégrafos, del servicio de aseo y en los tranviarios, que abarcaron las principales ciudades y centros poblados del país.

Las grandes riquezas obtenidas con la Guerra del Pacífico, el aumento de las exportaciones, la expansión urbana, el desarrollo de los establecimientos carboníferos, etc., no habían paliado las grandes diferencias existentes, sino que por el contrario, las habían aumentado.

Mientras la presión en la caldera social subía, los partidos políticos, ajenos a ella, practicaban su deporte favorito, que era formar combinaciones para derrocar ministerios e imponer otros con sus adeptos. Estos podían contarse por decenas en cada período presidencial.

La crisis moral comenzó a hacer estragos que fueron deteriorando la ya mísera vida de las clases asalariadas, los escándalos se sucedían y en estas condiciones llegó a la primera magistratura de la nación don Ramón Barros Luco en 1910. Se trataba de un venerable anciano que representaba lo más rancio del status aristócrata; en dieciséis ocasiones había desempeñado diferentes ministerios, además de haber presidido la Cámara de Diputados y haber ejercido como miembro del comité revolucionario que depuso al presidente Balmaceda. Era el ejemplo vivo del parlamentarismo de la época y del desinterés de las cúpulas oligárquicas por la suerte de los que no pertenecieran a su círculo. Su gobierno tuvo dieciséis cambios de gabinete.

Toda la insensibilidad, ocurrencia y simpatía del anciano Presidente quedan demostradas en la siguiente anécdota que relata Leopoldo Castedo: El adalid del partido demócrata, Malaquías Concha, acusó en cierta ocasión al gobierno de lenidad frente a una violenta huelga de los mineros del carbón: *«Yo le diré al país: en estos momentos, en las calles de Lota, el pueblo se bate con la policía»*. Se produjo un silencio en la sala, pronto interrumpido por la voz de Barros Luco: *«Sí. ¿Y quien va ganando?»*, que provocó una estruendosa carcajada general.

En este estado de cosas vivía Chile para la elección parlamentaria por Tarapacá de 1915.

Arturo Alessandri Palma entra en escena

En esa región nortina ejercía como un verdadero senador vitalicio y cacique local Arturo del Río Racet, quien estaba siendo acusado, en términos cada vez más violentos, de tomar partido contra los obreros y en favor de los empresarios. Su reelección se vio enfrentada

a la candidatura del joven abogado Arturo Alessandri Palma.

Alessandri había dado sus primeras batallas políticas en la diputación por Curicó donde había contado con el valioso aporte de Fernando Lazcano Echaurren, senador liberal por la zona durante 26 años y el más genuino representante del parlamentarismo y la oligarquía terrateniente chilena.

Arturo Alessandri Palma ha sido el más grande líder que ha conocido nuestro país. Con su fácil oratoria, su simpatía y su estudiado histrionismo enardecía a las masas que ciegamente lo seguían. Es evidente que en Chile han aparecido otros líderes populares, pero quizás ninguno de ellos ha alcanzado el nivel de Alessandri, apodado el «León de Tarapacá».

Su poder para convencer a las multitudes, su «muñequeo» político, su facilidad para adoptar una posición a la cual el día anterior era contrario sin que ello le restara arrastre, su ambición sin límites y su fuerte sangre italiana lo hicieron ser un personaje central de nuestra historia, desde sus inicios a la vida política hasta su muerte.

Su hijo, Jorge Alessandri Rodríguez, que también llegó a la Presidencia de la República, refiriéndose a la personalidad de su padre, expresó: *«Mi padre era terriblemente emotivo, tenía el doble de sangre italiana que yo»*.

La crucial elección parlamentaria en Tarapacá puede ser considerada la chispa que inició un incendio político en Chile, como hasta entonces no se había conocido, que tendría fuerte influencia en los hechos que remecieron más tarde a nuestra patria y que nos proponemos narrar en este capítulo.

La Coalición Conservadora llevó como candidato a la reelección a Arturo del Río mientras la Alianza Liberal apoyó al diputado por Curicó.

El León de Tarapacá[2] sufrió la mutación de lo que había sido hasta entonces su posición política; su irrefrenable arrastre a partir de esa jornada representó un cambio violento que traería el fin de la oligarquía como poder absoluto y a la cual había pertenecido él hasta entonces.

Los comicios fueron violentísimos, la Coalición no se resignaba a perder tan importante distrito y veía, con desesperación, como la obtención del sillón parlamentario se hacía imposible ante la avalancha de votantes que, con mística, seguían al candidato opositor.

Alessandri y los aspirantes a diputados que lo acompañaban, un radical y un demócrata, obtuvieron un triunfo aplastante. El senador electo fue recibido como un héroe a su regreso a Santiago por multitudes delirantes que desengancharon los caballos del coche que lo llevaba y lo pasearon por las calles de la capital.

Había cambiado la historia. Se había sentado el precedente que los cargos vitalicios que detentaba el status político podían ser derrotados a pesar del cohecho y de la desembozada intervención del gobierno por medio de los intendentes y de los jefes de la policía.

Es interesante hacer notar que después de la guerra civil de 1891 las fuerzas armadas no habían sido utilizadas en el juego de los malabarismos políticos, que tanto usaban los gobiernos.

El eco de la elección parlamentaria del norte, muy pronto, rebotó en otras latitudes y al año siguiente las municipales constituían un reflejo de aquellas.

---

[2] Este apodo correspondía al poeta Víctor Domingo Silva, a quien se lo habían dado los obreros del salitre por su «campaña de regeneración», quien lo cedió a Alessandri.

PRESIDENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA.

MAYOR CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (1925).

A corto plazo correspondían los comicios presidenciales y para los cuales, desde tiempo antes, la Coalición había iniciado el camino para llevar al solio a don Juan Luis Sanfuentes. Por el lado de la Alianza Liberal los nombres de los postulantes eran motivo de discusión y discordia; pero entre ellos se encontraba el del León de Tarapacá. La nominación la logró don Javier Ángel Figueroa; pero la presidencia fue para don Juan Luis.

La inestabilidad de las combinaciones políticas, que daban motivo a los continuos cambios de gabinete por destitución de los ministros, empezó a demostrar, con claridad meridiana, que no se trataba de sucesivas crisis ministeriales, sino que el régimen político, nacido a raíz de la guerra civil de 1891, había entrado en descomposición.

Así se llegó a la elección presidencial de 1920, en la cual Alessandri tomó las banderas de los proletarios, de los obreros del carbón, de los sufridos habitantes de la pampa calichera que lo habían hecho senador cinco años antes y, desafiando a sus contrincantes de la Alianza Liberal, ganó la convención que lo ungió su candidato.

En una reñida lucha enfrentó a don Luis Barros Borgoño, a quien logró doblegar por un estrechísimo margen de votos, debiendo un tribunal de honor dirimir el pleito.

A los 51 años de edad y encontrándose en la cúspide de su deslumbrante trayectoria, Arturo Alessandri Palma se convirtió en presidente de la república.

La «cuestión social»

El «León» inició su gobierno en las condiciones más difíciles imaginables. Su triunfo fue prácticamente un empate, el partido político al que pertenecía no comulgaba mayoritariamente con las ideas que había esgrimido en favor del proletariado, la oligarquía no quería variar el

sistema parlamentario que tan buenos frutos le había reportado y, como si todo lo anterior no fueran obstáculos suficientes para gobernar, la aristocracia negaba la existencia de la inquietud social que empezaba a golpear con fuerza las conciencias.

La clase alta, enraizada desde antiguo en el juego político, restaba importancia al problema social que conmovía al país y lo circunscribía solamente al campesinado. Explicaba que todo el mundo tenía oportunidad de trabajar en cargos muy bien remunerados por lo que si no prosperaban, la causa estaba en que eran falteros, flojos, jugadores, imprevisores y borrachos. Los que agitaban los problemas sociales eran, a su vez, bolcheviques, anarquistas, demagogos y teóricos. Nada de lo que sucedía merecía, verdaderamente, producir alarma.

Reconocía la existencia de defectos políticos en un rango muy pequeño; pero su solución no debía, por ningún motivo, tocar el sagrado régimen parlamentario existente.

Las fallas que debían corregirse se referían a cosas mínimas, como tener un sistema más expedito para clausurar los debates parlamentarios o bien para darle mayor preeminencia al Congreso, como sería entregarle al Senado un rol fiscalizador, con lo cual se obligaba a que los gabinetes tuvieran que contar con mayoría en ambas cámaras y así darle un control todavía mayor sobre el poder ejecutivo. El diario El Mercurio comentaba en esa época: «*No hay sino dos sistemas de gobierno, el absoluto y el parlamentario, que es de libertad y está enraizado en el alma de los chilenos*».

Por otra parte, los fermentos revolucionarios habían encontrado un terreno fértil que, inteligentemente manejados por los soviets que ya campeaban en los territorios del antiguo imperio ruso, habían roto el equilibrio político chileno y habían logrado transformar la guerra entre los partidos políticos en una lucha de clases.

Arturo Alessandri, hábilmente, explotó en su campaña de 1920 dos aspectos fundamentales que por la sensibilidad que despertaban le permitía desarrollar todas sus insuperables dotes de orador, éstos eran la «cuestión social», con toda la secuela de injusticia que acarreaba y el anticlericalismo.

El odio mostrado por las clases dirigentes hacia la «clase media» que, con temor, veían que podía ascender en la escala social arrebatándole privilegios que habían gozado desde los primeros años de la república, no tuvo límites. Muestra de ello eran los escritos y artículos de prensa publicados por los diarios de la capital. Juan Enrique Concha escribía: «*Las clases altas bajan al pueblo, cada cierto tiempo; pero no se quedan con él para cultivarlo, educarlo, formarle conciencia y mejorarle las condiciones físicas y morales de su vida*».

Por otra parte, el senador Ricardo Valdés escribía en el diario El Mercurio: «*Una dama de medio pelo, cuyos dedos llenos de anillos terminaban en uñas enlutadas decía: ...A mí me gusta Alessandri porque es joven, solo por eso... y la siútica entornaba los ojos con fruición*».

Lo anterior, escrito por un senador, es la muestra más clara como la campaña de 1920 puso a la clase rectora en pie de guerra contra la mediocracia y el nuevo mandatario que la soliviantaba. Los organismos encargados de atizar el fuego del odio y el desprecio hacia la clase media serían «El Diario Ilustrado» y el propio Senado de la República.

La crisis económica y la obstrucción parlamentaria al ejecutivo

La facultad que tenía el parlamento de negar su confianza a los ministros, lo cual hacía obligatoria su sustitución, fue usada profusamente contra el Presidente, igual como había sucedido con todos los gobiernos anteriores. Entre 1920 y 1924 se alcanzó a tener 16 gabinetes.

Durante el quinquenio 1920-1925 el país sufrió una crisis económico social cuyo origen debe buscarse en la incapacidad de la oligarquía reinante para solucionar los problemas nacionales más agobiantes; y su causa, en el régimen político y el parlamentarismo. Salieron a la luz antiguos descontentos, intranquilidad, efervescencia en las masas, huelgas, etc.; todo lo cual tuvo como marco de fondo el decaimiento económico producido por las dos fuertes depresiones de los bienios 1921-1922 y 1925-1926, que encaminaban al país hacia el colapso de los años 30.

Durante el proceso depresivo de 1921, nuestra principal riqueza, que era el salitre, experimentó una fuerte caída en su demanda y por consiguiente en su producción, exportación y precio, todo lo cual tuvo como causa el término de la Primera Guerra Mundial. De 2.051.000 toneladas métricas que entregaban las pampas nortinas en 1920 cayeron a 613.000 en 1921.

La producción de cobre bajó en un 40% y su precio a una tercera parte. Similar situación vivió el trigo y la lana de oveja. Después seguiría el carbón.

La cesantía comenzó a ser crítica en nuestras provincias mineras, las oficinas salitreras se cerraron una tras de otra, los desocupados con sus familias peregrinaban hacia los puertos buscando poder continuar al centro del país y al final Santiago tenía que absorber la gran cantidad de nuevos habitantes que tan intempestivamente le llegaban.

Alessandri trató de paliar parte del drama distribuyendo alimentos, reubicando trabajadores, creando puestos fiscales; pero todo era insuficiente.

La situación que se vivía con la crisis económica y los esfuerzos del Presidente de la República por cumplir con el programa que lo había llevado al poder originó numerosas iniciativas; pero todas ellas quedaron empantanadas en el Congreso. Logró Alessandri pasar una ley de impuesto a los ingresos líquidos, que incluía los sueldos y salarios; pero su progresividad, que había sido apoyada por la Cámara de Diputados, fue rechazada por el Senado, con lo cual todas las rentas pagaban igual porcentaje no importando cual fuera su magnitud.

No tuvieron igual suerte la que creaba el Banco Central ni la que promulgaba el Código del Trabajo.

El conjunto de leyes sociales enviadas al parlamento para su aprobación, que incluía las anteriores, así como también la creación de las cajas de previsión para empleados y obreros, quedarían, como acota Gonzalo Vial: «*... como de costumbre, enredadas en las zarzas parlamentarias. Era, por una parte, la incuria del sistema; por otra, la guerrilla política antialessandrista; y desde un tercer ángulo, la resistencia de los intereses afectados. Y no sólo los intereses patronales. Las sociedades mutualistas veían en la previsión estatizada y obligatoria el fin de sus propios esfuerzos y recursos para cubrir igual rubro. Anarquistas y comunistas tenían desconfianza de las nuevas reglas relativas a huelgas, sindicatos, etc.*».

El juego de fuerzas, entre un parlamento que no se resignaba a perder las prerrogativas que venía ejerciendo, sin contrapeso, desde la revolución de 1891 y un Presidente que no aceptaba dejarse arrollar, llevó al país a una polarización total en materias de importancia e impidió el cumplimiento del programa que Alessandri había ofrecido a sus electores.

La corrupción administrativa

Las elecciones parlamentarias de 1921 le dieron al Presidente mayoría en la Cámara de Diputados; pero el Senado, que solo se renovó parcialmente, le siguió siendo hostil. El

sistema parlamentario imperante exigía al ejecutivo contar con mayoría en ambas instancias para poder cumplir su programa de gobierno.

El odio entre ambos poderes del Estado llegó a niveles inimaginables y la corrupción administrativa a través del reparto de cargos, no tenía límites. La negativa presidencial de llenar un cargo de tercer o cuarto orden con un personaje de un determinado partido político podía llegar a provocar una crisis ministerial.

Pero los problemas que aquejaban al Presidente no venían solamente de sus opositores, sino que también, en gran medida, de sus propios adeptos.

El senador Guillermo Bañados, del Partido Demócrata que estaba en el gobierno, llegó a acusar a Alessandri de haber acordado para su colectividad diez cargos de consejeros, cinco intendencias, quince gobernaciones, cinco juzgados de letras, cinco promotores fiscales, veinte prefecturas de policía, cinco alcaidías de cárcel, un subsecretario de Estado, la inspección de colonización, tres rectorías de liceos, tres direcciones de escuelas normales, cinco jefaturas de maestranza, una dirección de escuela de arte, dos direcciones de institutos comerciales, dos direcciones de escuelas agrícolas, dos de escuelas de palacio, seis visitaciones de escuelas, un abogado de la defensa fiscal, seis comisarios de policía y un diez por ciento de los nuevos empleos o de las futuras vacantes. ¡Y apenas le había entregado dos intendencias, una gobernación y una prefectura de policía!

El ministro de guerra y marina, Carlos Silva Cruz, hacía llevar un destructor de la Armada al balneario de Zapallar para pasear por su cubierta, después de comida, en una noche de luna.

La corrupción y las influencias políticas habían llegado a cubrir toda la administración pública en maridaje con los grandes negocios. Jorge Alessandri, durante su campaña parlamentaria para llegar a la Cámara de Diputados en 1924, había expresado conceptos tales como: *«los actuales partidos políticos carecen de orientaciones precisas acordes con las necesidades y problemas de la época»; «la selección que hacen los partidos de sus dirigentes está basada en la intriga, la ambición mezquina y las grandes audacias, todo lo cual prima sobre los méritos, las aptitudes y las condiciones morales»*.

Relata don Jorge que el ministro Manuel Rivas le habría expresado: *«Todos los radicales son gestores»*, dando como ejemplo que el estudio jurídico que mantenían el senador Enrique Oyarzún con el diputado Juan Antonio Ríos gestionaban los intereses de las sociedades inglesas dueñas de los ferrocarriles salitreros del norte. Ambos parlamentarios pertenecían a esa tienda política. Siendo Alessandri funcionario de Obras Públicas recibió la visita del segundo para obtener que toda la correspondencia oficial del ministerio para esas sociedades fuera despachada directamente a su bufete.

El Presidente busca apoyo en los cuarteles

El año 1924 correspondía efectuar elecciones parlamentarias y a través de ellas Arturo Alessandri veía la forma de zafarse de la constante obstrucción que ejercía el parlamento que impedía la aprobación de sus leyes. Sabía el Presidente que la oligarquía recurriría a su dinero para ejercer un desenfrenado cohecho; pero el gobierno dispondría, por su parte, de la caja fiscal para hacerle el contrapeso.

A pesar que don Arturo había sido un tenaz opositor de Balmaceda, al llegar al solio presidencial trató de imponer las mismas ideas por las cuales se llegó a la guerra civil en 1891.

Para el Presidente era lícito usar a las fuerzas armadas para afianzar su gobierno y obtener con su concurso que en las elecciones, ya fueran para suceder al primer mandatario o para renovar el parlamento, se eligieran los candidatos de su predilección.

Los contactos del Presidente con el Ejército fueron cada vez más numerosos y notorios a medida que se acercaban los comicios parlamentarios; pero ellos estaban orientados preferentemente hacia los grados bajos y medios de la oficialidad.

Ya en el año 1921 disertaba Alessandri en el regimiento Buin sobre el convencimiento de la necesidad de atender, con solícito cuidado, el mejoramiento y adelanto de las fuerzas armadas, de manera que pudieran cumplir *«un papel social más importante en la vida nacional»* y *«no podían quedar al nivel de simple masa»* y que tendría *«que devenir en un organismo consciente e inteligente»*. Explicaba que había *«dolor»* por la mala voluntad mostrada por algunos con respecto al Ejército cuya causa sería que *se les exigía siempre cumplir incondicionalmente sus órdenes, sin inquirir primero de parte de quien estaba la justicia.*

¡Está claro que se iniciaba un peligroso camino que tendía a divorciar a la oficialidad de sus jefes superiores!

Dos años más tarde, ya en los albores de la campaña parlamentaria, el 30 de diciembre de 1923 visitó Alessandri la Escuela de Caballería. Durante su discurso, luego de reiterar su elogio a la disciplina militar, entró de lleno al terreno político y se explayó explicando la necesidad de reformar la Constitución, lo cual debía orientarse a disciplinar el debate parlamentario, reprimir el cohecho, dictar un código del trabajo y establecer un Banco del Estado, todo lo cual solamente podía alcanzarse si se contaba con mayoría política, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

¿Qué razón podía tener el ejecutivo para plantear ante los oficiales de una unidad militar aquellos temas que eran netamente políticos, como no fuera obtener, de ellos, el apoyo?

La fogosa oratoria del Presidente logró crear un creciente entusiasmo en los oficiales. Sólo el Director de la Escuela no acusó gesto alguno en su rostro. ¿Quizás que caminos veía abrirse a su ambición personal? Este director era el mayor Carlos Ibáñez del Campo.

El histrionismo de don Arturo Alessandri, seguramente producto de su sangre meridional y su gran capacidad para armar una tramoya teatral, tuvieron una gran prueba al día siguiente de la reunión en la Escuela de Caballería.

Era el último día del año 1923 y a la medianoche vencían las leyes periódicas que contemplaba la Constitución de 1833 vigente, una de las cuales era la subsistencia de las fuerzas armadas y su permanencia en Santiago, sede del Congreso.

El Presidente, en vez de buscar un consenso con el parlamento para obtener su aprobación, el día 1° de enero hizo evacuar de la capital a todos los regimientos de la guarnición, con destino a San Antonio y Cartagena, amenazando que si no se procedía a reformar la carta fundamental, estallaría la revolución.

Acto seguido procedió a nombrar un nuevo ministerio en el cual entregaba la cartera de guerra y marina al teniente coronel Alfredo Ewing de reconocida tendencia alessandrista, comandante del Cuerpo de Carabineros, que constituía el grupo más numeroso del Ejército[3].

Sin quererlo, las fuerzas armadas se encontraban ya en el centro del escenario político,

[3] El Cuerpo de Carabineros no existía, en esa época, como una fuerza autónoma, sino que pertenecía el Ejército.

adonde las estaba llevando el Presidente de la República. Los meses siguientes le demostrarían su error.

La situación descrita precedentemente había tenido su origen cuando faltaban tan solo unos pocos meses para los comicios que renovarían el parlamento y falleció un hermano del Presidente de la República que ocupaba un sillón en el Senado por Ñuble, por lo que correspondía llamar a una elección complementaria.

Alessandri, temeroso de perderla, lo que le habría significado un doble castigo y desprestigio, pues no solamente demostraría que estaba en minoría en aquella circunscripción, sino que la oposición tomaría el lugar que había detentado su hermano, tomó el camino de la ilegalidad y se negó a convocar para la elección.

En desquite el Senado no sancionó la ley constitucional que autorizaba el mantenimiento de las fuerzas armadas en la capital.

Las elecciones parlamentarias de 1924

Como hemos dicho, en el mes de marzo de 1924 se celebraban las segundas elecciones parlamentarias del período presidencial para el cual había sido elegido don Arturo Alessandri. Buscando influir en los resultados, el gobierno envió a oficiales, bajos y medianos, del Ejército a presidirlas en diversos departamentos y comunas.

Las acusaciones de intervención fueron múltiples, algunas reales y otras magnificadas por los opositores que llegaron a asegurar que al llegar a votar habían sido inmovilizados por oficiales con sus revólveres.

En Puente Alto, oficiales de carabineros y del regimiento Ferrocarrileros, mandados por un teniente, confiscaron los registros y los útiles electorales, amenazando con armas de fuego y apuntándole al pecho a don Ismael Tocornal.

En Curicó, las tropas impidieron que los electores rurales votaran por el candidato Manuel Rivas, quien era el oponente al secretario del presidente de la república, señor Arturo Olavarría.

Este caso fue el más bullado, pues la mayoría que debía obtener Rivas en las comunas campesinas amagaba a la que alcanzaría Olavarría en Curicó; pero es éste último quien, transcurridos los años, lo relata:

«Disponía de la fuerza pública, tanto porque el gobierno había resuelto emplearla para evitar la compra de votos, como porque sus miembros eran todos simpatizantes de mi candidatura. Las cinco comunas campesinas tenían, cada una, un oficial simpatizante del candidato del gobierno».

«El día de la elección, continúa el candidato, *la hecatombe se produjo en todas partes con regularidad matemática. En las cinco comunas sucedió exactamente lo mismo. Comenzado el acto electoral en medio de la mayor tranquilidad, los jefes de las fuerzas, a caballo, encolerizados y sable en mano se acercaron a las mesas receptoras y gritaron en medio del desconcierto... ¿Hasta cuando voy a soportar este desorden? El acto no puede continuar. ¡Para afuera todos!. Huelga decir que los vocales de las mesas arrancaron a perderse en medio del chivateo del público. Levantada el acta convenida y recogidos los útiles, a saber, las urnas con los pocos votos que se alcanzaron a depositar, los registros, padrones, sobres, etc. fueron llevados a la Intendencia y entregados bajo recibo»*

No hubo pues sufragios rurales para Manuel Rivas. «*En la ciudad de Curicó*, continúa Olavarría, *él computó 1078 votos y su enemigo 369*».

Acusaciones similares se hicieron en Talca, Malleco, Llanquihue, Chiloé, etcétera.

El diario El Mercurio, siempre ponderado y por lo común adepto a Alessandri, llegó a calificar la actitud del gobierno, con respecto al Ejército, que lo había transformado en un instrumento de violencias y presiones para impedir que los ciudadanos acudiesen a votar y para imponer sus candidatos.

Un análisis de los resultados obtenidos en la justa electoral no parecen demostrar que todas las acciones inconstitucionales ejercidas hayan tenido algún efecto que pudiera haber torcido la voluntad de los votantes. En efecto, el gobierno obtuvo solamente dos asientos más en la Cámara de Diputados que en 1921 y logró dominar el Senado debido a que en la elección anterior había correspondido hacerlo solo en un cincuenta por ciento, es decir, que la marea aliancista del año 20 había logrado mayoría solamente en las circunscripciones renovadas en esa oportunidad, panorama que recién ahora se completaba.

Hoy puede decirse con propiedad que la tan bullada intervención electoral de 1924 no tuvo mayor incidencia en los resultados alcanzados; pero el proselitismo que había realizado el ejecutivo en los cuarteles, la utilización de oficiales para controlar los comicios, la intervención en sí, etc. desataron una serie de secuelas que el país pagaría muy caro.

En primer lugar, el parlamento elegido fue considerado hijo de un acto viciado y por lo tanto espúreo y carente de toda fuerza moral.

Los oficiales de graduación media que habían sido comisionados para intervenir el acto electoral fueron duramente sancionados, lavándose las manos el gobierno y dejándolos librados a su propia suerte; todo lo cual produjo un resentimiento contra el Presidente de la República quien, como vimos, no había perdido oportunidad para halagarlos.

El Ejército entero se sintió herido, pues los sancionados solo habían acatado órdenes superiores. La paradoja era que ellas provenían del mismo mandatario que tres años antes había criticado, en el regimiento Buin, que a los oficiales se les exigiera siempre tomar incondicionalmente una posición, sin inquirir primero de parte de quien estaba la justicia.

La Unión Nacional contraataca conspirando

Como toda acción trae como consecuencia una reacción, las fuerzas opositoras, agrupadas en la Unión Nacional, magnificaron los hechos achacando a la intervención electoral el triunfo del gobierno, descalificando al parlamento elegido y buscando el camino de la conspiración.

Fue ahora la oligarquía, que al verse destronada y perdido el poder que le daba su mayoría parlamentaria, inició los contactos con los oficiales superiores del Ejército y de la Armada para provocar la caída del gobierno.

El correcto y disciplinado ministro de guerra y marina, general de división Luis Brieba Arán, militar de antigua escuela, con cuarenta años de servicios y la consiguiente tradición de disciplina, obediencia y rectitud, constituía la piedra de tope para que los conspiradores pudieran llevar adelante sus planes, por lo que fue culpado de la intervención electoral y denostado hasta lo increíble, con el fin de alejarlo del ministerio y del gobierno. Se daban cuenta los conspiradores que sus actitudes desquiciadoras se estrellarían contra su recia y recta personalidad.

Caído el ministro y alejado, incluso del Ejército, el camino para el cuartelazo quedaba expedito, pues hasta el propio Inspector General, la máxima autoridad castrense, general de división Luis Altamirano, concuñado del Presidente de la República, era un elemento utilizable en la aventura.

En la conjura se involucraron muchos políticos unionistas junto al general Luis Contreras, jefe de la aviación militar y a su hermano Germán, ya en retiro.

Destacadas personalidades de Valparaíso fueron los encargados de promover el complot en esta ciudad, como el financista Agustín Ross, el filántropo Carlos Van Buren, el general en retiro Juan de Dios Vial y el contraalmirante Guillermo Soublette.

Aparte del general Contreras, el núcleo principal de la conspiración se radicaba en el puerto, lugar donde contaban con el jefe de la guarnición, general Benjamín Gutiérrez y con el vicealmirante Luis Gómez Carreño.

Al finalizar 1923, durante una gira del Presidente, en la que había sido acompañado por el vicealmirante Gómez Carreño, cuenta el mandatario que el marino le habló de un ministerio de notabilidades con respaldo militar y las cámaras clausuradas.

Otro conjurado, el contraalmirante Soublette, decía haberse sostenido al margen de la conspiración unionista hasta que le escuchó al Presidente decir: «*¡Qué Constitución, ni qué atropellos, ni qué niño muerto! La Constitución es una vieja prostituta que ha sido violada desde que nació; y no va a resentirse por unas cuantas entruchadas más que yo le haga y pienso hacérselas todavía...*» «*Con este antecedente,* añadía Soublette, *me fuí directamente a verme con Ladislao Errázuriz para ofrecerle mi adhesión que antes le había negado...*».

Durante la inauguración del edificio de la Mutual de la Armada en Valparaíso, el 21 de mayo, el vicealmirante Francisco Nef advirtió a Alessandri: «*Cuídese Presidente, porque le están armando una revolución; no tema nada de la Marina; pero el Ejército está podrido y corrompido; a mí me han tentado con la presidencia; contesté que era un honor que no deseaba ni me seducía, pero creo que Altamirano (Inspector General del Ejército) piensa de otra manera y temo que haya tragado el anzuelo*».

Ante tal confesión el Presidente no hizo nada y ni siquiera investigó la denuncia.

Sin duda, Alessandri había jugado con fuego y muy pronto se quemaría.

Comentario final

Como se ha visto, el presidente Arturo Alessandri, al verse bloqueado por el Congreso para sacar adelante sus proyectos de ley y ante la cerrada oposición que le hacía la oligarquía que reinaba en el parlamento, pensó que las elecciones parlamentarias de 1924 serían su tabla de salvación.

Como preveía que las tiendas opositoras, que reunían a los políticos más ricos de Chile, efectuarían un desenfrenado cohecho, que no era otra cosa que la costumbre de la época para los comicios electorales, decidió contrarrestarlo con igual medida; para ello contaba con los fondos públicos, por lo que puede considerarse que ambas acciones se neutralizaron.

Hasta aquí la acción de Alessandri pudo no haber tenido más resonancia que la que tuvo al considerar el país que el parlamento elegido era espúreo; pero el Presidente había hecho también intervenir al Ejército y ello fue la causa que esta noble institución desbordara sus moldes disciplinarios, tomara conciencia que su actuar podía torcer el rumbo del país, orientándolo en su propio provecho o para saciar las ambiciones de los más audaces y se

dedicara por los ocho años siguientes a intervenir abiertamente en la cosa pública, a derrocar e imponer gobiernos y ejecutar toda clase de experimentos políticos, desde la dictadura de Ibáñez hasta la república socialista de Grove.

La disciplina es como una represa que contiene las aguas; cuando ella se rompe es muy difícil detenerlas y será preciso que todas las capas superiores escurran descontroladas antes de poder parar el líquido que se encuentra más abajo.

Esto fue lo que sucedió en 1924 y al romperse los moldes de la disciplina actuaron los personalismos, las envidias, los mesianismos y las ambiciones desmedidas entre los jefes superiores; pero cuando los subalternos ven que los hombres llamados a dirigirlos y darles el ejemplo actúan solamente siguiendo sus mezquinos intereses, ya no quedan ataduras que los liguen a los destinos superiores de la patria. Todo esto no fue ajeno a la sublevación de la marinería en 1931.

El presidente Arturo Alessandri Palma, a pesar de su inteligencia superior, nunca reconoció, pública ni privadamente, que su actuación con respecto al Ejército en 1924 sería la semilla de la anarquía de sumió a Chile durante varios años y por la cual él mismo sufrió en carne propia la resignación del mando supremo de la nación y su posterior destierro en dos oportunidades.

Por el contrario, un estudio de las actuaciones de este Presidente, hasta la entrega del cargo de su segundo gobierno en 1938, nos llevan a la conclusión que la utilización de las fuerzas armadas en su apoyo la tuvo siempre presente en su mente.

Muchos políticos e historiadores, enemigos de Arturo Alessandri, han querido hacer caer sobre sus hombros la responsabilidad de la sublevación de la marinería. El más declarado contradictor del ex Presidente, como lo es el historiador Ricardo Donoso, en su libro «Alessandri Agitador y Demoledor» trata de probar su culpabilidad al haber sembrado la semilla ponzoñosa de la insurrección cuando el acorazado «Almirante Latorre» estuvo en modernización en Inglaterra; pero la única prueba que aporta, y la da como concluyente, es una reunión en Calais con el también exiliado coronel Marmaduke Grove, sobre la cual el ex Presidente habría manifestado posteriormente: «*Cuando a mí me desterraron sin ninguna razón ni justicia, conspiré y procuré por todos los medios posibles derrocar al gobierno que, atropellando las leyes, así me trataba, y...*».

Que Alessandri y Grove conspiraron contra el gobierno de Ibáñez no cabe ninguna duda e incluso así ha sido reconocido por ellos mismos; pero de ahí a achacarle la felonía de haber sublevado a la escuadra, existe un mundo de distancia.

La responsabilidad de Alessandri debe buscarse en haber utilizado a las fuerzas armadas para actuar en política en beneficio de su gobierno en 1924, con lo que creó el clima de indisciplina necesario que permitió que los hechos sucedieran.

Capítulo II
La Indisciplina de las Fuerzas Armadas

La indisciplina existente en las fuerzas armadas fue otro de los factores que crearon el ambiente que hizo posible el amotinamiento.

Como no es nuestra intención escribir cronológicamente la historia de Chile del período que va desde 1924 a 1931, sino determinar hasta que punto los hechos sucedidos tuvieron influencia en la sublevación, hemos preferido hacerlo en forma separada con respecto al Ejército y a la Armada, aunque ello implique hacer dos relatos sucesivos de hechos que pertenecen a una misma época.

La situación en la primera de estas instituciones está marcada por la rotura de los moldes de la disciplina, de la verticalidad del mando, de la obediencia y de la prescindencia política; todo lo cual va acompañado de actuaciones para debilitar a la Marina, que se oponía a los caudillismos.

La Armada, por su parte, no pudo resistir las consecuencias de ello, debido a que sus almirantes se negaban a modernizar sus estructuras institucionales a pesar de los cambios tecnológicos que había traído la Primera Guerra Mundial.

General de División Luis Brieba Arán.

Primera parte
El Ejército y los políticos

La situación económica y social de las fuerzas armadas

En 1920 el Ejército era de origen mediocrático principalmente. Se hallaba encerrado en sí mismo y desconectado de la aristocracia gobernante, la cual ni siquiera lo menospreciaba, simplemente lo desconocía.

Con respecto a las clases populares existía una barrera cultural que impedía su contacto.

La clase media, imbuída de las nuevas doctrinas laicas, pacifistas y antimilitaristas que estaban de moda, le manifestaban desprecio, especialmente a la oficialidad.

El profesionalismo castrense, la rígida disciplina germana, la concepción de una sociedad solidaria les parecían cosas anacrónicas e inútiles a la aristocracia y a la clase media.

El Ejército era una isla, sin vinculaciones, que cumplía cabalmente el papel que le había asignado la Constitución.

Los sueldos de los grados inferiores a Mayor eran malos y la carrera era larguísima, pues al llegar a los escalones superiores, en los cuales se gozaba de una remuneración aceptable, los afectados prolongaban su vida activa hasta donde les era posible, impidiendo

por lo tanto que numerosos oficiales, que ostentaban posiciones subalternas, pudieran alcanzar ese mismo bienestar, obligándolos a abandonar las filas por haber llegado a la edad de retiro.

La oficialidad joven achacaba la situación existente a que los altos mandos demostraban preocupación solamente por lo que atañía a su propio interés y que gracias a que algunos jefes mantenían lazos de amistad con los parlamentarios podían arreglar sus propias situaciones económicas, con olvido de la de sus subordinados. Incluso en los grados superiores del escalafón figuraban algunos miembros de la oligarquía, especialmente aquellos que habían iniciado su carrera militar en el Ejército Revolucionario de 1891.

La situación que vivían los militares no se repetía en la Armada, su realidad era muy distinta. Ésta, formada y organizada en las más rancias costumbres de la marina británica, heredó el sentimiento de sus precursores de sentirse parte de la aristocracia aunque, en estricto rigor, jamás las clases dirigentes santiaguinas la consideraron como tal. Este sentimiento de superioridad alcanzaba solamente a los oficiales de guerra o ejecutivos, quienes ganaban más que los que estaban a cargo de las máquinas o «injenieros», los cuales eran mirados con desdén.

Solo los ejecutivos podían aspirar a los puestos superiores de la institución. En todo caso la Armada, vencedora del 91, poseía un status económico superior al del Ejército.

Así las cosas, las fuerzas armadas miraban muy por encima la situación nacional, no les interesaba la política ni la gravedad de la realidad social. Sus inquietudes eran solamente económicas o relacionadas con su profesión, tales como ascensos, retiro, organización, etc.

Sin inmiscuirse en política, en 1920 la oficialidad del Ejército era mayoritariamente alessandrista.

Despreocupación del parlamento por las inquietudes castrenses

Hemos dejado el capítulo primero hasta las elecciones parlamentarias de 1924, tras las cuales, sintiéndose el presidente Alessandri que podía dominar ambas cámaras, propuso todos aquellos proyectos de ley por los que tanto había luchado. La situación del erario nacional era deplorable y sin embargo no se escatimaban gastos para crear empleos y pagar favores políticos.

Los sueldos que gozaban las fuerzas armadas eran miserables y no se vislumbraba ningún camino de solución. Cada vez que ello se hacía presente, las autoridades tenían la respuesta a flor de labios: la caja fiscal no disponía de dinero para mejorarlos y era preciso sacrificarse por la patria.

A principios de 1924, el ministro de guerra y marina, general de división don Luis Brieba Arán, logró hacer avanzar cuatro proyectos que interesaban a los uniformados y que se relacionaban con los sueldos, los ascensos, los retiros y la planta permanente, los cuales desde años dormían en las comisiones parlamentarias, llegando hasta el borde de la discusión general; pero la Coalición, agrupada ahora en la Unión Nacional, quería responsabilizar al Ministro de la intervención electoral en las elecciones parlamentarias y encontrando apoyo, incluso en la Alianza Liberal, se encargó de entrampar las leyes. En esta última se oyeron voces que decían: *¿Por qué habrían los militares de ganar más, ellos solos, si se vivían instantes de generalizada aflicción económica?*

Los suboficiales completaron en 1924 seis meses impagos, debiéndose esconder en los cuarteles para escapar de los acreedores. Los oficiales vivían de préstamos que les daban o

El presidente Alessandri y el general Brieba a bordo del «Almirante Latorre» el 27 de septiembre de 1924.

afianzaban sus superiores, y éstos, de créditos bancarios. ¡Hasta se endeudaban para dar de comer a los conscriptos!

Como lo hemos anotado, la Coalición logró alejar al general Brieba del ministerio y del Ejército, nombrando el Presidente en su reemplazo al capitán Gaspar Mora, que se había retirado recientemente de la institución y había llegado al parlamento por el Partido Demócrata.

El cambio de un General de División por un Capitán como ministro de guerra y superior de todo el escalafón militar constituye, tal vez, un primer paso en la descomposición jerárquica que luego presenciaremos.

La oficialidad joven se hace presente en el Senado

El Presidente de la República había acordado, en el mes de enero, enviar al parlamento varias reformas constitucionales, entre las cuales figuraba modificar los artículos 21 y 26 que declaraba que los cargos de diputado y senador se ejercían a título gratuito. Ellas no fueron consideradas o quedaron pendientes en esa oportunidad; pero el nuevo Congreso elegido renovó la idea de la dieta parlamentaria en los precisos momentos que el país se debatía en la miseria y mantenía a sus servidores impagos.

De acuerdo a la Constitución, una reforma de este tipo requería la aprobación de dos parlamentos seguidos, esto es, debía ser ratificada después de 1927 antes de entrar en vigencia; pero los señores del Congreso no estaban dispuestos a esperar tanto y la disfrazaron con los

nombres de «indemnización» o «gastos de representación», aprobándose en la Cámara de Diputados como una simple ley interpretativa, con efecto inmediato.

A pesar que el gobierno reclamaba del Senado la aprobación de una ley de subsidios para cubrir el déficit presupuestario y pagar los compromisos pendientes hasta finales del año, éste prefirió tratar la remuneración parlamentaria. Durante la discusión hubo una fuerte oposición del Partido Conservador, aduciendo sus dos principales aspectos, esto es, ser inconstitucional e inoportuna; pero la aplanadora aliancista se impuso, presionada y extorsionada por el Partido Demócrata que amenazaba retirarse de la combinación gobiernista si no se despachaba a la brevedad.

Como acotó el escritor Emilio Rodríguez Mendoza: *«la dieta era como ponerse a contar plata falsificada»*.

El martes 2 de septiembre de 1924, después de comida, celebraba el Senado su segunda sesión del día para tratar el controvertido proyecto; pero en esta oportunidad las tribunas no estaban vacías ni con algún par de curiosos que querían conocer como se legislaba en Chile, sino que eran ocupadas por más de una cincuentena de oficiales del Ejército de los grados de teniente y capitán además de dos mayores que, vestidos de uniforme, seguían expectantes el debate.

Los uniformados aplaudían, sonoramente, a los parlamentarios que se oponían a la aprobación de la flagrante violación constitucional y abucheaban a sus defensores. En este ambiente fue comisionado el edecán del Senado, un viejo militar retirado, para acallar a los manifestantes; pero fue recibido con pullas y bromas, no obteniendo resultado alguno. No obstante el artículo 1° del proyecto fue aprobado, quedando listo para su promulgación al día siguiente.

Durante todo el día 3 lo sucedido constituyó el comentario general en el país. Alessandri, citó con urgencia a un consejo de gabinete y pidió castigo para los oficiales involucrados basándose en un circular del ex ministro de guerra, general Brieba, que les prohibía asistir de uniforme a las sesiones del Congreso. ¿Había olvidado el Presidente sus críticas hechas en el regimiento Buin en el sentido que a los militares se les exigía cumplir incondicionalmente las órdenes sin inquirir primero de parte de quien estaba la justicia?

En la noche de ese día se votaría definitivamente la dieta parlamentaria en el Senado y era un secreto a voces que la presencia militar se repetiría; pero esta vez sobrepasaron la centena. El ánimo ahora no era festivo como la noche anterior, sino que, azuzados por los conceptos vertidos durante una reunión efectuada en el Club Militar en defensa de los oficiales que se quería castigar, la posición se había endurecido. Por otra parte, los calificativos usados por algunos parlamentarios terminarían por enardecer a la oficialidad. Un diputado que había sido profesor de la Escuela Militar propuso el cierre del plantel y otro, que era capitán retirado, expresó: *«El muchacho entra a las filas halagado por los botones y sigue siendo luego un simple ganasueldos»*.

Durante el debate en el hemiciclo los oficiales hacían sonar sus sables desde las tribunas, a lo cual acompañaban con aplausos o abucheos de acuerdo a las posiciones que expresaban los oradores. Las ofensas hacia ellos no se hicieron esperar, increpándolos en el sentido que su mala educación no estaba de acuerdo con el sueldo que les pagaba el Estado.

El presidente subrogante del Senado, Héctor Arancibia Laso, ya que el titular Eliodoro Yáñez estaba ausente, solicitó al ministro de guerra y marina, ex capitán Gaspar Mora, que hiciera salir a los militares, los cuales lo hicieron arrastrando sus sables por las escaleras de mármol para reunirse en el Club Militar con el secretario de Estado.

En esta reunión nada se acordó, excepto convocar a un «té» que los tenientes ofrecerían a los capitanes para el día siguiente. El Ministro se retiró a la una de la madrugada manifestando la justicia de la molestia imperante en el Ejército por las discusiones estériles del Congreso con respecto a las leyes castrenses y reconociendo que no había existido deliberación, pues en caso contrario el gobierno habría procedido a sancionarla.

Entretanto los parlamentarios aprobaban la dieta por 18 votos contra cero y 9 abstenciones.

La protesta toma visos de rebelión

El día 4 de septiembre, alrededor de las 18 horas, nuevamente se reunieron los oficiales del Ejército en el Club Militar, ésta vez asistieron entre cuatrocientos y quinientos, principalmente tenientes y capitanes, quienes al tener conocimiento que el Inspector General del Ejército Luis Altamirano había defendido, esa mañana, ante el Presidente de la República, no sancionar a los oficiales involucrados en los hechos del Senado, decidieron mandarlo buscar para que se colocara a la cabeza del movimiento.

Altamirano era cuñado del hermano mayor de Arturo Alessandri. La actitud de llamarlo a la reunión constituía aparentemente un signo de unidad en el Ejército y una descalificación a quienes trataban de subversiva la asamblea. Al abandonar el club, este jefe fue ovacionado por los oficiales quienes, al acompañarlo hasta la puerta del recinto para despedirlo, gritaban ¡Viva el salvador de Chile!, ¡Viva Altamirano!, ¡Muera Alessandri! Este fue su minuto y nunca se sabrá por qué lo dejó pasar.

Informado el Presidente de la República de la reunión permanente que se desarrollaba en el club castrense, envió emisarios para que una delegación de los oficiales allí reunidos acudiera al palacio de gobierno para plantear sus inquietudes. Fue designado para tal efecto el capitán Heraclio Valenzuela, acompañado de los tenientes Ricardo Valenzuela y Víctor Pimstein.

Al llegar a las puertas de La Moneda se les unió un Mayor, que no había actuado en los hechos anteriores, insistiendo en participar en la reunión. Se trataba de Carlos Ibáñez del Campo, director de la Escuela de Caballería.

El mayor Ibañez no había tenido gran figuración durante su carrera militar en Chile; pero había estado comisionado en la república de El Salvador para fundar una escuela militar donde tuvo la oportunidad de participar en una guerra contra Guatemala y transformarse en el brazo derecho del caudillo más importante de ese país, conociendo por propia experiencia el sistema de cuartelazos e intervención del Ejército en la política, que constituía el factor común de las naciones centroamericanas.

Los comisionados nombrados para entrevistarse con el presidente Alessandri lograron dejar al mayor Ibáñez en el primer piso mientras ellos se reunían con el primer mandatario.

Alessandri trata de capitalizar la rebelión

La propuesta de Alessandri, que el capitán Valenzuela llevó a la asamblea del Club Militar expresaba: *«Pídanme Uds., por escrito, el despacho de tales y cuales proyectos; yo me comprometo a patrocinarlos y a cerrar el Congreso en el caso de que las cámaras no les den su*

aprobación. Si el Ejército está conmigo, yo estoy con el Ejército; pero no olviden ustedes que yo cuento con el apoyo de una gran parte de la opinión pública».

Mientras don Arturo sostenía su reunión con el capitán Valenzuela y los tenientes, su ministro del interior, Pedro Aguirre Cerda, lo hacía con los comandantes de las unidades santiaguinas, a quienes les pedía su apoyo y colaboración y les manifestaba la enérgica resolución del gobierno en orden a preservar la disciplina. Ni el Presidente conocía lo que hacía su Ministro, ni los comandantes la cita de los oficiales subalternos, levantándose el telón solamente a la llegada de tenientes, capitanes y comandantes al Club Militar.

El efecto fue desastroso, no se había seguido el conducto regular; mientras los jefes de unidades conferenciaban con el Ministro del Interior, sus subalternos lo hacían directamente con el Presidente de la República.

La actitud que habían tenido los tenientes en su primera reunión de participar a su jefe superior el Inspector General del Ejército de lo que estaba sucediendo, fue desvirtuada por esta otra situación, de responsabilidad de la autoridad máxima del país. Con ello rodaron por la pendiente que conduce al caos los cánones de la disciplina que tan celosamente habían guardado las fuerzas armadas.

Ofendidos por los términos vejatorios para los oficiales del Ejército que se habían vertido en las sesiones del parlamento, los capitanes Sócrates Aguirre y Silvestre Urízar se presentaron, a las ocho de la mañana del día 5 de septiembre, en la residencia del ministro de hacienda y senador Enrique Zañartu Prieto, exigiéndole dar explicaciones por su actitud o bien nombrar padrinos para batirse a duelo. El dueño de casa, que los había recibido en bata de levantarse y en forma muy descortés por la hora en que era importunado, les solicitó algunos minutos para llamar a los padrinos y luego, una nueva espera, pues estos estaban por llegar.

Grande fue la sorpresa de los oficiales cuando tocaron el timbre y aparecieron las personas que esperaban, estas eran... el general Altamirano, Inspector General del Ejército y el general Pedro Pablo Dartnell, Comandante de la Guarnición de Santiago.

Ese mismo día debía realizarse en el Club Militar la reunión destinada a establecer los puntos que se plantearían al gobierno, conforme lo había solicitado el presidente Alessandri. Junto a la oficialidad joven concurrieron los generales Altamirano y Dartnell. Su intensión era encauzar el movimiento por la senda de la disciplina castrense; pero el sentimiento de triunfo e invencibilidad que albergaban los tenientes y capitanes les obligó a aceptar posiciones contemporizadoras que pronto los sobrepasarían.

Los puntos que serían llevados al primer mandatario estaban ya redactados cuando llegaron los oficiales superiores, causándoles estupor; pues no solamente contemplaban aspiraciones profesionales, sino que también una serie de aspectos que caían derechamente en la arena política. Pero de todos modos el documento fue aprobado.

Ellos eran:

1. Vetar inmediatamente la dieta parlamentaria
2. Despacho ipso facto de la ley de presupuestos
3. Reforma de las leyes orgánicas del Ejército referentes a ascensos, retiros y otros.
4. Aumento de las remuneraciones de las fuerzas armadas.
5. Establecer un impuesto progresivo a la renta.
6. Cumplimiento de la ley que recompensaba a los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico.
7. Estabilización de la moneda.

8. Despacho del código del trabajo y otras leyes sociales.
9. Promulgación de la ley de empleados particulares.
10. Pago de los sueldos atrasados a profesores y empleados públicos.
11. Salida del gabinete de los ministros Luis Salas de justicia e instrucción, Enrique Zañartu de hacienda y Gaspar Mora de guerra y marina.
12. Exigencia que este último ministerio estuviera siempre en manos de un profesional.
13. No utilizar a los uniformados en política, como sería el caso de vigilar las elecciones.

Los puntos 3, 4 y 6 eran claramente aspiraciones castrenses, el punto 13 parece ser una consecuencia directa de lo sucedido durante las elecciones parlamentarias de 1924; pero lo que se refiere a los puntos 2, 5, 8, 9 y 10 son aspectos netamente políticos y ellos figuraban en las aspiraciones del Presidente. Incluso algunos sostienen que él mismo los habría dictado la noche anterior cuando se comenzó a redactar el petitorio.

Una delegación llevó a La Moneda el documento; pero los generales Altamirano y Dartnell se esfumaron en el camino. El teniente coronel Arturo Ahumada tomó el mando del grupo y el teniente Alejandro Lazo le dio lectura. Ahora era la jerarquía militar la que rodaba por el fango.

¡No hemos venido a pedir, sino a exigir!

La reunión tuvo por momentos un aspecto violento, a pesar que Alessandri trataba de guardar la calma para poder dominar la situación; pero cuando llamó al ministro del interior Aguirre Cerda y lo puso al tanto de las peticiones, éste señaló que, como jefe del gabinete, debía consultarlas con sus colegas, a lo que el teniente Lazo manifestó con voz cortante *¡No hemos venido a pedir, sino a exigir!*.

Luego algunos oficiales de mayor graduación pidieron disculpas a don Arturo (pero Lazo no), con lo que la calma pareció restablecerse; pero ya no solo se habían roto los moldes de la jerarquía sino que también de la subordinación.

Alessandri, tratando de sostener la disciplina, nombró un ministerio que diera garantías a los insubordinados y restableciera la unidad interna, para lo cual entregó la cartera de interior al propio Inspector General del Ejército Luis Altamirano, en hacienda colocó al vicealmirante Francisco Nef y en guerra al general Juan Pablo Bennet. Completaban el ministerio Emilio Bello, Gregorio Amunátegui y Ángel Guarello.

Alessandri debe haber pensado que con su consabida habilidad para dominar todo tipo de situaciones y maniobrar para conseguir sus objetivos había salvado su mandato y, con el apoyo del Ejército que había logrado volcarlo en su favor, continuaría gobernando con un parlamento dócil que, por un lado, aprobaría todos sus proyectos por temor a un golpe militar y, por otro, podría mantenerlo como demostración que continuaba siendo un demócrata y acatando la Constitución; pero ignoraba que durante las deliberaciones castrenses del 8 de septiembre los puntos más discutidos habían sido la remoción del Presidente de la República y la disolución del Congreso Nacional.

Acelerada aprobación de los proyectos de ley

Con la anuencia de los militares, el lunes 8 de septiembre el gobierno presentó al Congreso dieciséis proyectos que fueron aprobados en la tramitación más rápida que recuerda

toda la historia parlamentaria de nuestro país. Comprendían la totalidad de los tópicos que el Presidente deseaba promulgar: cooperativas, contrato de trabajo, caja de seguro obrero obligatorio, sindicatos profesionales, tribunales de conciliación y arbitraje, indemnización por accidentes del trabajo, caja de empleados particulares, derecho de huelga, recursos extraordinarios para cubrir el déficit del presupuesto, reforma de la caja de retiro del Ejército y de la Armada, aumento de la planta militar, sueldos de las fuerzas armadas, sueldos y organización de la policía, personalidad jurídica para la fábrica de material de guerra y por supuesto, el veto a la dieta parlamentaria.

Todo fue aprobado en un momento. El General Ministro del Interior expuso el programa y el presidente del Senado solicitó de inmediato que se eximiera de comisión y debate y se votara en general y en particular, lo que se hizo.

A los pocos minutos, el paquete de proyectos de ley pasó a la Cámara de Diputados donde se solicitó igual procedimiento al utilizado por los «padres conscriptos».

Antes de la votación se levantó el diputado radical Pedro León Ugalde quien, trémulo de indignación, dijo: *«Yo lamento que se nos haya traído a este recinto por la fuerza de las bayonetas. Yo me rebelo ante esta manifestación de fuerza que ejecutan los militares de mi tierra, ante este reto horrible al pueblo chileno... Tenéis las armas, tenéis los soldados, pero... os falta la más grande de las fuerzas, la fuerza de la razón»*. Y más adelante agregó: *«No nos echemos tierra a los ojos. Este gabinete y la honorable Cámara están tutelados ya por un comité militar»*.

Como al escuchar estas últimas palabras el general Altamirano hiciera ademán de dejar el hemiciclo, su presidente invocó el «patriotismo» del parlamentario disidente, el cual abandonó el recinto, dejando constancia de su enérgica protesta al sistema empleado.

La Junta Militar

Alessandri pensaba que el apoyo que había obtenido del Ejército para sacarle al parlamento la aprobación de todos sus proyectos de leyes, con excepción del impuesto progresivo a la renta, que le habría creado una fuerte disputa con los conservadores, iba a permitirle gobernar tranquilo con el aval que le daba su concuñado ministro del interior y a la vez cabeza de la institución. Para esto, una vez obtenida la promulgación de las dieciséis leyes a que nos hemos referido, debía disolverse la Junta Militar que se había constituido como tal durante los conciliábulos del club castrense el día 6 de septiembre, esto es dos días antes de la presentación de los proyectos de ley al Congreso.

Lejos de suceder los hechos como lo esperaba el Presidente, se sumaron al organismo rector los oficiales de la Armada, capitanes de fragata Benjamín Barros Merino y Olegario Reyes del Río y el jubilado de igual grado Lautaro Rozas Andrade. Pronto los dos últimos fueron reemplazados por los capitanes de fragata Carlos Jouanne de la Motte du Portail y Julio Dittborn y por el capitán de corbeta Luis Escobar Molina[4]. Con esto el organismo pasó a denominarse Junta Militar y Naval.

Durante la mencionada asamblea constitutiva en el Club Militar, el virtual jefe del movimiento, teniente coronel Arturo Ahumada Bascuñán, que a la sazón era el director de la

[4] A este oficial lo veremos, más adelante, encabezando un complot en Talcahuano.

Escuela Militar, pidió ser relevado de la responsabilidad por el teniente coronel Bartolomé Blanche Espejo.

Ahumada dio algunas disculpas fútiles para justificar su actitud; pero la verdadera razón estaba en que no comprendía que pudiera continuar la inquietud en la institución después de la formación de un gabinete en el cual formaba parte la autoridad máxima del Ejército. Además recelaba de actitudes que había observado en oficiales subalternos con respecto a sus jefes; entre los que se contaba, precisamente, a quien propuso como sucesor. Finalmente creía que, como director de la Escuela Militar, podría mantener a los cadetes alejados del conflicto.

Tras el nombramiento de Blanche se constituyó un comité destinado a relacionarse con el gobierno, del cual formaron parte el propio Blanche y los teniente coroneles Alfredo Ewing Acuña y Arturo Puga Osorio y el mayor Carlos Ibáñez del Campo. Los secretarios eran los tenientes Alejandro Lazo Guevara, Mario Bravo Lavín y Silvestre Urízar Banderas. A Ewing, Ibáñez, Lazo y Urízar los unía la logia masónica.

Las actitudes más trascendentales de la Junta Militar fueron las que le confirieron un carácter decididamente revolucionario y no sólo ante los poderes del Estado, sino en el seno del propio Ejército.

El mayor Ibáñez rápidamente se constituyó en el líder del movimiento y, de paso, en el promotor de la indisciplina dentro de su institución. De sus ponencias en la reunión constitutiva podemos extraer: *«Aquí no debe haber ni tenientes, ni mayores, ni coroneles, sino oficiales con iguales prerrogativas. Los riesgos son iguales para todos»*.

Al advertir el mayor Ibáñez la ausencia de su superior, el teniente coronel Ewing, quien estaba representado por su segundo que era el capitán Arturo Villouta, montó en cólera y violentamente exclamó: *«Encuentro inaceptable esta actitud del comandante Ewing. Esta no es una reunión de representantes, sino de hombres que tienen una responsabilidad efectiva que hacer valer. Propongo que el capitán Villouta se retire inmediatamente para ir a buscar al comandante Ewing»*.

Igual procedimiento se cumplió con el comandante del regimiento Buin, mayor Roberto Canales, quien se encontraba rindiendo honores en los funerales de un viejo jefe.

Mediante estas actitudes, Ibáñez hizo de la Junta Militar un organismo con poder sobre todos los oficiales, excepción hecha de los generales, lo que rompía la verticalidad del mando.

Los acuerdos que se tomaron esa noche demostraron el control que tomaba sobre la institución y sobre toda la estructura del Estado, el grupo de oficiales deliberantes:

- Ningún miembro de la Junta podría ser cambiado de destinación sin el permiso previo de ella.
- Era juez de la lealtad entre los militares y, como cuerpo, frente a los civiles.

Aplicando estos conceptos fueron acusados de ambigüedad el comandante del regimiento Coraceros, mayor Manuel Bulnes Calvo y el edecán del presidente de la república, capitán Pedro Álvarez Salamanca.

No se conocen con exactitud quienes formaban la Junta Militar, pues los contemporáneos no concuerdan en la cifra; pero todos hablan entre 36 y 43 oficiales, individualizando solamente a 27.

La actitud de los miembros de la Armada, difería totalmente de la de sus congéneres del Ejército, pues ellos actuaban, permanentemente, siguiendo las instrucciones del Consejo Naval que lo conformaban los almirantes y nada acordaban sin consultarlo. La Junta tuvo que

tolerarlos, so pena de perder el apoyo y la representación de la Marina. En todo caso, más adelante, cuando el grupo deliberante tuvo un estatuto orgánico y una mesa directiva, la vicepresidencia estuvo destinada a un marino.

Lo anterior parece ser la primera causa del recelo y desconfianza que siempre profesó Ibáñez por la Armada y cuyo ahondamiento veremos más adelante. También supo explotar el descontento de la oficialidad joven y de los postergados «injenieros» que no estaban representados en el organismo rector[5].

El golpe militar del 11 de septiembre de 1924

Lejos de suceder los hechos como lo esperaba el Presidente de la República, una vez obtenida la aprobación del paquete de leyes en el parlamento, el poder continuó en manos de la Junta Militar. La suerte del mandatario quedó sellada en la misma tarde del 8 de septiembre, cuando en la reunión del Club Militar, Carlos Ibáñez, liderando el movimiento, se opuso a las posiciones que sustentaban los más altos jefes que la componían, como eran los comandantes Ahumada y Blanche y preparó un acuerdo que cerraba todas las posibilidades de volver al camino institucional. Éste decía: *«El movimiento militar está inspirado exclusivamente en la necesidad suprema de salvar a la nación arruinada por la corrupción política y administrativa y no terminará mientras no realice ampliamente su misión»*.

El manifiesto fue difundido públicamente por medio de volantes impresos en el diario La Nación y las pizarras de los periódicos santiaguinos, antes que siquiera lo conociera la Junta, poniéndola en esta forma entre la espada y la pared, es decir acatándola o bien dividiendo al Ejército. En la maniobra actuó además el hábil y ambicioso periodista del diario de gobierno, Carlos Dávila Espinoza, que luego también lo veremos participando activamente en la destrucción institucional del país.

Al conocer el Presidente de la República el texto del manifiesto aprobado por la Junta Militar y reconociendo íntimamente que había fracasado su pretendida maniobra estratégica de encauzar, dirigir y aprovechar el movimiento castrense, pues de continuar se habría convertido solamente en un títere ejecutor de los dictámenes de éste, procedió a enviar al parlamento la renuncia a su alto cargo y la solicitud para abandonar el país. Enseguida se asiló en la embajada de los Estados Unidos.

El Congreso, tratando aún de guardar las apariencias que seguía respetándose la Constitución, rechazó la renuncia y concedió a Alessandri una licencia por seis meses, a pesar que éste ya había desestimado tal acuerdo e insistido en abandonar el cargo y retirarse de la vida política.

La Junta Militar se indignó con el hecho de que el Presidente permaneciera en Chile y más aún, de su asilo en la embajada, lo que les imposibilitaba someterlo a cualquier coacción. La Armada apoyaba esta posición, para lo cual viajó a la capital el vicealmirante Luis Gómez

[5] Una pequeña demostración de la ninguna simpatía que profesaba Carlos Ibáñez a la Armada fue el hecho que en su ancianidad, cuando ejercía por segunda vez la Presidencia de la República, le placía usar, para las ceremonias oficiales que tenían alguna relación con las fuerzas armadas o de orden, el uniforme correspondiente al grado máximo de la rama homenajeada; así vistió de general de división, general del aire y general de carabineros; pero jamás lo hizo de almirante.

Carreño, quien no solamente exigía la vacancia de la Presidencia de la República, sino que además la disolución del Congreso Nacional.

El día 9 de septiembre asumió la jefatura del Estado el general Luis Altamirano en el carácter de vicepresidente y dos días más tarde se formó una Junta de Gobierno que asumió las tareas que la Constitución otorgaba al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Consejo de Estado. Ésta quedó constituida por el propio Altamirano, por el Director General de la Armada, vicealmirante Francisco Nef Jara, y por el general Juan Pablo Bennet Argandoña.

La Junta Militar no se sintió representada por la Junta de Gobierno, a pesar de estar ésta constituida por oficiales generales que ostentaban los grados cúspide de los escalafones del Ejército y de la Armada y no procedió a su autodisolución. Ya los estrictos moldes de la disciplina, de la jerarquía y de la verticalidad del mando se habían derrumbado y pronto comenzaría a campear la audacia y la ambición personal.

Una vez formada, la Junta de Gobierno procedió a nombrar un ministerio civil, con excepción de la cartera de guerra y marina que le fue otorgada al vicealmirante Luis Gómez Carreño. Los nuevos secretarios de Estado pusieron, como condición, la disolución de la Junta Militar, a lo cual les dieron seguridades los tres miembros de la Junta de Gobierno.

Los jefes máximos castrenses trataron de conseguir el cumplimiento de sus promesas, lo que no obtuvieron, recibiendo como disculpa de los oficiales deliberantes que su intranquilidad nacía de ver que el ministerio recién formado tenía un marcado sentimiento de simpatía hacia los políticos de la Unión Nacional y de la oligarquía santiaguina, lo que incluía a la persona del Vicealmirante ministro de guerra y marina.

Altamirano, Nef y Bennet, al no poder hacer cumplir sus órdenes, prefirieron tolerar al organismo paralelo de gobierno.

La oficialidad rebelde exigió a la Junta de Gobierno eliminar de las filas a todos aquellos oficiales que ellos consideraban «indignos», lo cual ésta aceptó sin la menor observación, ni el más insignificante reparo.

La comisión encargada fue bautizada como la «destroncadora» y fue implacable en sus determinaciones. La lista de los exonerados fue confeccionada por la Junta Militar y hecha pública en las pizarras del club castrense exhibiendo los nombres de los «indignos». Luego fue entregada por Blanche a Bennet.

La eliminación se cumplió de inmediato sin otorgarse a las víctimas ni siquiera la posibilidad de defenderse. Tan solo un general pretendió ser escuchado; pero se constituyó en el escarnio de sus compañeros de armas.

Treinta y tres generales y treinta coroneles fueron eliminados, lo cual produjo beneficios inmediatos a los autores debido al consabido «tiraje a la chimenea». Blanche ascendió a coronel e Ibáñez a teniente coronel.

La Armada logra la disolución de la Junta Militar. Resentimiento en el Ejército

Como era de prever, los conflictos entre la Junta de Gobierno y la Junta Militar comenzaron muy pronto. La primera aspiraba a gobernar el país sin trabas, pero en consenso con los partidos políticos; en cambio la segunda pretendía ser realmente el organismo rector y que nada podía hacerse sin su beneplácito.

El gobierno, fuertemente influenciado por los políticos que militaban en los partidos que conformaban la Unión Nacional, preparó una nueva ley electoral y pretendió llamar a elecciones para 1925. Estas fueron banderillas clavadas a los oficiales revolucionarios.

La Junta Militar se vio en la necesidad de tratar de salir del anonimato para poder enfrentarse a su congénere, a pesar que le daba tranquilidad el hecho que Bennet los apoyaba desde la Junta de Gobierno.

Sintiendo la Junta Militar que no era tomada en cuenta por la Junta de Gobierno, decidió «tomar el toro por las astas» y acudió a La Moneda para exigir su reconocimiento público y la salida inmediata del ministro del interior Alcibíades Roldán Álvarez.

El diálogo sostenido en dicha entrevista entre el presidente de Junta de Gobierno, general de división Luis Altamirano Talavera, a la sazón además Inspector General del Ejército, autoridad máxima de la institución y el teniente Alejandro Lazo Guevara es una prueba elocuente de los límites a que había llegado la indisciplina:

General Altamirano: «Mucho puede haber decaído la disciplina en el Ejército; pero yo no puedo tolerar que un simple teniente, por muy distinguido que sea, me venga a faltar el respeto»

Teniente Lazo: «Me extraña, mi General, que Ud. haya olvidado que desde el 5 de septiembre no se puede hablar de disciplina en el Ejército».

Esta respuesta insolente, pero cierta, del teniente Lazo sería «el canto del cisne» de la Junta Militar y justo un mes más tarde la Junta Gobierno se anotaría el triunfo de obtener su disolución.

Los sepultureros de la extraña institución revolucionaria-castrense fueron en definitiva los almirantes, no por medio de una concertación al efecto, sino como consecuencia de las posiciones que tomaron antes diferentes hechos puntuales producidos, como veremos a continuación.

En la época que relatamos no existía el Cuerpo de Carabineros como tal, sino que constituía un regimiento del Ejército; pero que en definitiva era el más importante debido al número de sus miembros y al hecho de estar su campo de acción y su experiencia en las ciudades.

El mayor de carabineros Ángel Pacheco dirigió a todos sus colegas del Cuerpo una carta proclamando la candidatura presidencial de su jefe, el coronel Alfredo Ewing Acuña. Junto con resaltar las virtudes y condiciones del propuesto pedía la unión de todos los miembros de la institución para sostenerla. La misiva, a pesar de tener el carácter de reservada, fue publicada por El Diario Ilustrado.

El ministro de guerra y marina, vicealmirante Luis Gómez Carreño y los miembros de la Junta de Gobierno reprocharon la candidatura por contraria a los repetidos anuncios militares en el sentido que los uniformados no codiciaban el poder.

Como Ewing no manifestara una verdadera intención de resignar su importante cargo en carabineros, el miembro de la Junta de Gobierno, vicealmirante Francisco Nef, obtuvo de ésta la remoción del pretendido candidato presidencial.

La medida indignó a los componentes de la Junta Militar, pues contravenía su acuerdo interno de que ningún miembro de ella podía ser trasladado, cambiado de cargo o dejar la guarnición, sin el permiso previo de la entidad. Además el hecho de que el Cuerpo de Carabineros dependiese del ministerio del interior y su titular fuese un civil, a quien le correspondía exonerar al oficial, no podía ser aceptado por ellos.

La Junta Militar fue apresuradamente convocada para tratar la situación. Los más exaltados exigían la reposición de Ewing en su cargo y el capitán de carabineros Arturo Guillermo Villouta Ruiz amenazó con retirar al Cuerpo de la Junta si no se restablecía en el cargo a su jefe. La alternativa era que junto con Ewing se fuera todo el ministerio; pero en el nuevo que se formara él debía desempeñar la cartera de guerra. Si la Junta de Gobierno no aceptaba, debía ser reemplazada por otra; la cual estaría formada un militar, un marino y el civil Emilio Bello Codesido.

Era un nuevo golpe militar, incluso los carabineros alcanzaron a sacar a la calle varios escuadrones esperando la orden de ataque a La Moneda; pero varias circunstancias quitaron presión a la caldera y por el momento no pasó la cosa a mayores.

La Junta de Gobierno, por medio del vicealmirante Francisco Nef solicitó, en estas circunstancias, el auxilio de la Armada, por lo que el Consejo Naval adoptó un acuerdo que contenía tres puntos:

- El hecho existir un gobierno constituido no hacía necesaria la existencia de la Junta Militar.
- Reiteraba el apoyo de la Armada a la Junta de Gobierno.
- Disolvía el Comité Naval y retiraba sus representantes ante la Junta Militar.

A los oficiales exaltados les faltó la conducción de un líder, pues Carlos Ibáñez se abstuvo de hacerlo, seguramente visualizando que no era de su conveniencia dar popularidad a la persona de Ewing.

Bartolomé Blanche trató de evitar la disolución de la Junta Militar, para lo cual propuso disminuirla para hacerla más operativa y entregarle el ministerio de guerra, el cual quedaría separado del de marina, aceptar la salida de Ewing, cambiar el gabinete y llevar a Emilio Bello a interior. Todo ello apuntaba a cumplir las expectativas de Carlos Ibáñez.

Mientras el coronel Blanche negociaba su propuesta, el miembro de la Junta de Gobierno, general Juan Pablo Bennet, recibió en su casa habitación la visita de los tenientes coroneles Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove Vallejos para hacerle presente que la disolución de la Junta Militar representaba la intromisión de los políticos de la Unión Nacional en el gobierno, tornándolo «*retrógrado y oligarca, lo que produciría una revolución en el país*» e invitándolo a encabezar un movimiento para derribarlo.

A Bennet se le presentó el fantasma de la revolución de 1891 al enfrentarse el Ejército con la Armada y rechazó el ofrecimiento.

La Junta de Gobierno persistió en su posición de eliminar la Junta Militar, y ésta, antes de verse suprimida por mandato gubernamental, prefirió decretar su propia disolución.

La eliminación de la entidad castrense subversiva de toda figuración, pública o encubierta, no fue del agrado de sus miembros, quienes se dieron a la tarea de reunirse con otras fracciones desplazadas del aparato gubernamental o descontentas con el gobierno que presidía el general Altamirano para derrocarlo. En este nuevo grupo no faltaron elementos políticos, que habían constituido el motivo de la revolución de los tenientes. Grupos muy disímiles se concertaron para hacer oposición, tales como:

- Los miembros de la Alianza Liberal, liderados por un «comité de recuperación», que presidía el Partido Radical y cuyos postulados condenaban al gobierno militar; pero adherían al manifiesto de los oficiales que habían intervenido con su presencia en las sesiones del Congreso Nacional. Finalmente propiciaban la formación de una asamblea constituyente.
- Los estudiantes que propugnaban por el regreso a las normas de la democracia.

- Los grupos obreros que habían encontrado quienes los interpretaban.
- Algunos de los oficiales que habían pertenecido a la fenecida Junta Militar, como Grove y Millán.
- Las logias masónicas, en las cuales volvieron a aparecer los uniformados que se habían alejado durante los acontecimientos septembrinos.
- Finalmente los viejos alessandristas, que bregaban porque su líder fuera llamado para que regresara desde el exilio y concluyera su interrumpido período presidencial.

El golpe militar del 23 de enero de 1925. Detención de los almirantes Nef y Gómez Carreño

La Junta de Gobierno, temerosa que el propio Ejército tratara de derrocarla, había colocado al mando de las unidades militares solamente a oficiales que consideraba adictos a ella y trasladado al extranjero o a guarniciones lejanas a quienes habían sido los líderes del movimiento subversivo. Carlos Ibáñez, adelantándose a los hechos, solicitó a Bennet que lo destinara a Europa, recibiendo el nombramiento de agregado militar en París.

Mantuvo este Teniente Coronel al alto mando del Ejército en la creencia de su próxima partida al viejo mundo; pero en lugar de ello se puso a la cabeza de una conspiración para derrocar al gobierno que encabezaba el general Altamirano.

Los conjurados se apoderaron de los regimientos Pudeto y Cazadores por medio de los capitanes Sócrates Aguirre y Amaro Pérez y el 23 de enero rodearon La Moneda y detuvieron al general Altamirano, al almirante Nef y al ministro de marina, vicealmirante Luis Gómez Carreño. Encabezaban la asonada, revólver en mano, los teniente coroneles Ibáñez y Grove, quienes habían tenido una agria disputa los días anteriores sobre la oportunidad y comando del movimiento. Esta disputa era el preámbulo de la rivalidad que ambos demostrarían a través de muchos luctuosos pasajes de nuestra historia cívica.

Se apoderó del mando un comité revolucionario formado por los generales Pedro Pablo Dartnell y Juan Emilio Ortiz Vega, quienes se dieron a la tarea de constituir una nueva Junta de Gobierno.

La Armada, que estaba en desacuerdo absoluto con el golpe, se sintió ofendida y agraviada por la vejación que sufrían los dos almirantes, temiéndose una guerra civil como la que había sacudido a Chile en 1891.

Una serie de graves situaciones, que veremos en la segunda parte de este capítulo, se produjeron entre ambas ramas de las fuerzas armadas, tanto en Valparaíso como en Talcahuano, que estuvieron a punto de cristalizar en un sangriento enfrentamiento.

Ante la visión de este fantasma, ambas partes aceptaron la mediación de Agustín Edwards, quien tenía mucha influencia en la Marina y era amigo personal del ex Presidente. El acuerdo fue logrado aceptando la institución naval la nueva situación y retirando su veto al regreso de Alessandri.

En el palacio presidencial se dejaron únicamente las tropas de la Escuela de Caballería que eran adictas incondicionales del teniente coronel Ibáñez y a este jefe se le concedió además el mando del Cuerpo de Carabineros.

Al caer la noche del 23 de enero de 1925 dos telegramas eran despachados a Italia solicitando el regreso al país del ex presidente Alessandri. Uno lo firmaban los generales Dartnell y Ortiz y el otro los teniente coroneles Ibáñez y Grove.

El ministerio de guerra en 1924 estaba ubicado frente a La Moneda, donde actualmente está la plaza de la Constitución.

No eran muy auspiciosas las condiciones en que el primer mandatario debería completar su período presidencial al recibir, no solamente el llamado de los generales que detentaban las máximas posiciones del escalafón, sino que también la de oficiales subalternos que eran actores de primer plano en los actos de indisciplina militar y civil acaecidos. Para hacerle aún más difícil la tarea, la Armada se oponía a su regreso; pero eso no lo sabía aún Alessandri.

Se formó una nueva Junta de Gobierno integrada, esta vez, por el general de división Pedro Pablo Dartnell, el contraalmirante Carlos A. Ward Rodríguez y el civil Emilio Bello Codesido, que la presidía y en la cual Ibáñez se hizo cargo de la cartera de guerra.

La indisciplina a nivel del personal de tropa

Los políticos pertenecientes a la Unión Nacional estaban en completo desacuerdo con el regreso de Alessandri y conspiraron para evitarlo. Las escaramuzas sucedidas no revestirían mayor importancia sino fuera por el hecho que se llevó por el camino de la insubordinación a los suboficiales y personal de tropa. Los moldes disciplinarios ya no solamente habían sido sobrepasados por los oficiales, sino que se empezó a minar el sistema jerárquico a nivel del «cuadro permanente».

La indisciplina se manifestaba dentro de los cuarteles en «memoriales» que circulaban clandestinamente entre la tropa exponiendo sus reclamos y reivindicaciones, especialmente en materias que tenían relación con la ley de retiros.

Un grupo de prominentes patriarcas del Partido Conservador buscó a los suboficiales. Como ha apuntado Gonzalo Vial: *«No era ilógico: si los generales habían dado o aprovechado el golpe de septiembre, y los mayores, capitanes y tenientes el contragolpe de enero... , ¿Por qué no había de sonar la hora de los suboficiales? La policía, advertida de la conjura, los vigilaba y el día 27 de febrero los detuvo «con las manos en la masa».*

La situación que revistió mayor gravedad fue la acaecida en el regimiento Valdivia.

Esta unidad militar había sido trasladada, por razones políticas, desde Cauquenes. Su comandante, el mayor Matías Díaz, sorprendió a dos suboficiales que hacían circular uno de los documentos clandestinos a que nos hemos referido y los hizo arrestar.

Al día siguiente, cuando el Comandante ingresaba a su unidad, se le acercaron dos suboficiales para solicitarle la libertad de los detenidos; el jefe no los escuchó y les hizo presente que la disciplina militar no contemplaba las peticiones en grupos.

Cuando el mayor Díaz envió al teniente Aníbal Vidal a buscar a su segundo, que se encontraba con permiso, un cabo de guardia le impidió dejar el regimiento advirtiéndole: *«De aquí no sale nadie»*. El Comandante se percató de la situación y acudió al lugar donde vehementemente discutían el cabo de guardia y el teniente; pero fue rodeado por una cantidad apreciable de conscriptos que exigían a gritos la liberación de los suboficiales detenidos.

El cabo de guardia procedió a apuntar con el fusil a su Comandante cuando una bala disparada por el teniente Vidal lo volteó, muriendo instantáneamente.

Suboficiales y soldados huyeron al interior del cuartel y se armaron, instalando incluso ametralladoras en la calle, por lo que el comandante Díaz y sus oficiales abandonaron el recinto.

La presencia del subsecretario de guerra, coronel Blanche, restableció el orden en la unidad.

El epílogo fue los funerales del cabo de guardia con «honores militares», la disolución y desarme de la unidad insubordinada, exoneraciones en el Ejército, relegaciones y castigos disciplinarios, algunos de los cuales alcanzaron inclusive a oficiales.

La inquietud que lo sucedido se repitiera en otros regimientos sobresaltaba a las autoridades y el ministro de guerra, teniente coronel Carlos Ibáñez, llegó a proponer el desarme del regimiento Buin y la entrega de sus armas a la guardia republicana (o «Roja») del radicalismo; pero el presidente de la Junta, Emilio Bello, se opuso.

El regreso de Alessandri. Oposición de la Armada

Las exigencias que habían hecho los golpistas del 23 de enero para el regreso del ex Presidente contemplaban tres puntos que Alessandri debía cumplir a su regreso. Ellos eran:

- Mantenerse alejado de la «execrable camarilla», esto es, de los políticos que lo habían rodeado antes de su caída.
- Cumplir el manifiesto de los sublevados del 11 de septiembre, poniendo énfasis especial en la más breve convocatoria de una asamblea constituyente.
- Terminar su período presidencial y entregar el mando de la nación en conformidad con la nueva carta fundamental que se dictara cuando estuvieran constituidos los poderes del Estado.

El día 29 de enero, al decidir el regreso del depuesto Presidente, la Junta de Gobierno procedió a nombrar un gabinete constituido casi totalmente por partidarios de él, excepción

hecha del ministro de guerra Carlos Ibáñez del Campo, que si bien es cierto le había dado su apoyo y tal vez su amistad, nunca podía saberse cual sería la próxima jugada ya urdida por el caudillo militar.

Alessandri, antes de pisar tierra chilena, debe haber aquilatado las circunstancias en que reasumiría, pues en Montevideo sostuvo una entrevista con el contraalmirante Luis Langlois Vidal, con el general Mariano Navarrete Ciris y con los ministros Jorge Matte Gormaz y Claudio Vicuña Subercaseaux. Los dos primeros entregaron al mandatario sendas cartas de sus instituciones, que aunque se desconoce su contenido, de acuerdo a la versión del «León», la del marino habría indicado que la Armada exigía claras condiciones con relación a los ministros y al rumbo que debía tomar el gobierno, en cambio la del Ejército *«sería respetuosa y no formulaba peticiones ni indicaba tampoco soluciones»*.

Siguiendo siempre la versión de Alessandri, al leer la carta de Langlois el ex mandatario se habría indignado, arrojándola con furia sobre la mesa y amenazando que de no retirarse las imposiciones se reembarcaría en el mismo buque a Europa. Enseguida habría exigido el pronunciamiento de Navarrete a nombre el Ejército, quien como todo argumento, le habría respondido: *«Excelencia, la única instrucción que traigo es decirle a nombre y en representación del Ejército: ¡A su orden, Generalísimo! Es Ud. quien manda»*. Ante esto el Contraalmirante se excusó aduciendo que solamente era portador de un encargo.

Pero no era Navarrete ni los generales quienes mandaban en el Ejército, sino Ibáñez, ahora coronel desde el día anterior a la llegada de Alessandri al país, que oficiaba de ministro de guerra.

Alessandri trata de estrechar vínculos con las Fuerzas Armadas

Una vez que Alessandri reasumió sus altas funciones, buscó estrechar vínculos con el Ejército y con la Armada para lo cual no escatimó visitas a buques y cuarteles donde pronunció encendidos discursos.

El 5 de abril, día de la caballería chilena, fue recibido, con gran pompa en la escuela del arma donde le dio la bienvenida el ahora Inspector General del Ejército, general Mariano Navarrete Ciris, quien notoriamente se había transformado en el representante de las fuerzas armadas. En su alocución se refirió a que *«... el Ejército no hace, ni hará, otra política que la que se relaciona con el cumplimiento de su alta misión...» «... para robustecer los vínculos de la disciplina...»* y para justificar enseguida lo acaecido hasta la fecha: *«Las fuerzas armadas de la república sintieron, como todos los habitantes de Chile, ansias de redención nacional, ansias de renovación. No se podía continuar presenciando impasibles el desmoronamiento del país, como consecuencia de un régimen funcional que no respondía a las aspiraciones ni a las necesidades de la hora presente...»*.

El Presidente debe haber comprendido, en ese momento, que su labor sería muy diferente a la que se le había planteado el regresar del exilio en el sentido que podría gobernar y llamar a una asamblea constituyente sin la intervención de las fuerzas armadas; pero por otra parte podría dar cumplimiento al programa que había prometido en 1920.

Dos días después era recibido por las autoridades navales en Valparaíso donde visitó el buque insignia acorazado «Almirante Latorre» y fue agasajado con sendos banquetes ofrecidos en el Club Naval y en la Escuela Naval.

Alessandri, que buscaba una Constitución de tipo presidencialista para Chile, se encontró con la fuerte oposición de los partidos políticos que no se resignaban a perder las prebendas y beneficios que les proporcionaba el antiguo régimen. Después del intento de nombrar numerosas comisiones, debates en el Congreso y conciliábulos de pasillo, recurrió al Inspector General del Ejército, quien en un golpe autoritario, respaldado por el pánico que sentían los políticos de una nueva intervención castrense, sometió a plebiscito un proyecto de carta magna, aprobándose por una amplia mayoría; la cual fue promulgada el día 18 de septiembre de 1925.

El plan de Carlos Ibáñez

El titular de la cartera de guerra Carlos Ibáñez se había encargado, desde su asunción al ministerio, de alejar de las destinaciones con mando de tropa a aquellos oficiales que no los consideraba incondicionales a su persona y substituirlos por otros que no dudarían en apoyar sus ambiciones de alcanzar la primera magistratura de la nación, aunque entonces las mantenía en secreto. Al mayor Pedro Medina se le relevó del regimiento Buin, ofreciéndosele diversos cargos de oficina, por lo que optó por retirarse de la institución, al capitán Amaro Pérez, comandante del regimiento Cazadores, se le envió al Haras Nacional, al coronel Carlos Sáez, director de la Academia de Guerra, se le destinó a una misión en Europa, dándole solamente diez días para abandonar el país. Al teniente coronel Marmaduke Grove, momentáneamente no se le tocó debido a su amistad con el Presidente de la República. Demás está decir que los cargos vacantes fueron llenados por ibañistas acérrimos.

Para controlar a la oposición que tenía el Coronel ministro dentro de las filas del Ejército alimentó las viejas rivalidades existentes entre su arma de caballería y sus eternos rivales, la infantería.

Este mismo sistema que le permitió controlar a los oficiales que no lo seguían ciegamente, lo emplearía, más adelante, para vencer la resistencia que tenía entre los oficiales ejecutivos de la Armada, enfrentándolos a los ingenieros y a los contadores.

El 20 de marzo había regresado a territorio chileno el Presidente de la República para reasumir su período inconcluso y el 18 de octubre entraba en vigor la nueva Constitución para reemplazar la de 1833. Todo hacía pensar que el país se encaminaba a una nueva era de paz y tranquilidad que le permitiría superar la penosa decadencia por la que se había arrastrado durante el período al que se ha dado en llamar «República Parlamentaria»; pero la realidad fue muy diferente, pues como hemos visto, el cáncer de la indisciplina y la demolición del sentido jerárquico seguía corroyendo las entrañas del Ejército, impulsado ahora desde el ministerio de guerra.

Una vez que Alessandri hubo reasumido su cargo, recibió el consejo de connotados políticos para que se deshiciera de su ministro coronel; pero el Presidente, aduciendo que su presencia representada la unidad del Ejército, no lo quiso hacer. Lo más probable es que el mandatario tenía miedo de una aventura castrense y manteniendo a su líder en el gabinete podría manejarlo.

La nueva carta fundamental, que había empezado a regir, disponía que seis días más tarde debían efectuarse los comicios para elegir al nuevo Presidente de Chile; pero los apetitos para alcanzar el cargo databan desde antes.

Alessandri, repitiendo los vicios que habían existido durante la vigencia de la fenecida Constitución de 1833, quiso imponer la candidatura presidencial de su amigo, correligionario y ministro del interior Armando Jaramillo como candidato único, postulación que no era del agrado de su ministro de guerra quien, a su vez, recibía el apoyo de organizaciones obreras que incluían a comunistas y anarquistas para formar un «frente único militar-obrero».

Ibáñez ya había urdido su plan para hacerse del poder el cual contemplaba los siguientes puntos básicos:

- Expulsar al Presidente de la República de La Moneda y del mando, por las buenas o por las malas.
- Conservar para sí el poder, manteniéndose como ministro de guerra.
- Hacerse elegir jefe del Estado.

Entre la salida de Alessandri y su propia asunción al mando, personalmente desempeñaría la Vicepresidencia de la República, o bien la entregaría a un militar incondicional a él y de su máxima confianza.

Para poner en ejecución la conspiración, Ibáñez se valió del profundo malestar que se había creado en el seno del gabinete al enfrentarse con su colega Jaramillo, ambos precandidatos y con el propio Presidente que apoyaba al último.

En sus declaraciones referidas a la candidatura de Jaramillo, el Coronel-ministro había reiterado la incompatibilidad entre ser postulante a la Presidencia de la República y desempeñarse como secretario de Estado, pues la moral pública lo impedía. Ahora que él había sido proclamado, le correspondía demostrar su virtuosismo político y en connivencia con el ministro de higiene, asistencia, previsión social y trabajo, doctor José Santos Salas Morales, expresó su deseo de alejarse del cargo, lo cual produjo la dimisión de la totalidad del ministerio... con excepción del ministro de guerra, promotor de la crisis.

Alessandri, alarmado con la excepción hecha al alejamiento de Ibáñez, lo enfrentó haciéndole ver su firme resolución y obligación de dar garantía a todos los candidatos de la próxima justa electoral por lo que era indispensable su renuncia, a lo cual don Carlos se comprometió a llevarla por escrito ese mismo día.

Un poco más tarde, un representante del Ministro hizo ver al Presidente que la dimisión quedaba condicionada a que fuera reemplazado en la cartera por alguno de los militares Manuel Velis, Marmaduke Grove o Bartolomé Blanche, aceptándose el nombre del primero.

Ibáñez no renuncia

En un paradigma de cinismo, la carta que el Coronel hizo llegar al Presidente de la República, al día siguiente, en lugar de su renuncia hacía ver que como Alessandri había solicitado la dimisión de su ministro fundándose en la incompatibilidad entre ese cargo y su candidatura presidencial, argumento que Ibáñez había usado profusamente contra Jaramillo, respondía que dicha supuesta incompatibilidad no se basaba *«en preceptos constitucionales ni legales»*. Además agregaba que *«jamás podría justificarse la incompatibilidad por reparos de índole moral, dada la tradición de hombre honrado que portaba y la pureza cívica de todos sus actos. Ellas le permitían la dualidad candidato-ministro en plena paz con mi conciencia, pensasen lo que quisieran pensar las mentalidades del profesionalismo político»*.

Continuaba: *«Con todo, siempre me hubiera sido grato... complacer a V.E.». Pero no le cabía hacerlo, pues en el ministerio de la guerra era representante de la revolución y del*

Ejército, para asegurar el cumplimiento del programa militar, la «cohesión y disciplina» castrenses y el «mantenimiento del orden». En atención a lo cual, «... no abandonaré por ahora el puesto ante la necesidad de defender el orden público, la unidad entre las filas y la pureza de la revolución, y poder cumplir así, hasta el fin, el programa que tiene comprometido el honor de las fuerzas armadas».

Esta respuesta constituía la primera parte del plan esbozado por Ibáñez para hacerse del poder, pues le permitía continuar en el ministerio en calidad, además, de candidato presidencial y buscar que su postulación no tuviera contrincantes. La segunda parte sería la post data de la misma misiva, escrita de puño y letra por el remitente y que significaba un golpe de Estado. Ella decía:

«En vista de la situación producida y de ser el infrascrito el único ministro en ejercicio, me permito rogar a S.E., en nombre de la patria y de la paz social que, careciendo de valor según los preceptos de la antigua y nueva Constitución, todo comunicado sin la firma del ministro respectivo, se sirva no dirigirse a ninguna autoridad u organismo nacional o particular, sin el requisito de mi firma, como único ministro en función» Vale.

Arturo Alessandri no aceptó la situación en que lo colocaba su ministro único y dimitió, por segunda vez y definitivamente, al período presidencial para el que había sido elegido en 1920.

Antes de alejarse del poder, el Presidente desechó los deseos de Ibáñez de nombrar como vicepresidente a don Domingo Amunátegui y colocó a su antiguo contendor electoral don Luis Barros Borgoño.

El signo del golpe de Estado y el cinismo del ministro quedó de manifiesto para la historia en la confesión que le hizo el «León» a un periodista al despedirse de La Moneda: *«Me voy porque los militares me echan».*

Ibáñez, molesto por ello, expresó en una circular oficial: *«Nunca el Ejército ha pedido la salida del señor Alessandri. No puede él citar el nombre de ningún militar o marino que le haya pedido, insinuado siquiera, su renuncia. Renunció indeclinablemente su cargo y eligió, en la más absoluta libertad de acción, vicepresidente al ciudadano don Luis Barros Borgoño, nombrado para ese efecto ministro del interior».*

Era innegable la habilidad de Ibáñez para desfigurar los acontecimientos haciéndolos aparecer causados por la civilidad y la democracia; pero todo iba dirigido a lo que era su mayor ambición: la Presidencia de la República. Ello lo lograría gracias a mantener a los partidos políticos asustados con la participación del Ejército, lo que no era ajeno a la realidad.

La elección del nuevo mandatario tuvo la curiosa coincidencia que tanto los militares e Ibáñez, como todos los partidos políticos de oposición, buscaban que hubiera un candidato único, evitándose una reñida lucha electoral, como se preveía. Los motivos que impulsaban a ambos bandos a coincidir tenían motivos muy diferentes: Ibáñez y sus seguidores castrenses veían que, como hombre fuerte del gobierno, la única persona con condiciones para recibir tal nominación era él; en cambio los políticos pensaban que era el mejor modo de enfrentarse unidos para atajar las pretensiones del Coronel-ministro y evitar la intervención electoral por parte del gobierno.

Ibáñez necesitaba alejar al ex Presidente del país para evitar que su arrastre popular pudiera entorpecer sus ambiciones en algún sentido y por otra parte purgar del Ejército a los oficiales que no lo seguían los que, como hemos mencionado, principalmente pertenecían al arma de infantería. Para hacer esto último no trepidó en tender una trampa a sus compañeros de armas con el fin de exonerarlos.

Al ex presidente Alessandri sencillamente lo deportó, contra la opinión del Vicepresidente de la República.

Ibáñez se fortalece

El 3 de octubre, poco antes que el «León» abandonara el país, durante una regada manifestación de despedida en el Club Militar al coronel Blanche por su destino a París como adicto militar, el capitán Sócrates Aguirre, quien se había desempeñado como edecán del Presidente renunciado, abandonó el recinto en compañía del teniente Germán Pinochet y se dirigieron a la casa de Arturo Alessandri hijo, quien alojaba a su padre hasta su partida al viejo mundo.

Don Arturo, zorro viejo en estas lides, vio que los oficiales que le ofrecían dar un golpe de Estado para devolverle el poder se encontraban al borde de la inconsciencia a causa del alcohol ingerido, los recibió solo por unos diez minutos para agradecerles su solidaridad.

Aguirre y Pinochet recorrieron enseguida, en taxi, los regimientos de infantería Pudeto, Buin y Tucapel además del Telégrafos y el Tren; despertaron y reunieron, en cada uno de ellos, a los oficiales para comunicarles que «por orden superior» debían marchar sobre La Moneda y ocuparla para restaurar en ella a don Arturo Alessandri.

Cuando el general Arturo Oyarzún, jefe de los regimientos aludidos, llegó al Pudeto, éste ya se encontraba formado para marchar contra La Moneda al mando del propio Aguirre e hizo detener a los dos oficiales promotores de la asonada.

Los hechos posteriores muestran la forma como la aventura fue aprovechada por el caudillo militar para deshacerse de sus enemigos

Con la anuencia del propio Ibáñez, la defensa de los dos oficiales involucrados la hizo el capitán Tobías Barros Ortiz, quien era incondicional del Coronel-ministro, aprovechando la ocasión para culpar a la civilidad que había cogido a los dos involucrados como víctimas ingenuas y era culpable de la descomposición de su institución. Dijo el defensor: «*han venido instigándonos a intervenir en la vida civil de la nación e incitándonos a las luchas políticas... los mismos que han prostituído el alma del Ejército mezclando oficiales en las contiendas electorales... Son los que se acercan a los militares cuando tienen un hacha que afilar*».

Sócrates Aguirre, que no se había dejado amilanar por la acusación, enfrentó al fiscal militar, Bartolomé Blanche, encarándole la indisciplina reinante en el diálogo siguiente:

Blanche: «¿No pensó en su mujer y sus hijos?»

Aguirre: «No señor, como tampoco pensé en ellos el 23 de enero».

(Blanche que había sido tan indisciplinado el 23 de enero como Aguirre ahora, se hizo el desentendido).

Diez días más tarde, Ibáñez visitó los regimientos Pudeto y Tucapel y urgió a sus oficiales que hablaran con la mayor libertad acerca de sus inquietudes y preocupaciones. Estos, en vista del diálogo franco y abierto que les proponía el Coronel-ministro, plantearon sus quejas que podían sintetizarse en las siguientes:

- Los militares debían abandonar los cargos ajenos a su profesión; específicamente Ibáñez debía dejar el ministerio y el doctor José Santos Salas, las filas del Ejército.
- Los oficiales involucrados en incidencias anteriores debían ser destinados fuera de la capital. Entre ellos se nombraba a Bartolomé Blanche, Alejandro Lazo, Enrique Bravo, Amaro Pérez, Galvarino Zúñiga, etc. ¡Era el Ejército que trataba de reaccionar alejando a los indisciplinados del centro neurálgico de los acontecimientos!

- Los regimientos que había llevado Ibáñez a Santiago, porque le eran adictos, para controlar a la guarnición de la capital, deberían regresar a sus provincias de origen. Estos eran las unidades de caballería Dragones N°3 y Húsares N°6.

Al día siguiente de la visita del Coronel-ministro, el Inspector General del Ejército, Mariano Navarrete, cumplió igual cometido, visitando los regimientos de caballería el día 15 de octubre y los de infantería el 16. En estos últimos oyó iguales reclamos a los que había recibido Ibáñez; pero solicitó que ellos fueran resumidos por escrito, lo que cumplieron el Pudeto, el Tucapel y el Buin, enviándoseles al solicitante.

El gobierno consideró que ello constituía un acto de indisciplina; a pesar de haber sido solicitado por el propio Coronel-ministro, que los oficiales hablaran con franqueza y que el documento hubiera sido entregado al Inspector General del Ejército, como éste lo había solicitado.

Veintidós oficiales del Pudeto y del Tucapel fueron arrestados y expulsados o forzados a retirarse, entre ellos un coronel, dos tenientes coroneles, un mayor, siete capitanes, cuatro tenientes y dos contadores; además de los que quedaban en calidad de «disponibles». Ambos regimientos fueron sacados de la capital y enviados a provincias.

Ibáñez había hecho una jugada maestra eliminando de las filas a los oficiales que no le eran incondicionales y que gracias a su inteligencia o a su ascendiente sobre la tropa podían hacerle sombra y había descabezado la poderosa rama de la infantería que le era mayoritariamente adversa. Entre los jefes que le incomodaban solamente sobrevivieron Mariano Navarrete y Marmaduke Grove; pero ya se encargaría de ellos.

El Ejército, desde septiembre de 1924 se había convertido en el sostenedor de gobiernos títeres; pero ahora un grupo de sus oficiales lo transformaban en la guardia pretoriana del coronel Ibáñez.

Oposición de la Armada

Se acercaba la fecha de los comicios y el Coronel-ministro, viendo que constituiría prácticamente un imposible que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para llevar un candidato único, exigió que hacerlo sería la única forma de que él renunciaría a la candidatura que le había sido ofrecida.

Como la posición de la Armada era decididamente contraria a una candidatura militar, se trasladó a Santiago su Director General, vicealmirante Juan Schröders Peña, para reunirse con su congénere del Ejército, general Mariano Navarrete, y ponerse de acuerdo sobre el delicado tema de la sucesión presidencial. En la reunión previa entre ambos jefes el marino expresó: *«No elevaremos un caudillo ni hemos tomado el poder para mantenerlo y por tanto rechazamos las candidaturas de militares o marinos, incluyendo la del coronel Ibáñez»*. A lo cual el militar respondió: *«Le acompaño. El Presidente de la República debe ser un civil. Basta ya de caudillos y de reventones cuarteleros como los recientes. Me parece que no es al Ejército profesional tan lastimosamente dividido al que hay que convencer, pero sí al mismo Coronel»*.

Para la reunión que ambos jefes iban a tener con el ministro de guerra, éste había citado además a su despacho al candidato presidencial que constituía su pantalla, el doctor José Santos Salas, al ministro de marina, contralmirante Bahamonde, al subsecretario de guerra y adepto incondicional del caudillo, coronel Bartolomé Blanche, y al abogado del Ejército y redactor de las exigencias castrenses en los pasados golpes militares, mayor de caballería Oscar Fenner. Ibáñez inició la reunión expresando: *«El señor almirante Schröders,*

jefe máximo de la Marina, me ha solicitado audiencia para tratar un problema no profesional y en presencia de ustedes, deseo escucharlo».

El Vicealmirante respondió en forma tranquila y cortante: *«Señor Ministro. Era mi propósito verlo a usted a solas, tanto por mi diferencia de edad como por los dos grados que sobrellevo al señor Coronel. Oficializo ahora lo que digo. La Marina desea que sean mantenidas las promesas del famoso manifiesto añejo y sus postulados que impiden el mantenimiento del poder civil en manos de los uniformados. Este olvido del compromiso proviene de la camarilla numerosa e irresponsable de jóvenes oficiales que lo impulsan a continuar hablando en político con la evidente intención de ser usted un postulante uniformado a la presidencia».*

Tras un elocuente silencio intervino el general Navarrete diciendo: *«Pienso como la Marina que el futuro Presidente debe ser civil. A pesar de su dubitativa renuncia a la candidatura hay grupos organizados de tenientes, capitanes y mayores que bajo sus órdenes propalan sus deseos de postular a la presidencia, con la idea de desconcertar y hasta acobardar a grupos civiles políticos».*

El General fue interrumpido por el Ministro: *«Usted señor, está tachado de conservador».* A lo que el aludido replicó: *«Eso es una calumnia, Coronel. Jamás he pertenecido a partido político "ni cónclave secreto alguno". Soy sí católico y me honro de ello».*

El vicealmirante Schröders intervino a continuación con voz firme: *«Yo he venido como jefe activo de la Marina a manifestarle que no es posible que ni como soldado ni ministro usted continúe en notorias actividades políticas».*

Ibáñez, pálido de ira y ya sin argumentos exclamó, dirigiéndose a Navarrete: *«Olvida, señor General, que está hablando con el ministro de guerra»*, a lo cual el ofendido replicó: *«Usted olvida que está frente al más antiguo general del Ejército».*

A pesar del diálogo descrito y de la soberbia mostrada por el ministro, Ibáñez debe haberse dado cuenta que la Marina no lo iba a seguir en su aventura en esos momentos y poniéndose de pie le espetó al Director General de la Armada: *«Usted señor Almirante puede ir a comunicar a la Marina que el ministro de guerra no tiene interés en ser candidato a la presidencia. Hoy mismo citaré en esta oficina a los jefes políticos para pedirles que elijan a un candidato que los aúne y dé seguridad a las fuerzas armadas».*

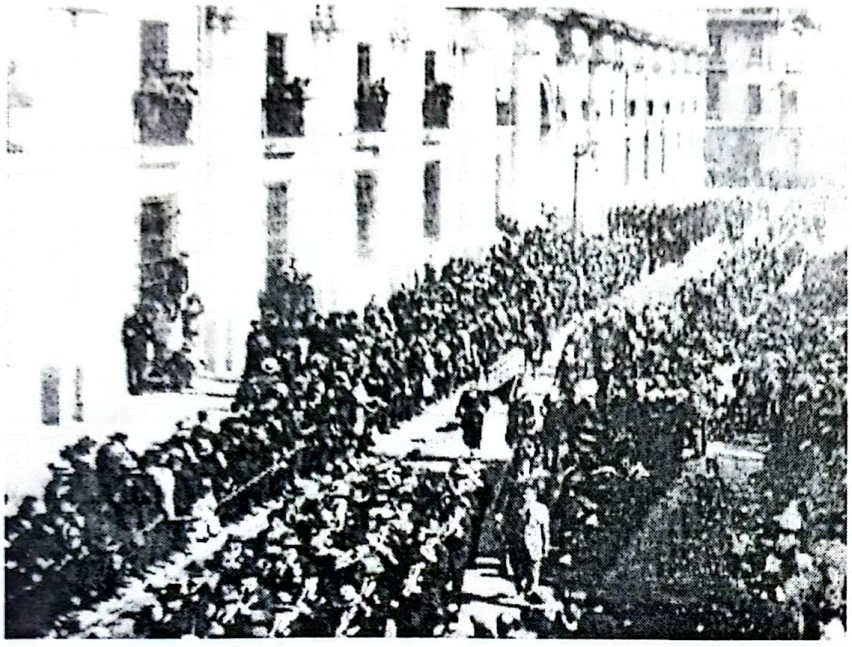
A los pocos días el general Navarrete fue llamado a retiro.

La elección presidencial

Para el íntimo desagrado del Coronel-ministro, el 5 de octubre recibió la comunicación de los jefes de todos las colectividades políticas informándole que se habían puesto de acuerdo en llevar como candidato único a don Emiliano Figueroa Larraín.

Ibáñez, viéndose pillado en su juego, trató de vetar la candidatura propuesta involucrando en ello al Ejército.

Cuando fue visitado, ese mismo día, por don Emiliano le argumentó que ella era resistida por una parte importante de la institución, *«que la oficialidad y amigos íntimos, conocedores de la política, le habían confirmado el sentimiento general de que la nominación de Figueroa era —nada más y nada menos— una burla», «que chocaba con los postulados de la revolución», «que el candidato desentonaba en un ambiente progresista, renovador y de justicia social»; motivos por lo que debía declinar el nombramiento; pero que no debía informar los motivos a los partidos políticos que lo habían designado.*



DESFILE EN HONOR A IBÁÑEZ DESPUÉS DE LA PROCLAMACIÓN HECHA POR LOS ASALARIADOS.

Como don Emiliano hiciera exactamente la contrario y recibiera el apoyo unánime y definitivo de los políticos, Ibáñez se vio en la necesidad de renunciar a su propia candidatura, pues así lo había publicitado para el caso de haber un acuerdo de candidato único; pero otra jugada había urdido al proponer *«una prórroga por el tiempo que se acuerde para todos los actos electorales con el fin de calmar las pasiones, encausar las fuerzas sociales, producir la regeneración política y administrativa y dar tiempo a los partidos para depurarse y reordenarse...»*. Para evitar malos entendidos, abandonaba irrevocablemente sus anhelos presidenciales.

Los partidos políticos se oponían a la prórroga; pero su posición tenía muy poca importancia para ser tomada en cuenta por el poderoso Coronel-ministro. El vicepresidente de la república Luis Barros, con paciencia y macuquería, logró captarse a la Marina para obtener que Ibáñez retirara la postulación que aún abrigaba. Finalmente fueron los comandantes de los regimientos de la capital quienes le hicieron ver, respetuosamente, que no simpatizaban con la idea y en especial el Consejo Naval que hizo llegar su desaprobación por medio del vicealmirante Juan Schröders.

Viendo Ibáñez fracasadas todas sus escaramuzas para ser el candidato y para la postergación de los comicios, decidió emprender una nueva maniobra, como era impulsar la candidatura de su amigo y médico del Ejército José Santos Salas, apoyado por las fuerzas sindicales que manejaba el Partido Comunista. En esta forma pensaba crear pánico en los electores y que ellos lo buscaran como candidato.

El diputado radical Santiago Labarca comentó proféticamente en aquella oportunidad: *«¡Ojalá Ibáñez no ponga al futuro Presidente en la dura necesidad de apresarlo! Porque salga don Emiliano o el doctor Salas, él no cejará en su empeño para preparar un asalto al poder»*.

El 24 de octubre se efectuaron las elecciones, obteniendo don Emiliano Figueroa el 71.1% de los votos contra el 28,3% del *«hombre salido de las bajas esferas sociales... joven, estudioso y firme en el trabajo»* como motejaba la propaganda al doctor Salas.

Los días 26 y 27 se produjeron violentísimos incidentes en Santiago a raíz de un paro total convocado por la Federación Obrera de Chile, FOCH, y diversos gremios, los cuales habían obtenido autorización gubernamental para reunirse en el centro de la capital.

El transporte urbano quedó paralizado y los obreros recorrían las calles apedreando las pocas «góndolas», como se llamaba a los microbuses en la época, que se atrevían a desafiar la paralización de actividades. El comercio fue saqueado y los carros de los repartidores públicos volcados en las calles.

La policía municipal fue claramente sobrepasada por la violencia de los hechos; pero el Coronel-ministro no dio la orden para que interviniera el Ejército ni los carabineros. Para ello era preciso dictar el estado de sitio; pero a pesar que el jefe de la guarnición, general Mariano Navarrete, lo solicitó y lo urgió, ni el Ministro del interior, ni el de guerra ni el Vicepresidente de la República lo encontraron necesario[6].

Por el contrario, el gobierno procedió a autorizar un segundo mitin y desfile en pro del candidato derrotado, el cual pasaría frente al palacio de gobierno. Ibáñez ocupaba uno de los balcones, rodeado de un numeroso grupo de oficiales del arma de caballería.

El general Navarrete, máxima autoridad castrense, quedó estupefacto, pues había dado órdenes que toda la oficialidad debía encontrarse acuartelada, lo cual constituía una grave falta a la disciplina. La queja del superior no tuvo eco en el Ministro quien le pidió *«que no tomara medidas contra ellos y que él se encargaría de amonestarlos por ese involuntario olvido de sus deberes»*.

Mientras desfilaban las columnas gremiales daban sonoros vivas a Ibáñez y los cabecillas del paro ponían en manos del Ministro del interior un memorándum que pedía la anulación de las elecciones presidenciales y su repetición después de una depuración administrativa. Un choque con los manifestantes de otro mitin favorable a don Emiliano Figueroa terminó con una balacera en la que cayeron numerosísimos heridos. El gobierno se encontró en la ineludible necesidad de decretar el estado de sitio y ordenar la carga de la policía montada.

En esta forma finalizaba la última tentativa de Ibáñez de adueñarse del poder en esa oportunidad por medio de la repetición de la elección y con él como candidato único, a petición de la ciudadanía.

Ibáñez continúa como ministro de guerra

La flamante Constitución política había dispuesto la renovación del Congreso Nacional el 22 de noviembre y don Emiliano Figueroa asumió la primera magistratura de la nación el 23 de diciembre de 1925.

El nuevo Presidente de la República pertenecía a la más rancia aristocracia chilena; pero se trataba de un hombre negligente, bonachón, trasnochador e incansable vividor. Famosas eran sus tertulias de amanecida en el Club de la Unión.

[6] Treinta y tres años más tarde, el 2 de abril de 1957 Ibáñez, ejerciendo por segunda vez la Presidencia de la República, emplearía un procedimiento análogo para obtener que el parlamento le aprobara las facultades extraordinarias que había solicitado. En esta oportunidad retiró a los carabineros de la calle y solamente cuando ya se había producido el caos en el centro de Santiago, ordenó que el Ejército restableciera el orden.

Conformaron su ministerio, entre otros, Maximiliano Ibáñez en el despacho de interior, el contraalmirante Arturo Swett en marina y.. ¡Carlos Ibáñez del Campo que continuaba en la cartera de guerra!

Muchos políticos recomendaron al nuevo mandatario deshacerse de su Ministro de guerra; pero otros, especialmente los enemigos del ex presidente Alessandri apoyaban la idea, pues veían en él una seguridad para que el «León» no retornara a La Moneda. Al fin de cuentas, era el propio don Emiliano quien veía que dar ese paso le significaba su enemistad con la oficialidad del Ejército y probablemente su suicidio político.

Como podía esperarse, el Ministro de guerra anuló completamente la autoridad del Presidente, quien tuvo que sufrir estoicamente todos los vejámenes que aquel le quiso hacer, sin que jamás rompieran ambos socialmente.

Un testimonio muy posterior de don Carlos Ibáñez relata muy vívidamente como se relacionaban ambos personajes en el desempeño de sus funciones: *«Yo me llevaba muy bien con don Emiliano, pero pertenecíamos a dos escuelas distintas: él a la del buen vivir, yo a la de la disciplina. No siempre nos encontrábamos, porque la existencia de don Emiliano era muy distinta a la mía. Él se acostaba tardísimo y al día siguiente llegaba con el efecto de la trasnochada; el día comenzaba después de las doce. Los problemas a esa hora era muy difícil abordarlos porque a poco de estar en La Moneda el Presidente se retiraba a almorzar... largo y bien regado. Terminaba tarde. Venía la siesta. Don Emiliano aparecía en La Moneda, fresco y afeitado, cuando ya el crepúsculo rayaba en el horizonte. ¿Quién trabaja al atardecer? Mejor es sentarse en un mullido sillón, fumarse un puro y sacarle punta a la amena charla... hasta las ocho o nueve de la noche. Después hay que comer, charlar otro rato, y recuperar las fuerzas perdidas bajo el sopor de la madrugada...».*

El otro Ibáñez, don Maximiliano, que había asumido el ministerio del interior era pariente de su homónimo. Según algunos políticos le había sido impuesto al Presidente por el militar. Su soberbia por su indiscutida inteligencia, el desprecio a sus semejantes, su impaciencia y su mal genio le traerían, muy luego, graves problemas en tan delicado cargo.

Desde comienzos de la nueva era republicana comenzaron los choques entre el ministerio y el parlamento, en los cuales don Carlos Ibáñez, cumpliendo su papel de poder detrás del trono, enfrentó a diputados y senadores con la misma soberbia e intransigencia que había demostrado desde que fue elevado a la cartera de guerra.

La administración pública presentaba un gran déficit debido a los puestos que se habían creado con cada uno de los golpes militares y los favores que querían devolver los políticos. Granjerías injustificadas, servicios completos inútiles, duplicación de funciones, sueldos excesivos, jubilaciones fáciles y cuantiosas habían llevado al país a una situación que era preciso corregir. El gobierno desenterró un proyecto de estatuto administrativo que años antes había impulsado el teniente coronel Marmaduke Grove, el cual legislaba sobre designaciones, ascensos, despidos, retiros, jornadas, sueldos, beneficios, incompatibilidades, previsión, etc. Este proyecto, que no podía ser popular, fue la causa de peleas y divergencias en el seno del gobierno y la enemistad entre los dos Ibáñez. La transacción con los parlamentarios que paralelamente habían buscado la solución al déficit mediante el dictado de una ley de emergencia, que autorizase rebajar los sueldos de los funcionarios públicos en un 15%, sería una idea que pronto se retomaría y constituiría la espoleta que haría detonar los sucesos de la escuadra en 1931.

Una divergencia entre los ministros del interior y de guerra hizo que la cuerda se

cortara por su punto más débil, dejando el primero su cargo y siendo reemplazado por el diputado liberal Manuel Rivas Vicuña.

El cuerpo de generales del Ejército quiso aprovechar la crisis ministerial para retirar a la institución del ajetreo político y exigió a todos ellos que nadie aceptara la cartera de guerra. Solamente se opuso a la iniciativa el general Enrique Bravo Ortiz, declarando que los generales debían respetar las atribuciones del Presidente de la República, absteniéndose de tomar cualquier acuerdo que significara coartar en forma alguna sus iniciativas; pero agregando que él no aceptaría ningún cargo ministerial.

Ibáñez lo citó para ofrecerle, precisamente a él, el ministerio de guerra a lo cual don Enrique rehusó. Dos semanas más tarde era sacado de la institución, no obstante su prestigio y brillantes cualidades, por el propio Coronel-ministro que continuó en su cargo. Acompañaron al exonerado otros meritorios oficiales que no eran del agrado de don Carlos.

Ibáñez trata de neutralizar a la Marina

La Marina no veía con buenos ojos como el Coronel-ministro se montaba en la cresta de la ola desde donde daba al Ejército el protagonismo de lo que acaecía en Chile y cuyos hilos manejaba, tras bambalinas, la masonería criolla.

En una reunión de los más calificados miembros de la Armada, efectuada en el Club Naval de Valparaíso, el contraalmirante Luis Artigas se refirió a que había que ser muy incauto o ciego para no darse cuenta como el país se hundía aceleradamente a medida que progresaba el ibañismo, marginado de leyes y de principios, haciendo caso omiso de las garantías individuales. Luego hacía alusión que los abusos, las extralimitaciones y los atropellos lindaban en la criminalidad. Terminaba diciendo que no había que dejarse llevar por la histriónica actitud patriótica que adoptaba el ministro Ibáñez, porque ella era un disfraz destinado a proteger a sus escondidos apetitos y era necesario salirle al encuentro, hacer públicas sus barbaridades y negarse a seguirlo.

El Coronel-ministro, instuyendo que la Marina no lo seguiría en sus andanzas, ideó la forma de neutralizarla, lo que luego veremos en la segunda parte de este capítulo.

Por el momento baste decir que Ibáñez había logrado meter una cuña en la Marina entre los oficiales de guerra o ejecutivos y todos los pertenecientes a los servicios auxiliares u oficiales mayores, entre los que lideraban los ingenieros; pero a los que también apoyaban algunos oficiales ejecutivos jóvenes.

Don Emiliano se encontraba de vacaciones en su casa de «Los Ositos» en Reñaca cuando recibió la visita informal de un grupo de jóvenes oficiales de la Armada, de baja graduación, que entre tímidos y audaces, pasaban a saludarlo. El Presidente los recibió cordialmente y entabló con ellos una charla de tipo social, la cual muy luego derivó hacia el verdadero motivo de la curiosa visita, el cual se centraba en la desmedrada situación en que se sentían los oficiales ingenieros frente a sus congéneres de guerra y a lo anacrónico que consideraban al Consejo Naval, que conformaban todos los almirantes. Socarronamente, el jefe del Estado siguió la conversación, hasta darse cuenta que el grupo de marinos descontentos era liderado por un capitán de fragata, hermano del gran maestre de la masonería chilena Orestes Frödden.

Creyendo Ibáñez que había llegado el momento de dominar esa rama de las fuerzas armadas por medio de los oficiales mayores, se reunió con éstos a espaldas del alto mando

naval para urdir un complot para apoderarse de la flota, lo cual se haría bajo la protección de los regimientos porteños que se tomarían las estaciones de radio, fuertes y recintos portuarios, apresando a los almirantes y enviándolos detenidos a Santiago.

Los papeles en que los complotadores planificaron la acción fueron dejados, por olvido o deliberadamente, por el coronel Aníbal Parada, en un hotel de Viña del Mar, donde fueron encontrados por una camarera, llegando a conocimiento del alto mando naval.

El ministro de relaciones Jorge Matte y Gustavo Ross fueron los encargados de llevar los antecedentes sobre el complot, de inmediato, al Presidente de la República a su casa viñamarina.

Convocado a una reunión urgente el Ministro de guerra, que estaba en maniobras en Concón, restó importancia a lo sucedido y desvió el problema del complot a la necesidad de reorganizar la Marina. Los documentos acusadores que le exhibiera el Ministro del interior los guardó en su bocamanga, negándose a devolverlos.

Como Ibáñez no se desviara de su posición de ignorar los graves hechos sucedidos y exigiera la reestructuración de la Armada, el ministro del interior Manuel Rivas ofreció su renuncia, pues estaba visto que ya no controlaba la situación interna del país, a la que luego se sumó la del ministro de marina, contraalmirante Arturo Swett, quien había aquilatado la forma como su institución era minada. Mas, a continuación, fue el propio Presidente de la República quien consideró la posibilidad de dimitir. El Ministro de guerra, temiendo un enfrentamiento frontal con la Armada, convenció a don Emiliano que no se alejara del cargo y le pidió que organizara un nuevo gabinete, ya que todos los secretarios de Estado se encontraban renunciados, menos él.

Ibáñez, ministro del interior

El Presidente de la República encargó al Coronel-ministro que formara su próximo equipo de gobierno ante la estupefacción del país y el silencio de la Marina, que recientemente se había pronunciado sobre *«las exclusivas e irrestrictas facultades constitucionales que tenía el supremo mandatario para la elección de sus ministros»*.

Curiosa situación política la que vivía Chile, el hombre que había urdido el complot para enfrentar al Ejército con la Armada y deshacerse así de quienes no seguían ciegamente sus dictados, era premiado con el segundo puesto en el gobierno.

Carlos Ibáñez, por su parte, había subido un peldaño más en su ambicioso escalamiento para llegar a la cúspide. Poco le faltaría para subir el último escalón.

Del equipo ministerial formado por Ibáñez dos nombres vale la pena consignar por sus implicancias futuras en los hechos sucedidos cuatro años más tarde con el motín de las tripulaciones. Ellos son el ministro de hacienda, Pablo Ramírez Rodríguez, quien tendría gran responsabilidad en el desastre económico del país y que sería el delfín intocable del Coronel y el ministro de marina, capitán de fragata Carlos Frödden Lorenzen, que estaría llamado, por su baja graduación en el escalafón, a producir el descabezamiento del mando naval[7].

[7] Este parece haber sido uno de los procedimientos predilectos de Ibáñez para descabezar los mandos de los oficiales que no consideraba adictos a su persona. Al asumir por segunda vez la Presidencia de la República en noviembre de 1952, nombró como ministro de defensa nacional al coronel Abdón Parra Urzúa, lo cual produjo el retiro cincuenta y cuatro oficiales generales que formaban parte del alto mando del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La designación de Frödden, meritorio pero opaco oficial, fue resistida por la superioridad de la Armada sin resultados, como se verá en la segunda parte de este capítulo. El nuevo Ministro de marina, además de apoyar los cambios que quería Ibáñez en la institución era, al igual que don Carlos, miembro de la logia masónica.

La desidia demostrada por don Emiliano Figueroa en todas sus actuaciones no significa que no viera o no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo con su gobierno. Con motivo del nombramiento de Ibáñez como «premier» confidenciaría a un amigo que *«las cosas no habían cambiado mucho, pues la Presidencia de la República, simplemente, ya no funcionaría en el ministerio de guerra, sino en el ministerio del interior»*.

El período conocido como la dictadura de Ibáñez no solamente debe referirse al período en que ejerció la primera magistratura, sino que comienza con su nombramiento como ministro del interior, pues es desde entonces donde se inició un gobierno que no se acogía a los preceptos y garantías constitucionales.

Fueron sometidos a la voluntad del poder ejecutivo la prensa, los partidos políticos y el parlamento. Según las cifras oficiales, apenas asumido el ministerio del interior por el Coronel-ministro fueron detenidas y deportadas a la isla de Más Afuera (archipiélago de Juan Fernández) o exiliadas cien personas que se consideraban peligrosas.

La detención de los parlamentarios fue selectiva, pues se detuvo y deportó a aquellos que habían demostrado una mayor efectividad opositora.

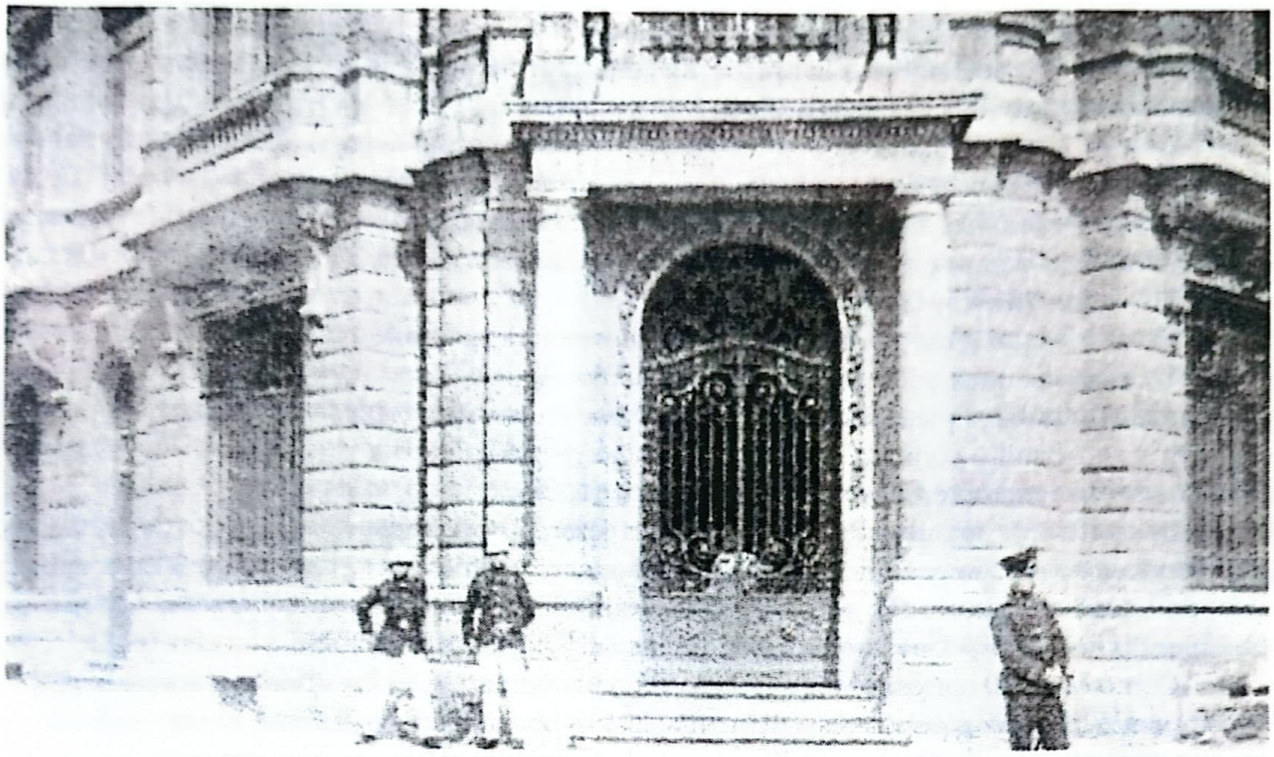
Durante los atropellos que se cometían se encontraba Ibáñez con los dictámenes del poder judicial que no eran de su agrado y que se referían principalmente a recursos de protección presentados por los perseguidos, por lo que las arremetió contra jueces y cortes de justicia, presentándola como una «depuración saludable».

El caballo de batalla utilizado por Ibáñez para descabezar el poder judicial fue el ministro del ramo Aquiles Vergara Vicuña, hombre atropellador y poco dúctil que llevó al enfrentamiento.

Como la deportación de jueces y ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, por la sola voluntad del Ministro del interior, provocara el reclamo del presidente de la Corte Suprema, Javier Ángel Figueroa Larraín, quien era hermano de don Emiliano, el gobierno buscó la exoneración de la mayoría de los miembros del más alto tribunal para reemplazarlos por adeptos incondicionales. La lógica oposición de don Javier Ángel hizo que el poderoso Coronel-ministro lo hiciera detener y arrestar en su domicilio, contra la voluntad del Presidente de la República. El ministerio pensó renunciar en pleno y don Emiliano consideró hacer lo mismo; pero fueron finalmente los secretarios de Estado los que exigieron el alejamiento de don Emiliano, llegando así Ibáñez al último peldaño para llegar a donde ambicionaba, momentáneamente con el título de Vicepresidente de la República.

Presidencia de Ibáñez

Su primer decreto fue la destitución de don Javier Ángel Figueroa como presidente de la Corte Suprema, lo que trajo como consecuencia la renuncia definitiva de don Emiliano; la cual fue aprobada, sobre la marcha por el Senado a causa del miedo que había invadido a los parlamentarios. Cinco días más tarde, Ibañez proclamaba su candidatura a la primera magistratura de la nación.



CLAUSURA DE «EL DIARIO ILUSTRADO».

Buscando un acercamiento con la Armada después de los luctuosos sucesos de Viña del Mar que hemos relatado, el Vicepresidente visitó Valparaíso y fue recibido en el Club Naval por el alto mando; pero solamente el vicealmirante José Toribio Merino Saavedra, que se desempeñaba como Director General de la institución, había sobrevivido a la «sacudida del peral» producida con el nombramiento de un capitán de fragata como ministro de marina.

La elección presidencial fue ganada ampliamente por Ibáñez por el 98% de los votos, según los cómputos gobiernistas, a la que se presentó como... *¡candidato único!* (En estricto rigor tuvo como oponente al líder comunista Elías Lafferte, quien no tuvo más posibilidad que realizar su campaña limitada a la isla Más Afuera donde se hallaba relegado por el poderoso Ministro del interior).

Ibáñez, ahora Presidente de la República, no alteró mayormente su gabinete; pero unificó las carteras de guerra y de marina en una sola, que pasaba a denominarse de Defensa Nacional y que fue entregada al inefable comandante Frödden. La medida seguramente obedecía a poder ejercer un mayor control sobre la Armada a la que, como hemos dicho, siempre miró con recelo. La innovación no alcanzó a durar un mes, siendo nuevamente separadas y entregada la de guerra al general Bartolomé Blanche, mientras el capitán de fragata continuaba a cargo de los asuntos de la institución naval.

No corresponde a este trabajo analizar con profundidad lo que fue el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, sino que solamente en aquellos aspectos que, a la postre, influyeron en el desgraciado espectáculo del motín producido en la Armada Nacional, cuando el caudillo ya había sido obligado a dejar el mando supremo.

Un análisis de las expresiones vertidas en la oportunidad demuestran que don Carlos no tenía vocación democrática ni intenciones de cumplir la Constitución.

Dirigiéndose al Congreso pleno, el día antes de ser investido Presidente de la República, manifestó que si se le plantease la opción disyuntiva entre cumplir la carta fundamental y las leyes o salvar la república, haría lo último sin vacilar.

Uno de sus más íntimos colaboradores, René Montero Moreno, diría años más tarde: «*Es indudable que el rasgo sobresaliente de la personalidad de Ibáñez, juzgado a través de su larga actuación pública, está constituido por su desmesurado y casi morboso amor al poder... No se trata de un hombre que busque el poder como un medio, sino como el fin último, definitivo y más acariciado*».

Durante el gobierno de Ibáñez el país fue sometido a una férrea censura de prensa, se efectuaron detenciones y deportaciones sin juicio alguno, se usó la reorganización de la administración pública para dejar cesantes a los opositores y reemplazarlos por los adeptos al régimen y se permitió cometer toda clase de excesos a la policía y carabineros. Los partidos políticos se sometieron en la forma más vergonzosa.

Es cierto que muchos de los principales líderes opositores habían sido deportados, incluyéndose a los parlamentarios más peligrosos para el régimen; pero los partidos continuaban existiendo como instituciones y también quienes permanecían como miembros del Congreso, obteniendo las regalías que su «vocación de servicio público» les daban.

Como en 1930 correspondían elecciones parlamentarias, el Presidente, creyendo tener arrastre entre las fuerzas populares, quiso organizar su propio partido ibañista, lo que constituyó un fracaso rotundo. Como no podía correr el riesgo de enfrentar una votación, pues se conocería el real sentir de la ciudadanía, ideó «interpretar» la ley electoral y repartirse los cargos entre sus adeptos y las diferentes corrientes políticas, de acuerdo a las proporciones por él dispuestas. Los partidos doblaron mansamente la cerviz y así nació el «Congreso Termal», como fue humorísticamente motejado por la ciudadanía[8].

El coronel Carlos Vergara

Ibáñez alejó de su lado a muchos de sus colaboradores que en algún momento podían hacerle sombra, sin considerar la adhesión que le habían brindado para escalar la posición donde ahora se encontraba.

Entre los militares a los que el caudillo temía se encontraba el coronel Carlos Vergara Montero, a la sazón director de la Escuela de Aplicación de Infantería.

Vergara era un distinguido y meritorio oficial de 44 años de edad, que había realizado estudios de perfeccionamiento profesional en Alemania. Como subdirector de la misma repartición había ayudado a Ibáñez a escalar el poder al reprimir las intentonas del capitán Sócrates Aguirre y del regimiento Pudeto para alejarlo.

Carlos Vergara, hombre de recio carácter y personalidad, como lo veremos más adelante cuando tenga que reprimir el motín de la escuadra, poseía tres características que molestaban a Ibáñez: la primera era su gran ascendiente sobre sus subalternos, quienes lo idolatraban y lo seguirían a cualquier parte; la segunda eran sus ambiciones, reales o imaginarias, para suceder a Ibáñez y la tercera era que pertenecía al arma de infantería.

[8] El nombre venía por haber sido designados sus miembros en las termas de Chillán. Una destacada actuación en la maniobra tuvo el parlamentario radical y futuro presidente de la república Juan Antonio Ríos.

El temor del Presidente sobre su colaborador lo llevaron a hacerlo vigilar y así imponerse que durante un almuerzo, al que sería invitado, a la Escuela de Aplicación de Infantería, se le plantearían diversas peticiones, entre las que se encontraba una solicitud de los oficiales para que su director fuese nombrado ministro de guerra.

Esto era más que lo que el Presidente de la República podía soportar, pues como nuevamente se habían separado las carteras de guerra y de marina y la primera la ocupaba Bartolomé Blanche que pertenecía a la caballería, su reemplazo por Vergara significaba revivir la rivalidad entre ambas armas que casi le había costado su ascenso al poder. Pero otro factor le era más adverso aún, pues el gran ascendiente y la clara inteligencia del director de la Escuela de Aplicación de Infantería, al asumir el ministerio, le daría el control del Ejército, con lo que podía poner en jaque al Presidente de la República, tal como Ibáñez lo había hecho con Arturo Alessandri y con Emiliano Figueroa.

Ibáñez acudió al almuerzo y cuando un oficial planteó diversas inquietudes profesionales terminando con la indicación sobre la conveniencia del nombramiento de su director en el gabinete, el Presidente, sin siquiera levantarse de su asiento, ignoró groseramente al anfitrión y brindó por la lealtad sin límites y el respetuoso trato humilde que siempre había tenido con él el oficial retirado René Montero, quien lo acompañaba a la manifestación y había sido el que le había informado sobre las peticiones que se le harían.

Enseguida, con inusitada vehemencia, manifestó que mantendría sin debilidades y con la más inquebrantable energía la disciplina y el acatamiento constitucional, aunque tuviera que pasar sobre el cadáver de su madre.

Al día siguiente comenzaron a llover los castigos sobre los oficiales de la Escuela de Aplicación de Infantería; pero al coronel Vergara, que nada había manifestado durante el almuerzo y ni siquiera se tenía certeza si estaban en su conocimiento las peticiones que Ibáñez sabía de antemano que se le plantearían, fue alejado a Magallanes. Después lo sacaría del país como agregado militar en Brasil.

En 1929 Carlos Vergara ascendió a general de brigada y una vez caído Ibáñez tuvo que firmar la proposición al Senado que quitaba al ex mandatario el rango de General y lo expulsaba del Ejército.

Buenos Aires y París centros de conspiración

Entre 1927 y 1929 Ibáñez logró aplastar a todos sus enemigos que se encontraban en el país, pero en el exterior la resistencia al caudillo fue en aumento.

Los centros principales fueron Buenos Aires y París. Es importante detenerse en este último, tanto por la calidad de los exiliados, como por el hecho que se ha pretendido culparlo del motín de la escuadra.

El grupo existente en la capital gala estaba formado por todo el espectro político y militar antibañista, desde el ex presidente Arturo Alessandri Palma que era la persona más caracterizada, sus cercanos adherentes, miembros de la oligarquía chilena, políticos deportados, revolucionarios socialistas, oficiales del Ejército expulsados por no ser incondicionales de Ibáñez o por conspiradores, etc.

En la ciudad luz se gestionaban, obtenían y despachaban los recursos obtenidos a un comité existente en la capital argentina, cuyo fin era mantener viva la llama revolucionaria contra el dictador chileno.

Apenas había arribado a París el ex presidente Alessandri tuvo conocimiento que el mayor de artillería Carlos Millán Iriarte, quien había participado en los golpes militares de 1924 y 1925, terminaba su misión en Francia para asumir la comandancia de un regimiento en su patria. Millán simpatizaba con el grupo revolucionario chileno y en la entrevista sostenida con el «León» le dio una noticia más auspiciosa todavía: se encontraba en Londres el coronel Marmaduke Grove Vallejos, a quien Ibáñez había enviado en busca de armamento para el Ejército y la Fuérza Aérea, con el propósito de alejarlo del país. Grove estaba ansioso de actuar contra Ibáñez.

Con fecha 17 de enero de 1928 se reunieron en Calais: Marmaduke Grove, Arturo Alessandri, Enrique Bravo y Carlos Millán; acordando solemnemente, por escrito, aunar esfuerzos para deponer a Ibáñez y no descansar hasta lograrlo. Además juraron y firmaron «*no aceptar para ellos, después de restablecido en Chile el imperio de la Constitución y de la ley, ningún puesto de honor o responsabilidad en el gobierno*» (Ninguno de ellos lo cumpliría, salvo Millán, y éste, es probable, involuntariamente).

Hubo una segunda reunión, ya con planes concretos, a fines de febrero en el puerto británico de Dover en la cual participaron solamente Marmaduke Grove y Carlos Millán. Casualmente cuando ella terminaba, arribaron a la ciudad Arturo Alessandri y Agustín Edwards en viaje a París desde Londres donde habían hecho algunas gestiones comerciales, pues el ex Presidente era el abogado del segundo. Esto hizo que el gobierno de Ibáñez denunciara el «complot de Dover», el que nunca existió, pues el lugar preciso fue en Calais y no participó Agustín Edwards.

La crisis económica

Chile no fue ajeno a las consecuencias que produjo la gran depresión que se abatió sobre el mundo entre los años 1929 y 1932 sino que, muy por el contrario, fue el país del hemisferio que las sufrió en más alto grado. Nuestra economía, dependiente de un solo gran producto de exportación, el endeudamiento nunca antes visto en que se había embarcado el gobierno y la cesantía creciente a causa del cierre de las faenas salitreras, hicieron que la situación del erario nacional se tornara incontrolable.

A todo ello debía sumarse el descrédito en que había caído el gobierno de Carlos Ibáñez. Autoproclamado como un mandatario depurador de los vicios en que habían caído los políticos y elemento ejecutor de la nueva Constitución, había desilusionado a sus seguidores al ejercer un mando autoritario que no reconoció freno ni en la carta fundamental ni en las instituciones políticas, como los poderes legislativo y judicial, cuya misión era contrapesar cualquier exceso del ejecutivo.

La situación se hizo insostenible para el gobernante; pero aún queriendo salvar su posición trató de dar un giro político que evitara la inminente caída del régimen y formó un nuevo gabinete con personas de prestigio pertenecientes a los partidos de derecha; pero no logró atraer a estos. Nadie se arriesgó a apoyarlo.

Finalmente obtuvo el concurso del prestigioso abogado radical don Juan Esteban Montero Rodríguez para que asumiera la cartera de interior y de don Pedro Blanquier Teylletche en el ministerio de hacienda. El concurso de ambos estaría supeditado a la condición de restablecer las libertades públicas, el retorno inmediato de los exiliados, el término de la represión,

libertad de prensa, derecho de reunión, pleno ejercicio de la Constitución y la exposición pública, clara y veraz, del estado de la hacienda pública.

El estado de la caja fiscal dejó estupefacto al país[9], la deuda externa directa era exorbitante, las reservas de oro habían caído en más de un 50% tan solo en los dos últimos años y ya no era capaz de cubrir el déficit, las exportaciones seguían por el suelo y para las importaciones no había créditos ni dinero. La reducción del presupuesto alcanzaba al 21%. Para ese mes se necesitaban 95 millones de pesos y había solamente cinco.

Los grupos adeptos al mandatario, entre los que se encontraban la CRAC (Confederación Republicana de Acción Cívica de Obreros y Empleados de Chile), que era el partido ibañista de base gremial, dirigentes sindicales y algunos jefes militares, miraron con malos ojos la llegada del gabinete Montero-Blanquier, pues lo consideraban el «caballo de Troya» para introducir a sus enemigos en La Moneda.

El nuevo «premier» Juan Esteban Montero era un reputado catedrático que gozaba de gran prestigio y estaba desprovisto totalmente de ambiciones políticas. Su acción era guiada por el restablecimiento de las libertades conculcadas y la vigencia real y efectiva de la Constitución Política del Estado. Era, ante todo, un hombre de derecho.

El ministro de hacienda Pedro Blanquier era un ingeniero civil con notable aptitud para los números y manejo de dineros, de carácter justo y sereno; pero frío y de implacable racionalidad y severidad.

La situación económica del país exigía un ordenamiento drástico y rápido de sus finanzas, a lo cual se abocó Blanquier desde su llegada al ministerio y cuyas consecuencias tendrían mucha influencia en los hechos futuros relativos al motín de las tripulaciones de la Armada.

Las medidas propuestas por el Ministro fueron:

- Eliminar varios servicios públicos, comenzando por el ministerio de tierras y colonización y siguiendo por la contraloría, la sindicatura de quiebras, la superintendencia de bancos, la aviación y todas las «direcciones generales» creadas durante la presidencia de Ibáñez, volviéndolas a simples departamentos de cada ministerio, etc.
- Vender el diario La Nación
- Rebajar un 50% los sueldos fiscales (25% los de las fuerzas armadas) y fijar remuneraciones topes al sector público con un máximo de $ 36.000 anuales.

Ibáñez, sin rechazar de plano las medidas propuestas por su secretario de Estado, quedó de estudiarlas. A pesar que la rebaja de sueldos al personal de las fuerzas armadas podría haber sido considerada la piedra de tope del proyecto, el general Bartolomé Blanche no lo estimó excesivamente peligroso. Para el Presidente de la República fueron los otros motivos los que le llevaron a deshacerse de su flamante ministro de hacienda: Invocaba el caso de Mussolini para no deshacerse del diario La Nación y no quería desarmar la maquinaria administrativa que había creado, pues ella significaba el «Nuevo Estado», que constituía su orgullo y su histórico aporte a la modernización del país.

[9] El mensaje presidencial al Congreso de solamente algunas semanas antes hablaba de un pequeño superávit para 1931.

La caída de Ibáñez

El 21 de julio, esto es doce días después de haber jurado, caía el gabinete que tanto le había costado crear y se esfumaba la última oportunidad que tuvo Ibáñez para salvar su gobierno.

Tres días más tarde se declaró una huelga general que el gobierno ya no sería capaz de reprimir. En la capital se sucedieron las manifestaciones avivando a los ministros caídos y denostando al Presidente, los estudiantes de la Universidad de Chile se apoderaron de la casa central donde se encerraron a resistir, mientras del Club de la Unión se les enviaba comida. Todas las fuerzas vivas de la capital declararon el paro total e indefinido hasta que Ibáñez abandonara el gobierno. Era el caos.

Los jefes de carabineros, ibañistas acérrimos, habían ordenado a sus tropas la represión sin miramientos, los jefes de investigaciones habían infiltrado agentes en todas partes, ya no se trataba de resguardar el orden público, pues ello era imposible, sino de atemorizar a la población.

Abandonando una reunión que se llevaba a cabo en la Escuela de Medicina, fue asesinado por carabineros el estudiante Jaime Pinto Riesco y cuando los que acompañaron el multitudinario funeral de la víctima, que llegaban a las veinte mil almas, regresaban del sepelio, fue baleado por efectivos del mismo cuartel policial, el joven profesor de historia y geografía de la Escuela de Aplicación de Infantería, Alberto Zañartu Campino.

Esta nueva tragedia hizo extenderse, como un reguero de pólvora la huelga general, a los médicos se sumaron los abogados, ingenieros, dentistas, farmacéuticos, bancarios, profesores, estudiantes, etc.

Ibáñez quería resistir y para ello nombró ministro del interior al capitán de fragata Carlos Frödden Lorenzen, famoso por su dureza y su irrestricta adhesión al Presidente; además contaba con la ciega obediencia del jefe de los carabineros y fundador del Cuerpo, general Ambrosio Viaux Aguilar, del prefecto jefe de Investigaciones, el inefable Ventura Maturana Barahona, del intendente de Santiago Manuel Salas Rodríguez y con la lealtad a toda prueba del Inspector General del Ejército, general Bartolomé Blanche Espejo; pero... otra cosa era lo que pensaran los demás jefes de la institución. ¿Seguirían las órdenes? ¿Hasta donde habían calado las peleas internas entre las diversas armas de la institución? ¿Sobrevivía algo de disciplina después de haber presenciado las actitudes de sus jefes durante los últimos siete años? Al ser consultado el general Carlos Charpín Rival por la moral de la tropa, respondió que él podía responder *«hasta ese momento»*.

Aún, en esa crítica situación, Ibáñez quiso entregar el poder a Frödden o a una Junta de Gobierno que la compondrían don Juan Esteban Montero, el general Carlos Sáez Morales y el contraalmirante Alejandro García Castelblanco. Finalmente primó la cordura y con la intervención de connotados políticos radicales, llamó al presidente del Senado Pedro Opazo Letelier para entregarle el poder y salir al exilio.

La explosión de júbilo en la población capitalina no tuvo límites.

El Vicepresidente del Vicepresidente del Vicepresidente

Se creía que el 26 de julio de 1931, día de la caída de Ibáñez, se ponía fin *«al militarismo arrogante y atropellador que se había apoderado del gobierno y comenzaba otra vez el reinado del civismo purificador del alma ciudadana. Con Ibáñez el país había vivido "bajo el imperio*

de la tiranía". La caída del dictador iba a marcar el punto de partida de una nueva etapa de la vida nacional: La Constitución recobraría automáticamente su antiguo vigor, devolviendo a los ciudadanos el uso pleno de las libertades garantizadas por las leyes[10]*».*

La presencia en la Vicepresidencia de la República de don Pedro Opazo despertó recelos, debido a sus vinculaciones con la esposa de Ibáñez, por lo que éste llamó al ministerio del interior nuevamente a don Juan Esteban Montero y se alejó del gobierno veinticuatro horas después de haberlo asumido.

Don Juan Esteban formó su gabinete con don Pedro Blanquier en hacienda, el general Carlos Sáez en guerra y el vicealmirante Calixto Rogers en marina. La dupla Montero - Blanquier tendrían ahora la oportunidad de echar a andar el proyecto de saneamiento económico presentado diez días antes y por el cual habían tenido que dejar el ministerio.

Las heridas dejadas al país tardarían muchos años en sanar. El problema económico creado por la liberalidad con que la administración de Ibáñez había gastado los recursos existentes e inexistentes, los nuevos préstamos exteriores, la crisis mundial, la salida de las reservas del Banco Central, la amenaza al valor de la moneda, la restricción crediticia, la grave perturbación de todas las actividades económicas y comerciales, la resistencia de la gente a pagar las contribuciones, los compromisos vencidos, la falta de dinero y principalmente el pánico que se había creado con las declaraciones sobre el estado de la hacienda pública era motivo de la más grande inquietud en las esferas gubernamentales.

Junto con la organización de un gobierno transitorio debía pensarse en la sucesión presidencial. Ibáñez había sido destituido y era preciso buscarle un reemplazante dentro de los plazos constitucionales establecidos. A pesar de los apetitos políticos que siempre se desatan en estas circunstancias en los hombres que nunca faltan a estar dispuestos «a sacrificarse por la patria», no había duda alguna que el candidato lógico debía ser el propio vicepresidente de la república don Juan Esteban Montero. El señor Montero había dado pruebas irredargüibles de su vocación democrática y lo que era principal en aquellas circunstancias, de dar confianza a todos los sectores de la ciudadanía, pero... don Juan Esteban no tenía ambiciones personales ni quería la Presidencia de la República. Arduo trabajo costó a los miembros de su gabinete para que aceptara la carga que se depositaría sobre sus hombros.

El Vicepresidente cedió al clamor nacional de presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales para lo cual debió renunciar a su alto cargo. Llamó al ministerio del interior a su correligionario señor Manuel Trucco Franzani, le entregó la conducción del país y se retiró para dedicarse a su campaña. El gabinete que lo acompañaría tendría un fuerte cariz antiibañista. Fue encabezado por don Horacio Hevia Labbé como «premier» y el general Enrique Bravo Ortiz en la cartera de guerra.

La rebaja de sueldos a la administración pública

Mientras se producía este drástico cambio de orientación en el gobierno, el ministro de hacienda Pedro Blanquier tenía la difícil tarea de obtener los recursos necesarios para que el país siguiera funcionando, para lo cual había continuado impertérrito en su propósito de

[10] Estas palabras tienen gran significado si se considera que están tomadas del libro escrito por el propio ministro de guerra, General Sáez.

hacer economías de cualquier parte. No era este el resultado de una testarudez, sino la consecuencia de una necesidad ineludible, pues los gastos excedían largamente a las entradas.

Tocaba a su fin el mes de agosto y era necesario pagar los sueldos a los empleados públicos y a las fuerzas armadas, por lo que resolvió hacerlo en forma normal con los que fueran por un monto inferior a los $ 3.000 y retener entre un 12 y un 30% a los superiores, diferencia que les sería abonada cuando las condiciones lo permitieran.

Esta situación sería el detonante de un motín que se produjo en las tripulaciones de las escuadras de la Armada, fondeadas en el puerto de Coquimbo la noche del 1° de septiembre y al que luego se plegarían unidades del Ejército, la base aérea de Quintero, algunas reparticiones navales de Valparaíso y el personal del apostadero de Talcahuano. Pero todo ello es materia de los capítulos siguientes.

Segunda parte
La situación de la Armada

La verticalidad del mando

En el turbulento período que estamos comentando, que se inicia a consecuencias del pronunciamiento militar de 1924 y que estuvo predominantemente marcado por la intervención del Ejército en los sucesos ocurridos en Santiago, la actitud de la Armada generalmente marchó por un camino diferente, algunas veces antagónico a los de su fuerza congénere y otras en la misma dirección.

La franca intervención del Ejército en los asuntos políticos no tuvo un paralelo en la marina de guerra debido a diversos factores que la diferenciaban y entre los cuales es importante anotar:

- El hecho de no encontrarse su cabeza radicada en la capital, como tampoco las destinaciones de sus almirantes y en general de todo el cuerpo de oficiales, la hacían más inmune a la contaminación con los políticos y más refractaria a los cantos de sirena que desde todo el espectro partidista trataban de atraer a los oficiales que podían servir para sus propósitos.
- Debido a la fuerte influencia de la marina británica, que había heredado en sus costumbres, en su organización y en sus reglamentos, hacían que fueran temas prohibidos de conversación en las cámaras los relacionados con política o religión.
- Posiblemente como una consecuencia de lo anterior, la masonería no había podido penetrar entre sus oficiales con la magnitud que lo hizo en el Ejército. Los miembros de la logia eran pocos, no tenían poder y el conocimiento de su filiación no era bien visto por sus compañeros[11].
- El mando en la Marina era ejercido, sin contrapeso, por los oficiales ejecutivos (egresados de la Escuela Naval, sita en Valparaíso), los cuales siempre fueron considerados mayoritariamente de ideas políticas personales derechistas, más cercanas a simpatizar con la Unión Nacional y que profesaban la religión católica.
- La disciplina, subordinación y verticalidad del mando eran muchos más fuertes en la Armada que en el Ejército cuando comenzó en 1924 la descomposición de estos valores.

Un hecho que demuestra claramente este aserto fue la actuación de sus miembros en la subversiva Junta Militar, en la cual todas sus actuaciones eran consultadas, previamente, al Consejo Naval que estaba formado por todos los almirantes.

Con estos antecedentes, ¿porqué llegó a producirse en la Armada un acto de insubordinación e indisciplina tan grande como fue el motín de la escuadra en 1931?

En la primera parte de este capítulo hemos visto algunos intentos de conseguir el apoyo de la Marina a los movimientos revolucionarios de la capital. En muchos momentos el país estuvo al borde de la guerra civil lo que trajo el recuerdo de 1891; pero fue, quizás, esa sangrienta evocación la que impidió que se llegara a ello.

[11] Posiblemente se dirá que ilustres marinos como el almirante Blanco Encalada o el almirante Juan José Latorre fueron masones destacados; pero en la marina del siglo XX ello no era un factor de influencia.

A continuación haremos una relación de la misma época que hemos reseñado en la primera parte; pero viendo lo que sucedía al interior de la institución naval.

Aislamiento político

El enfrentamiento entre el Ejército y la Armada en la guerra civil de 1891 elevó a la primera magistratura de la nación al capitán de navío Jorge Montt quien, luego de ser ascendido a Vicealmirante, fue elegido Presidente de la República.

La Marina cortó las ambiciones políticas durante la revolución y cimentó especiales relaciones con los líderes civiles, emergiendo con el prestigio de poseer un espíritu superior de servicio público y de prestigio social.

La amnistía política y militar, puesta en vigor una vez apaciguados los ánimos, produjo una débil reconciliación entre ambas fuerzas armadas en la arena política; pero las heridas producidas en los sentimientos recíprocos no habían sanado. No existió colaboración en los planes de instrucción ni se efectuaron maniobras conjuntas hasta la segunda década del presente siglo; pero la discordia entre una Armada anglófila y un Ejército prusiano era muy acentuada.

La Comandancia General de Marina estaba localizada lejos del gobierno, en Valparaíso, y hasta 1887 había sido ejercida por el intendente de la provincia quien, en algunas ocasiones, había sido un almirante retirado; pero generalmente fue desempeñada por civiles. El control político y ejecutivo de la institución residía en las manos del ministro de guerra y marina, cartera que en solamente tres breves oportunidades fue ejercida por un oficial de la Armada entre 1892 y 1924[12].

La representación permanente de la institución en la capital la constituía el Subsecretario de Marina, que estaba incorporado al ministerio y el cual, invariablemente fue un civil hasta 1924.

Esta separación involucraba un grado de aislamiento político para la institución, mientras el Ejército hacía sentir su pesada sombra más intensamente en la capital. Los partidos y las logias secretas, que penetraban en los cuarteles y en el ministerio de guerra, producía que los ascensos y las destinaciones militares estuvieran sujetos al patronato de los parlamentarios y de los gestores civiles[13].

De acuerdo a la versión de un secretario privado del ministerio de guerra, durante su gestión no pasó ninguna recomendación de este tipo para algún oficial naval, lo cual atestigua el alto grado de disciplina de la Marina, corroborando en toda su extensión la autonomía política que significaba que las oficinas superiores de la Armada estuvieran en Valparaíso.

Esta situación mantenía a la institución alejada de las maquinaciones de los partidos políticos y del ministerio de turno, lo cual beneficiaba a la disciplina; pero este mismo aislamiento se prestaba para la operación de otras influencias locales, donde la Armada era un factor importante en las presiones que se podían ejercer, basadas en los contactos sociales,

[12] Oficiales del Ejército desempeñaron el cargo en 16 oportunidades durante 92 cambios de gabinete.

[13] En 1913 el ministerio de guerra hizo una circular «prohibiendo la práctica de solicitar u obtener el interés de personas influyentes o mediante oficiales con el objeto de obtener destinaciones especiales, traslados o favores». En 1916 una orden similar prohibió a los militares pertenecer a logias secretas o fraternidades provocando una batahola entre los parlamentarios del Partido Radical (sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del 20 de julio al 1° de septiembre de 1916).

familiares y comerciales. Estos contactos fueron de algún modo un apoyo para la Marina. Algunos parlamentarios por Valparaíso, Coquimbo y Concepción que eran mirados como políticos «navalistas» se ganaron el apodo de «Almirantes del Mapocho[14]».

La independencia mostrada por la Armada respecto a la política central no solamente se debía a la distancia geográfica que separaba su comandancia de la capital, sino que, a pesar de estar subordinada jerárquicamente al ministerio de guerra, había sido manejada desde Valparaíso, por más de veinte años, por el vencedor de 1891, vicealmirante Jorge Montt, después de dejar la Presidencia de la República.

Montt fue nombrado Director General de la Armada, cargo que desempeñó hasta su retiro en 1913. Desde esta posición se encargó de reorganizarla y modernizar los viejos moldes en que aún actuaba. Una frase dicha en su funeral ilustra su actuación: *«hijo de la vieja Marina y padre de la nueva Marina»*[15].

Durante los años que la institución fue dirigida por Montt, desde 1898 a 1913, el puerto de Valparaíso fue conocido como *«la República Chica»*, en que el Estado era el Vicealmirante, quien soportaba todos los intentos de la capital por imponer resoluciones u órdenes, lo cual producía, periódicamente, estallidos sobre jurisdicción y autoridad. A pesar que el Congreso había aprobado el traslado del mando naval a Santiago, Montt se resistió a hacerlo.

Inquietud de la oficialidad.

La inquietud que vivía la oficialidad joven venía desde antiguo con la formación de una «Liga Naval», la cual recogía aspiraciones de distinto tipo, tales como la necesidad de impulsar reformas administrativas, mejorar el status social y económico de los oficiales ingenieros y el establecimiento de una política que reflejara un significativo cambio generacional. Esto sucedía en un ambiente de estrechez económica, la cual afectaba tanto a los suministros y por ende a la movilidad de los buques, como a los programas de construcción naval y a las constantes exigencias del gobierno en orden a controlar movimientos huelguísticos.

La carencia de reglamentos adecuados que regularan los ascensos, eliminación y retiros afectaba, al igual que en el caso del Ejército, principalmente a la oficialidad joven e intermedia.

Por otra parte, los cambios tecnológicos sucedidos habían producido un rápido crecimiento de las plazas de ingenieros, los cuales a veces superaban en número a los oficiales ejecutivos, lo que les estaba dando cada vez mayor fuerza para hacerse oír por sus superiores.

En los años 1910 ó 1911 se formó la Liga Naval, entidad secreta destinada a discutir estas materias. Su existencia fue arcana y se carece de documentos acerca de sus detalles; pero se sabe que estaba formada por más o menos cincuenta oficiales desde los grados de teniente hasta capitán de fragata.

Su acción se concentraba, esencialmente, en materias profesionales que afectaban al régimen interno de la institución y a la imagen pública de la Armada y su objeto era contar

[14] Alusión hecha por el diputado por Valparaíso Ramón Barros Luco durante un debate respecto a la Armada. (sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados en 1887).

[15] Frase del Director General de la Armada vicealmirante Francisco Nef en los funerales del almirante Montt en 1922.

con interlocutores como los que tenía el Ejército, con lo cual serían más fácilmente escuchados por el Congreso Nacional. En sus postulados se contaba un plan decenal para efectuar las reformas estructurales que propiciaban, tales como la reorganización de la Defensa de Costa, que hasta esa fecha, a pesar de contar con personal y conscriptos navales, era comandada por oficiales del Ejército; otra aspiración era terminar con las diferencias de rango, uniforme y prerrogativas entre los oficiales de guerra y los oficiales mayores, como se denominaba a los ingenieros y a los de otros servicios.

La Liga Naval parece haberse disuelto hacia 1915; pero un evidente descontento, con visos de indisciplina, seguía manifestándose en la Armada, siendo la propia Revista de Marina y el diario La Unión de Valparaíso sus portavoces.

En 1916 fue nominado el contraalmirante Arturo Cuevas, que se desempeñaba como Director de Artillería y Fortificaciones, presidente de una comisión, que formaban además un oficial del Ejército y un empleado del ministerio de hacienda, para estudiar todos los aspectos administrativos y proponer las reformas que era conveniente implantar. Con esto se quería quitar presión al descontento que afloraba en una gran cantidad de oficiales.

La Marina seguía aferrada a los dictados de los viejos almirantes, quienes se resistían a hacer reformas y a perder parte del poder de mando a que estaban acostumbrados. El contraalmirante Cuevas no fue la excepción y además de desperdiciar la oportunidad de encauzar a la Armada hacia los nuevos tiempos que se vivían con motivo de la guerra europea, se limitó a recomendar los cambios que debían hacerse para los empleados civiles de la institución. Dos años más tarde el informe de la comisión permanecía sin darse a conocer; pero a través de filtraciones, se revelaron irregularidades en los grandes contratos públicos. El Director General de la Armada se vio en la necesidad de publicar su contenido; pero lo hizo acompañado de una larga réplica a sus conclusiones.

Los miembros del Círculo Naval, nombre que detentaba en la época el Club Naval, solicitaron casi inmediatamente la expulsión de Cuevas, la cual tuvo lugar en abril de 1918 y que fue descrita por un oficial, que posteriormente se arrepintió de haberla apoyado, como *«un acto de indisciplina colectiva aún más serio que las actividades de la Liga Naval»*.

La situación que vivía la Armada traspasó los límites institucionales y tomaron parte en ella los más altos estamentos sociales y económicos de la *«República Chica»*, en la cual la prensa se constituyó en la bocina amplificadora de los hechos.

El Mercurio aplaudió la expulsión denunciando, además, que el Contraalmirante era un pro alemán que había permitido que el crucero «Dresden» se hubiera escondido en los canales del sur cuando era perseguido por la flota británica, después del combate librado en las islas Falkland. El diario La Unión salió en defensa de Cuevas replicando que El Mercurio propiciaba actos de sedición en la Armada. El decano de la prensa entonces retrucó acusando, a su vez, que un partido político estaba buscando influencias en la Marina a través de criticar a sus oficiales superiores.

La posiciones tomadas por la prensa eran el reflejo de lo sucedido con la expulsión del Contraalmirante del Círculo Naval; mientras los oficiales ejecutivos y los de grados superiores la apoyaron, los ingenieros y los oficiales jóvenes se habían abstenido.

El incidente del contraalmirante Cuevas reveló las frustraciones que existían al interior de la institución, en las cuales el punto central era la situación concerniente al status de los oficiales ingenieros; los cuales consideraban que las funciones y el entrenamiento profesional que se necesitaba en los buques de guerra modernos exigían una mejoría considerable en sus

remuneraciones, en su rango militar y en las perspectivas que les ofrecía la carrera naval. Sus responsabilidades correspondían más a las de un oficial que a las de un maquinista, como se les consideraba. El hecho de no poder alcanzar los grados superiores de la institución y de no contar con una voz que los representara en el Consejo Naval, sencillamente los indignaba.

Los oficiales ejecutivos, por su parte, buscaban preservar su exclusivo status que, en realidad, era el reflejo de una extracción social más alta a la cual pertenecían y para lo cual las reglas de admisión establecidas se encargaban que este requisito se cumpliera.

Un detalle del uniforme era el símbolo de la posición social de los ejecutivos y representaba la enorme lucha interna que existía: el uso de la estrella en la manga.

La posición de la superioridad naval de no dar respuesta a las inquietudes y efervescencia que se vivía, condujo a la creación de asociaciones de ingenieros, las que fueron muy susceptibles a las influencias masónicas. Las logias actuaron como enlace entre el programa de reformas del presidente Arturo Alessandri, que beneficiaba a las clases asalariadas y las campañas de los oficiales ingenieros. Era el reflejo del problema social que vivía el país el que en la Armada se había disfrazado con ropa profesional.

Por su parte los oficiales de máquinas conformaban el núcleo más numeroso de los descontentos, por lo que rápidamente se constituyeron en los portavoces del resto de los que se sentían postergados, como eran los contadores, los pilotos y los médicos.

Además de los problemas sociales descritos y del hecho que las ordenanzas navales no se hubieran modernizado, existía una brecha generacional producida por las experiencias que había dejado la Primera Guerra Mundial y la que era interpretada en forma diferente por los defensores de los que llamaban la *«Vieja Marina»* y los que propiciaban la *«Nueva Marina»*. Los primeros eran los que deseaban mantener una institución más cohesionada, regida por una férrea disciplina, impenetrable a presiones externas. Como lo demostrarían los hechos de 1924.

Alessandri trata de hacer presión al parlamento con las Fuerzas Armadas

Como hemos visto en la primera parte de este capítulo, en el período 1920-1924 el presidente Alessandri se sintió imposibilitado de llevar adelante su programa de reformas sociales que había prometido durante su campaña debido a la cerrada oposición e interferencia que le hacía el parlamento, muchas veces por causas ajenas a los proyectos de ley, o simplemente para doblarle la mano al ejecutivo y demostrar el poder que representaban las cámaras.

Para tratar de ejercer presión sobre el Congreso y demostrar que el pueblo estaba apoyando sus reformas, Alessandri realizó un viaje en el tren presidencial desde la capital hacia el sur y se hizo acompañar por una comitiva que incluía a los jefes de las fuerzas armadas, junto con políticos. En todas las estaciones la visita despertó un entusiasmo delirante. En los andenes fue recibido por los regimientos locales que rindieron los honores de ordenanza e interpretaron el himno nacional. Luego, los civiles y militares podían escuchar la encendida diatriba del Presidente: *«Hay que remover la vieja rémora que forman esos viejos del Senado. Es un estorbo al cumplimiento de mi programa. Necesito la purificación del parlamento. Yo quiero regresar a Santiago con el país a mis espaldas, gritarle a esos señores que no oyen ni creen. Hemos triunfado. El Senado es sólo un montón de cenizas. Yo, en nombre de mi pueblo, de mis amigos proletarios, al regresar a Santiago deseo decir a mi chusma adorada que puedo*

ofrecerles como aguinaldo pascual al país, la seguridad del término de la actual anarquía y de la bacanal parlamentaria».

El vicealmirante Luis Gómez Carreño, que formaba parte de la comitiva, a mitad del trayecto se dirigió al Presidente de la República y le pidió permiso para regresar a Valparaíso expresándole: *«Excelencia. No puedo seguir oyendo la propaganda de sentimientos tan opuestos al pensamiento de la Marina de Guerra».* Descendió del tren y se dirigió a Talcahuano.

Alessandri pretende enfrentar a la Armada contra el Ejército

El golpe militar de septiembre de 1924 fue el producto de la actitud de alrededor de 400 oficiales del Ejército, de baja graduación, sin que tuviera una participación directa la Armada.

Alessandri, sabiendo que los marinos no habían participado en la asonada, decidió jugarse el futuro con ellos.

La posición del Presidente de la República era el resultado de una situación irreflexiva, motivada por la desesperación, pues hacía solamente un mes, durante la inauguración de un dique seco en Talcahuano, le había manifestado al contraalmirante Arturo Acevedo sus aprensiones sobre la existencia de un grupo conspirador en la Armada, quien tranquilizó al mandatario. Con estos antecedentes, más la actitud del almirante Gómez Carreño durante el viaje al sur, al que hemos hecho referencia, era ingenuo pensar que la Armada haría la contrarrevolución.

El secretario del Presidente de la República, Luis Espinoza, recibió instrucciones del ministro de guerra, Gaspar Mora, de dirigirse a Valparaíso para entrevistarse con el Director General de la Armada, vicealmirante Francisco Nef, y llevarle un mensaje personal; lo cual hizo a medianoche en la residencia particular de este último. Cuando ambos quedaron solos el secretario hizo entrega del encargo, motivo de su viaje, el cual decía: *«Señor Almirante: aquí en La Moneda no sabemos, a punto fijo, cual es el objetivo de algunas manifestaciones de la oficialidad de la guarnición de Santiago. No sabemos si éstas tienen repercusión en la Marina. Si existen, actúe como estime conveniente e infórmenos. Además desea saber el Presidente y yo como ministro lo que a continuación consigno:*

- *Se estima procedente traer la escuadra desde Talcahuano. Si es así, puede disponerlo.*
- *Si el almirante Soffia, jefe de ella, no es persona de su entera confianza, proponga al jefe que habría de reemplazarlo. En todo caso usted, como autoridad suprema de la Marina, sírvase decir al gobierno lo que sea pertinente».*

El vicealmirante Nef dictó su respuesta al secretario Espinoza en los términos siguientes:

«Respecto al relevo del almirante Soffia de la jefatura de la escuadra de evoluciones, estimo que este jefe debe permanecer en su puesto, por cuanto es persona de mi absoluta confianza y que en ningún caso procedería sin consultarme. A mí mismo, en varias ocasiones, se me han acercado algunos políticos haciéndome proposiciones para un movimiento contra el gobierno, no habiendo prestado oído a ellas.

Me han hecho llegar la insinuación de formar una Junta de Gobierno con un miembro del Ejército, un civil y yo como presidente.

Si se llegara a producir una revolución, a pesar de sentirme enfermo, haría el sacrificio de aceptar la Presidencia de la Junta que se formara, antes que el país quede entregado en manos de otros hombres peores o más incapacitados que yo.

La escuadra se mantendrá al margen de los acontecimientos. Su personal está compuesto de 2.000 combatientes efectivos y podría llegarse a considerar hasta 3.000 hombres movilizables. ¿Qué podría hacer en un conflicto armado la Marina frente al Ejército que se compone de 10.000?.

En la Armada no hay fermentos subversivos y dentro de la oficialidad, sólo están tachados un oficial de marina y un ingeniero que está en Talcahuano. La Marina, afortunadamente, no ha participado en luchas electorales, en favor de ningún bando, circunstancia distinta al Ejército, cuyos oficiales son constantemente instrumentos de las combinaciones políticas que actúan en los períodos electorales».

La respuesta de la que tomó nota Espinoza termina con esta sorprendente recomendación: *«Dígale al Presidente que si este asunto se complica y las fuerzas armadas no lo sostienen en el poder, un hombre viejo como yo, le aconseja que en tales circunstancias, para salvar a la patria, renuncie a su cargo».*

Ante la imposibilidad de ver a la Marina defendiendo a su gobierno, el Presidente, azuzado por sus ministros Aguirre Cerda y Mora, buscó otro camino, en el cual la logia masónica sería el elemento clave.

La principal fuerza operativa de la Armada la constituía la escuadra de evoluciones que se hallaba surta en Talcahuano, a cargo del contraalmirante Luis Soffia. Este jefe no le daba confianza a Alessandri debido a sus ideas políticas y a su observancia católica. El Apostadero Naval lo comandaba, a su vez, el contralmirante Arturo Acevedo, quien ostentaba un alto grado en la masonería criolla.

Ahora los ministros Gaspar Mora y Pedro Aguirre Cerda habían sugerido sustituir a Soffia por Acevedo; pero Alessandri no había querido proceder sin el visto bueno del vicealmirante Francisco Nef.

Al recibir la respuesta negativa de este último de relevar al contraalmirante Soffia del mando, el ministro Aguirre, por intermedio de su colega de guerra, tomó contacto con el intendente de Concepción para que solicitara al contraalmirante Acevedo que tomara sorpresivamente el mando de la escuadra y arrestara a su jefe. Acevedo citó a Soffia a una reunión en la cual analizarían los sucesos y el ánimo de los oficiales y personal bajo su mando.

Soffia, que era más antiguo, no asistió, aduciendo encontrarse enfermo, respondiendo que cuando sanara invocaría el privilegio que le concedía su antigüedad para celebrar la reunión en su cámara del buque insignia acorazado «Almirante Latorre». Lo cierto es que el Comandante en Jefe de la Escuadra temía que se tratara de una celada para detenerle.

Alessandri no estaba errado con su desconfianza, pues apenas conocidos los sucesos santiaguinos, Soffia reunió a los oficiales de los distintos buques en el «Almirante Latorre» plegándose en forma incondicional al movimiento.

El contraalmirante Acevedo, en una nota enviada al ministro Mora, cuando éste ya había dejado el cargo, se defiende de las imputaciones que se le hicieron con referencia a su participación en los hechos mencionados. Dice en ella: *«Ignoro que responsabilidad pueda caberme en las gestiones de los ministros Aguirre Cerda y Gaspar Mora para captar la voluntad de la Armada. Ni siquiera me consultaron. Fracasaron por la negativa del almirante Nef. Es absurdo hacer juicios sobre lo que yo, como almirante, habría hecho al tomar el mando de la escuadra. Me atrevo a asegurar que en ningún caso, ni el presidente Alessandri ni yo, pensamos en lanzar al país a una lucha civil».*

Por su parte, en esos días, el contraalmirante Soffia declaró: «*Yo congregué a todos los oficiales de la escuadra y me manifestaron que estaban unánimemente con el movimiento militar, "igualmente la marinería". Esa tarde en todos los buques se entonó la canción nacional ante la bandera*».

Se alejaba la posibilidad que se repitieran los luctuosos sucesos de 1891; pero no sería la única vez en esos años que se viera tan cerca un nuevo enfrentamiento entre las dos instituciones armadas.

Por otra parte llama la atención la alusión que hace el jefe de la escuadra a la posición tomada por la marinería, pues puede desprenderse de ella, que también fue consultada por un problema que tenía, indudablemente, mucha connotación política.

La posición de la Armada en el movimiento militar de 1924

El vicealmirante Nef fue llamado por el presidente Alessandri para que formara parte del ministerio que encabezó el Inspector General del Ejército, general Luis Altamirano y que sucedió al de Aguirre Cerda.

La actitud asumida por la Armada, después de la situación producida en el Congreso Nacional el 4 de septiembre de 1924, tuvo una gran diferencia con la del Ejército; mientras en esta última institución se prescindió, en un comienzo, totalmente de los partidos políticos; en la Marina tuvieron gran influencia personeros del bando opuesto al Presidente de la República.

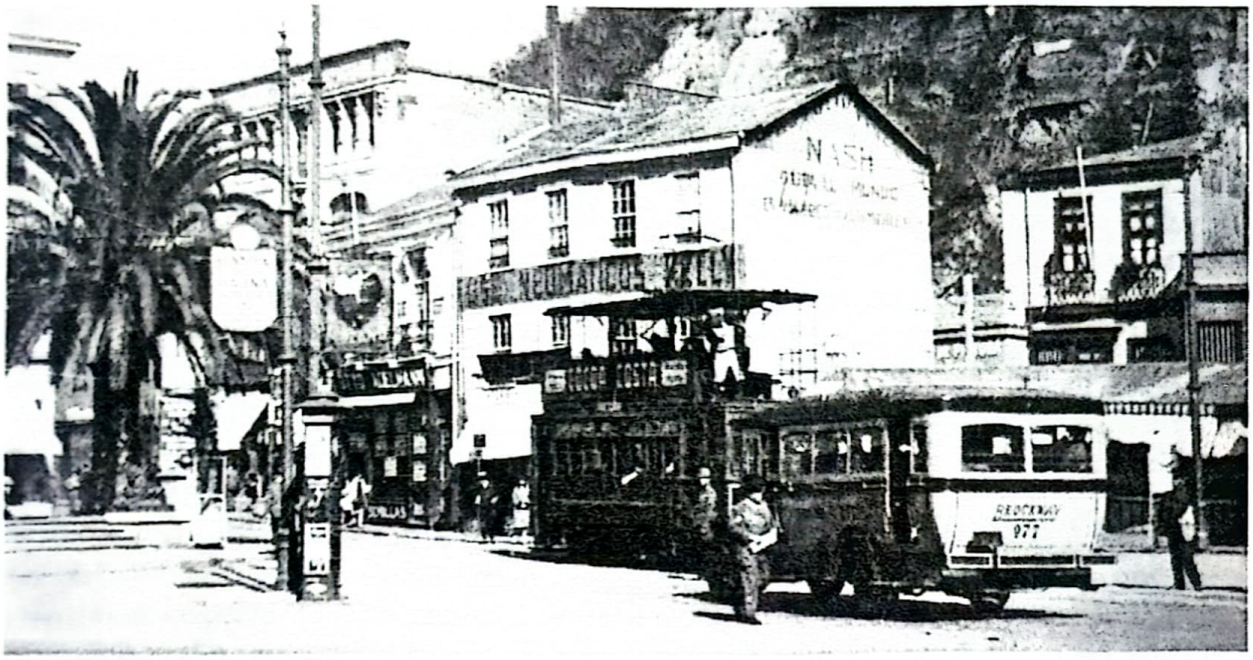
Para extender el movimiento a la Armada fue comisionado, para viajar a Valparaíso, el mayor Marmaduke Grove Vallejos, que era uno de sus líderes y se desempeñaba como subdirector de la Escuela Militar. Su designación no podía ser más acertada para el fin que se perseguía, pues Grove tenía grandes vínculos sociales con las familias más influyentes del puerto y sus estudios castrenses los había iniciado en la Escuela Naval, lo cual le hacía ser conocido de una gran cantidad de oficiales de Marina[16].

Grove fue recibido oficialmente en el Círculo Naval, como representante de la Junta Militar, por el capitán de fragata Benjamín Barros Merino y por el almirante en retiro Guillermo Soublette Garín. Después de los saludos de rigor el segundo manifestó su determinación de llamar a la reunión al senador liberal unionista Guillermo Rivera Cotapos. Grove le hizo ver que el movimiento del Ejército, en la capital, no tenía ninguna vinculación ni recibía a los políticos, ni a los civiles.

A los pocos minutos se incorporó a la reunión el vicealmirante Luis Gómez Carreño, quien dirigiéndose a Grove le manifestó: —«*Señor Mayor, dígale a Lucho Altamirano que cuente con nosotros sobre la base de que se vaya Arturo Alessandri, se dejen de pedir leyes y se clausure el Congreso*».

Por otra parte, el Presidente de la República, que se encontraba inquieto por lo que pudiera suceder con la Armada, inquirió noticias al intendente de Valparaíso, Alberto Phillips Huneeus, quedando helado con la respuesta de éste: a esa hora se encontraban reunidos en

[16] Grove, siendo director de la Escuela Militar, había sido sancionado, delante de todos los cadetes del plantel, con un arresto de 10 días cuando se descubrió que era el autor de unos artículos de prensa de tipo subversivo sobre temas militares-políticos que se publicaban en la prensa bajo el seudónimo de EKUD, que correspondía a las cuatro últimas letras de su nombre en forma inversa.



VALPARAÍSO EN 1930 ERA CONOCIDO COMO LA «REPÚBLICA CHICA», DONDE GOBERNABA, SIN CONTRAPESO EL ALMIRANTE GÓMEZ CARREÑO.

el Club Naval los oficiales de la Armada, presididos por el vicealmirante Gómez Carreño y con asistencia de los senadores Francisco Huneeus y Guillermo Rivera, además del vicealmirante en retiro Guillermo Soublette. En la *«República Chica»*, ambos parlamentarios, además de Carlos Van Buren y Agustín Ross, formaban un grupo que tenía gran influencia en la Armada a través de los vicealmirantes Nef y Gómez Carreño[17] y con quienes realizaban una activa vida de club.

Como ya lo hemos mencionado, fue la Armada, a través de Gómez Carreño, la que impulsó a que el presidente Arturo Alessandri renunciara a su alta investidura y fuera forzado a dejar el país y a la clausura del Congreso Nacional.

La Armada forzó el incruento golpe de estado, pero no tomó parte activa en él, aceptando tan solo el papel de comparsa del Ejército. El sentimiento general de la oficialidad era opuesto al presidente Alessandri y en los altos mandos podía verse una manifiesta inclinación hacia los políticos de la Unión Nacional. La Junta de Gobierno que reemplazó al poder ejecutivo el 11 de septiembre de 1924, uno de cuyos miembros era el vicealmirante Nef, recibió la petición de altos oficiales de marina que se separara de la institución al contraalmirante Acevedo por haber intentado tomar el mando de la escuadra para intentar la contrarrevolución.

[17] El vicealmirante Luis Gómez Carreño era un oficial que tenía gran ascendiente en la Armada por su actuación para mantener el orden en Valparaíso durante el violento terremoto de 1906. Se le atribuían muchas anécdotas; pero una que fue verdadera, fue durante el viaje inaugural a Chile del poderoso acorazado «Almirante Latorre». Quiso pagar los derechos de paso por el Canal de Panamá con un cheque en dólares del Estado de Chile, refrendado por él mismo, el cual fue rechazado por la administración del canal exigiéndose el pago «en billetes constantes». Después de múltiples discusiones que no lograban doblegar la exigencia que se le quería imponer, el Almirante anunció por un altavoz: «O me dejan pasar con mi cheque o les vuelo su oficina» y simultáneamente ronzó una de las torres y apuntó los cañones, lo cual fue suficientemente convincente para obtener el paso.

Cuando la Armada nombró los cuatro oficiales que ocuparían las plazas que le habían sido concedidas en la Junta Militar, ellas fueron ocupadas exclusivamente por oficiales ejecutivos, creando gran malestar entre los oficiales mayores, que mayoritariamente estaban en Talcahuano.

Esta situación agudizó la vieja rivalidad. Más que una medida discriminatoria para mantener el status existente, parece haber obedecido a que los oficiales ingenieros, que por ser más numerosos lideraban el grupo, en su mayor parte sustentaban ideas más proclives a las reformas sociales que propiciaba Alessandri.

Para tranquilizarlos, los representantes ante la Junta Militar prometieron a sus compañeros la formación de comités navales informativos, los cuales incluirían oficiales no ejecutivos, los que recorrerían lugares alrededor de Valparaíso y Talcahuano para dirigir los meetings de los trabajadores y explicarles el objetivo del movimiento militar.

La Aviación Militar

Durante esa época daba sus primeros pasos en Chile la aviación como parte de la estructura de la defensa nacional, formándose la especialidad aérea del Ejército en 1911 y de la Armada, en 1923[18], donde los nóveles pilotos desarrollaron actos heroicos en las primitivas máquinas voladoras.

La escuela de aeronáutica dependía del Ejército y se encontraba ubicada en El Bosque, en las afueras de la capital, la cual era comandada por el mayor Federico Barahona Walton; pero el impulsor y creador de ella había sido el general Luis Contreras Sotomayor, quien era además el jefe directo de Barahona.

La agitación político militar de aquellos días no fue ajena a estos audaces oficiales quienes, desobedeciendo a su jefe superior, se autoacuartelaron y prepararon sus pocos aviones para intervenir en los acontecimientos. En esta forma realizaron vuelos, por órdenes de la Junta Militar, en tres oportunidades a Concepción y en otras a Valparaíso conduciendo a tenientes y capitanes; sobrepasando largamente la capacidad de peso de las frágiles máquinas.

El general Contreras recurrió al ministro de guerra y marina, vicealmirante Gómez Carreño, para recabar tropas con el objeto de doblegar a los sublevados. La respuesta que de él recibió es una esclarecedora visión hacia donde conducían a las fuerzas armadas los actos de indisciplina que se estaban produciendo desde la noche del 4 de septiembre. El marino contestó: *«Estas chispas traen los incendios. Esto es causa del absurdo juramento que hace cuatro días, cuando estábamos en plena crisis de gobierno, exigiste a tus oficiales, cuando todavía era generalísimo Alessandri. Aquel acto tuyo político ha politizado a tus subalternos y es por eso que no te obedecen. Dado que no obtuviste la jefatura del Ejército y ahora que no te obedecen tus aviadores, me parece que debes resolverte a elevar tu expediente de retiro»*. Al día siguiente, a través del diario La Unión de Valparaíso, se publicaba un acta pidiendo la destitución del general Contreras, la cual era firmada por varios capitanes y tenientes, encabezados por el sublevado director de la escuela de aeronáutica.

[18] Se considera marzo de 1923 como la fecha inicial de la Aviación Naval en Chile, a pesar que sus primeros pilotos se formaron en 1916.

Ibáñez trata de subvertir la disciplina de la Armada

El enfrentamiento entre la Junta Militar y la Armada hizo que se suspendiera la parada militar del 19 de septiembre de 1924, pues la Marina había manifestado su rechazo a participar en ella.

La impetuosidad de la oficialidad joven del Ejército los hacía mirar con malos ojos a la Armada a causa de no haber contado con su apoyo incondicional y al hecho que la invitación para integrarse a la Junta Militar la habían aceptado manteniendo sus delegados los lazos de obediencia al alto mando de la institución.

Con motivo de una festividad del Ejército, se efectuó un campeonato atlético de las fuerzas armadas, concentrándose los participantes en diversos regimientos y escuelas de Santiago. Ante una petición expresa del director de la Escuela de Caballería, mayor Carlos Ibáñez del Campo, los oficiales jóvenes de la delegación naval fueron los huéspedes de su repartición. El día 25 de octubre se dio un banquete al que fueron invitados exclusivamente oficiales revolucionarios y marinos jóvenes, donde después de algunos abundantes brindis se propuso incorporar a la Junta Militar a oficiales de la Armada de grados bajos y se pronunciaron encendidos discursos contra los almirantes Nef y Gómez Carreño. El anfitrión presenciaba los hechos completamente impasible.

Se hicieron alusiones directas a algunos generales y, enseguida, abiertas críticas a la alta jefatura de la Armada. Las alocuciones fueron francamente atentatorias contra la disciplina, procurándose transmitir a la Marina las ideas subversivas de algunos militares[19].

Al término del ágape, el ayudante del director de la escuela, que además era el secretario de la Junta Militar, teniente Alejandro Lazo, leyó algunos documentos secretos que se referían a jefes navales en servicio activo que aparecían complotando con los partidos políticos que formaban la Unión Nacional. Para terminar se propuso un acuerdo para que no solamente tres jefes navales fueran los portavoces de su institución en la Junta, sino que se designaran además a oficiales jóvenes y principalmente representantes de los ingenieros.

El hecho hizo que el presidente de la Junta de Gobierno, general Luis Altamirano, reprendiera duramente a Ibáñez, lo que produjo el rompimiento definitivo entre ambos y a la postre el retiro del primero.

Cuando la superioridad de la Armada decidió retirar sus representantes a la Junta Militar y entenderse directamente con la Junta de Gobierno, la oficialidad de baja graduación aceptó a regañadientes la medida.

Al finalizar el año, el estado moral en la Armada era muy bajo; la oficialidad estaba dividida en dos grupos antagónicos que solamente esperaban la oportunidad de enfrentarse uno al otro.

El arresto de los almirantes

El Consejo Naval se encontraba analizando el traslado de la sede de la institución a la capital, como una forma de estar más cerca de los poderes públicos, cuando se produjo el golpe militar del 23 de enero de 1925 liderado por Carlos Ibáñez y Marmaduke Grove;

[19] Conceptos vertidos por el general Juan Pablo Bennet.

apoderándose del palacio presidencial y arrestando a los miembros de la Junta de Gobierno, incluyendo al representante de la Armada, vicealmirante Nef y al ministro de marina vicealmirante Gómez Carreño.

La misma noche del conato revolucionario, el Director General de la Armada, vicealmirante Salustio Valdés, sucesor de Nef cuando éste ingresó a la Junta de Gobierno, se reunió con todo el alto mando de la institución para fijar la posición ante la nueva situación producida. Sus conclusiones fueron claras y terminantes:

- *«La Armada no acepta este movimiento, la forma en que se ha llevado a cabo ni tampoco que tenga finalidad política».*
- *«Acuerda no tomar una resolución definitiva hasta no oír a sus representantes en el gobierno».* (vicealmirantes Nef y Gómez Carreño)
- *«Declara solemnemente que está decidida a mantener, en todo momento, el orden público».*

El acuerdo reiteraba la posición de la Marina de no conversar al respecto, mientras no se pusiera en libertad «inmediata, absoluta e incondicional» a los dos altos jefes detenidos.

Por otra parte, para Ibáñez y el resto de los oficiales revolucionarios, la detención de tan significativos personajes era una baza importante en el juego en que estaban empeñados para doblegar la posición de la Armada y hacerla adherir a sus exigencias. Por segunda vez en poco tiempo volvía a rondar, más cerca aún, el fantasma de la guerra civil de 1891.

Los militares golpistas quisieron hacer un gesto de acercamiento a la Marina y propusieron el nombramiento de una Junta de Gobierno formada por los generales Dartnell y Ortiz Vega y por el contraalmirante Arturo Acevedo; pero este último nombre dividía a la institución, pues estaba calificado como politiquero y apasionado alessandrista[20].

No es errado aventurar que la proposición del nombre del marino obedecía precisamente a las mismas razones por las que lo rechazaba su institución, estas eran: su conocida amistad con el ex Presidente de la República, a quien se planeaba traer de vuelta al país, su posición dentro de la institución naval que la dividía entre adeptos y antagonistas y muy especialmente sus altos vínculos con la masonería que, tras bambalinas, movían gran cantidad de los hilos del drama que vivía el país.

El complot contra la Armada

Los revolucionarios, instuyendo que la Armada no aceptaría sus imposiciones, quisieron tomarse las reparticiones navales, para lo cual pretendieron neutralizar, en primer lugar, a la policía porteña, procediendo a enviar, de inmediato, oficiales para que tomaran su control; pero su contrincante se había adelantado a los hechos y los comisionados fueron arrestados y conducidos al acorazado «Almirante Latorre». En su lugar fue nombrado jefe policial el capitán de fragata Emilio Costa Pellé, con dependencia directa del Consejo Naval.

[20] El almirante José Toribio Merino Saavedra, ex Director General de la Armada, escribió al respecto: «A la caída de Alessandri la oficialidad de la escuadra solicitó a la Junta de Gobierno, presidida por el general Altamirano, la remoción del almirante Acevedo y su retiro del servicio por su actitud durante los acontecimientos. Independiente del color político que profesaran los protagonistas, el hecho constituyó la primera manifestación de indisciplina en la Armada motivada por una situación política, y que la llevaría de escalón en escalón hasta su derrumbe definitivo en el levantamiento de las tripulaciones en septiembre de 1931».

Personal naval desembarcó y se hizo cargo del resguardo de la intendencia, de los accesos camineros, del ferrocarril y de todos los puntos vitales del puerto.

Los buques de la escuadra fueron fondeados estratégicamente, en forma que pudieran controlar puntos conflictivos y mantuvieron concentraciones de marinería listas para desembarcar y detener cualquier posible avance de fuerzas venidas de Santiago. Igualmente se preparó la inutilización de los fuertes de Valparaíso, de manera que si eran tomados, no pudieran hacer fuego contra los buques. La población Vergara de Viña del Mar era dominada por los cañones del cazatorpedero «Williams».

La nueva Junta de Gobierno dispuso el traslado inmediato a Valparaíso del regimiento Yungay de San Felipe, que lo sabía incondicional; pero fue interceptado en las puertas de la ciudad por tropas de marinería, aunque logró alcanzar hasta el cuartel del regimiento Maipo, el cual vacilaba y consiguió plegarlo. Las instrucciones que traía eran de acantonarse en Viña del Mar y relevar al jefe del regimiento de caballería Coraceros, comandante Ernesto Grez; pero éste había abrazado decididamente la causa de la Armada, cumpliendo órdenes solamente del jefe de la plaza de Valparaíso.

En esta forma, el 24 de enero de 1925 Valparaíso amaneció dividido en dos bandos: el revolucionario, integrado por los regimientos Yungay y Maipo y el contra revolucionario, formado por el Coraceros, la Armada y la policía.

Al día siguiente, el Director General de la Armada lanzó un manifiesto que no dejaba lugar para dudas sobre la posición adoptada por la institución, éste decía: «*La Armada Nacional, por segunda vez, se encuentra desde el 5 de septiembre de 1924, ante un gravísimo trastorno de gobierno. Cuando el Ejército entonces derrumbó el poder constitucional, ante los hechos consumados y como única solución para no ir a las terribles consecuencias de una desavenencia que ensangrentara a la patria tuvo que unir su suerte a la de la institución hermana, el Ejército, al encontrarse frente a una situación rematada. La oficialidad de la guarnición militar de Santiago ha puesto sitio al palacio presidencial para destituir y apresar una Junta de Gobierno nombrada de común acuerdo entre las dos instituciones, dando por motivo único el de que intervenía a favor de una agrupación política denominada Unión Nacional. La Marina de Guerra se extraña que nuestra institución hermana no haya tenido la franqueza y lealtad para darle a conocer quejas.*

La detención de los almirantes Nef y Gómez Carreño, representantes genuinos de la Marina, envuelve una grave ofensa, la que se intensifica con su retención en calidad de prisioneros. La Junta derroca y a su vez propone colocar en el gobierno al ex-presidente Alessandri, caudillo liberal, causante y responsable del movimiento de septiembre. La causa iniciada por una fracción del Ejército no está ajustada al compromiso del 11 de septiembre, ya que es inconsecuente el pretender llevar al gobierno el mismo elemento que se expulsó "por gangrenado y corrompido". Esta determinación violenta conduce a la nación a un precipicio, colocando ante el país, a las dos instituciones en campos antagónicos».

El alto mando naval había tomado una posición dura y estaba decidido a llevarla adelante; pero se produjo una grave fisura interna que lo obligó a buscar una mediación. Esta situación era, por una parte, la indisciplina de mostraron los oficiales mayores que adherían a los sublevados de Santiago y, por otra, se temía el respaldo pesado y peligroso de la marinería, que había sido minada por el alessandrismo.

La cara visible del golpe militar había sido Grove; pero la eminencia gris que movía los hilos era Carlos Ibáñez que, hábilmente, había soliviantado a la rama de ingenieros de la

Armada, los que ahora actuaban en el momento que más necesitaba la institución de su lealtad.

Para reforzar su labor de infiltración en la Marina, Ibáñez envió a Talcahuano al capitán Carlos Millán para que actuara en el momento preciso en ese puerto, que era la sede de la escuela matriz de los oficiales de máquinas y su principal destino.

El día 24 de enero los mayores Grove e Ibáñez recibieron desde el Apostadero Naval de Talcahuano dos telegramas de adhesión al movimiento revolucionario, uno provenía de los oficiales mayores en conjunto con los empleados civiles de la Armada, y el otro... *¡de las tripulaciones!* Es interesante destacar que con anterioridad a estos hechos no se registran actos de indisciplina en la gente de mar. Es el primer indicio de la tragedia.

Consecuencias

El momento en que la marinería empezó a deliberar puede precisamente situarse en los días de los movimientos militares de 1925; dice el suboficial mayor Ernesto González Brion, quien fue la cabeza visible del motín de 1931: «*Cuando los oficiales del Ejército y los de la Marina derrocaron al gobierno en 1924, las tripulaciones ni siquiera fueron consultadas.*

En enero de 1925, los oficiales de marina, guiados únicamente por un sentir exclusivamente propio, llevaron a la patria al borde del abismo. No se declaró la guerra entre el Ejército y la Marina, solo porque las tripulaciones declararon que no dispararían un solo cañón contra sus hermanos de armas.

En el acatamiento de los oficiales de marina a los puntos de vista del Ejército no hubo, en aquella ocasión, el «sacrificio de amor propio en bien de la patria», de que tanto se habló, sino impotencia para enfrentar los acontecimientos, por faltarles la fuerza que les negó la tripulación.

Esta actitud de los oficiales destruyó el principio de nuestra carta fundamental que prohibe la deliberación de las fuerzas armadas y lo que es más importante aún, despertó en las tripulaciones el deseo de intervenir directamente en su suerte. Estas, muy lógicamente, se dijeron: Si nosotros somos la fuerza de que disponen a su antojo los oficiales para pedir lo que les beneficie particularmente, ¿por qué no intentamos por nuestra cuenta corregir lo que nos afecta desfavorablemente, tanto en materia de sueldos, como en la ley de retiro, etc. y nos desentendemos de ellos, así como lo han hecho siempre con nosotros?

Así principió a germinar el espíritu de rebelión.

La falta de contacto e interés por las tripulaciones de parte de los oficiales, impidió a éstos percatarse del volcán que ardía bajo sus pies[21]».

En Talcahuano la marinería da su opinión política y se amotina en 1925

Para tratar de evitar la indisciplina que se veía venir, el jefe interino del apostadero de Talcahuano, capitán de navío Ismael Huerta, llamó a reunión de oficiales en el crucero

[21] El divorcio existente entre el alto mando y los oficiales jóvenes, así como también entre toda la oficialidad y el personal de «gente de mar» fue observado y expuesto por el británico Philip Somervell en su trabajo «Naval Affairs in Chilean Politics, 1910-1932».

«O'Higgins», donde dio lectura a un radio de la Dirección General de la Armada en el cual solicitaba abstenerse de todo pronunciamiento sobre los acontecimientos sucedidos en Santiago mientras se allegaban mayores antecedentes. Los oficiales mayores guardaron silencio; pero ya habían adherido a los revolucionarios.

Como hemos apuntado, Ibáñez había enviado subrepticiamente al capitán Carlos Millán a Talcahuano para que obtuviera el apoyo de los oficiales jóvenes y de los ingenieros. Este se encontraba en ese puerto durante la reunión citada por el comandante Huerta, por lo que los oficiales mayores le solicitaron autorización para escucharlo, lo cual fue denegado; pero lo hicieron al día siguiente, contraviniendo las órdenes y reiterándole su adhesión al movimiento ejecutado en Santiago.

La forma de subvertir la disciplina en la Armada ideada por Ibáñez le dio los frutos que esperaba y cuando el jefe del Apostadero Naval, en la tarde del mismo día de la reunión en el crucero «O'Higgins», llamó nuevamente a asamblea de oficiales, esta vez en la comandancia, para leer el manifiesto del Director General, los oficiales mayores manifestaron su discrepancia con él. Los ingenieros hicieron presente que no ayudarían a mover los buques que se pretendía enviar al norte: el crucero «Blanco Encalada», el cazatorpedero «Lynch» y tres submarinos. ¡Nuevamente las tripulaciones apoyaron esta decisión!

El comandante Huerta había recibido instrucciones de alistar y hacer zarpar a los submarinos con los oficiales leales a Valparaíso, pero ello fue impedido por una acción masiva y conjunta de los ingenieros, los tripulantes y... ¡contingentes populares, en número estimado de ocho mil, venidos de Talcahuano!

El Apostadero Naval fue técnicamente asaltado por los obreros de la Maestranza y Diques y por civiles de la localidad, capitaneados por algunos oficiales mayores de la Armada, vestidos de civil, que estaban implicados en los sucesos de Santiago e impidieron el zarpe de los buques para reforzar la escuadra en Valparaíso.

Huerta debió ceder y en un mitin multitudinario celebrado en la plaza de la ciudad, comprometerse con los dirigentes Salvador Martínez y Alejandro Reyes a que ningún buque abandonaría el puerto.

A tal extremo llegó esta actitud agresiva, que se le permitió a la directiva de los exaltados subir a bordo de los submarinos para constatar que se suspendían los aprestos para zarpar y a solicitar piezas de las máquinas para asegurarse que no lo harían.

La firme y resuelta actitud del comandante del crucero «Blanco Encalada», capitán de navío Manuel Montalva, impidió que el asalto tomara mayores proporciones y no permitió que la turba invadiese su buque que se encontraba atracado al malecón y obligó, con la amenaza que dan las armas, que despejasen el recinto militar.

En prevención de que no se cumpliera la palabra empeñada por el jefe del apostadero de no ordenar el zarpe de los buques, la Escuela de Artillería Naval tomó, sin orden superior, los fuertes de Talcahuano y amenazó disparar contra los cruceros y los destructores surtos en la bahía si se movían.

Los *«compañeritos»*, como se autodesignaban los obreros de Maestranza y Diques de Talcahuano, declararon la huelga y la Federación Obrera de Chile, FOCH, junto con el Partido Comunista manifestaron que *«apoyaban a la juventud militar que limpiará la gangrena que roe al país. Debemos prepararnos para empuñar las armas por si se nos necesita»*. Firmaban este documento quienes serían los máximos exponentes del Partido Comunista en Chile, Elías Lafferte y Manuel Hidalgo.

¡Otro hecho sintomático que nos acerca a los sucesos ocurridos seis años más tarde es el aprovechamiento oportuno de una situación de indisciplina en la Armada por el Partido Comunista, disfrazado de federación obrera!

Oradores militares que dirigieron mítines populares se encargaron de cargar políticamente la atmósfera, a satisfacción de los partidos extremistas, con frases como: *«Si la Marina quiere la guerra, el Ejército unido con el pueblo destruirá a la oligarquía»*.

Entretanto en Valparaíso, los ingenieros y personal de máquinas del acorazado «Almirante Latorre» rehusaron mover el buque para oponerse a los revolucionarios santiaguinos. Si se llegaba eso, pedían que los desembarcaran. Incluso algunos fueron arrestados, acusados de pretender inutilizar las máquinas.

Finalmente parecía que se organizaba a bordo un motín de la marinería, que mostraba un alto grado de indisciplina; lo que había movido a la superioridad naval a ordenar el zarpe, desde Talcahuano, de los submarinos clase H, portando torpedos con conos de combate, para el caso de una emergencia, cuyas instrucciones habían recibido sus comandantes.

Un vocero de los oficiales mayores de Talcahuano hizo llegar un cable a los líderes interinos de Santiago apoyando el golpe de Estado dado por el Ejército y en un virtual amotinamiento, se negaron a acatar las órdenes de levantar presión en los buques y de cargar municiones, tanto en ese puerto, como en Valparaíso.

El Ejército, que ya no tenía contradictores al golpe, comenzó a agitar a las masas populares de Valparaíso con elementos partidarios del ex presidente Alessandri, misión que le fue encargada al dirigente radical Julio Bustos. El comandante del regimiento Coraceros, Ernesto Grez, temió por la lealtad de su unidad y, para evitar que se contaminara, decidió embarcarlo; haciéndolo la tropa en el transporte «Angamos» y las cabalgaduras en el vapor «Llanquihue», zarpando al norte donde esperaban el apoyo de las guarniciones septentrionales[22].

La mediación de Agustín Edwards

Las circunstancias señaladas llevaron a la Marina por el camino de la conciliación. El mediador elegido fue don Agustín Edwards, quien debió utilizar todas sus dotes y capacidad para llegar a un acuerdo en la difícil situación.

La proposición de la Armada contemplaba el nombramiento de una Junta de Gobierno compuesta por un militar, un marino y un civil que la presidiría, un gabinete civil, reformas constitucionales, asamblea constituyente, elecciones parlamentarias y presidenciales y amnistía amplia; puntos todos que no creaban mayor conflicto, pero la piedra de tope sería la exigencia que el ex presidente Alessandri no retornara a tomar el poder por el resto del período que le faltaba completar.

El Ejército usó a las masas populares, que eran fuertemente alessandristas y la Marina debió capitular en su exigencia.

El arreglo logrado produjo gran extrañeza en la opinión pública y un amargo sabor de derrota y traición en la Armada, que no comprendía como el mediador elegido por ella y principalmente el contraalmirante Ward, hubieran suscrito un documento que contrariaba el

[22] Por muchos años el regimiento Coraceros debió aceptar la burla del resto de sus compañeros de armas que la llamaban satíricamente la «caballería de marina»

manifiesto lanzado por la institución el 25 de enero y que dejaba a una de las partes ganándolo todo y a la otra perdiéndolo todo.

En estas condiciones se logró el acuerdo, situación que aprovechó Carlos Ibáñez para plantear la necesidad de solucionar las quejas de los ingenieros navales. Podrá sorprender esta pertinacia e imprudencia del militar, que ponía en peligro el arreglo, pero en verdad estaba jugando sus cartas para debilitar a la Marina, lo que le afirmaría sus pretensiones en el futuro[23].

La nueva Junta de Gobierno quedó presidida por don Emilio Bello Codesido y compuesta además por el general Pedro Pablo Dartnell y el contraalmirante Carlos A. Ward Rodríguez.

El gabinete debía ser civil, por lo que su nombramiento fue un festín para los políticos que se peleaban los cargos. Como a los radicales los habían dejado sin ningún nombramiento, el líder de ese partido habría exclamado: «¡No sean rotos, no se lo coman todo!»[24].

En esta forma la posibilidad de una guerra civil se alejó, la Armada creó su propio ministerio en la capital; pero el coronel Ibáñez, como ministro de guerra, echaba leña al fuego, lo que acrecentaría los problemas en las relaciones jerárquicas y divisiones que ya existían en la Marina.

Alessandri regresó del exilio, condicionando tomar el poder al alejamiento de los militares del gobierno, cosa que como hemos visto, nunca estuvo en la mente de los caudillos; pero ello no fue óbice para que, desde el primer momento, el mandatario buscara la forma de congraciarse con las fuerzas armadas. Asistió a una revista naval a bordo del acorazado «Almirante Latorre» el día 6 de marzo de 1925; donde aseguró a los oficiales que su gobierno era para servir a todos los chilenos y que ningún partido político lo inspiraba. A pesar de tan auspiciadoras palabras, su presencia fue controvertida. El comandante del buque rechazó permitir a bordo a miembros de la ex Junta Militar que formaban la comitiva presidencial. Esto involucraba directamente al ministro de guerra coronel Carlos Ibáñez, quien no había asistido dando como causa de su determinación *«que no pondría un pie en un buque de guerra chileno hasta que la Marina tuviera un liderazgo moderno, en consonancia con las aspiraciones, tan a menudo, manifestadas por su personal»*.

Las relaciones Ejército-Armada siguieron por un tenso camino de aparente formalidad; pero los resentimientos eran muy grandes. El después contraalmirante Edgardo von Schroeders relata que, habiendo tomado el mando del destructor «Condell», le correspondió asistir a la reunión de los comandantes de los buques que participarían en la revista naval, a la cual nos hemos referido, a fin de recibir al Presidente de la República. Ante la exigencia hecha en el sentido que ninguno de los jefes militares que habían encabezado el reciente golpe de Estado pisara la cubierta del «Almirante Latorre», el jefe de la escuadra tuvo que arreglar que la comitiva, que acompañaría al primer mandatario, pasara la revista embarcada en un remolcador.

Los problemas producidos entre las fuerzas armadas con motivo del golpe militar del 23 de enero habían quedado superados con la intervención del mediador Edwards, pero los

---

[23] La prensa publicó en esos días: «El señor Ibáñez, después de saludar a todos los miembros de la nueva Junta de Gobierno, dirigiéndose al almirante Ward le manifestó que uno de los más ardientes anhelos del Ejército era que se considerara por la Junta el mejoramiento de la situación de los ingenieros de la Armada».

[24] Según versión de Claudio Vicuña Subercaseaux. Otra versión dice que la frase habría sido: «Muy bien, veo que ya está todo repartido; pero, ¿no habrá por ahí alguna portería u otro empleo menudo para los radicales, demócratas y comunistas, que son los que en realidad han hecho esta revolución que pretenden escamotearse Uds?»

esfuerzos para debilitar a la Marina y evitar que sirviera de contrapeso a las ambiciones del Coronel-ministro continuarían.

La sublevación de los Luises

Un mes antes que el presidente Alessandri tuviera que alejarse del gobierno, por segunda vez y en forma definitiva, nuevamente se manifestaron inquietudes entre la oficialidad que se encontraba destinada en Talcahuano. El Consejo Naval, presionado por los hechos o bien porque los cambios tecnológicos ocurridos con motivo de la Primera Guerra Mundial así lo aconsejaban, había hecho una cantidad de concesiones a los oficiales mayores, muchas de las cuales conformaban las expectativas que tenían. En esta oportunidad un grupo de oficiales ejecutivos conspiró para remover al Director General de la Armada, vicealmirante Juan Schröders Peña, y nombrar un hombre de sus afectos como ministro de marina para acelerar las reformas; el coronel Ibáñez estaba implicado en esta conspiración, la cual fue detectada debido a su amplia extensión entre los oficiales.

El propio Director General de la Armada comisionó al contraalmirante José Toribio Merino Saavedra para que investigara los hechos en calidad de fiscal; éste se dirigió sin previo aviso, el mismo día, al puerto militar y llamó a declarar al comandante del crucero «Esmeralda» Luis Escobar Molina, al director de la Escuela de Torpedos Luis Concha, al comandante del transporte «Angamos» Luis Caballero Cannobio y al comandante de la Artillería de Costa Luis Lavín, sindicados como los directores del movimiento. El primero de ellos declaró en forma insolente, que demostraba que se sentía protegido por influencias muy poderosas en sus actividades conspirativas, que ellas estaban destinadas a remover de la superioridad naval al ministro de marina, al Director General de la Armada, al jefe del Apostadero de Talcahuano y al capitán de navío Olegario Reyes del Río, comandante del crucero «O'Higgins»; los cuales, según sus palabras, se habían adueñado de la Marina, haciendo una política personal de intrigas y chismografía destinada a darle buenos puestos a sus amigos personales y soplones y desquiciaban el servicio y la disciplina de la institución.

Fueron destituidos, sin dilación y por la unanimidad de la Corte Marcial, los cuatro comandantes comprometidos. El hecho fue conocido con el nombre de «la conspiración de los Luises».

El incidente causó resentimiento en Talcahuano, pero espoleó la acción del Consejo Naval, que dos semanas después envió una circular admitiendo que había «reglamentos en vigencia que estaban obsoletos y eran molestos y deficientes» por lo que se requería que los oficiales hicieran proposiciones para reformarlos.

La visita realizada a Chile por el Príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VIII, acalló los hechos; pero cuando el ilustre visitante fue agasajado con un banquete a bordo del «Almirante Latorre», el ministro coronel Ibáñez no asistió.

El «derrumbe de la Marina»

Con fecha 7 de febrero el Comandante en Jefe de la Escuadra, contraalmirante Alfredo Searle, ordenó a sus comandantes sondear el parecer de los oficiales respecto a lo que estaba sucediendo a nivel gubernamental, obteniendo como resultado que todos opinaban que

debía mantenerse una unión con el Ejército para defender el gobierno constitucional, que habían simpatías hacia Ibáñez; pero no había nada contra la superioridad de la institución.

Al día siguiente el Director General de la Armada, vicealmirante Juan Schröders, recibió un telegrama del ministro de marina, vicealmirante Arturo Swett Otaegui, en el que afirmaba tener un pedido concreto de oficiales de la Armada en el cual solicitaban que la institución fuera reorganizada y se procediera a la eliminación de los almirantes.

Searle exigió ahora repetir la encuesta; pero las respuestas debían hacerse por escrito y bajo palabra de honor, desmintiendo categóricamente haber hecho tales peticiones a Ibáñez.

Cuando se reunió el Consejo Naval para conocer el resultado de la consulta, la situación no podía ser más desalentadora: En algunos buques nadie firmó, ni siquiera los comandantes. El jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante José Toribio Merino Saavedra, confirmó la efectividad de los contactos entre la Marina y el Ejército, lo que produjo la renuncia inmediata de la Armada de su Director General, vicealmirante Juan Schröders.

Éste calificó el hecho como el «derrumbe de la marina»; pero se estaba viviendo solo el comienzo. Esa misma tarde se supo que Ibáñez había ofrecido, por medio del coronel Aníbal Parada, el mismo que había dejado olvidados los papeles del complot contra la Armada en un hotel de Viña del Mar, la cartera de marina al capitán de fragata Carlos Frödden.

El Consejo Naval dispuso el viaje inmediato del contraalmirante Merino a Santiago para tratar de detener el nombramiento, incluso con facultades para ofrecerse para el cargo; pero Ibáñez insistió tener un compromiso ya tomado y le ofreció la Dirección General de la Armada a Merino, quien se rehusó. Posteriormente fue don Emiliano Figueroa quien lo convenció de su aceptación.

Mientras la superioridad naval trataba de evitar la designación de Frödden y el comandante del acorazado «Almirante Latorre» se encontraba en tierra, la oficialidad de rango medio del buque se reunió a sus espaldas y acordó unánimemente enviar un telegrama a Ibáñez pidiéndole el ministerio de marina para Frödden y la Dirección General para Merino. Cuando éste último llegó a la entrevista, le fue exhibido el telegrama.

El nombramiento de un capitán de fragata produjo el retiro inmediato e indignado de casi toda la plana mayor de la institución: los vicealmirantes Schröders, Swett y Langlois, los contraalmirantes Searle, Bahamonde, Wilson, Ward y Huerta y numerosos capitanes de navío.

Cuando Frödden trató de retener a algunos que estimaba útiles para detener la debacle, Ibáñez lo impetró bruscamente: *«El ministro de marina o es tonto, o es traidor»*.

Los oficiales ingenieros se encontraban en una posición de franca rebeldía frente al alto mando naval y los que pertenecían a la dotación del crucero «Blanco Encalada» se negaron a zarpar, debiendo ser reemplazados por suboficiales y sargentos para viajar a embarcar a los guardias marinas en Valparaíso. Por haber apoyado los movimientos a favor de Ibáñez llegaron a sentirse dueños de la Marina, pero muy pronto se desilusionaron cuando fueron forzados a retirarse o a aceptar destinaciones lejanas o humildes.

El poder de Carlos Ibáñez abarcó así a todas las fuerzas armadas y ya no tendría contradictor alguno. Para hacer más efectivo su control trasladó a la capital a la cúpula naval, desvinculándola de la flota, lo cual tendría perjudicial importancia en la rebelión de la marinería el año 1931.

Como si el «derrumbe de la marina» no hubiera sido suficiente para minar la disciplina, Ibáñez procedió a reincorporar a algunos oficiales que habían sido exonerados por ser partidarios suyos, entre los que se encontraba el capitán de navío Luis Escobar Molina, uno

de los de la «sublevación de los Luises», que ahora retornaba en gloria y majestad y se le nombraba jefe del nuevo Apostadero Naval de Valparaíso y Director del Territorio Marítimo; pero más que las destinaciones nombradas sería la «eminencia gris» de Carlos Ibáñez en materias navales.

Finalmente y como una forma de fortalecer su dominación personal, el nuevo ministro del interior modificó la estructura orgánica de la Armada para asemejarla a la del Ejército; el Consejo Naval y la Dirección General desaparecieron, siendo sustituidas por una Inspección General meramente decorativa, las direcciones de los diferentes servicios se relacionaban entre sí a través del ministro de marina, quien se tornó omnipotente. Quedaban directamente subordinados a él todas las fuerzas navales a flote, en tierra o en el aire, así como las misiones navales en el extranjero. En otras palabras, las resoluciones superiores y las órdenes de ejecución emanaban del ministro de marina quien, en su carácter de secretario de Estado, centralizaba en su persona el mando institucional.

Se dispuso además el traslado a Santiago de la referida Inspección General, de la Dirección del Personal, del Estado Mayor y de la Dirección del Material.

Las palabras del ministro británico en Santiago, Hohler, al secretario de Estado, refiriéndose a lo sucedido, son elocuentes: *«Pienso que es imposible imaginar un juego más arriesgado para la Marina... Es un hecho que ha perdido su propia jerarquía, lo cual sucedió no obstante uno o dos almirantes pudieron iniciar una crítica constructiva. Ellos ahora están enteramente bajo el control del Ejército».*

El motín producido en las naves de nuestra Armada solamente pudo suceder en el ambiente político y militar enrarecido por los hechos que hemos narrado.

Así se llegó al 1° de Septiembre de 1931.

Capítulo III
El motín

La rebaja de sueldos

Una vez caído Ibáñez, le correspondería al gobierno de don Manuel Trucco Franzani poner orden en las finanzas públicas que se encontraban al extremo maltrechas, como se había dado a conocer al país en la exposición hecha por el ministro de hacienda Pedro Blanquier Teylletche, cuando el caudillo aún trataba de salvar su gobierno.

Blanquier, nuevamente en el ministerio, vio la necesidad imperiosa de hacer economías, pues los gastos excedían a las entradas y no había dinero para pagar los sueldos del mes de agosto. Como primera medida, para salvar momentáneamente la situación, desenterró su antiguo proyecto de rebajar las rentas a los empleados públicos y resolvió cancelar los sueldos inferiores a 3.000 pesos sin descuento y los mayores a esa suma con un descuento del 12 al 30%. La diferencia que resultara de esta medida debía ser abonada a los interesados cuando las finanzas del país lo permitieran. La situación de la caja fiscal era caótica, con 33 millones de pesos de entrada mensual tenía que hacer frente a 35 millones de gastos fijos, sin contar el pago de pensiones ni de deudas a proveedores y contratistas, menos aún el servicio de la deuda.

Las fuerzas armadas se encontraban muy mal pagadas, por lo que el hecho de reducirles sus emolumentos los dejaban prácticamente sin tener con que alimentarse. Es interesante anotar aquí la disgresión que hace al respecto Leonidas Bravo en su libro «Lo que supo un Auditor de Guerra»: «*Aunque la disciplina de las fuerzas armadas sea magnífica, hay un factor que la destruye totalmente en forma casi inmediata: el hambre de la familia.*

Al soldado chileno puede exigírsele un sacrificio sin descanso; puede enviársele al sacrificio y a la muerte, puede tenérsele sin ropa, sin armas, sin elementos de trabajo, puede incluso, obligársele a él, personalmente, que soporte el hambre y el frío, pero todas estas virtudes de abnegación y sacrificio desaparecen cuando el soldado sabe que son su mujer y sus hijos los que pasan hambre.

El hambre que el soldado acepta para sí no lo acepta para los suyos, y si llega el momento de la prueba, desaparece la disciplina y se pierde la más grande de las virtudes de nuestro soldado».

En lo anterior podemos encontrar la espoleta que detonó la bomba el 1° de septiembre de 1931, la cual se encontraba activa debido a lo que hemos detallado en los dos capítulos anteriores.

El Partido Comunista

El tercer elemento causante del motín fue la actuación del Partido Comunista, el cual supo capitalizar, en su beneficio, los problemas políticos que acarreó la seudo república parlamentaria creada a raíz de la guerra civil de 1891 y las actuaciones militares que databan de 1924.

Esporádicamente primero, como lo hemos visto en la base naval de Talcahuano, y mediante una infiltración más planificada después, este partido fue el cerebro de los acontecimientos de septiembre de 1931, demostrando una organización e inteligencia dignas de mejor causa.

A medida que se iba acrecentando el desquiciamiento político y la indisciplina en las fuerzas armadas, los comunistas fueron intensificando su infiltración en la Armada, para desarrollar así uno de los métodos que, internacionalmente, le habían rendido los mejores dividendos, tal era propiciar motines en los buques de guerra. Baste recordar las sublevaciones de la tripulación del acorazado «Potemkim» durante la revolución rusa y la paralización de la flota imperial alemana cuando se aprestaba a librar uno de los últimos combates de la Primera Guerra Mundial. El escritor Jan Valtin, renegado y desertor del movimiento comunista, dice en su libro «La Noche Quedó Atrás» que el motín de la escuadra chilena fue *«una acción genial de la Sección Marítima de la Tercera Internacional»*.

Desde la conferencia de la Sección Marítima Internacional, efectuada en Moscú en 1930 se creó un ente, aparentemente independiente, bajo el nombre de Internacional de Marineros y Obreros Portuarios, ISH, pero que en realidad era una continuación disfrazada de la sección marítima del Comintern la cual, para aparecer como organización soberana con una dirección independiente de los órganos superiores del Partido Comunista, no instaló su cuartel general en Moscú, sino que en Hamburgo, calle Rothesood 8.

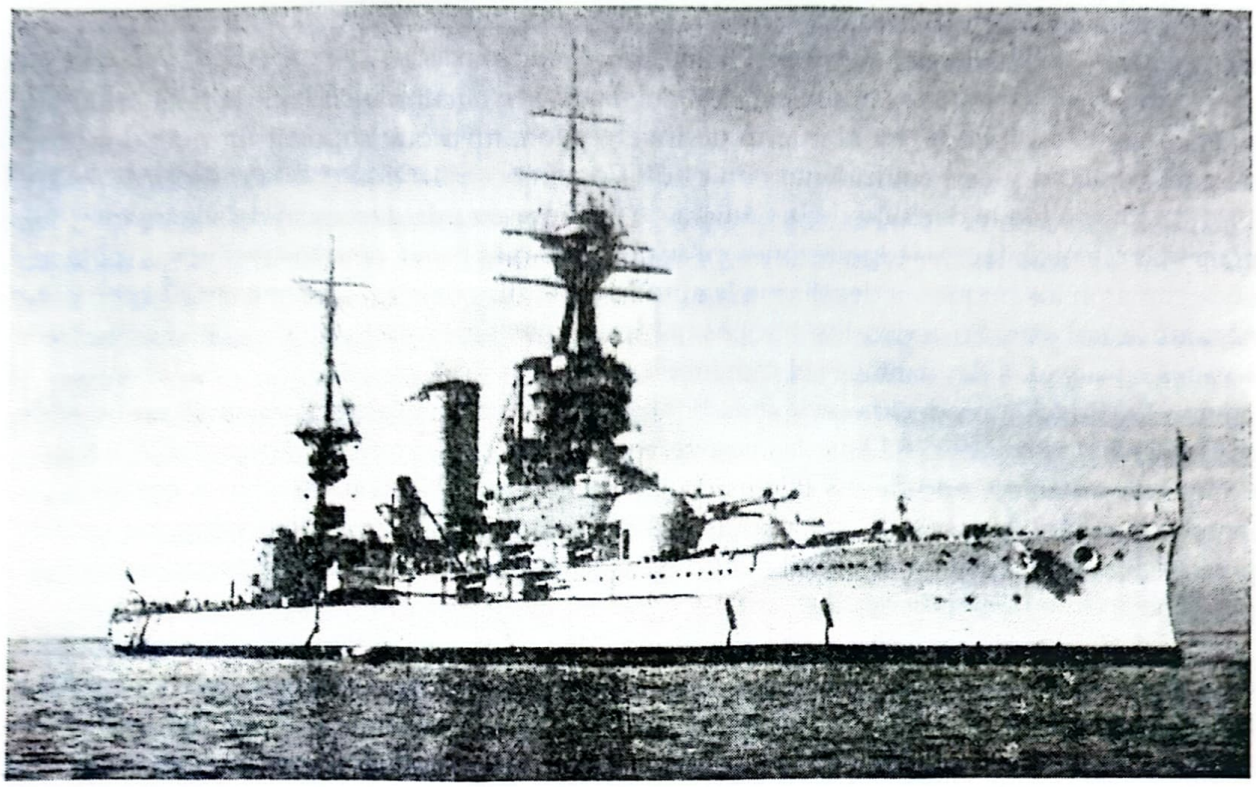
Richard J.H. Krebs, que había sido agente del Comintern, manifestó que personalmente había hecho entrega de los fondos para que fueran utilizados, por los comunistas, para financiar la sublevación en la escuadra chilena.

En el motín de 1931 aparece la mano de ese partido en forma inconfundible al cambiarle el cariz de reivindicaciones económicas a móviles políticos y organizarlo en forma experta. A pesar que el Partido Comunista siempre negó su paternidad, los hechos investigados apuntan en esa dirección, incluso Pravda, órgano oficial del partido en la Unión Soviética, en un editorial firmado bajo el seudónimo de «Rosado» describe: *«los activistas revolucionarios de la Marina que, con el Partido Comunista chileno a su cabeza, habían conseguido convertir la rebelión en un movimiento político»*.

Finalmente es el líder comunista chileno Elías Lafferte quien admite, en sus memorias, haber recibido a un mensajero de Coquimbo para informarle que los marineros habían planeado un motín, y que él habría tratado de aplazarlo para coordinar una estrategia, pero que estos se habían adelantado.

El contagio pudo venir de Inglaterra

Dos años y medio antes, esto es a principios de 1929, el acorazado «Almirante Latorre» había sido enviado a Gran Bretaña, a los astilleros de Davenport en Plymouth, para que fuera sometido a una modernización general. Los políticos exiliados en Europa durante la dictadura



ACORAZADO «ALMIRANTE LATORRE», BUQUE INSIGNIA DE LA ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN.

de Ibáñez aprovecharon la estadía de la nave en el viejo continente para incluir a sus tripulantes en su campaña destinada a derrocar el gobierno de Chile.

Es así como el comité revolucionario de París envió a bordo a un delegado especial para que desarrollara su campaña, llegando en un momento muy propicio para sus fines, pues la tripulación se encontraba descontenta por la disminución que se había decretado a la asignación que gozaba el personal que se encontraba en comisión en el extranjero[25].

Esta situación ha sido tomada como prueba por el escritor Ricardo Donoso para achacar al ex presidente Arturo Alessandri la paternidad del motín que se produciría en la escuadra dos años más tarde[26].

El contraalmirante Edgardo von Schroeders utiliza la misma estadía del acorazado en Gran Bretaña para suponer la génesis comunista del movimiento. Afirma su aserto en el hecho que, coincidentemente, durante la época en que se efectuaban las reparaciones del «Almirante Latorre», se produjo un conato subversivo a bordo del buque madre de submarinos británico «Lucía», cuya tripulación afectada fue transbordada a uno de los cuarteles del puerto militar de Davenport, donde se encontraba el navío chileno.

[25] Este hecho, que fue sistemáticamente negado por el comité revolucionario de París, es asegurado como real por el contraalmirante von Schröeders y de haberlo puesto en conocimiento del Presidente de la República en 1930, cuando se desempeñaba como ministro de marina.

[26] El contralmirante Raúl Rossi indica que de estas reuniones habría nacido una amistad entre el ex presidente Alessandri y el suboficial Ernesto González Brion, nombrado jefe del movimiento en el motín.

Posteriormente se descubrió que en dicho puerto residía uno de los focos comunistas más activos y culpables del motín de Invergordon[27].

Muy poco después de la sublevación del «Lucía», en circunstancias que la flota británica se encontraba en Escocia, en el puerto de Invergordon, tuvo que soportar un nuevo motín, de gran similitud y casi coincidente con el de Coquimbo, pues fue el 15 de septiembre de 1931. La chispa fue le decisión de la Cámara de los Comunes de disminuir, drásticamente, las granjerías que gozaban las tripulaciones en sus estratos más bajos; pero los marineros ingleses no se tomaron los buques ni desafiaron la autoridad de sus oficiales, sino que simplemente se negaron a trabajar. En todos los buques, al igual que en el caso chileno, se nombraron comités encargados de mantener el movimiento.

La situación producida en la flota británica presenta otra sospechosa similitud con los acontecimientos nacionales. Ante las acusaciones que habría sido organizada por el Partido Comunista británico, uno de los líderes de la rebelión, Len Wincott, se afilió a ese partido inmediatamente después de ser expulsado de la marina inglesa; pero negando haber pertenecido a él con anterioridad. El puerto base del buque de Wincott era Davenport, donde permaneció largo tiempo en transformaciones el «Almirante Latorre».

En el caso chileno, el cerebro del motín, Manuel Astica, siempre negó su militancia comunista, aduciendo profesar la religión católica; pero a pesar que no existe evidencia de la fecha de ingreso al partido, hay constancia que en 1936 era militante.

La táctica desarrollada por el Comintern en las diferentes flotas de guerra queda de manifiesto en el relato que hace Jan Valtin, quien dirigió el congreso reunido de la Sección Marítima de la Tercera Internacional, para analizar los sucesos de la marina británica. Dice:

«En una de estas reuniones, que yo dirigí, se analizaron detenidamente las tácticas empleadas en motines navales del pasado, se aclararon los errores cometidos y se recomendaron métodos promisorios para su aplicación en las campañas marítimas del futuro. Un delegado ruso, que había llegado en el barco soviético "Dnepr" explicó los métodos empleados por los bolcheviques en la flota báltica en los tiempos de los zares. Un alemán, el diputado al Reichtag Willy Leow, explicó el factor numérico que trajo el triunfo en el motín de la armada imperial alemana. Un francés, el camarada Languinier, analizó la revuelta de los marineros en los buques de guerra de Tolón. Hablaron también los delegados de la flota danesa y de la base naval polaca de Gydnia. Pero el mayor interés lo provocaron las lecciones ofrecidas por la rebelión naval de Chile, y el motín de la "Home Fleet" británica en Invergordon, movimiento que se había realizado en septiembre de 1931. Geoge Mink informó sobre los sucesos de Chile, mientras Cole, un delegado de Liverpool, habló sobre el espíritu de Invergordon».

Un último hecho que apunta a la táctica soviética de organizar motines en los buques de guerra es lo sucedido, ocho meses más tarde que los sucesos de Coquimbo, en la escuadra peruana, donde el 7 de mayo de 1932 se sublevaron los marineros de los cruceros «Grau» y «Bolognesi». La Corte Marcial, que funcionó en el puerto de El Callao, atribuyó el conato a una conspiración comunista en combinación con el Apra.

---

[27] El contraalmirante von Schröeders no es categórico en afirmar que el movimiento se habría debido a la semilla comunista sembrada en Gran Bretaña, sino que se hace la pregunta: *«¿No habrá sido aprendida en tierra extranjera la forma acabada e inteligente como se realizó el tenebroso plan de Coquimbo?».*
Continúa: *«¡Pobre acorazado! Mientras la pasión política lo minaba por arriba, probablemente, el odio de clases infiltrado desde Moscú, lo minaba por debajo».*

El «Almirante Latorre» había regresado al país el 12 de abril de 1931, esto es, cuatro meses y medio antes de la sublevación.

Ingreso de los cabos despenseros

Otro factor de primerísima importancia puede encontrarse en el descuido de la Armada para los procesos de selección de su nuevo personal de servicios auxiliares, el cual debía integrarse a la institución y convivir con la gente de mar.

Meses antes que se desencadenara el motín se llamó a egresados de sexto año de humanidades[28] a un concurso para llenar once vacantes de condestables quienes, una vez seleccionados, pasarían a ocupar plazas de cabos despenseros a bordo, donde seguirían un curso rápido de contabilidad, conocerían la vida en el mar y a la vez aprenderían el oficio de ayudante de contador[29].

La selección se efectuó, exclusivamente basada en los resultados de los exámenes de admisión, pero no se indagó en las referencias de los concursantes. Si ello se hubiera hecho, los oficiales encargados de la postulación se habrían llevado más de una sorpresa.

Es difícil comprender este descuido en la selección de los aspirantes a ingresar a las filas de la Armada si se tiene en consideración que al regresar al país el presidente Alessandri su gobierno se caracterizó por una intensa efervescencia social originada por la propaganda comunista, la que se efectuaba sin freno y en cierto modo amparada desde las altas esferas. Esto había obligado a mantener los buques de la escuadra distribuidos en los puertos del norte. En Iquique y en la pampa salitrera se sucedían desórdenes producidos por activistas políticos, cuyo más trágico exponente fueron los sucesos de la oficina «Galicia» que costaron pérdidas de vidas y daños materiales.

El «Almirante Latorre» permaneció en Valparaíso; pero en prevención de alguna infiltración, durante este período, se mantuvo a bordo un servicio especial de vigilancia secreta con personal de Investigaciones a fin de controlar las actividades de la gente de mar y suboficiales, debido a que el tamaño del navío y sus más de mil tripulantes, lo hacían una presa fácil para que prendiera la prédica subversiva.

El primer lugar del concurso para cabos despenseros, de los alrededor de 300 candidatos que se presentaron, lo ocupó Manuel Astica Fuentes, quien era un antiguo agitador que, pese a su juventud, había sido presidente de la Unión de Centros Juveniles Católicos donde había trabajado junto a Clotario Blest, Ricardo Boizard y otros. En los años 1925 y 1926 había sido enviado a la oficina salitrera «Cecilia» en Antofagasta para organizar sindicatos y hacer proselitismo político. Tenía una marcada tendencia socialista y simpatizaba abiertamente con el Partido Comunista[30]. Paralelamente ejercía como periodista.

---

[28] Nivel de educación correspondiente al actual 4º año de enseñanza media.

[29] En declaraciones de uno de los seleccionados, Manuel Astica, indica que pasados seis meses recibirían la promoción a oficiales con el grado de guardiamarina, hecho que no hemos encontrado en ningún otro documento de la época.

[30] A pesar que durante los juicios por la sublevación de la escuadra se le tildó, repetidamente, como perteneciente al Partido Comunista, él siempre lo negó; pero en esa época habría sido simpatizante, pues existe constancia que ingresó alrededor de 1936, donde permaneció, hasta su muerte.

A su regreso del norte fundó la revista «Cóndor» en Santiago y se desempeñó en los diarios «El Día» y «La Mañana» de Talca, como jefe de crónica y de informaciones respectivamente.

Otro de los cabos despenseros contratados, Augusto Zagal Anabalón, era el menor de los insurrectos que fueron condenados; pertenecía a una familia acomodada en la que sus tres hermanos eran profesionales, tenía 22 años y desde un principio actuó como ayudante de Astica.

Para la preparación y posición de ambos personajes no parecía ser el cargo a que aspiraban en la Armada el más apropiado. ¿Qué los llevó a postular? o ¿quiénes los indujeron a hacerlo? Son preguntas, cuya respuesta se llevaron a la tumba.

Otro antecedente que parece apuntar hacia la existencia de una planificación de tipo político subversivo y no a una actitud espontánea de la tripulación motivada por la rebaja de sueldos, es la aparición de una imprenta clandestina a bordo del «Almirante Latorre». El comandante del acorazado, capitán de navío Roberto Hozven Azaola, denunció la existencia de ella al arribo del buque a Chile. El cabo Manuel Astica, ya sucedido el motín, recogió el guante, declarando que cuando se embarcaron los nuevos cabos despenseros contratados, la imprenta ya estaba allí y que era necesaria para imprimir ordenanzas y circulares de diferente tipo todos los días.

Estos antecedentes son importantes, pues el hecho que el comandante del buque hubiera denunciado la existencia de una imprenta a bordo es una prueba que ella no correspondía a los elementos del inventario de la nave ni había sido adquirida por la Armada. Las declaraciones posteriores de Astica no prueban nada, pues la imprenta puede haber sido embarcada con anterioridad al transbordo de los cabos despenseros, tal vez en Inglaterra, como se ha presumido. Es innegable la utilidad que prestó este elemento en la conjura subversiva.

Un ambiente propicio

El campo en que los elementos políticos de izquierda pudieron actuar era propicio, pues en la Armada no se había producido un cambio real y efectivo en el trato que se le daba a las tripulaciones como, a esa fecha, se había hecho en muchas otras marinas. Aún persistían prácticas vejatorias y una desigualdad abismante entre la oficialidad y los suboficiales, sargentos y gente de mar.

En este aspecto coinciden los actores del motín con oficiales jóvenes que salían al servicio en aquellos tormentosos días.

El suboficial preceptor Ernesto González Brion, quien tomó la jefatura del movimiento subversivo, es cáustico al calificar las actitudes normales de los oficiales, en esa época, con respecto a la gente de mar; achaca a la Escuela Naval la formación de sus alumnos, que al egresar, creían saberlo todo y se refiere a la regalada vida que llevaban abordo, la que se regulaba por una ordenanza del año 1780, dictada para el Ejército cuando la marinería era analfabeta.

En su comentario González dice: «*... el oficial seguía, como en los tiempos de la colonia, tratando al marinero como un sirviente, sin preocuparse de su vida personal, dedicado a instruirlo, pero no a educarlo. Esta falta de contacto e interés por sus subordinados les habría impedido, a los oficiales, percatarse del volcán que ardía a sus pies*».

El investigador británico Philip Somervell avala, en parte, lo anterior cuando analiza que la modernización y el crecimiento que había experimentado la Armada le habían dado toda la apariencia de un aumento del profesionalismo, con la conscripción desde 1900, la especialización de los oficiales que demandaba avanzadas técnicas, la complejidad en el mando y la adquisición de nuevos equipos; pero el cambio no había sido acompañado por una modernización de las estructuras institucionales. Había estancamiento en las promociones y frustración de la carrera, lo cual se veía agravado por no haberse hecho reformas en lo relativo al personal, todo lo cual creaba tensiones que generaban agitación y se veía agravado por lo recalcitrante que se mostraban las autoridades con respecto a reformar las leyes que afectaban al personal y a la falta de interés de los legisladores.

Al producirse los sucesos de 1931, la Armada se encontraba en un deplorable estado moral producido por la desidia de los oficiales de alta graduación para remediar las inadecuadas condiciones en que se desempeñaba su gente, particularmente en el apostadero naval de Talcahuano.

Finalmente es un testigo presencial, que posteriormente alcanzara el almirantazgo, quien como cadete embarcado en la escuadra la noche de la tragedia, comenta que un ingrediente puntual que ahondó, más aún, la falta de confianza entre los oficiales y las tripulaciones y el desprestigio en que habían caído los primeros a los ojos de sus subordinados fue el hecho que un almirante que había dirigido la escuadra, de conocidas ínfulas aristócratas, queriendo promover un acercamiento entre la oficialidad y la sociedad santiaguina que veraneaba en los balnearios de la zona central del país, había ordenado que diferentes buques visitaran Papudo y Zapallar, para que los oficiales pudieran bajar a tierra y tomar contacto con los veraneantes.

El «Almirante Latorre», que recién había regresado de su modernización en Europa, había traído una gran cantidad de licores finos[31], de los cuales disponían los oficiales jóvenes para sus incursiones sociales, regresando abordo a altas horas de la noche en embarcaciones menores que conducían marineros del buque, quienes sufrían una deplorable situación económica.

Ambiente huelguístico en el ámbito nacional

En horas de la tarde del 31 de agosto de 1931 comenzó a gestarse en el país un ambiente huelguístico promovido por los empleados de la Caja Nacional de Ahorros[32], quienes afirmaban que habían descubierto que para organizar la Corporación de Salitre de Chile, COSACH, se habían gastado dos mil millones de pesos de 6 peniques en honorarios y comisiones exageradas, por lo que paralizaron sus labores. Como se comprenderá, los motivos eran totalmente ajenos a sus funciones o a su incumbencia, más aún cuando ello había sucedido antes de la caída de Ibáñez, por lo que no tenía ningún sentido ir a un paro en protesta por prácticas de un gobierno que ya no existía. ¿Fue esta huelga la primera expresión de una rebelión más trascendente y la prueba de los móviles políticos que la impulsaban o solamente una sospechosa coincidencia?

[31] El escritor Patricio Mans afirma que se trataba de dieciseis mil libras esterlinas de licores finos.

[32] La Caja Nacional de Ahorros es la antecesora del Banco del Estado, sobre la cual se formó el último durante el segundo gobierno de Ibáñez.

Si bien la actitud de los huelguistas podría haber sido el inicio de un plan revolucionario cuidadosamente preparado, la débil actitud del gobierno demostró que ella sería la tónica que éste mantendría durante la primera fase de la crisis, pues aunque los motivos de los primeros eran fútiles, con ello obtuvieron la remoción de sus jefes, como lo habían solicitado.

La medida de la rebaja de sueldos decretada por el gobierno no fue debidamente comprendida, o deliberadamente se proclamó como de 30%; lo que sucedía solamente en su tramo superior, pues los sueldos que llegaran hasta doscientos cincuenta pesos mensuales se rebajarían en 12% y los que tenían un monto inferior a los $ 3.000 anuales serían pagados sin disminución alguna. Los descuentos serían restituidos cuando la situación de la caja fiscal lo permitiera. Proclamar que se pretendía rebajar todos los sueldos en un 30% era una posición que, lógicamente, tenía más fuerza para formar una dura oposición a la medida. El hecho de haber distorsionado el decreto ante los sublevados hace pensar que solo era el pretexto para iniciar una rebelión ya planificada.

Petición de las tripulaciones al gobierno

A fines de agosto de 1931 se encontraban fondeadas en Coquimbo las dos formaciones en que habían sido agrupados los buques activos, estas eran la escuadra de evoluciones, que regresaba de Puerto Aldea y cuyo Comandante en Jefe era el contraalmirante Abel Campos Carvajal, quien izaba su insignia en el crucero «O'Higgins» y la escuadra de instrucción, al mando de su Comandante en Jefe el capitán de navío Roberto Hozven Azaola, cuyo buque insignia era el acorazado «Almirante Latorre», del cual era también su comandante.

Formaban la escuadra de evoluciones, además del «O'Higgins», cuyo comandante era el capitán de navío Héctor Díaz Aburto, los destructores «Riquelme», al mando del capitán de fragata Alejandro Yánquez; «Hyatt», al mando del oficial de igual grado Manfredo Becerra; «Videla», comandado por el capitán de fragata Humberto Aylwin y «Aldea», a cargo del capitán de fragata Luis Bahamondes. Completaban la lista el submarino «Simpson» y los remolcadores «Gálvez» y «Artilleros».

La escuadra de instrucción estaba constituida, además del «Almirante Latorre», por los destructores «Lynch», «Orella» y «Serrano», a cuyos mandos se encontraban los capitanes de fragata Samuel Ward, Leonardo Huber y Pedro Gallardo, la cual permanecía al ancla en el puerto por economía de combustible.

Existía una franca enemistad entre ambos comandantes en jefe, lo que era público y notorio, llegando al extremo de no saludarse ni hablarse, lo que tendría especial importancia en los acontecimientos que se avecinaban.

Entre los días 24 y 26 de Agosto nació la idea en la marinería de elevar una petición al gobierno para que dejara sin efecto la rebaja de sueldos decretada, la cual debía realizarse por conducto regular a través de los comandantes de los buques, quienes la harían llegar a sus jefes inmediatos y estos, a su vez, a las autoridades superiores del país.

Hasta aquí no existen dudas; pero quienes fueron sus promotores, sus ideólogos y sus ejecutores ha sido una materia de controversia.

Debe comprenderse que todo lo que se ha escrito e investigado es posterior a las primeras sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, donde los defensores trataban de salvar de la pena de muerte a los sentenciados. Cualquier responsabilidad que se pudiera deslindar era importante.

No deja de ser sintomático el hecho que las dos escuadras, que hacían sus ejercicios en forma separada, con solamente cuatro días que habían estado reunidas en el puerto de Coquimbo, se amotinaran tan coordinadamente con una asonada que podría constituir un ejemplo de organización.

El suboficial preceptor Ernesto González Brion, cabeza visible del motín, ha querido involucrar a los oficiales como los promotores de los hechos, los cuales al tener la certidumbre que sus jefes, tanto el contraalmirante Campos como el comodoro Hozven, no elevarían el petitorio al gobierno, habrían acordado aconsejar a la tripulación que lo hiciera, *«para que el honor de ellos no sufra en los casos adversos o desfavorables»*.

Si bien cuesta creer que los oficiales hubieran usado un argumento como el indicado, más increíble aún sería que las tripulaciones aceptaran poner su cuello en la guillotina para que no sufriera el honor de los que propugnaban la idea.

Como veremos más adelante, durante la defensa de los cabecillas para eludir la pena capital, se presentaron documentos firmados por oficiales, contamos cincuenta y ocho, que apoyaban el pliego de peticiones o bien daban ideas para hacer cambios en la redacción de algunos puntos. Estos documentos fueron impugnados por los afectados aduciendo haber sido firmados bajo coacción cuando eran prisioneros en sus buques. Las fechas de los mismos avalan este aserto.

Sin embargo los hechos parecen indicar que hubo apoyo de algunos oficiales para elevar un petitorio, por medio de sus jefes al gobierno.

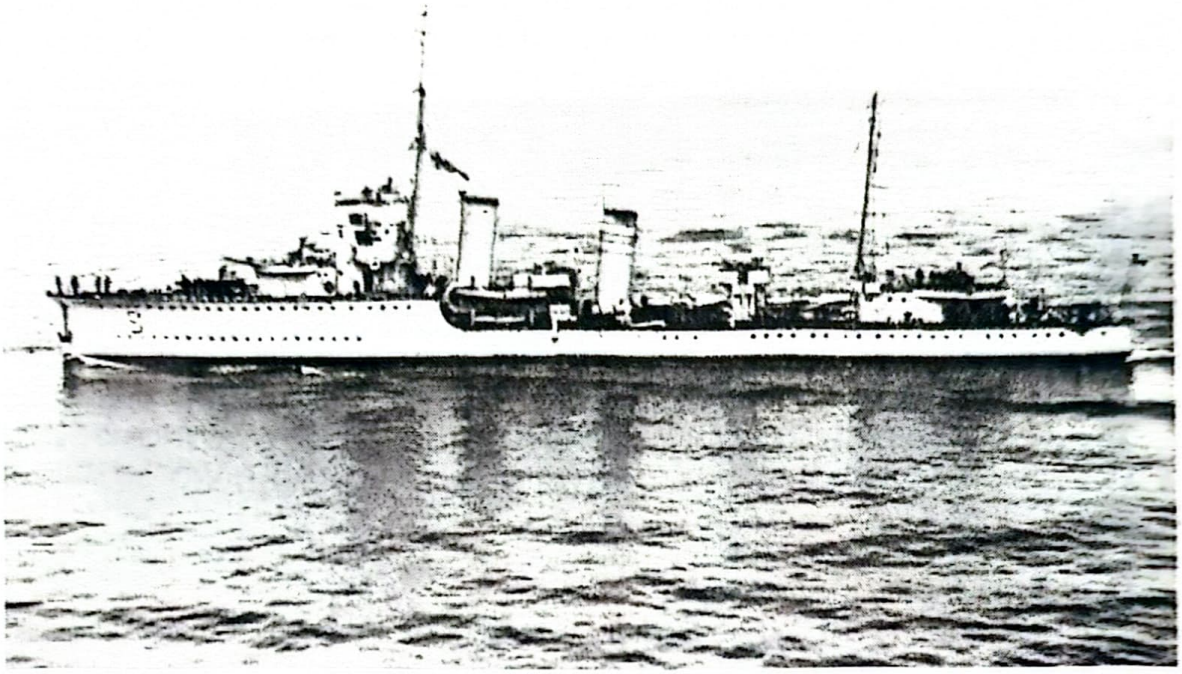
El 26 de agosto se efectuó una reunión en el «Almirante Latorre» para confeccionar las peticiones que cada unidad entregaría a su comandante, lo que se acordó hacer a las 14 horas del lunes 31. No obstante ello, las comisiones encargadas de hacerlo en el crucero «O'Higgins» y el destructor «Videla», se adelantaron entregándolos el sábado 29.

El día 24 había sido informado el subteniente Raúl Rossi del destructor «Hyatt», por el marinero Felipe Córdova, que circulaba entre la tripulación una protesta escrita por la rebaja de sueldos, lo cual puso en conocimiento del segundo comandante, capitán de corbeta Hugo Julio; pero no se tomó acción alguna. Una nueva denuncia del marinero sobre una reunión en tierra de suboficiales, sargentos y cabos el día 27, en el sentido que se había decidido elevar un petitorio a los comandantes en jefe de las dos escuadras, hizo que el comandante del buque, capitán de fragata Manfredo Becerra, se dirigiera al crucero «O'Higgins» a poner en conocimiento del almirante Campos y de su jefe de Estado Mayor, comandante Emilio Daroch, lo sucedido.

Por otra parte, el comandante del destructor «Orella», capitán de fragata Leonardo Huber, había sido informado por su segundo que el personal quería hacer una petición colectiva, por lo que reunió a los suboficiales y sargentos con el fin de averiguar antecedentes y se dirigió al «Almirante Latorre» para informar al comodoro Hozven las peticiones que había recogido esa mañana.

Es decir, los jefes de ambas escuadras fueron informados por sus comandantes; pero ninguno de ellos comunicó la situación al Ministro de Marina.

El sábado 29, los cabecillas convocaron en el «Almirante Latorre» a una reunión con delegaciones del personal de suboficiales y clases de todos los buques, nombrándose un ente directivo que tomó el nombre de Estado Mayor de las Tripulaciones y quedó presidido por el suboficial de ostentaba la mayor antigüedad Ernesto González Brion, el cabo Manuel Astica como secretario y los directores: suboficial mayor Victoriano Zapata, suboficial Guillermo



DESTRUCTOR SERRANO (1927).

Stembecker, cabo Augusto Zagal y cabo Manuel Bastías del «Almirante Latorre»; sargento Lautaro Silva, cabo Juan Bravo y cabo E. Labra del «O'Higgins» y cabo González del «Hyatt». Los cabos Astica y Zagal pertenecían al curso de condestables recién ingresado a la Armada.

Como una forma de presionar para obtener la aprobación de las peticiones, el comité directivo empezó a buscar adeptos que rechazaran recibir su sueldo ese mes debido a la rebaja, lo que consiguieron con los tripulantes de los destructores «Riquelme» y «Videla».

El día lunes 31 se presentaron, cerca de las 11.30 horas, González, Astica, Bravo y Zagal al comodoro Hozven para entregarle un petitorio firmado por alrededor de 800 tripulantes.

La reacción del Comandante en Jefe fue de rechazo indignado ante un hecho prohibido por las ordenanzas navales y citó a una reunión para las 13.30 en su buque y a la cual concurrieron todos los oficiales y tripulantes del «Almirante Latorre» y los comandantes y segundos comandantes de los diferentes buques de ambas escuadras acompañados de delegaciones de las tripulaciones en número de veinte por unidad.

El comodoro lanzó una patriótica arenga e hizo presente tener conocimiento de un movimiento antipatriótico e inadmisible que se estaba gestando, lo que constituía una verdadera traición a la patria.

Dijo, en algunas de sus partes, refiriéndose a la imposición de no aceptar la rebaja de sueldos y a la destitución que se solicitaba del ministro Blanquier: «*Semejante actitud la considero inaudita y desde luego declaro solemnemente que cualquiera que sea el número de los descontentos, recibirá una severa sanción*».

Enseguida los llamó a la reflexión: *«Ustedes no pueden desconocer que en la mayoría de nuestras ciudades existe un gran número de desocupados, de todas las condiciones sociales, que viven angustiados por las más apremiantes necesidades, y si esta situación dolorosa es de ustedes conocida, no es posible aceptar que por egoísmo personal malsano y por falta absoluta de patriotismo, se intente dar un paso semejante, que a la vez sería un insulto para la nación y vendría a herir infamantemente el nombre de la Marina de Guerra».*

Más adelante agregó: *«El patriotismo no significa solamente saber cantar el himno nacional o hacer honores al pabellón no...el patriotismo tiene otra acepción mucho más amplia y alta y otros significados que ustedes parecen desconocer. La patria suele necesitar la ayuda de sus hijos no solamente en la guerra, sino también, como ahora, en la paz para salvar la crisis que la oprime.*

Señores comandantes, jefes, oficiales, suboficiales, y tripulaciones, miremos hacia nuestro pabellón, que no sea la Marina de Guerra, de tradiciones tan nobles y gloriosas, la que dé un paso tan cobarde y que vaya a herir a la nación entera en los precisos momentos en que se bate por salir de una crisis de tan vastas y terribles proporciones».

Después de recalcar las obligaciones de cada uno y pedir sacrificio y patriotismo, terminó disponiendo que se lanzara un ¡Viva Chile!; pero la tripulación permaneció silenciosa, siendo contestado solamente por los cadetes de la Escuela Naval que se encontraban embarcados. Repetida la orden, tampoco fue obedecida. Era el signo de la tempestad que se avecinaba.

Al disolverse la formación, la tripulación se retiró desordenadamente golpeando la cubierta con los pies y un grupo de seis oficiales hizo comentarios contrarios a la alocución del Comodoro, burlándose de las «frases bonitas» y agregando que *«la gente no era una manada de carneros»*. Entre estos se encontraba el capitán de corbeta Roberto Valle, de quien, a la hora de los juicios, se dio a la publicidad un escrito de su puño y letra de adhesión a los sublevados.

Decisión de amotinarse

En vista de lo sucedido, los cabos despenseros del acorazado citaron a un grupo de tripulantes, del grado de suboficial para abajo, para las 16 horas, en el departamento de máquinas hidráulicas.

Para organizar la reunión fueron utilizadas las funciones del cabo electricista Manuel Bastías quien, con el pretexto de revisar los conductores eléctricos, repartió las invitaciones. Es sorprendente como un solo hombre pudo efectuar esa labor sin ser detenido por ningún suboficial, cuya sola acción habría hecho fracasar la intentona.

Durante la asamblea, después de discutir, el cabo 2° Julio Tapia espetó: *«...me parece que lo único que nos resta es tomarnos los buques y dirigirnos nosotros directamente al gobierno pidiéndole la aceptación de nuestras peticiones».*

Decidido lo anterior, el cabo Manuel Astica se dirigió a su oficina de despensero, la cual la constituyó en su cuartel general, desde donde comenzaron a imprimirse circulares incitando a sus compañeros a plegarse, éstas eran distribuidas por el citado cabo Bastías quien, años más tarde, muriera en un enfrentamiento en Concepción cuando era insurgente del Partido Socialista.

Con este hecho adquieren importancia dos aspectos para determinar la autoría de la rebelión, uno de ellos es la denuncia que había hecho anteriormente el comodoro Hozven sobre la existencia de la imprenta clandestina en el buque y que se demostró de gran utilidad para conseguir la adhesión del resto de los tripulantes por medio de la impresión de volantes. La otra es la actitud del cabo despensero Astica, recién incorporado a la Armada, quien encabezó el movimiento, cuando aún no había seguridad alguna que sus compañeros lo acompañarían en la aventura. Es también sintomático el hecho que, de acuerdo a las actividades que había desempeñado con anterioridad como redactor de dos periódicos y activista para formar sindicatos, este tripulante era quien mejor conocía el poder de coacción que podía ejercer en esas circunstancias.

Una nueva reunión, esta vez encabezada por los cabos despenseros Manuel Astica y Augusto Zagal, se citó para las 20 horas en el pañol de municiones del «Almirante Latorre» donde se decidió:

1. Comunicar al resto de las unidades de ambas escuadras que, pasada la medianoche de ese día, las tripulaciones se apoderarían de los buques y tomarían prisioneros, en sus camarotes y con centinela de vista, al comodoro, al almirante, a los comandantes y a los oficiales.
2. Confeccionar un manifiesto explicatorio.
3. Obtener la adhesión de la totalidad de las tripulaciones.
4. Nombrar al Estado Mayor de las Tripulaciones como la cabeza visible del movimiento y diversos comités ejecutivos para encabezar la rebelión.
5. Elaborar un plan de señales especiales para la comunicación entre los buques.
6. Apoderarse de todo el armamento menor y de las municiones
7. Reunirse nuevamente a las 22.00 horas, incluyendo al personal de tripulación que aún no se hubiera incorporado al movimiento.

La reunión de las 22.00 horas fue en el mismo buque, en el departamento de hidráulica en el cual, desde antes de iniciarse, ya se encontraba un grupo de tripulantes dedicado a abrir cajones con municiones y preparar el armamento.

No había un consenso unánime sobre como se debía proceder; mientras el cabo Tapia exigía la adhesión incondicional al motín, surgieron voces disidentes, como el sargento despensero Lautaro Silva que opinaba que, con anterioridad a una medida de fuerza, debían presentarse sus peticiones al Comodoro o el suboficial maquinista Demetrio Rebolledo, quien hizo presente que una rebelión podía prolongarse por algunos días y tal vez por meses y para ello era necesario contar con combustible, víveres, agua y municiones, todo lo cual escaseaba. Los más exaltados pedían una decisión inmediata.

Como la reunión no parecía llegar a una conclusión definitiva, tomaron la palabra sucesivamente los recién contratados cabos despenseros Zagal y Astica y sobrepasando la autoridad de todos los suboficiales y sargentos presentes, impusieron sus ideas a toda esa tripulación con años de servicio en la Armada y tomaron la dirección del movimiento.

La primera medida acordada fue tomarse las salas de armas de cada buque y luego hacer prisioneros a los oficiales de guardia, pasada la medianoche.

Mientras transcurrían las horas para la asonada, González Brion, quizás dándose cuenta de la gravedad del paso que habían decidido dar, acudió donde Astica, que estaba durmiendo y le rogó que postergara el movimiento, pues tenía el convencimiento que sería preferible hablar con el comandante, ya que los oficiales sufrirían la misma rebaja de sus sueldos y

entenderían su posición, pero Astica, negándose a ello, decidió adelantarlo, convirtiéndose así en el virtual jefe del motín[33].

Aprovechando una reunión que debía efectuarse esa noche en el crucero «O'Higgins», con delegaciones de todos los buques surtos en Coquimbo, para organizar un torneo de box que se desarrollaría en La Serena, se informó de lo sucedido esa tarde en el «Almirante Latorre» y se ultimaron los preparativos de la sublevación.

Además del ya citado Estado Mayor de las Tripulaciones, en cada buque se nombró su propio Comité Central, los cuales quedaron formados por seis hombres que tomarían el mando de la nave.

La oficialidad joven bajó franca ese día, pues tenían una fiesta en La Serena, lo cual facilitó la acción de los amotinados.

Falta de medidas adecuadas para controlar el peligro

La situación ocurrida esa tarde debió haber alertado al Comodoro que algo muy grave estaba sucediendo en las escuadras; pero no tomó medidas esenciales para conjurar el peligro, como habría sido acuartelar al personal no permitiendo ningún contacto con otras unidades, exigir a los oficiales que portaran su arma de servicio e informar al mando superior de la institución; pero, al parecer, nada de ello ocurrió. Aunque es posible que Hozven haya comunicado al gobierno lo que estaba sucediendo, pues el ministro de educación Leonardo Guzmán relata que *«para no provocar alarma ni depresión moral en el ambiente, el gobierno prefirió no dar a conocer ciertas noticias inquietantes que llegaban de Coquimbo. En efecto, se supo que durante todo el día 31 de agosto, había habido actividades de seria indisciplina en el barco «Almirante Latorre», en donde el comodoro Roberto Hozven, según relató él mismo, más tarde en el Consejo de Guerra respectivo, fue informado de que se estaba redactando un pliego de peticiones directamente al gobierno, por lo cual pidió al capitán de corbeta don Roberto Valle y al 2° comandante, señor Obrecht, que se preocuparan y tomasen medidas adecuadas. Así se supo que la marinería se estaba proveyendo de pistolas. El señor Hozven, algo inquieto, solicitó una pistola Astra»*.

No es claro el ministro Guzmán en su relato, porque a pesar de afirmar que el gobierno tuvo conocimiento de actos de indisciplina ese mismo día, no indica que fue lo que llegó a sus oídos. Los hechos relatados corresponden a una declaración posterior durante el Consejo de Guerra.

Todos los almirantes, que han escrito al respecto, concuerdan que el manifiesto que les fue dado a conocer al día siguiente fue la primera información que tuvieron. Incluso el contraalmirante Edgardo von Schroeders quien, como veremos, fue el delegado del gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo con los sublevados, hace ver su extrañeza por el hecho que un acontecimiento de esta magnitud, que pasó a las cuatro de la mañana, solo hubiese sido conocida en el ministerio de marina más de doce horas después.

---

[33] Si alguna duda cupiera en esto, en diciembre de 1965, en declaraciones de Astica a la revista Ercilla, refiriéndose al hecho, dice: *«Se fue González y ante aquella situación decidí adelantar la hora del pronunciamiento en el «Latorre»*.

En Coquimbo, el comodoro Hozven quiso informar de lo sucedido esa tarde al contralmirante Campos, para lo cual envió a su segundo, comandante Obrecht; pero éste, al saber que el jefe se encontraba ocupado, en lugar de esperarlo, se limitó a transmitirle la información, sin acentuar su gravedad, por medio del jefe de Estado Mayor, capitán de navío Emilio Daroch.

La enemistad que se tenían ambos comandantes en jefe los llevaron a comunicarse solamente a través de sus subordinados en tan delicadas circunstancias.

La próxima presentación del pliego de peticiones era un secreto a voces en todos los buques y había sido comentado en las cámaras de oficiales de los destructores «Riquelme» y «Lynch» el día viernes 28, en el mismo acorazado «Almirante Latorre» el día sábado 29 y el domingo 30 en el «O'Higgins».

La escuadra de evoluciones tenía un servicio secreto de informaciones a fin de conocer las actividades del personal, tanto a bordo como en tierra; éste estaba compuesto por oficiales del Estado Mayor y el suboficial buzo Humberto Figueroa, individuo leal y de toda confianza, quien informó, el día 29, de la presentación que se haría al Comandante en Jefe de la otra escuadra, lo que ratificó el lunes 31; pero no se tomaron medidas.

No hay claridad si el comodoro Hozven ordenó a sus oficiales armarse, pues las declaraciones de éstos fueron contradictorias en este sentido, pero hay constancia que pidió una pistola al oficial artillero capitán de corbeta Roberto Valle para su uso personal.

El motín en el acorazado «Almirante Latorre»

Conforme a la planificación acordada, a las 03.30 de la madrugada del 1° de septiembre[34], las tripulaciones de todos los buques, que conformaban ambas escuadras, se apoderaron de las salas de armas; pero con anterioridad ya lo habían hecho en el «Almirante Latorre» el tripulante Pedro D'Arcangelli junto con varios complotados, sacando las pistolas, mientras el fogonero Carlos Santis actuaba como jefe de centinelas para que no se permitiese ninguna actividad a los oficiales.

A las 04.00 en punto redujeron a los oficiales de guardia y tomaron presos al resto de la oficialidad en sus camarotes, colocándoles centinelas de vista.

Los sublevados procedieron a reducir y desarmar al guardiamarina Román, que se encontraba en el puente y enseguida a encender una luz roja que constituía la señal acordada para que el resto de los buques hiciera lo mismo.

Al guardiamarina Barros, que se encontraba de guardia, le había sido solicitada su pistola por el oficial artillero, capitán Valle, el día anterior. El subordinado le advirtió a su jefe que estaría de guardia, pero este le insistió en ello, pues al día siguiente le daría otra.

Para la guardia de 04.00 a 08.00 horas debía estar apostado el guardiamarina José Duarte, pero el segundo comandante le había ordenado que no se levantara a hacerlo. Esto es, el oficial de guardia saliente, guardiamarina Barros, se encontraba desarmado y no iba a tener relevo.

[34] La hora de comienzo del motín fue 04.00 horas. Los oficiales que tripulaban los destructores indican la medianoche. En todo caso se trata de un aspecto que no reviste mayor importancia.

El comodoro Hozven se encontraba a bordo, acostado, cuando se presentó a su camarote el cabo Eliodoro Labra que le comunicó que quedaba prisionero y que la tripulación era la que, desde ese momento, mandaba la nave. Hozven apuntó al amotinado con la pistola que le había entregado el capitán Roberto Valle, pero al tratar de disparar, esta no funcionó, pues había sido limada la aguja percutora[35].

En tres oportunidades el Comodoro accionó el arma, fallando otras tantas veces, dejándola después sobre el escritorio, desde donde desapareció[36].

Reaccionando de inmediato hizo a un lado al suboficial y trató de alcanzar la sala de armas; pero se encontró en ésta con un numeroso grupo de tripulantes, armados con fusiles y bayonetas. Al enrostrar su conducta a los amotinados, los individuos Armando González, Evaristo Torres y Carlos Maldonado, propusieron matarlo, lo que fue impedido por el mismo cabo Labra, aduciendo que no quería ver correr sangre y que estaba seguro que alcanzarían la victoria sin dar muerte a nadie. A pesar de ello, un artillero de apellido Loyola quiso disparar al Comodoro por la espalda, lo cual fue impedido por otro marinero. Una vez registrado y desarmado, Hozven se dirigió al puente, donde permaneció durante las catorce horas siguientes, bajo la vigilancia de centinelas. Finalmente fue apresado en su camarote.

La situación en el crucero «O'Higgins»

En el crucero «O'Higgins», buque insignia de la escuadra de evoluciones, el día 31 se daba un cocktail de despedida, a bordo, para retribuir las atenciones que habían recibido en Coquimbo, como era costumbre.

Se encontraba de jefe de servicio el capitán de corbeta Horacio Vío Valdivieso y como oficial de guardia, de 04.00 a 08.00 horas el guardiamarina de primera clase[37] Guillermo Leyghton Leyghton, quien la había recibido del oficial del mismo grado Eduardo Rawlins.

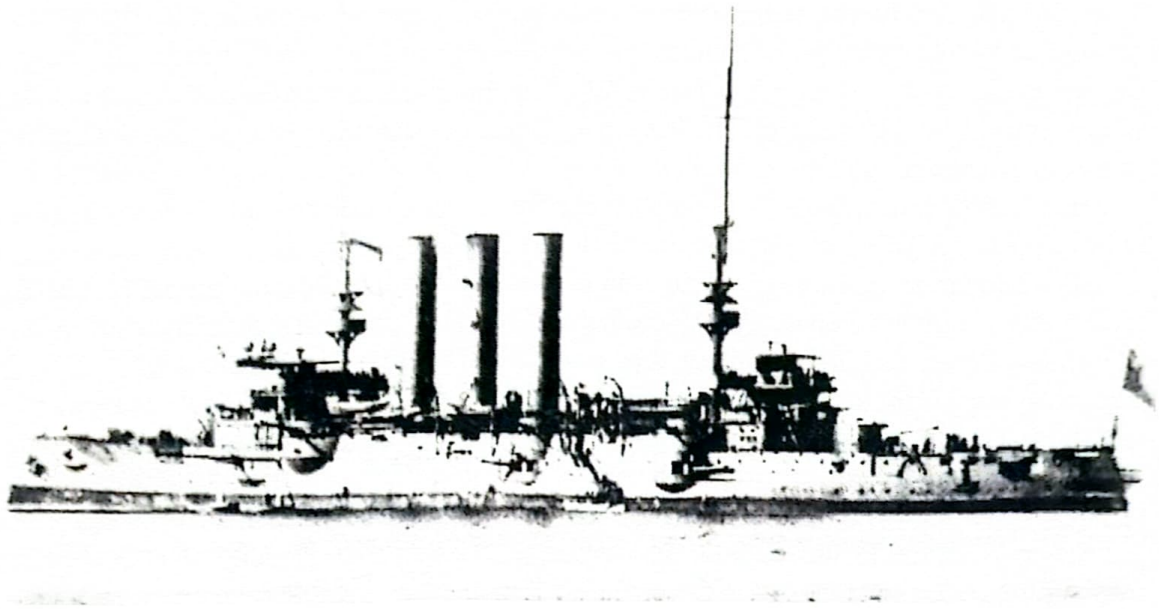
Después de retirarse las visitas, el buque se encontraba tranquilo, sin que nada pudiera hacer pensar que sucedía algo anormal, por lo que Leyghton se dirigió a la cámara de guardias marinas, que se encontraba en la segunda cubierta, para trabajar en la próxima revista que se pasaría al buque, cuando sintió un movimiento que asemejaba al ruido de

---

[35] El sargento artillero del «Almirante Latorre» Hermes Araya González, que no estaba de acuerdo con la sedición y consiguió escaparse y presentarse a la comisaría de carabineros, declaró con fecha 7 de septiembre ante el jefe de la sección informaciones del Estado Mayor General del Ejército en Santiago que: « *El 1° de septiembre a las 04.00 horas aproximadamente fue despertado por tropa de marinería armada y obligado a levantarse; se dirigió a la cubierta donde se impuso que ya toda la marinería estaba insubordinada y trataba de apresar al comandante del «Latorre» quien, desde los primeros instantes presentó resistencia, queriendo defenderse con una pistola que tenía en sus manos. Al arma no dio fuego, porque personas extrañas le habían sustraído el percutor, hecho que hizo exclamar al Comandante que manos criminales le habían impedido defenderse como hubiera querido. Este hecho lo supo el declarante por comentarios de sus camaradas.*
Con respecto a los demás oficiales, ellos fueron apresados en sus camarotes sin que ninguno presentara resistencia...».

[36] Durante el proceso el capitán Valle se defendió diciendo que el Comodoro no había podido disparar, porque no sabía usar la pistola, declaración inaudita, pues Hozven era... especialista en artillería.
El mismo cabo Eliodoro Labra declaró posteriormente, cuando se encontraba preso en la cárcel de Santiago, que conocía el nombre del tripulante que retiró la pistola de marras desde el camarote del Comodoro, pero que no declaraba su nombre por ser un compañero que se encontraba embarcado en el «Almirante Latorre»

[37] El grado de guardiamarina de primera clase corresponde al actual de subteniente.



CRUCERO «O'HIGGINS», BUQUE INSIGNIA DE LA ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN.

fusiles. En ese momento un conscripto le gritó que el personal de tripulación se estaba armando, por lo que saltó afuera para avisar al contraalmirante Abel Campos y al comandante del crucero, capitán de navío Héctor Díaz, para quienes la sorpresa fue total, pues no sospechaban nada. Luego bajó a la tercera cubierta y alcanzó a gritarle al resto de los guardias marinas, que se encontraban en el sollao[38], pero ya habían sido encerrados colocándosele un candado al departamento. Al regresar trataron de detenerlo, pero se defendió con su espada, debido a que no portaba ninguna arma de fuego, hasta que sintió un disparo que lo hirió en una pierna[39].

El disparo lo efectuó el conscripto Fernando Aguayo, quien apuntó a matar; pero se le movió el fusil y afortunadamente fue solamente el rebote del proyectil el que lo alcanzó.

Enseguida la tripulación armada irrumpió en los camarotes de los oficiales apuntándolos y declarándolos prisioneros. Luego se encendieron las luces rojas que indicaban «buque tomado». Un sargento señalero fue nombrado «comandante».

La planificación del golpe fue perfecta. Los sublevados estaban organizados para encerrar a los oficiales y no necesitaron descerrajar los pañoles, sino que ordenadamente se repartieron las armas que estaban en los armerillos. Se notaba que no había actitudes contra la oficialidad, sino que seguían consignas de los cabecillas que dirigían el movimiento desde el «Almirante Latorre». Incluso el suboficial escribiente Santibáñez, hombre de confianza de sus jefes, sabiendo que sus colegas de especialidad dirigían el movimiento, se dirigió al acorazado para tratar que depusieran su actitud.

Los oficiales quedaron encerrados en sus camarotes durante los días que duró la rebelión, incluso durante el bombardeo que efectuó la Fuerza Aérea. Las claraboyas que tenían los camarotes les sirvieron para comunicarse transmitiéndose mensajes entre ellos y disparar

[38] Recibe el nombre de sollao el departamento de los buques de guerra donde duermen los guardias marinas

[39] Varios documentos se refieren al hecho señalando que el guardiamarina Leyghton se habría defendido con un arma de fuego, hiriendo a un tripulante, lo que fue desmentido por él al autor.

hacia el mar, lo cual desconcertaba a los sublevados al no poder determinar desde donde se estaba haciendo fuego. Desde su cautiverio sentían las voces amenazadoras de sus carceleros a través de las puertas.

La situación en los destructores

La decisión de Astica de adelantar la hora de la sublevación había tomado de sorpresa a las tripulaciones de algunos buques, por lo que los cabecillas, al ver que no se encendían los faroles rojos en el penol, que era la señal convenida que indicaba que el buque estaba en poder de la tripulación, lo interpretaron como que habían encontrado resistencia y prepararon una lancha con refuerzos; pero antes que esta saliera se comenzaron a encenderse las consignas que faltaban.

El destructor «Hyatt» fue prácticamente asaltado, siendo abordado por personal armado del «Almirante Latorre» llegado en embarcaciones menores que saltó a la toldilla de la nave. Tanto el comandante, como su segundo, pernoctaban en tierra. El mando lo tenía el oficial de guardia, teniente Raúl Arancibia y lo secundaban el oficial artillero, teniente 2° Carlos Aguirre y el guardiamarina Raúl Rossi. Arancibia alcanzó a avisarle a Aguirre, que ya se había acostado, por lo que se levantó de inmediato; pero se encontró con una situación dominada por los asaltantes en la cual ya no había nada que hacer.

Pasaron la noche detenidos en la cámara de oficiales, pero al amanecer un suboficial les comunicó que no estaba permitido permanecer en ella por lo que debían dirigirse a sus camarotes. Los sublevados querían evitar que los oficiales estuvieran juntos.

El guardiamarina Rossi, por su parte, despertó sobresaltado por los fuertes ruidos que se sentían, se incorporó y salió a la cubierta, donde vio que de dos embarcaciones asaltaban al destructor marineros guiados por el sargento Isidro Pino. Éste al ver al oficial le gritó: *«Ahora mandamos las tripulaciones»* y desarmándolo lo encerraron en su camarote. Acto seguido Pino reunió al personal del buque y les leyó el manifiesto de peticiones que habían confeccionado y nombró comandante al suboficial Seura, que tenía la mayor antigüedad.

Un grupo de los más decididos cabecillas del movimiento, que incluía a Astica y Zagal visitaron los destructores «Aldea», «Serrano», «Riquelme» y «Videla» para dar órdenes y exigir obediencia y en compañía de los tripulantes de cada unidad redujeron a la oficialidad, tal como lo habían hecho en el «Hyatt».

En el «Orella» y en el «Lynch» ya los suboficiales habían dominado, sin ayuda, a los oficiales. Pertenecientes a este último eran los artilleros Víctor Prado, Pedro Fuentes, Julio Briones y Pedro Alarcón quienes, posteriormente firmaron una adhesión al Partido Comunista y recibieron la misión de ser los censores de toda la correspondencia que llegara o saliera de los buques.

En el destructor «Orella» su comandante fue sorprendido durmiendo, irrumpiendo los revoltosos en su camarote. Esta es su propia versión: *«Un despertar como aquel se lo puede imaginar solo el que lo ha experimentado; a nadie le puede penetrar un dolor igual al verse traicionado en una forma tan baja por su gente que, hasta momentos antes, se le tenía completa confianza y estimación.*

En forma recíproca se demostraron siempre a su comandante y oficiales. Dos bayonetas caladas y una pistola me decían que había dejado ser el jefe de ellos y al igual a mí corrían, en ese mismo instante, la misma suerte el resto de los oficiales de la escuadra.

Para comprender aquello, mientras abría los ojos, lo procuraba en medio de las manifestaciones de indignación que les lanzaba a estos despreciables cuidadores que se me habían instalado con aspecto de piratas. De lo único que podía hacer uso en mi defensa, tal como me encontraba, era de los almohadones, poco efectivo, como fácilmente se comprenderá, para repeler a esas fieras disfrazadas de hombres»[40].

Cinco minutos pasado las cuatro de la madrugada el crucero «O'Higgins», los destructores «Orella», «Serrano», «Hyatt» y «Videla» y el cazatorpedero «Lynch» encendieron la luz roja. Pasados otros cinco minutos hicieron lo mismo los destructores «Aldea» y «Riquelme».

Cuando comenzaron a llegar abordo los oficiales que estaban francos, no notaron nada especial, eran saludados de acuerdo con las ordenanzas y una vez en la cubierta se les notificaba del motín y eran conducidos prisioneros y encerrados en sus camarotes.

En tierra no se sabía nada de la situación que estaba viviendo la escuadra y alrededor de la ocho de la mañana una embarcación del destructor «Hyatt» esperaba al comandante Becerra y a su segundo en el muelle, sin que nada anormal se observara, pues las armas estaban escondidas, pero no hubo necesidad de hacer uso de ellas. Al llegar a bordo fueron recibidos por el suboficial Seura quien les informó que el buque había sido tomado y él había sido puesto al mando por órdenes del Estado Mayor de las Tripulaciones. Luego fueron conducidos prisioneros a sus camarotes con centinela de vista.

Por medio de la radio del «Almirante Latorre», este seudo Estado Mayor pidió la cooperación a los buques, escuelas de especialidades y al cuartel de la Defensa de Costa «Pérez Gacitúa» de Talcahuano, e igual cosa a las unidades, escuelas de especialidades y al cuartel «Silva Palma» de Valparaíso.

Desconocemos si otros comandantes de buques tuvieron oportunidad de trasladarse al «Almirante Latorre», después del conato inicial, para tratar de convencer a los rebeldes que depusieran su actitud; pero existe el testimonio del titular del destructor «Orella», capitán de fragata Leonardo Huber a quien, una vez hecho prisionero en su buque, se le presentó un pliego de peticiones que constaba de seis puntos para que lo firmara, el cual se iniciaba con inaceptables insultos a las autoridades de gobierno. Huber logró ser llevado al buque insignia y enfrentarse con el Estado Mayor de las Tripulaciones, increpándolos con dureza y llamándolos al orden, haciéndoles ver que si persistían en su actitud significaba la ruina total de la Marina y del país.

Con ello logró el Huber entablar un diálogo y les hizo presente algunos puntos absurdos que contenían las peticiones que le habían sido entregadas para su firma, como la extradición de los políticos que se habían desempeñado en gobiernos anteriores, lo cual era materia de las relaciones internacionales. Después de una acalorada y descabellada discusión, los llamó a la cordura y les dijo «que se dejasen de pedir leseras» y se concretaran a aquellos aspectos que tenían relación con el bienestar del personal, lo que podrían hacer llamando a todos los comandantes de los buques para que las elevaran por conducto regular. Así lo acordaron y el comandante fue devuelto a su buque.

En la tarde de ese mismo día se le presentó un nuevo pliego que contenía las peticiones definitivas, a lo que Huber consultó por el acuerdo de la mañana, respondiéndosele que no necesitaban a los comandantes. Como estampó su desacuerdo en el documento, le fue redoblada la vigilancia.

[40] Carta personal del comandante Huber a su hermano Fernando.

Comentarios

Mucho se discutió en la época, polémica que ha trascendido en el tiempo, si el motín fue una obra del Partido Comunista como parte de su sistema de infiltración mundial o un movimiento «gremial» producido por el anuncio de la rebaja de sueldos y que fue aprovechada políticamente por esa entidad política junto con los socialistas, los anarquistas y otros grupúsculos revolucionarios.

Aunque la paternidad política fue tajantemente negada en la hora de los juicios, las actitudes que hemos visto del cabo Astica, tales como no perder tiempo después de la primera asamblea del «Almirante Latorre» para iniciar la captación de adherentes por medio de circulares escritas por él mismo, de erigirse en el virtual jefe de las reuniones siguientes, donde impidió que las dudas que asaltaban a otros tripulantes fueran a hacer abortar el movimiento y, desde su puesto de secretario, doblar la mano al jefe del movimiento en cuanto a la hora en que debían tomarse los buques; todo ello considerando que era solo un «advenedizo» recién contratado, sobreponiéndose a hombres maduros que llevaban largos años en la institución, nos lleva a no dudar en la presencia de ese partido en los hechos.

La gestión realizada por el comandante Huber, convenció a los que daban la cara para que depusieran su actitud; pero el desahucio posterior al acuerdo, al regresar este jefe a su buque, es una demostración más que existía una instancia superior a ellos.

Parece innegable la sospecha que, desde su ingreso a la Armada, la labor que debía realizar Astica había sido minuciosamente planificada.

Más aún, se afirma nuestra suposición al constatar que, hasta la toma de los buques, la situación se traducía en un conflicto entre la Marina y sus dotaciones; pero inmediatamente después el cabo Astica redactó un bando en el que se comunicaba a las poblaciones de La Serena y Coquimbo que se habían tomado todos los buques y que desde ese momento ¡tomaban el control de la provincia! La proclama se hizo dramática, desembarcando piquetes armados, precedidos de un tambor e informándoselo al intendente por boca del suboficial Guillermo Stembecker.

Fue tan grande la sorpresa, que las autoridades o el jefe de la guarnición, no atinaron a detener a tan singulares personajes, con lo cual, posiblemente se pudieron evitar males mayores.

Se hizo patrullar el puerto por marineros armados «para evitar desmanes», cuando no se veía quien pudiera cometerlos, los cuales fueron neutralizados por patrullas de carabineros, los cuales se cruzaban saludándose.

El primer pliego de peticiones

Reunido en la cámara de guardias marinas del «Almirante Latorre», el Estado Mayor de las Tripulaciones terminó, el martes 1° de septiembre, la confección del «pliego de peticiones» que los amotinados elevarían al gobierno y se despachó al ministro de marina junto a una proclama. El radio que transcribía estos documentos decía:

"AL MINISTRO DE MARINA
DEL ESTADO MAYOR DE LAS TRIPULACIONES.
Desde hoy, primero de septiembre, tripulaciones de la Armada tienen el control de todos los buques escuadra y división, obedeciendo anhelo obtener cumplidamente puntos contemplados en proclama que enviamos con esta misma fecha.

Esperamos decisión rápida y satisfactoria porque no deseamos prolongar situación creada».

No queremos salirnos de los preceptos disciplinarios, pero nuestros propósitos son llegar a obtener, sin variación, lo que expresamos en nuestra exposición:

PROCLAMAS DE LAS TRIPULACIONES DE LA ARMADA.

En la noche de 31 de agosto al 1 de septiembre de 1931, las tripulaciones de la Armada, que hasta aquí han sido esencialmente obedientes y que no han deliberado jamás, ante los flujos y reflujos de los apasionamientos políticos sino que, por el contrario, han sido siempre juguetes de los mismos, empleándoseles para levantar y derrocar gobiernos, han visto que todas esas maniobras no han hecho otra cosa sino que hundir cada día más al país en la desorganización y en descrédito e insolvencia.

Hoy, inspiradas las tripulaciones de la Armada en los más nobles y sanos propósitos de bien nacional, impulsados por un fervor incontenible, sin desconocer sus deberes indiscutibles de trabajo en tiempo de paz y defensa de la patria en caso de guerra exterior, hace uso de su sagrado derecho de pensar y manifestar a la faz del país los siguientes acuerdos, previa la siguiente declaración:

Las tripulaciones se levantan, no ante sus jefes a los que respetan, no ante la disciplina que la mantendrán férreamente, no ante el país que debe confiar en ellas, sino que ante la incapacidad de la hora y ante el apasionamiento político y fratricida próximo a desbordarse.

Hecho este preámbulo consideramos:

1. Que un deber de patriotismo obliga a las tripulaciones de la Armada a no aceptar dilapidaciones ni depreciaciones de la hacienda del país, por la incapacidad imperante del gobierno actual y la falta de honradez de los anteriores.

2. Que los actuales gobernantes, para solucionar la situación económica, sólo han recurrido a la misma política de sus antecesores, con una falta absoluta de iniciativa y de comprensión, por lo tanto acuerda:

1° No aceptar, por ninguna causa, que los elementos modestos que resguardan la administración y paz del país, sufran cercenamiento y el sacrificio de su escaso bienestar para equilibrar situaciones creadas por malos gobernantes y cubrir déficits producidos por los constantes errores y falta de probidad de las clases gobernantes.

2° Los poderes competentes pedirán la extradición de los políticos ausentes y para deslindar responsabilidades, se les juzgue y sancione conforme a derecho.

3° Que el gobierno, en su deber de velar por los derechos sagrados de todos los ciudadanos civiles y militares o navales, por un prestigio de la libertad que defiende, debe evitar, por todos los medios a su alcance, que en la conciencia de la masa se forme un ambiente hostil a las fuerzas armadas.

4° Que las tripulaciones de la Armada, en su propósito firme de que se consideren sus aspiraciones y derechos, exigen que las escuadras se mantengan al ancla en esta bahía mientras no se solucionen satisfactoriamente los problemas que presentamos a la consideración del gobierno.

5° Que jamás, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulación, los cañones de un barco de guerra chileno serán dirigidos contra sus hermanos del pueblo.

6° A objeto de no prolongar situaciones molestas para el país, las tripulaciones de la Armada dan un plazo de 48 horas para que se conteste satisfactoriamente a las aspiraciones que se contemplan en esta nota.

7° Queremos a la vez dejar constancia de no haber sido influenciados por ninguna idea de índole anárquica y que no estamos dispuestos a tolerar tendencias que entreguen al país en un abismo de desorientación social. No hay un anhelo de defendernos exclusivamente, sino, y en forma especial, de ayudar también a nuestros conciudadanos que actualmente sufren la privación de trabajo por culpa de la incapacidad gubernativa».

Coquimbo, septiembre 1° de 1931. Hora y fecha del radio: 16300
Hora recepción: 1655»

Nadie firma el radio, sino que el anónimo Estado Mayor de las Tripulaciones, lo cual será una característica que se mantendrá para todos los mensajes que se cursen durante el conflicto, por parte de los amotinados.

A pesar que toda la proclama tiene un carácter de indisciplina y de connotación política, es en el último punto donde se da a conocer el sentido de reivindicación social, que se acentuará más adelante.

El gobierno discute como actuar

Conocido el radiograma por parte del gobierno, el ministro de marina contraalmirante Calixto Rogers, reunió a la junta consultiva, integrada por el Inspector General de la Armada vicealmirante Hipólito Marchant, el Director del Personal capitán de navío Julio Merino Benítez, el jefe del Estado Mayor contraalmirante Alejandro García Castelblanco y el Director del Material contralmirante Edgardo von Schroeders.

La primera idea que se barajó fue proceder en forma enérgica y ejemplar, tan rápido como fuera posible, pero se desconocía con que fuerzas se contaba para someter a los sublevados. Toda acción precipitada podría tener consecuencias irremediables en el caso de un fracaso. En Talcahuano se encontraban los submarinos, que todavía se les creía leales, pero su uso significaría echar a pique los buques de las escuadras.

Otro camino era hacerlo con la aviación; pero se dudaba seriamente de su preparación, por lo que se estimaba que la Fuerza Aérea sería incapaz de reducir a las naves.

De la base aérea de Quintero, que hasta marzo de 1930 había pertenecido a la Armada, se temía, y con razón, que estuviera comprometida en la rebelión; tampoco se tenía confianza en El Bosque y finalmente se corrían rumores alarmantes sobre el estado de la disciplina de esa rama de las Fuerzas Armadas.

De la reunión salió la sugerencia de enviar a Coquimbo al ministro de marina o a otro almirante para tomar contacto con las tripulaciones rebeladas y tratar de hacerlas volver a la disciplina.

A las siete de la tarde se reunió el Consejo de Ministros donde el titular de marina sostuvo que no debía emplearse la fuerza para sofocar la rebelión por el temor de que se sumaran a los sublevados otros elementos que, hasta entonces, no se habían adherido. El ministro del interior Horacio Hevia Labbé no participó de esta opinión y sostuvo que debía echarse mano de todas las fuerzas disponibles a fin de concentrarlas frente a los sublevados

y obligarlos a someterse.

La desconfianza que se tenía en la Fuerza Aérea quedó de manifiesto en la nueva reunión que se celebró esa noche en el ministerio de marina, ampliada esta vez a un gran número de jefes y oficiales, entre los cuales se encontraba el ex subsecretario de aviación, coronel Arturo Merino Benítez y el comandante Jessen de la misma arma.

Los marinos insistieron en sus argumentos sobre el peligro que involucraría usar la fuerza, por lo que se manifestaban partidarios de buscar una salida pacífica; pero el coronel Merino Benítez declaró, dogmáticamente, que si a él se le nombraba jefe de la aviación, se comprometía a reducir la escuadra bombardeándola y destruyéndola.

La réplica vino del contraalmirante von Schroeders, quien hizo presente que se consideraba la persona más habilitada para opinar, pues como primer jefe de la Aviación Naval podía considerar ambos aspectos de una posible contienda y tenía pleno conocimiento del poder del arma aérea y de sus limitaciones.

Es muy posible, argumentó, que una Fuerza Aérea debidamente preparada y equipada pudiera, en ciertas condiciones favorables, causarle daño enorme a una escuadra; pero la novel arma chilena no tenía experiencia para actuar eficientemente en un conflicto de esta naturaleza. El coronel Merino replicó, diciendo que para echar a pique a los buques no había necesidad de pegarles ya que con solo unas tres bombas que cayeran al costado del «Almirante Latorre» eran suficientes para hundirlo.

Su hermano, el capitán de navío Julio Merino Benítez, Director del Personal de la Armada, al ver que la conversación se encrespaba, lo tomó del brazo y le dijo: «*Mejor es que te vayas, porque se conoce que en materia de construcción naval estás algo atrasado, ya que no sabes que con los bulges con que fue transformado el acorazado en Inglaterra puede resistir la explosión de cinco o seis torpedos en el mismo costado*».

El coronel Arturo Merino Benítez profesaba un odio no disimulado por la Armada debido a que, tanto los pilotos navales como la toda la institución, se resistían al proyecto de unificar su servicio aéreo con los del Ejército.

Era tan patente esta aversión y el carácter violento del Coronel, que el 23 de enero de 1930, al precipitarse sobre el mar un avión «vedette», que costó la vida al piloto teniente Aníbal Vidal y al copiloto cabo Ernesto Román, había rechazado que una escampavía rastreara la zona con el objeto de encontrar los cadáveres. Fundó su negativa en que nada debía aceptarse de la Marina de Guerra en esas circunstancias.

Por ironía de la vida, dos semanas más tarde, el 7 de febrero de 1930, otra escampavía de la Armada rescataba al coronel Merino Benítez de una muerte segura, cuando su avión cayó a las heladas aguas del Estrecho de Magallanes.

En la segunda reunión, el Consejo de Almirantes decidió elaborar algunas recomendaciones que consideraba esenciales, para hacérselas llegar al gobierno, sobre como manejar la delicada situación, ellas eran:

1. *Buscar una solución, que salvando la autoridad del gobierno y volviendo a la disciplina, permitiera un acuerdo con las tripulaciones de la escuadra.*
2. *Recomendar la conveniencia de una solución tranquila, a fin de no arrastrar a las tripulaciones a actos de violencia, de lo que era difícil predecir su alcance.*
3. *Aconsejaban este temperamento las circunstancias de que el ambiente del país era propicio para que otras instituciones puedan seguir el ejemplo de las tripulaciones.*
4. *Por todos los medios debía evitarse el empleo de fuerzas contra fuerzas, cuyas*

consecuencias no se podían prever.

El gobierno pensó en encomendar tan delicada misión al vicealmirante Olegario Reyes del Río, debido al gran prestigio de que gozaba, pero el hecho de encontrarse en retiro no lo haría tan útil como un oficial en servicio.

El ministro de marina, contraalmirante Calixto Rogers, propuso entonces el nombramiento del capitán de navío de la Artillería de Costa Carlos Bowen, acompañado del oficial ejecutivo del mismo grado Luis Muñoz Artigas; pero, a pesar del gran ascendiente que tenía, se estimó preferible entregar la negociación a un oficial general ejecutivo que fuera más conocido abordo. Los nombres del Inspector General de la Armada, vicealmirante Hipólito Marchant y del jefe del Estado Mayor, contraalmirante Alejandro García Castelblanco, fueron vetados por haber sido ministros del gobierno anterior, recayendo finalmente el nombramiento en el Director del Material, contraalmirante Edgardo von Schroeders[41], acompañado del capitán de navío Luis Muñoz Artigas y del teniente 1° Rogelio Huidobro, como ayudante.

El segundo pliego de peticiones

Entretanto, a bordo de los buques amotinados comenzó a recibirse, durante la noche, las adhesiones de las unidades que se hallaban en Talcahuano. El buque madre de submarinos «Araucano» comunicó haberse impuesto del movimiento y, plegándose a él, se adhería incondicionalmente, poniéndose a sus órdenes. Informaba además que los oficiales estaban desembarcándose y pedía instrucciones para zarpar. Lo haría acompañado de cinco submarinos: «Thomson», «O'Brien», «Guacolda», «Fresia» y «Quidora» y de las escampavías «Orompello»[42] y «Leucotón», una vez que recibiera al personal franco a bordo a las 07.30 horas.

El crucero «Blanco Encalada» también anunció su zarpe a Coquimbo.

Igual apoyo, del mismo puerto, manifestó el Apostadero Naval, la Artillería de Costa, el dique, la radio estación, la Escuela de Máquinas y la Escuela de Artillería, Torpedos y Electricidad.

A la mañana siguiente el petrolero «Maipo», que viajaba a California y había interceptado el radio de la tarde anterior, también daba su apoyo a los sublevados.

También adhirieron sucesivamente la Escuela de Comunicaciones de Viña del Mar, la radio estación de Playa Ancha, su símil de Quintero y la base de hidroaviones. Otro apoyo fue recibido de los suboficiales, clases y tropa del regimiento de artillería «Arica» de La Serena y de los carabineros de Coquimbo.

El movimiento estaba tomando una gravedad que tal vez no se aquilató en un principio y minutos antes de la medianoche de ese 1° de septiembre el gobierno recibía un segundo comunicado del Estado Mayor de las Tripulaciones, que decía:

«LO QUE NECESITAN LAS TRIPULACIONES DE LA ARMADA.

- RECURSOS FAVORABLES PARA EL PUEBLO: hasta la fecha el gobierno se ha limitado a efectuar economías reduciendo sueldos y suprimiendo empleos y puestos públicos, pero no se ha visto aún que intenten una medida que demuestre el interés de los financistas. Sugerimos las siguientes ideas:

[41] El contraalmirante von Schröeders también había sido ministro del gobierno de Ibáñez, por lo que el veto de los almirantes Marchant y García tiene que haber obedecido a otros motivos.

[42] Este buque comunicó posteriormente su imposibilidad de zarpar por encontrarse en dique y sin combustible.

1. *Calcular el tiempo prudencial para suspender el pago de la deuda externa, bajo el punto exclusivo que dentro de ese plazo se restablezca el orden financiero interno del país.*
2. *Subdividir las tierras productoras persiguiendo el fin de que haya el mayor número de productores y propietarios nacionales.*
3. *Que las cajas de créditos, las agencias fiscales, la Mutual de la Armada y del Ejército, reúnan entre todas un capital de trescientos millones de pesos o más, para invertirlos en industrias productivas, en las cuales se dé trabajo al mayor número de obreros sin ocupación. Se pueden indicar entre otras, la construcción de casas para obreros, ampliación de fábricas, etc. Para evitar la importación innecesaria de artículos extranjeros, hacer un llamado patriótico a todos los millonarios chilenos para que suministren, en carácter de préstamo, los fondos que puedan al gobierno, para que éste organice industrias y proporcione trabajo a los obreros.*

- ECONOMÍAS: - El cierre por dos años de la Escuela de Grumetes, de Torpedos, de Comunicaciones, de Artillería Naval y de Máquinas.

- Supresión de los pilotos contratados y del personal guardiero de los Arsenales de Marina; los guardieros pueden ser substituidos por suboficiales o sargentos antiguos con largo tiempo embarcado.

- Reducir a un año el servicio naval obligatorio.

- Gravar con un mayor impuesto los terrenos no cultivados en proporción al número de hectáreas.

- Exigir de la superintendencia que rebaje la tasa de interés al 2% sobre los capitales depositados en el banco, en las cantidades de diez mil pesos arriba, con el objeto de hacer trabajar esos capitales.

- ROPA GRATIS: Que se dé al personal las ropas gratis igual que al Ejército.

- ALIMENTACIÓN: Suprimir la leche, reducir a 20 gramos la grasa y aumentar a tres gramos el té y 25 gramos más de azúcar por ración; que en lo demás la ración quede igual a la que había el 31 de Agosto.

- LEY DE RETIRO: Derogar decretos últimos sobre retiro, dejando en vigencia la tabla de sueldos a base del retiro a los 20 años de servicio y voluntario a los 15 años.

- ESCALAFÓN Y ASCENSOS: Se acuerde los ascensos conforme al antiguo Reglamento N° 4; que se ascienda al personal que actualmente tiene cumplido con exceso el tiempo reglamentario en la plaza.

- SUELDOS: Aceptamos el impuesto y contribución a la renta que se nos hizo hasta el 31 de Julio pasado. La razón de esto es que el personal, debido a la carestía de la vida y que por la naturaleza de su carrera debe estar siempre alejado, tiene gastos superiores a aquellos que no se ven obligados a esto.

- REINCORPORACIÓN: -Que se reincorpore al servicio activo al ex capitán de navío señor Arístides del Solar».

En este radio comienza a vislumbrarse, más claramente, la injerencia extraña a la Armada en el movimiento. Cuando aún no se cumplía el plazo dado para que el gobierno diera una respuesta al anterior, se entra en consideraciones políticas muy ajenas a las inquietudes del marinero, como es el caso de dictar pautas sobre el tiempo prudencial para suspender el pago de la deuda externa, exigir la rebaja de la tasa bancaria de intereses, efectuar una reforma agraria y establecer un impuesto a las tierras no cultivadas.

Este radiograma hizo desaparecer las dudas que se tenían en La Moneda sobre la verdadera naturaleza de la rebelión.

La misión von Schroeders

Impuesta, a nivel de gobierno, la que podríamos llamar la línea blanda, esto es, parlamentar con los sublevados para hacerlos entrar en razones y deponer su actitud, restituyendo a los oficiales a sus puestos, se decidió el viaje del contraalmirante Edgardo von Schroeders para las primeras horas del día 2. El delegado estaba bien elegido de acuerdo al camino que, hasta ese instante, había deseado el alto mando naval; pero después de una reunión ampliada en La Moneda, a la que concurrieron los más destacados exponentes del mundo político[43], la línea a seguir cambió y el negociador recibió como instrucciones para desarrollar su misión las siguientes:

- Por ningún motivo subir a parlamentar a bordo.
- Arreglar una conferencia en tierra y no aceptar imposiciones.
- Exigir que los oficiales volvieran a sus puestos y en seguida que las tripulaciones hicieran sus peticiones por conducto regular.

A las ocho de la mañana del martes 2 se reunieron en el aeropuerto de Los Cerrillos el contraalmirante Edgardo von Schroeders, el capitán de navío Luis Muñoz Artigas y el teniente 1° Rogelio Huidobro; pero a causa de la niebla, no pudieron despegar hasta las 10 AM.

El Estado Mayor de las Tripulaciones fue informado, cerca de las once de la mañana, por el gobernador marítimo de Coquimbo, capitán de corbeta retirado Guillermo Valenzuela, que en la tarde llegaría el Contraalmirante con plenos poderes para solucionar el conflicto.

El negociador, su comitiva y el corresponsal de El Mercurio Oscar Bonzi aterrizaron cerca del mediodía en el fundo Cerrillos de la familia Ripamonti, donde lo esperaban el intendente de la provincia, el subdelegado de Coquimbo y el gobernador marítimo.

Crisis ministerial

Antes que el contraalmirante von Schroeders pudiera iniciar su misión, en Santiago el gabinete había renunciado después de un Consejo de Ministros celebrado a las tres y media de la tarde. En la composición del nuevo ministerio volvieron a discutirse todas las posiciones y los intereses partidistas. Unos interpretaban la salida del ministro del interior Horacio Hevia

[43] El vicepresidente Trucco reunió en La Moneda a todos los ministros y a las siguientes personalidades: Arturo Alessandri Palma, Ladislao Errazúriz, Pedro Opaso Letelier (presidente del Senado), Guillermo Labarca (presidente del Partido Radical), Alfredo Piwonka, Enrique Zañartu Prieto, Manuel Hidalgo, Doctor Selim Carrasco, Alejo Lira, Santiago Wilson, Emilio Bello Codesido, Luis A. Silva (director de El Diario Ilustrado), Francisco Bulnes Correa, Rafael Urrejola, Eulogio Rojas Mery, Arcadio Meza, Ramón Montero, Pedro N. Montenegro, Gustavo Walker, Julio Bustos, Domingo Durán, Fernando Maira, Hernán Alessandri, Juan Bautista Soto y Elías Lafferte. Según Patricio Manns, Elías Lafferte habría desmentido, al día siguiente, en carta a El Mercurio, su participación en la reunión. La rectificación es importante debido a su condición de fundador y patriarca del Partido Comunista de Chile y que probablemente no quiso ser partícipe de una reunión donde se decidiría ahogar un movimiento cuidadosamente preparado y ordenado por su partido.

por representar la línea dura, mientras que los sublevados consideraban que se debía a que era conciliador. Otros lo achacaban a su posición cercana al ex presidente Alessandri que había condenado tibiamente la rebelión, es decir, como venía sucediendo desde antiguo, las conveniencias políticas se sobreponían a la crítica situación que vivía la nación.

El nuevo gabinete quedó constituido por Marcial Mora Miranda, radical, en interior; Luis Izquierdo, liberal, en relaciones exteriores; Arturo Prat Carvajal, liberal e hijo del héroe de Iquique, en hacienda[44]; Leonardo Guzmán, radical, en educación; Enrique Matta Figueroa, antiibañista que había formado parte del comité de París, en fomento; Santiago Wilson en bienestar social; Horacio Walker, conservador antiibañista, en justicia; general Carlos Vergara Montero en guerra; contraalmirante Carlos Spoerer, en marina y Carlos Alberto Martínez en tierras y colonización.

La presencia del general Carlos Vergara Montero en el ministerio de guerra dio la pauta al país que con este cambio se buscaba desarrollar una acción eficaz, como lo justificaba la gravedad del momento que se vivía. Se trataba de un hombre enérgico, quien era un militar por vocación y constituía una de las figuras más brillantes del Ejército.

Desde su paso por la Escuela Militar había revelado su fuerte personalidad, destacándose como uno de los alumnos más aventajados y de mayores condiciones para la carrera de las armas.

Su sentido de la disciplina y de la sujeción a las ordenanzas, el espíritu profesional y su patriotismo, sereno, profundo y sin vanos alardes, eran sus características desde sus inicios en la institución.

Perteneciente al arma de infantería, había sido enviado a Alemania para perfeccionar sus conocimientos y recoger las nuevas enseñanzas militares que había dejado la Primera Guerra Mundial.

A su regreso a Chile había reorganizado la Escuela de Aplicación de Infantería, modelándola de acuerdo a los conocimientos que había adquirido en el viejo mundo, hábilmente adaptados a la idiosincrasia nacional, logrando crear un soldado con un gran espíritu de disciplina y de un gran sentido patriótico.

Organizó, además, los cursos de informaciones para jefes y oficiales, que dieron como fruto los más eficientes del continente.

Alejado por Ibañez de Santiago, por el temor que le causaba su gran popularidad en el Ejército, se hizo cargo de la recién creada comandancia del Destacamento Magallanes en Punta Arenas, desde donde regresó al Estado Mayor del Ejército, cargo en el cual lo sorprendió su designación como ministro de guerra en las difíciles circunstancias que estamos narrando.

Junto con el cambio de gabinete, se pidió al parlamento la autorización para declarar el estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional; el ministro de guerra dispuso el acuartelamiento de las tropas en la capital y el patrullaje de la ciudad por efectivos del Ejército. Además se acordó hacer una breve declaración sobre la política de austeridad y economía en los gastos públicos y no hacer rebajas de sueldos que no fueran establecidas por medio de una ley debidamente estudiada y se procuraría evitar la cesantía del personal en actividad en ese momento. Con ello se eliminaba el motivo principal de la sublevación.

[44] Con su nombramiento se pensaba apaciguar a las tripulaciones que dirigían su ira contra el ex detentor de la cartera, Pedro Blanquier.

Donde negociar

Las primeras dificultades entre el contraalmirante von Schroeders y el gobierno se produjeron antes que tuviera lugar cualquier intento de mediación. Sus instrucciones le exigían que por ningún motivo debía ir a bordo y que las reuniones debían verificarse en tierra, en la intendencia de La Serena, como una forma de acentuar la autoridad del gobierno; pero el negociador, al saber que los amotinados no deseaban moverse del puerto, empezó su misión citando a una comisión representativa del Estado Mayor de las Tripulaciones a conferenciar en la gobernación marítima de Coquimbo. Aunque el lugar no tuviera gran importancia, la molestia producida en los estamentos gubernamentales se explica por el pánico que tenían que las circunstancias condujeran al país a un nuevo golpe militar y trataban, por todos los medios, de demostrar que tenía la autoridad.

A pesar que, al aterrizar en Coquimbo, el Contraalmirante había sido informado por el Gobernador Marítimo que los sublevados se negaban a tener las reuniones en tierra, citó para las 15.00 horas de ese día a los representantes de los sublevados para conferenciar con ellos y ponerles en conocimiento de las instrucciones que tenía; pero 30 minutos antes de la hora se presentó el suboficial radiotelegrafista Guillermo Steembecker, acompañado de dos o tres marineros armados, entregándole una comunicación que lo conminaba a ir a bordo, garantizándole una estricta disciplina y corrección de las tripulaciones hacia su persona y colocaba una embarcación del acorazado a su disposición para el traslado. Nadie firmaba la nota manteniendo el anonimato, existiendo solamente un timbre que rezaba «Estado Mayor».

Von Schroeders respondió indicando que las instrucciones que traía no le permitían ir a bordo hasta que no estuviera normalizada la situación; pero que no veía inconveniente que se las diera a conocer en tierra, pues eran claras y definidas. A la vez telegrafió al gobierno informando al respecto.

Paralelamente el gobernador marítimo de Coquimbo recibió otra comunicación informándole que quedaba estrictamente prohibido el vuelo de cualquier avión sobre la bahía.

El «comodoro» Steembecker

Como hemos mencionado, el nexo entre el contraalmirante von Schroeders y los sublevados fue, en primera instancia, el suboficial radiotelegrafista Guillermo Steembecker, cuya vida novelesca es interesante conocer.

Hombre apuesto y de fácil palabra, bajó a su primera entrevista con el delegado del gobierno para convencerlo que las reuniones debían efectuarse a bordo, porque ahí estaba constituido el Estado Mayor de las Tripulaciones. Lo hacía con un aire de superioridad y arrogancia haciéndose llamar «comodoro».

Había nacido en Ovalle perdiendo muy temprano a su padre, debiendo su madre encargarse de la educación de sus diez hijos. Fue un buen alumno y en la época del alzamiento contaba con 32 años.

A los 16 se había embarcado como tripulante en un velero inglés con rumbo a Irlanda recién iniciada la Primera Guerra Mundial; pero al desembarcar en Inglaterra fue tomado prisionero debido a sus facciones y apellido alemán, llevado a un campo de concentración y acusado de espía, siendo sentenciado a la pena capital.

Fue absuelto y embarcado en el vapor «Ortega» rumbo a su patria, pero en una escala que hizo éste en La Pallice, donde soldados prisioneros alemanes trabajaban en las faenas de carga del puerto, hizo explosión un gran depósito de pólvora y municiones, en la víspera del zarpe, cerca del muelle. Como se había informado que en el «Ortega» viajaba un ex convicto de un campo de concentración, al cual no estaba de más vigilar y que tenía prohibición de bajar a tierra y lo había hecho, fue aprehendido a bordo, salvándole el capitán del buque testificando que no había salido de su nave.

Al poco tiempo de haber regresado a Chile ingresó a la Armada, efectuando un curso de electricista y siendo trasladado sucesivamente a Punta Arenas y Antofagasta a cargo de la radioestación.

Aprovechando el viaje del «Almirante Latorre» a Inglaterra para su modernización, Steembecker fue enviado a Alemania para cursar radiotelegrafía durante todo el tiempo que demoraran las transformaciones del buque. Si la semilla del motín fue sembrada en Gran Bretaña, como lo supone el contraalmirante von Schroeders ¿Podría haber sido el suboficial telegrafista un contacto importante debido a su mayor cultura y conocimiento, al menos, del idioma alemán?

Guillermo Steembecker tenía un sentimiento hostil, muy oculto, pues a veces solía quejarse amargamente de la injusticia que se cometía con él, respecto a su ascenso, pues hacía más de diez años que permanecía en el mismo puesto, mientras otros lograban rápidamente escalar grados superiores.

Durante la sublevación, cuando algunos exaltados propusieron tomar venganza contra jefes y oficiales y, como una medida de fuerza, insinuaron el fusilamiento de ellos, habría sido Steembecker quien rechazó indignado la proposición, declarando que el movimiento no era de resistencia activa, ni con derramamiento de sangre y que ellos se creían bastante fuertes para imponer sus peticiones, sin necesidad de llegar a las vías de hecho.

Dentro del comité de los insurrectos, este suboficial fue delegado y encargado de las telecomunicaciones, dada su condición de radiotelegrafista y su preparación..

Las instrucciones del gobierno

Volviendo a la petición del contraalmirante von Schroeders al gobierno para dirigirse a bordo, el ministro de marina fue enfático en ratificar lo ya dicho, sintetizado en los siguientes puntos:

«1. *Que la conferencia debía tener lugar en tierra.*
2. *Que no fuera a parlamentar*
3. *Que se repusiera a todos los jefes y oficiales en sus puestos.*
4. *Que las peticiones debía hacerse después por conducto regular.*
5. *No omitir gestión para conseguir que la conferencia tenga lugar en tierra y obtener éxito en la comisión».*

La negativa a la posición del gobierno no se dejó esperar y arrogantemente los sublevados informaron a von Schroeders que su decisión no iba a cambiar en absoluto, además que no veían inconveniente alguno para que el Contraalmirante fuera a parlamentar con ellos exigiendo, en lo posible, una contestación definitiva con el portador.

El corresponsal de El Mercurio, Oscar Bonzi, que como vimos, había viajado en el mismo avión con el contraalmirante von Schroeders, relata que a las 11 de la noche del 2,

numerosas personalidades de Coquimbo y La Serena, entre ellas dos representantes comunistas, fueron a bordo de los barcos alzados para imponerse de la situación. Los jefes rebeldes dijeron que esto no era un movimiento político sino de orden económico; pero de todas formas los representantes comunistas permanecieron a bordo por 36 horas. Los visitantes pidieron calma e informaron que un almirante iba, mandado por el gobierno, para arreglar la situación.

Mientras la posición de los amotinados se había ido endureciendo al verse apoyados por los partidos políticos de izquierda, la del Contraalmirante se fue ablandando y ante la ninguna reacción del gobierno central por la negativa que se le daba, decidió enviar a bordo una verdadera súplica paternal que decía:

«Con profundo sentimiento recibo la contestación de Uds. y lamento sinceramente no poderlos servir como hubieran sido mis más ardientes deseos en estos momentos tan delicados para el país.

Como compañero de armas, que se ha encanecido en el servicio, con intenso afecto por sus patriotas tripulaciones, hoy momentáneamente ofuscadas, les pido un rasgo de cordura para salvar en lo que se pueda el prestigio y el futuro de nuestra gloriosa institución.

Inspirado en los más altos ideales para con mi patria, que es también la de Uds. y para evitar males irreparables que todos después tendremos que sufrir, les agradecería infinito enviaran unos pocos representantes de su Estado Mayor, solamente para explicarles las instrucciones que traigo del supremo gobierno, de las cuales aún no me puedo apartar y que podrían ser precursoras de un mejor entendimiento.

Enseguida Uds. las pueden estudiar a bordo inspirados en el más sagrado de los deberes ciudadanos: El santo amor al pueblo chileno.

Escuchen el consejo de su viejo almirante ya que nada pierden con oírlo».

Von Schroeders, junto con enviar una copia de su mensaje al gobierno, le hacía saber que corrían rumores que la escuadra zarparía al norte, donde creían contar con ayuda.

Luego, al informarles de una nueva negativa a su petición, daba por terminadas sus gestiones y hacía presente que se propiciaba un mitin comunista en el teatro de la ciudad al que asistiría el pueblo y había sido especialmente invitado el comité de las tripulaciones.

A esta altura el gobierno tenía dos caminos: o daba por fracasada la gestión conciliadora e iniciaba la búsqueda de otros medios para hallar una salida, o bien autorizaba al contraalmirante von Schroeders para ir a bordo a negociar, siempre que se cumplieran las promesas que se le habían hecho de respetar su jerarquía, rendir los honores a su rango y velar por su seguridad.

Se optó por lo segundo, quedando fijada la reunión para la mañana del día siguiente.

Así caía la noche del martes 2 de septiembre, tal vez el día más largo en la vida del contraalmirante von Schroeders.

Capítulo IV
Las negociaciones

Primera reunión del delegado a bordo

Von Schroeders fue autorizado para ir a bordo, pero antes de dirigirse al buque insignia, recibió un radiograma del gobierno donde le hacían saber que se había dispuesto el pago inmediato de los sueldos del mes de agosto en la misma forma como se había hecho en julio. Si se trataba de un movimiento «gremial» producido por la injusticia que significaba el decreto de la rebaja de sueldos y que levantaba simpatías en algunos sectores de la población, esta era una carta de triunfo que daba satisfacción a los motivos que habían producido el motín. Si ello no los solucionaba, las causas debían buscarse por otros lados.

Una lancha del «Almirante Latorre», con personal armado y mandada por el «comodoro» Steembecker, quien se presentó de espada y guantes, esperaba al delegado para llevarlo a bordo.

Al llegar al portalón se le rindieron honores de banda y pito y se izó la insignia de contraalmirante; todas las apariencias eran las de una situación normal, salvo la ausencia del comandante y del oficial de guardia para recibirlo.

Von Schroeders, acompañado del capitán de navío Muñoz Artigas y del teniente Huidobro, fueron conducidos por un suboficial, que oficiaba de comandante del acorazado, a la cámara de guardias marinas, donde los esperaba el anónimo Estado Mayor de las Tripulaciones.

Unas 50 ó 60 personas copaban un departamento calculado para la mitad. A popa presidía la reunión el suboficial preceptor Ernesto González Brion. Gordo, lampiño, calvo, bien tenido, de modos suaves, ademanes estudiados y palabra respetuosa. Había sido hombre de confianza del comodoro Hozven, que se encontraba prisionero en el mismo buque y, con anterioridad, de varios otros almirantes y comandantes.

El Contraalmirante se sentó al centro de una mesa en que había más de veinte hombres de tripulación que representaban a todos los grados y especialidades. A sus lados lo hicieron el capitán Muñoz y el teniente Huidobro. El resto de los asistentes tuvo que quedarse de pie, con excepción de un pequeño grupo que se instaló en una mesa chica a las espaldas de González, donde uno oficiaba de taquígrafo; pero que muy pronto tuvo que abandonar su cometido ante la imposibilidad de registrar una movida sesión de cinco horas de duración.

Inició la reunión el delegado del gobierno haciendo una exhortación al regreso a la disciplina, a plantear las consecuencias que su actitud tenía para el país, para la Armada y para ellos mismos; les solicitó cooperación para llegar a una fórmula que consultara las

aspiraciones que fueran justas y que, a la vez, salvaguardara el prestigio y la dignidad del gobierno, no aceptando, por motivo alguno, imposiciones.

La representatividad del Contraalmirante fue puesta en duda, lo que constituyó el primer escollo que ponían los rebeldes para llegar a un acuerdo. El afectado protestó por ello y algunos de los presentes lo apoyaron haciendo ver que estaban dudando de la palabra de un alto jefe de la institución que había sido un superior leal con sus subalternos; pero el suboficial preceptor González cortó la discusión diciendo: «*En los momentos críticos hay que dejar a un lado las consideraciones sentimentales*».

Enseguida von Schroeders propuso comenzar, sin pérdida de tiempo, la discusión de cada uno de los puntos que contemplaba el pliego de peticiones, a lo que el suboficial González lo conminó a terminar antes de las cinco de la tarde en que se cumplían las 48 horas que se había dado de plazo al gobierno para solucionar, satisfactoriamente, todas las aspiraciones y sobre las cuales no aceptarían ninguna alteración.

Mientras la posición del gobierno se había ido haciendo más débil desde el inicio de la crisis, la de los amotinados, a cada momento, era más fuerte. Al ruego de von Schroeders de ser recibido a bordo, ahora se sumaba la aceptación de discutir el «pliego de peticiones». Si el delegado se hubiera remitido a la misión que se le había encomendado, de restablecer la disciplina usando su ascendiente, pero rechazando entrar a considerar los puntos propuestos mientras no se hicieran por conducto regular y haciendo ver que mientras mayor tiempo pasara, más estrictas serían las sanciones, posiblemente el envalentonamiento de los cabecillas habría sido menor, porque sus propios compañeros que no estuvieran de acuerdo con ellos y temieran las consecuencias, los habrían neutralizado.

El primer punto a discutir era la rebaja de las remuneraciones y aquí el delegado tenía su gran carta de triunfo, pues pudo comunicar que el nuevo ministro de hacienda Arturo Prat, como una deferencia especial a la Marina, había derogado el decreto Blanquier y los sueldos de agosto serían pagados en igual forma como lo había sido en julio.

El sargento radiotelegrafista Caldera, que estaba sentado frente al Contraalmirante, se puso de pie y pidiendo respetuosamente la venía al suboficial González, que presidía la asamblea, manifestó que esa decisión no les daba ninguna seguridad que para los meses siguientes no se volvería a poner en vigencia el decreto que les rebajaba los sueldos, por lo que necesitaba que sus emolumentos actuales fueran considerados como mínimos, pues en caso contrario, si llegaran a ser tocados, se verían obligados a hacer una nueva sublevación.

Von Schroeders le replicó que aceptar una cláusula como la indicada sería simplemente un engaño para ellos, pues nadie podía garantizar el futuro económico del país. Enseguida se explayó sobre la estabilización económica para el futuro y algunas medidas que se estaban considerando, tales como nuevas emisiones de dinero, evitar el éxodo de capitales al extranjero, impuesto a las tierras improductivas, etc.; pero que todos esos aspectos no eran de la incumbencia de la Armada, pues no estaban capacitados para ello, sino que correspondían al gobierno.

Cuando parecía que se estaba produciendo un clima de armonía y que el delegado estaba obteniendo éxito en su misión, se levantó el cabo despensero Astica[45], que se encontraba

[45] Según el autor izquierdista Patricio Manns el contraalmirante Von Schroeders manifestó, una vez dictadas las sentencias del Consejo de Guerra: «*Al ver que el primer round había sido del delegado, se levantó el hombre que considero el más funesto de todos los que ví en la reunión: el despensero Astica. No comprendo como el Consejo de Guerra de San Felipe no condenó a este energúmeno a la pena de muerte*».

sentado a la derecha de González y a quien durante toda la discusión le había entregado papeles o dado instrucciones al oído para que entorpeciera cualquier argumento que podía poner término al conflicto, y sin pedir la venia, como lo había hecho el resto que quería hacer uso de la palabra, arremetió insolentemente contra las expresiones del Contraalmirante.

En forma altanera le espetó que estaba equivocado, pues ellos no eran gente ignorante que no entendieran los problemas financieros, como debía habérselo imaginado, sino que él era versado en economía política y por eso criticaba a los hombres del gobierno que estaban llevando al país a la ruina, disertando durante diez minutos sobre la balanza de pagos, el encaje de oro, el aumento de la producción, la salida de capitales y la emisión inorgánica, lo cual produciría inflación provocando la peor ruina que podría caer sobre el país.

El delegado contestó haciendo presente que celebraba que se encontrara a bordo una persona tan versada en economía; pero que lamentablemente no lo podía seguir en tan interesante tópico, porque era algo académico que los alejaba del objetivo y era preferible dejarlo a los especialistas que tenía el gobierno, por lo que proponía pasar a los puntos siguientes.

El segundo se refería a pedir la extradición de los políticos causantes del desastre económico del país y que habían huido al exterior, el cual fue eliminado al hacer presente que era materia que correspondía a los tribunales de justicia y eran ellos quienes debían adoptar sus resoluciones de acuerdo al resultado que arrojaran los sumarios respectivos.

El aspecto siguiente no dio pábulo a discusión alguna, pues se trataba de velar para que en la opinión pública no se formara un ambiente adverso a las fuerzas armadas. Von Schroeders manifestó al respecto que lo comprendía y apoyaba y que estaba seguro que la parte sana y desapasionada del país lo compartía. Por su parte se haría un deber expresarle al gobierno la indignación que había despertado en las tripulaciones la campaña de calumnias existente.

Un cabo torpedista quiso llevar la discusión al terreno político condenando, en duros términos, la politiquería reinante y señalando a Arturo Alessandri como el culpable del desorden en que había caído el país. El delegado le replicó que no era la Armada la llamada a juzgar las responsabilidades de los hombres que habían dirigido la política nacional.

El punto cuarto, que exigía la permanencia de los buques en Coquimbo mientras se arreglaba la situación, casi no valía la pena discutirlo, pues ¿cómo podría ordenarse el zarpe de ellos mientras los comandantes y los oficiales se hallaran prisioneros?

El Contraalmirante pidió la eliminación del punto quinto que hablaba que jamás, mientras hubiera a bordo un solo individuo de tripulación, los cañones de un buque se dirigirían contra sus hermanos del pueblo, haciéndoles ver que era algo puesto solamente para la galería y que podría tener graves consecuencias en una guerra, pues bastaba que declaran que los enemigos eran sus hermanos[46].

En el número seis, en que se concedían 48 horas de plazo para tener una respuesta satisfactoria, el Contraalmirante les aseguró que los deseos del gobierno y del país entero eran que esa bochornosa situación se solucionara cuanto antes.

[46] La posición de von Schroeders de eliminar este punto fue acremente criticada posteriormente, en el gobierno, por el ministro de educación Leonardo Guzmán, que formaba parte de los duros en el gabinete. Su eliminación podría servir para que ciudades indefensas sufrieran las consecuencias del ánimo violento que, poco a poco, se hacía más visible entre los rebeldes; como efectivamente La Serena y Valparaíso recibieron amenazas de bombardeo por parte de los insubordinados.

El Almirante von Schroeders, enviado por el Gobierno a parlamentar con los insurrectos, momentos antes de embarcarse en el «Almirante Latorre», a celebrar una de las infructuosas reuniones.

El último punto era solamente una constancia que querían dejar los amotinados que no estaban influidos por ideas anárquicas.

Apoyo de las tripulaciones de Talcahuano

Algunos historiadores han querido probar la tesis que la misión encomendada por el gobierno al delegado solamente tenía por objeto ganar tiempo y contemporizar para preparar un ataque que redujera a los amotinados, teoría que queda desvirtuada al comprobar que antes que se produjera la primera reunión, el Estado Mayor de las Tripulaciones daba órdenes para aumentar sus fuerzas con los buques que se encontraban en Talcahuano y que, como veremos, el retardo de su llegada fue el motivo aducido por los sublevados para no subscribir un acuerdo.

La reunión en el «Almirante Latorre» estaba programada para las 11.00 horas del día 3, pero la noche anterior habían solicitado el zarpe de los buques que se encontraran en condiciones de hacerlo en Talcahuano. A las nueve de la mañana consultaban sobre el cumplimiento de la orden, recibiendo como respuesta que lo habían hecho a las cinco y media comandados por el crucero «Blanco Encalada», incluyendo al transporte «Micalvi» que llevaría el carbón que necesitaba la escuadra.

Minutos antes de las once de la mañana un nuevo comunicado de Talcahuano informaba la adhesión incondicional de todas las tripulaciones del Apostadero Naval, incluyendo la Artillería de Costa, los que procederían en forma pacífica *«mientras las necesidades del servicio lo permitieran»*.

El personal que laboraba en el dique de Talcahuano envió, por su parte, otro comunicado al comandante superintendente de la repartición que exponía que, en vista de la situación

producida y considerando que eran los directamente afectados, se adherían incondicionalmente al movimiento promovido por las tripulaciones de la escuadra y formulaba las siguientes peticiones:

1° Castigo inmediato y confiscación de todos los bienes de los responsables de llevar al país a la bancarrota.
2° División de las tierras.
3° Socialización de las industrias.
4° Pago de la enorme deuda externa que tenía el país por todos los chilenos, debiendo los millonarios aportar patrióticamente un porcentaje de sus riquezas, para lo cual el parlamento debía dictar una ley al respecto.
5° Cerrar por un período de cinco años las escuelas navales y militares, además de otras que fueran innecesarias.
6° Derecho de asociación de las fuerzas armadas en general.
7° Reincorporación al servicio de los obreros del arsenal que habían sido exonerados, previa filiación como pertenecientes a la Armada, computándoseles, para efectos de retiro, todo el tiempo que habían trabajado a jornal.
8° El personal provisorio debía gozar de los mismos beneficios que el de planta e incluirse en la Caja de Retiro de la Armada.
9° Considerando que el movimiento representaba las aspiraciones de todo el *«proletariado»*, en ningún caso se podrían tomar represalias contra ellos.

Retransmitido el petitorio al «Almirante Latorre», los sublevados respondieron expresando su júbilo *«por la preciosa adhesión de sus hermanos de armas y la decisión y altos fines que envuelve el movimiento»*.

Cuando estaban por darse concluidas las discusiones del primer pliego y notándose un ambiente de cierta armonía entre el negociador y los sublevados, entró un mensajero con algunos radios recibidos que el suboficial González leyó en voz alta y que se referían a la adhesión de los obreros del Apostadero Naval de Talcahuano, al zarpe del «Blanco Encalada», del «Araucano» y de los submarinos hacia Coquimbo y al regreso del petrolero «Maipo» que estaba por recalar en Panamá. El contraalmirante von Schroeders achacó a la mala suerte la oportunidad en que estos radios fueron recibidos y se lamentó que se hubiesen perdido veinticuatro horas para obtener la autorización del gobierno para ir a bordo a negociar; pero la realidad parece haber sido una estudiada ocasión, de parte de los sublevados, para endurecer las conversaciones.

Los sublevados conocían estas adhesiones desde antes que comenzaran las negociaciones con el contraalmirante von Schroeders, pues estas se habían iniciado bastante pasadas las 11.00 de la mañana y ya llevaban más de tres horas, en circunstancias que los dos mensajes de adhesión de las tripulaciones y de los obreros de Talcahuano que se habían recibido al respecto, habían sido transmitidos a las 10.50 y a las 11.00 y respondidos por el «Almirante Latorre» quince minutos más tarde.

En cuanto al zarpe de los buques, el «Araucano» había informado a las tres de la mañana al «Almirante Latorre» que lo haría a las 07.30, después que recogiera al personal franco y los sublevados habían pedido confirmación a las 09.04.

No cabe duda que, desde el inicio, los amotinados trataban de ganar tiempo en espera de ver el giro que tomaban los acontecimientos, pues el Estado Mayor de las Tripulaciones no ignoraba que el movimiento había comenzado a propagarse y esperaba saber el terreno que pisaba, antes de llegar a un acuerdo: si debía parlamentar o si podía imponer.

Mientras se discutía con von Schroeders, el Estado Mayor de las Tripulaciones dictó una orden dirigida a los comandantes de los buques y a todos los oficiales, obligándolos a firmar un documento que decía: «*Las tripulaciones se han visto obligadas a tomar tan extrema determinación, en vista de la ninguna importancia que le han dado los Comandantes en Jefe de las escuadras a la rebaja de sueldos, que los sumirá en la miseria, habiéndose limitado a aplicar la Ordenanza; además han sido humillados por el comodoro Hozven*».

Es imposible saber cuantos oficiales firmaron, ni que amenazas recibieron para que lo hicieran; pero como se verá más adelante, a la hora de los juicios aparecieron listas con firmas de oficiales acompañando un documento totalmente distinto.

Discrepancias del delegado con los sublevados

A pesar de este sombrío interludio, el Contraalmirante inició la discusión del segundo pliego de peticiones o «Lo que necesitan las tripulaciones de la Armada», como lo habían titulado sus autores, en forma auspiciosa. El primer pliego se daba por solucionado y en las discusiones se había producido un ambiente de armonía que auguraba optimismo en el negociador.

Von Schroeders propuso tratar en primer lugar las peticiones que tenían relación con el régimen interno de la Armada y que eran las que verdaderamente podían interesar a las tripulaciones, dejando de lado las de altas finanzas que no eran de su competencia; pero rápidamente se levantó, otra vez, el cabo despensero Astica haciendo una larga disertación para justificar la inclusión de las cláusulas políticas, tales como la reforma agraria, la rebaja del interés sobre los depósitos y el aporte de los chilenos millonarios.

Hubo algunas discrepancias entre González y Astica que dejaron la impresión en el delegado que el Estado Mayor de las Tripulaciones era finalmente el responsable de lo que se aprobara; pero debería tener la posterior ratificación de todo el personal sublevado.

El Contraalmirante manifestó que muchos de los aspectos que apuntaban a ser de incumbencia neta de la institución eran atendibles, tales como hacer extensible a sus servidores la entrega de ropa gratis de que gozaba el Ejército, no perder las imposiciones el personal que se retirara antes de los diez años de servicio, abonar el tiempo cumplido en exceso en algún grado, el ascenso de especialidades postergadas, como era el caso de los fogoneros, etc., para lo cual propuso la formación de una comisión de jefes y oficiales, integrada además con representantes de las diferentes ramas de la tripulación, para que estudiara la mejor forma de llevarlas a la práctica, todo lo cual sería atendido por el gobierno con especial interés.

El ambiente se había ido haciendo cada vez más distendido y conciliador manifestando varios de los asistentes su total acuerdo, en uno u otro punto, con la proposición del Contraalmirante; cuando se levantó de la mesita de popa el cabo despensero Augusto Zagal Anabalón, que como indicamos en el capítulo anterior había sido otro de los recién contratados junto con Astica y sin pedir permiso para hablar dijo: «*Parece compañeros que Uds. ya se han dejado convencer por las palabras del Almirante*» e insistió en imponer sus puntos de vista y no dejarse engañar.

Von Schroeders le rebatió en forma enérgica, haciéndole ver que quería arrastrar a sus compañeros a la ruina, pues su intransigencia podía llegar a producir la miseria de muchos hogares, lo que a él, como soltero y exaltado, no le importaba.

Zagal, provenía de una familia acomodada y contaba con 22 años de edad. De rostro impasible, durante su adolescencia, en las discusiones estudiantiles producidas con motivo de las luchas políticas de los años veinte, mantenía sus posiciones sin acalorarse jamás, hablaba despacio y poco, haciéndose escuchar siempre por sus compañeros, porque sabía salir en el momento preciso para decir una frase o una palabra que era un balde de agua fría en la discusión.

Al egresar del sexto año de humanidades postuló al concurso de cabos despenseros de la Armada. Una de sus características era un gran inconformismo que se reflejaba en su descontento por lo que era. Años más tarde, durante la administración de Gabriel González Videla fue nombrado secretario general de gobierno.

La alusión del Contraalmirante a los posibles sumarios produjo gran inquietud consistiendo, tal vez, el primer gesto de firmeza que mostró. Este era el principal temor que tenían los tripulantes sublevados y que los había llevado a actuar anónimamente y mantener así incógnitos a los cabecillas para eludir sus responsabilidades, escudados bajo el nombre corporativo de Estado Mayor de las Tripulaciones. Enseguida, para bajar la intranquilidad agregó el delegado que si se llegaba a conceder una amnistía sería amplia y para todos. El sumario no pretendería castigar culpables sino que buscar las causas del mal y ponerles remedio.

Considerando von Schroeders que había acuerdo en todo lo conversado, decidió dar por terminada la reunión cerca de las 15.00 horas, prometiendo exponer al gobierno las atenuantes que pudiera tener la conducta de las tripulaciones y que haría lo posible para que no se ejercieran «represalias», lo cual no podía asegurar.

En Chile se ha tomado la costumbre de considerar represalia la aplicación de lo que la Constitución, las leyes y los reglamentos exigen cuando han sido violados. Represalia es una satisfacción vengativa, con mayor daño en contra del enemigo o adversario de parte de aquel que ha recibido un agravio.

La exigencia de que no se apliquen represalias encierra una amenaza en contra del que, con legítima autoridad, ejerce el derecho de castigar, dentro de la ley, al que la ha pisoteado.

Otras dificultades y nuevos apoyos al motín

Un obstáculo de último momento fue la insistencia de que el plazo que se había dado al gobierno para contestar terminaba a las 16.00 horas, tiempo que hacía prácticamente imposible su cumplimiento, por lo que el delegado manifestó que su prórroga solamente dependía de ellos y si no lo prolongaban, quería decir que no había interés en negociar y daría por terminadas sus gestiones.

En el momento que el Contraalmirante se aprestaba a desembarcar, el «comodoro» Steembecker, para «echar leña a la hoguera», acusó al teniente Huidobro que lo había escuchado decir a un civil, antes de dirigirse a bordo, que el éxito de la misión de su jefe era seguro, porque venía a tratar con unos pobres analfabetos. El oficial negó tajantemente el hecho, lo que aparentemente era otra maniobra para no producir acuerdo.

Mientras se desarrollaba la última parte de la reunión, alrededor de las 13.00 horas, se recibió en el «Almirante Latorre» y en el arsenal de Talcahuano un radio que obscurecía totalmente el horizonte, provenía de la radioestación naval de Las Salinas en Viña del Mar e

informaba que las tripulaciones de la Escuela de Comunicaciones y del Subdepartamento de Municiones adherían entusiasta e incondicionalmente al movimiento y desautorizaban cualquier mensaje en contrario.

Nuevas adhesiones seguían llegando al «Almirante Latorre», ahora eran los suboficiales, sargentos, cabos y marineros de la radioestación de Valparaíso, quienes *«inspirados del más sano altruismo se adhieren incondicionalmente a la justa causa de sus hermanos»*.

Alrededor de las 18.00 horas, tres radios enviados desde Talcahuano y que tenían relación con operaciones de buques fueron escuchados por el Estado Mayor de las Tripulaciones, uno de ellos procedía del Arsenal Naval e informaba que todos los buques surtos en la bahía estaban a cargo de sus tripulaciones y que los oficiales los habían abandonado, al igual que las reparticiones de tierra. Otro procedía del remolcador «Sibbald» que informaba a su buque líder «Araucano» que contaba con 35 toneladas de carbón, 30 de agua y víveres para tres días, por lo que pedía autorización para zarpar a las 19.00 horas. El tercer mensaje era del destructor «Riveros» quien informaba que mantendría el servicio de radio permanente con los sublevados para recibir instrucciones y órdenes.

Por otra parte, también desde Talcahuano, el crucero «Chacabuco» daba cuenta haberse también plegado a la sublevación y el pequeño transporte «Micalvi» hacía presente que, debido a una falla de sus máquinas, no estaba en condiciones de transportar a Coquimbo el carbón que tanto necesitaban los amotinados; pero si era necesario, harían cualquier sacrificio para zarpar.

El ánimo del contraalmirante von Schroeders al desembarcar era que se había avanzado hacia una solución negociada; pero el radiograma enviado por el Estado Mayor de las Tripulaciones al «general», esto es, a todos los buques y reparticiones involucrados, apenas el delegado hubo desembarcado, dejan ver el exagerado optimismo de éste. Decía textualmente:

«Al general del Estado Mayor de las Tripulaciones:

Aún nada resuelto, mantendremos sin alteración nuestro punto de vista. Mantendrémoslos al corriente de las novedades. Ruego guiarse por nuestras noticias.153003».

Von Schroeders busca un acuerdo

El Contraalmirante comunicó al gobierno los aspectos principales de la reunión, haciendo presente que había llegado al convencimiento que la forma de solucionar, en forma rápida y total el conflicto, era por medio de una declaración oficial; en la cual las más altas autoridades del país dieran amplias seguridades a todo el personal de la Armada de que no se tomaría ninguna represalia con los que habían tomado parte, en forma directa o indirecta, en el movimiento. Esta declaración debería ser publicada en el Boletín Oficial y cumplida en forma sincera y leal. Una vez prometido lo anterior se volvería a la normalidad bajo el juramento de mantener la tradicional disciplina de la Marina.

Con respecto a muchas peticiones sobre ascensos, retiro, devolución de fondos previsionales y bienestar, ellas eran atendibles y justas por lo que recomendaba al gobierno contestar que sería motivo de su especial y preferente interés todo lo relacionado con eso.

Hacía presente que no se habían presentado quejas contra los jefes y oficiales y que se le aseguraba que ellos no habían sido vejados y se les trataba con consideración. No así con respecto al comodoro Hozven, a quien se le señalaba como el causante de la situación, debido a la dureza e intransigencia que había demostrado y solicitaba su transbordo de inmediato.

Curiosamente el delegado agregaba que le parecía que el movimiento no tenía raigambre política ni comunista y que la disciplina y el régimen se mantenían en forma correcta. Finalmente solicitaba amplios poderes para resolver.

Las sugerencias de von Schroeders equivalían a una capitulación total, la amnistía permitiría la continuación en el servicio de los instigadores y los partidos políticos eran ajenos al caos. En ese momento la disciplina se mantenía incólume, ¡A pesar que los oficiales estaban prisioneros!

Una sugerencia importante del Contraalmirante, que no fue atendida, era que se tomaran medidas enérgicas con las radioestaciones a fin de evitar las comunicaciones que pudieran reforzar la posición de los revolucionarios, como estaba sucediendo.

A las 17.00 horas von Schroeders recibió respuesta del gobierno mediante la cual le daban carta blanca para llegar a los acuerdos que estimara conveniente, los cuales serían cumplidos de buena fe y las medidas administrativas serían motivo de un estudio preferente. Terminaba la comunicación indicando la conveniencia de afianzar el arreglo rindiendo un homenaje a la bandera y a los oficiales de ambas escuadras.

Coincidente con esta respuesta gubernamental, el Estado Mayor de las Tripulaciones comunicaba haber prolongado en 24 horas el plazo dado.

Apenas el delegado recibió la respuesta del gobierno, solicitó una embarcación para dirigirse abordo, con la esperanza de finiquitar esa misma tarde un acuerdo.

Comenzó von Schroeders dando lectura a su telegrama al ejecutivo y a la respuesta de éste, para demostrarles sinceridad y que vieran que estaba jugando con las cartas sobre la mesa y por ellos podían imponerse que ahora contaba con amplios poderes.

Curiosamente, el cabo despensero Astica, refiriéndose al punto informado por el Contraalmirante al gobierno en el sentido que le parecía que el movimiento no tenía raigambre política ni comunista le preguntó: ¿Por qué dice que este movimiento no es comunista? El interpelado hizo presente que si no estuviera convencido de ello, esas conversaciones no habrían tenido lugar[47].

Segunda reunión del delegado abordo

Durante toda esta segunda reunión, realizada nuevamente en la cámara de guardias marinas del «Almirante Latorre» se notó, desde el comienzo, le existencia de dos grupos: uno que trataba de alcanzar un acuerdo y otro cuya actitud era totalmente obstruccionista. De la exigencia que no se tomaran represalias, se pasó a que no se instruyeran sumarios; otros argumentaban que el gobierno ahora prometía mucho, pero que una vez depuesta su actitud, quizás no encontraría los medios para cumplir. Un torpedista intransigente le espetó que si las tripulaciones no obtenían todo lo que exigían tendrían que echar al agua los tapones de los cañones que llevaban el lema «Vencer o Morir»

Argumentando contra estos últimos, el Contraalmirante propuso redactar el acta de avenimiento y se puso, él mismo, manos a la obra. Su encabezamiento constituyó uno de los principales escollos, pues mientras el delegado proponía hacer presente que las tripulaciones

[47] Esta consulta de Astica es descrita por el contraalmirante Von Schroeders y por el ministro de educación Leonardo Guzmán; pero el escritor Patricio Manns, que niega permanentemente la paternidad del Partido Comunista al movimiento, la ignora; a pesar de transcribir casi íntegramente pasajes del libro de von Schroeders.

aseguraban que habían estado inspiradas en elevados fines patrióticos, los sublevados exigían que era indispensable que el gobierno reconociera que ellos no habían hecho este movimiento con fines mezquinos. El acuerdo fue que se trataba solamente de un proyecto que tanto las autoridades como las tripulaciones debían conocer y aprobar.

Como no se avanzaba y la hora pasaba, el delegado propuso que lo redactaran los sublevados y lo sometieran a su consentimiento.

Cuando von Schroeders se aprestaba regresar a tierra para esperar el proyecto de acta, recibió un balde de agua fría que demostraba, más claramente, que todas las objeciones que le habían presentado eran solamente una maniobra dilatoria en que estaban empeñados los amotinados. Fue el suboficial preceptor González quien le manifestó que, aunque se acordara un arreglo, el acta no podría ser firmada antes del arribo del «Blanco Encalada», del «Araucano», de los submarinos, del «Micalvi», etc. a Coquimbo, donde venían a reunirse con ellos y que la firma debía hacerse en Valparaíso *«para demostrar al país y al mundo»* que eran capaces de manejar los buques ellos solos. Incluso invitaron al Contraalmirante que los acompañara.

Apenas el delegado se desembarcó, el Estado Mayor de las Tripulaciones comunicó por radio al Comité Revolucionario de Talcahuano que el gobierno había cedido en todas sus partes las peticiones formuladas y que mientras se finiquitaban los detalles era necesario mantener el control completo de la situación y afianzar la unión más estrecha de hombres y de ideas, dentro del espíritu de orden y disciplina que siempre habían mantenido.

Formación de la «escuadra del sur»

Cuarenta minutos más tarde un nuevo radio daba cuenta al «Almirante Latorre» de la formación de la «escuadra del sur», compuesta por los buques de Talcahuano, para apoyar el movimiento. La comunicación informaba que la componían el buque madre de submarinos «Araucano», los submarinos «Thomson», «Fresia», «Guacolda» y «Quidora», el crucero «Blanco Encalada», el destructor «Riveros», las escampavías «Leucotón», «Orompello», «Elicura», «Micalvi», «Sibbald» y «Janequeo». Todas sus tripulaciones felicitaban, de todo corazón, a sus compañeros por el triunfo obtenido. Agregaba que en esos momentos zarpaban hacia Dichato para organizarse. Todos los buques iban sin los oficiales, quienes habían sido desembarcados antes de levar anclas.

Finalmente informaban que a las 20.15 horas habían recibido un aviso de la radioestación naval de Talcahuano en el que se les indicaba que los regimientos Chacabuco de Concepción, Húsares de Angol y O'Higgins de Chillán se dirigían a Talcahuano y pedían instrucciones para determinar la actitud a asumir.

Aunque parezca increíble, de todo esto el contraalmirante von Schroeders no tenía noticia alguna, pues el gobierno central había omitido comunicárselo y las únicas noticias que había recibido de los movimientos de buques provenían de los propios sublevados.

Ya bastante desilusionado de lograr su cometido, von Schroeders comunicó en detalle al gobierno la reunión de esa tarde, las maniobras dilatorias que se habían ido agregando a las discusiones, el zarpe de la escuadra del sur, el envío de los destructores «Lynch» y «Aldea» para que la encontraran, la pretensión de firmar cualquier acuerdo en Valparaíso y el próximo envío del acta confeccionada por los sublevados, la que si no era firmada al día siguiente, daría por terminada su misión.

Discrepancias del delegado con el gobierno

En el gobierno, que como ya hemos visto, se había constituido un nuevo gabinete, fue recibido con molestia este nuevo informe y deseaba que von Schroeders pusiera término a su gestión que la consideraban exagerada y estaba comprometiendo la dignidad del poder ejecutivo; pero el ministro de marina contraalmirante Enrique Spoerer solicitó a sus colegas algunas horas más antes de ordenar el regreso del delegado a Santiago.

Con el objeto que éste comprendiera que no estaba de acuerdo con él, le despachó un telegrama en el que le hacía ver que aprobaba su actuación, pero que lamentaba las demoras, las cuales dañaban la situación económica del país; que en el futuro no debía hacer nuevas concesiones y debía tener la certeza que el gobierno estaba recibiendo entusiastas adhesiones. La opinión pública de todo el país condenaba la actitud antipatriótica de la escuadra y la fuerza pública daba total garantía para mantener el orden y la tranquilidad que se observaba en todas partes.

Un radio similar fue despachado directamente al acorazado.

Minutos más tarde, el mismo secretario de estado comunicaba al delegado y al «Almirante Latorre» que la llamada escuadra del sur permanecía fondeada en Dichato, por lo que sería inútil esperar su llegada para firmar el acta.

Los últimos radios que se cursaron ese día entre los sublevados se referían al apoyo que les daba el petrolero «Rancagua», al cual se le contestó que se dirigiera a Coquimbo, al máximo andar e informara la existencia de combustible. ¡Empezaban a faltar los pertrechos!

Por otra parte, el Estado Mayor de la Tripulaciones ordenaba al «Araucano», buque insignia de la escuadra del sur, que se dirigiera a toda máquina a Coquimbo, pero el comité de Talcahuano pedía al mismo buque que tratara de no abandonar esa bahía ante una posible sorpresa, pues los regimientos estaban en sus inmediaciones.

Una delegación de vecinos de Coquimbo, compuesta por los señores Jerónimo Méndez, presidente del Partido Radical; Hugo Zepeda, presidente del Partido Balmacedista, el alcalde de la comuna y los representantes de los gremios marítimos Guillermo Portales y Francisco Peralta, fueron a bordo a conferenciar con los amotinados, no logrando con su gestión que depusieran su actitud.

Así cayó la noche del miércoles 3 de septiembre de 1931.

El incendio se extiende

Cerca de la una y media de la madrugada del día 4 llegaron a la casa donde se alojaba el Contraalmirante dos suboficiales o sargentos llevándole un proyecto de acta que sería aprobado por las tripulaciones. Junto con hacerle entrega de él, le manifestaron, nuevamente, que existían dudas sobre los poderes que el gobierno le habría otorgado, pues el telegrama exhibido no tenía el timbre de la oficina del telégrafo y sin él, no era válido. El afectado replicó que tenía comunicación directa con La Moneda y que de sus mensajes no quedaban copias. Estas dudas y suspicacias, hábilmente manejadas, no buscaban otro efecto que hacer fracasar las conversaciones.

Una nueva reunión a bordo debía efectuarse a las diez de la mañana. Los rumores, que nunca faltan en estas circunstancias, habían propalado que el Contraalmirante sería llevado al buque a la fuerza, lo que éste desestimó; pero de todos modos lo comunicó al gobierno.

Entretanto, el Estado Mayor de las Tripulaciones ordenaba a la escuadra del sur que destacara al buque de mayor andar para que se adelantara, de manera de llegar a Coquimbo en el mínimo tiempo, lo que recayó en el crucero «Blanco Encalada», el cual además era portador de las peticiones del Arsenal Naval de Talcahuano.

Otros mensajes, provenientes esta vez de la base de la Fuérza Aérea de Quintero, manifestaban su adhesión al movimiento y pedían el envío de un buque para resguardar al personal y al material; lo cual fue respondido por el Estado Mayor de las Tripulaciones agradeciendo el gesto y solicitando el envío urgente de un avión. A la vez les informaban que el destructor «Aldea» debía encontrarse en las proximidades y al cual se le habían dado instrucciones de acercarse a la base y tomar contacto con el personal de esa unidad; pero debiendo evitar conflictos y proceder drásticamente solo en el caso de una amenaza seria que constituyera peligro para la nave.

Por su parte la Escuela de Comunicaciones de Viña del Mar solicitaba igual protección, pues el regimiento Yungay había llegado a la ciudad para reforzar la guarnición militar; pero los sublevados respondieron que no era prudente dispersar fuerzas y que estaban listos para repeler un ataque en cualquier parte de la costa, debiendo ellos prepararse para defender la repartición.

En la madrugada, una comunicación del Comité Revolucionario de Talcahuano confirmaba la participación de elementos políticos. Decía textualmente:

«Al Estado Mayor del Latorre del Comité de Talcahuano: Finalidades sostenidas en manifiesto escuadra deben mantenerse como principio para cooperar solución, ya que de lo contrario significaría derrota moral para nuestros deseos. "Adhesión completa elementos socialistas Concepción y Talcahuano". Avisen estado negociaciones y puntos acordados en transacciones con el gobierno. 035004» y en otra se quejaba que el gobierno había impuesto la clausura de la prensa y el telégrafo en la zona, para impedir que se informara de la justicia de la causa que defendían.

Proposición de acta de arreglo

El documento redactado por los sublevados que recibió, pasada la medianoche del día 3, el contraalmirante von Schroeders estipulaba los siguientes puntos:

1° El gobierno reconocía que el movimiento de las tripulaciones estaba inspirado en los más nobles principios de patriotismo.

2° El movimiento había sido verificado dentro del orden y caballerosidad compatibles con las circunstancias.

3° No existían quejas por vejaciones hechas a los jefes y oficiales sino que, por el contrario, ellos habían sido atendidos y resguardados celosamente por las tripulaciones.

4° El gobierno, impuesto de las verdaderas aspiraciones y causas que habían originado el movimiento, aceptaba las declaraciones manifestadas por las tripulaciones en la comprensión de los sanos y patrióticos propósitos que las inspiraban.

5° Las peticiones formuladas eran aceptadas, en principio, totalmente y el gobierno daría preferencia inmediata al estudio de la aplicación de esas peticiones.

6° Con este objeto se nombraría una comisión de expertos, integrada y asesorada por representantes de las tripulaciones de la Armada, que estarían, en todo momento garantizados en sus puestos dentro del comité.

7º El gobierno hacía la promesa solemne que no se tomarían represalias ni se abrirían sumarios conducentes a castigar a los mantenedores del movimiento dado que, siendo el estallido unánime de todos los hombres de las tripulaciones de la Armada, sin obedecer a cabecillas determinados sino a ideales perfectamente definidos, se había demostrado que el movimiento de las tripulaciones había sido un gesto altamente patriótico.

8º Como una ratificación solemnísima de estos acuerdos, el Estado Mayor de las Tripulaciones hacía entrega de la escuadra a los jefes que nombrara el gobierno jurando, como siempre, su amor a la patria, al orden y a la disciplina y su vuelta a las labores profesionales.

9º Como complemento a la anterior ratificación, el representante del gobierno, contraalmirante von Schroeders y los componentes del Estado Mayor de las Tripulaciones de la Armada, en forma igualmente solemne e inspiradas en el espíritu de acendrado patriotismo que inspiraban estos acuerdos, firmaban a continuación.

Este acuerdo equivalía a una capitulación total por parte del gobierno y se reconocía que el motín había estado inspirados en nobles fines patrióticos, que no había culpables, que tomar prisioneros a los oficiales no era vejarlos y que a nadie se podría enjuiciar, todo lo cual no podía ser aceptado por las más altas autoridades del país.

El contraalmirante von Schroeders nunca perdió el optimismo de llegar a una solución con los sublevados; pero si hubiera conocido los documentos que se encontraron a bordo después de la rendición, se habría dado cuenta cuan lejana era la posición de quienes dominaban la situación y de quienes el Estado Mayor de las Tripulaciones era tan solo una pantalla.

El poder lo ejercía realmente un Comité Ejecutivo del «Almirante Latorre» que era conocido por los sublevados como la «Cheka» y hacer referencia a él les producía verdadero pavor; entre sus miembros ya hemos identificado al «comodoro» Steembaker.

Las observaciones enviadas por este comité al Estado Mayor de las Tripulaciones, el día 3 de septiembre, a las propuestas hechas al Contraalmirante hacían presente que los tres primeros puntos no tenían otra trascendencia que hacer reconocer el patriotismo, el orden y el no vejamen a los oficiales, los cuales no tendrían ningún valor efectivo con posterioridad a los acontecimientos.

El ítem cuatro, que hacía mención a que se aceptaban las declaraciones de las tripulaciones, tampoco comprometía nada a futuro.

El punto quinto en que se aceptaban, en principio totalmente, las peticiones y que se daría preferencia a su estudio, no tenía significación, pues todas ellas podrían ser negadas con posterioridad y su aplicación podría requerir un estudio de dos, tres meses o un año bajo un régimen de disciplina en que no podría fiscalizarse, lo que haría perder, por completo, el verdadero valor del artículo.

En el número seis, en el que se nombraba una comisión con representantes de las tripulaciones, los cuales estarían garantidos en sus puestos, bajo un régimen de disciplina normal su labor se vería dificultada para discutir, pues sus contrincantes serían miembros del gobierno o altos jefes de la Armada y no se podría hacer ninguna presión en favor de sus opiniones, ya que tendrían que obrar con el respeto y la cortesía de los tiempos normales. Serían reuniones donde imperaría, al final de cuentas, solo el criterio de los jefes, a quienes sus subordinados se verían obligados hasta pedir la palabra cada vez que desearan hacerlo.

Tampoco sentirían respaldo alguno de todas las tripulaciones, pues se podría recurrir a introducir desconfianza, miedo y desunión entre ellas. Los representantes podrían ser vigilados en todos sus movimientos, tanto en sus casas como a bordo, como a traidores o criminales, quienes estarían constantemente temiendo por sus vidas y la de sus familias.

En el séptimo ítem, en el que se prometía solemnemente que no se tomarían represalias ni se abrirían sumarios conducentes a castigar a los mantenedores del movimiento, solamente tendría verdadero valor y que todo el mundo debía comprender que, desde el momento que habían tomado las armas, no representaba ningún triunfo.

En resumen, aclaraba que lo único que se conseguía era el nombramiento de una comisión que estudiara las peticiones y la no aceptación de represalias; de ello, lo primero, al final del tiempo, sería nulo y lo segundo estaba íntimamente ligado al hecho de pactar con el gobierno y que en ningún documento, de este tipo, podía faltar. El hecho de que no se tomaran represalias no era sino una transacción para entregar, *con vida*, a los oficiales; pero ello no constituía ningún triunfo.

Terminaba el documento exhortando al Estado Mayor de las Tripulaciones que, en uso de las *atribuciones que tenía el comité* y en resguardo de los fines que habían iniciado el movimiento y de la seguridad futura, por ningún motivo debía perderse ninguna de las aspiraciones de la proclama inicial ni exponerse a que comisiones futuras discutieran con los oficiales, pues el resultado sería nulo.

Debía tenerse presente que las tripulaciones habían expuesto la vida y la tranquilidad de toda su existencia para lograr la realización completa de sus puntos de vista y no podían ser burlados en ese sentido. Agregaba: «*Ahora somos los fuertes y debemos y podemos exigirlo. Después solo seremos aplastados y desapareceremos muchos de nosotros*».

Terminaban haciendo presente que su unión era de fierro y que contaban con el apoyo de las instituciones Armadas y *obreras* del país y tenían toda la fuerza del poder[48].

Mientras el contraalmirante von Schroeders esperaba la contestación de los sublevados, el ministro de marina, tratando de ablandar la situación, relevó del mando al comodoro Hozven y a los segundos comandantes del «Almirante Latorre» y del crucero «O'Higgins».

A pesar que entre el delegado y los sublevados se había acordado mantener en reserva todo lo tratado hasta que hubiera una solución, los amotinados, empleando la fuerza, obligaron al periódico local a publicar su proyecto de acta, lo cual tuvo un pésimo efecto en las autoridades de Santiago.

En todo caso von Schroders, tratando de salvar la situación y su misión, se dio a la tarea de hacer modificaciones al documento en forma que existiera alguna probabilidad que fuera aceptado por el gobierno.

El acta modificada contemplaba:

1° El gobierno *quiere creer* que el movimiento efectuado por las tripulaciones de la Armada ha sido inspirado en elevados ideales patrióticos y reconoce que, antes como ahora, los anima el más profundo amor a la patria.

2° El gobierno, impuesto de las verdaderas aspiraciones y causas que habían originado el movimiento, aceptaba las declaraciones manifestadas por las tripulaciones y estudiaría la mejor forma de llevar a la práctica todas las ideas que ellas contenían y que tendieran al engrandecimiento de la patria.

[48] Este documento, más que cualquiera otro, mostraba la infiltración de elementos sindicalistas avezados y la injerencia política,

3° En cuanto a las peticiones formuladas que significaran un mejoramiento en el bienestar de las tripulaciones, ellas serían aceptadas, en principio, y el gobierno daría un pronto estudio a su aplicación. Con este objeto se nombraría una comisión de jefes y oficiales, integrada además por miembros representativos de las diferentes ramas de las tripulaciones.

4° Debido al orden en que se había mantenido el movimiento y la forma respetuosa y sin vejámenes con que habían sido tratados los jefes y oficiales, el gobierno hacía la promesa solemne que no se tomarían represalias y que los sumarios se harían solo para llegar a conocer las causas exactas que habían producido el movimiento, con el objeto de evitar que pudieran repetirse y que había afectado tan hondamente a la disciplina, al prestigio y al honor de la Armada.

5° Como ratificación de estos acuerdos se disolvía el Estado Mayor de las Tripulaciones, entregando el mando general al delegado del gobierno, quien tomaría todas las medidas del caso para volver a la normalidad.

A fin de solemnizar la ceremonia, las tripulaciones formadas jurarían mantener, en adelante, la más sólida disciplina y celoso respeto a sus superiores.

Como manifestación exterior del profundo amor, de todos, a la patria y del juramento de respeto a sus superiores, se saludaría con los cañonazos de ordenanza a la bandera y a las insignias de los comandantes en jefe.

6° Para dar fe y constancia del acta firmarían el representante del gobierno, contraalmirante Edgardo von Schroeders y los representantes del Estado Mayor de las Tripulaciones.

Tercera reunión del delegado a bordo

Antes de embarcarse para la discusión de los dos proyectos de acta, el Contraalmirante se topó en el muelle con los jóvenes estudiantes universitarios santiaguinos Bernardo Leighton[49], Jorge Rivera Vicuña, Raúl Rodríguez Lazo y Luis Rodríguez Aris que habían viajado al norte en un autocarril y cuya misión consistía en manifestar a los sublevados que el país no los apoyaba en su intento revolucionario y que, por el contrario, repudiaba su tentativa de subvertir el orden de la república. El delegado agradeció su cooperación, pero les manifestó que no era necesario que fueran a bordo. ¿Qué podrían hacer estos muchachos frente al grave problema que afectaba a la Armada y al país?

A las diez de la mañana, el Contraalmirante se dirigió al «Almirante Latorre» para sostener la que sería la última tentativa para tratar de llegar a un acuerdo con los sublevados.

El delegado comenzó dando a conocer su proyecto de acta. Las dificultades se presentaron desde el primer punto, pues los amotinados no aceptaban que el gobierno «quisiera creer» que el movimiento hubiera estado inspirado en elevados ideales patrióticos, sino que ellos exigían que las autoridades «reconocieran que los había guiado su espíritu patriótico, la corrección del movimiento y el respeto y las consideraciones a sus jefes y oficiales». Era sencillamente un argumento inaceptable que la tripulación de una marina de guerra se amotinara por su espíritu patriótico y tomara presos a sus oficiales por respeto y consideración hacia ellos.

[49] Leighton era vicepresidente de la FECH y había conocido a Astica cuando éste era dirigente de los obreros católicos. Años más tarde Leighton declaró que el verdadero jefe de la sublevación era Astica.

Al ver que von Schroeders estaba decidido a no transigir al respecto, pues de otro modo, de todas maneras el acta sería rechazada por el gobierno, propusieron una serie de cambios semánticos al ítem inicial, tales como decir «el gobierno creyendo» en lugar de «quiere creer», etc.; pero el delegado manifestó que nada de ello sería ratificado por las autoridades centrales y que continuar su discusión no conduciría a nada. A estas alturas, ya la negociación se había transformado en un diálogo de sordos, pues a los argumentos del Contraalmirante, los amotinados manifestaban que el acuerdo debía ser aprobado por la asamblea de las tripulaciones y que ellas no aceptarían cambiar la redacción inicial que habían presentado a medianoche en la residencia del negociador.

De todos modos se continuaron discutiendo los puntos siguientes, pero cada uno de ello fue motivo de otra acalorada polémica para cambiar su redacción, lo que prolongó la sesión por más de dos horas. Von Schroeders creyó que había logrado convencerlos que su proyecto garantizaba los intereses de los sublevados y podían tener completa confianza que lo que se pactara se cumpliría fielmente, pero cuando trató de dar por terminada la reunión, le exigieron que el acuerdo debía ser firmado personalmente por el ministro de marina, por el presidente de la Corte Suprema y por el obispo de La Serena, lo que solamente debía suceder después que arribara a Coquimbo la escuadra del sur.

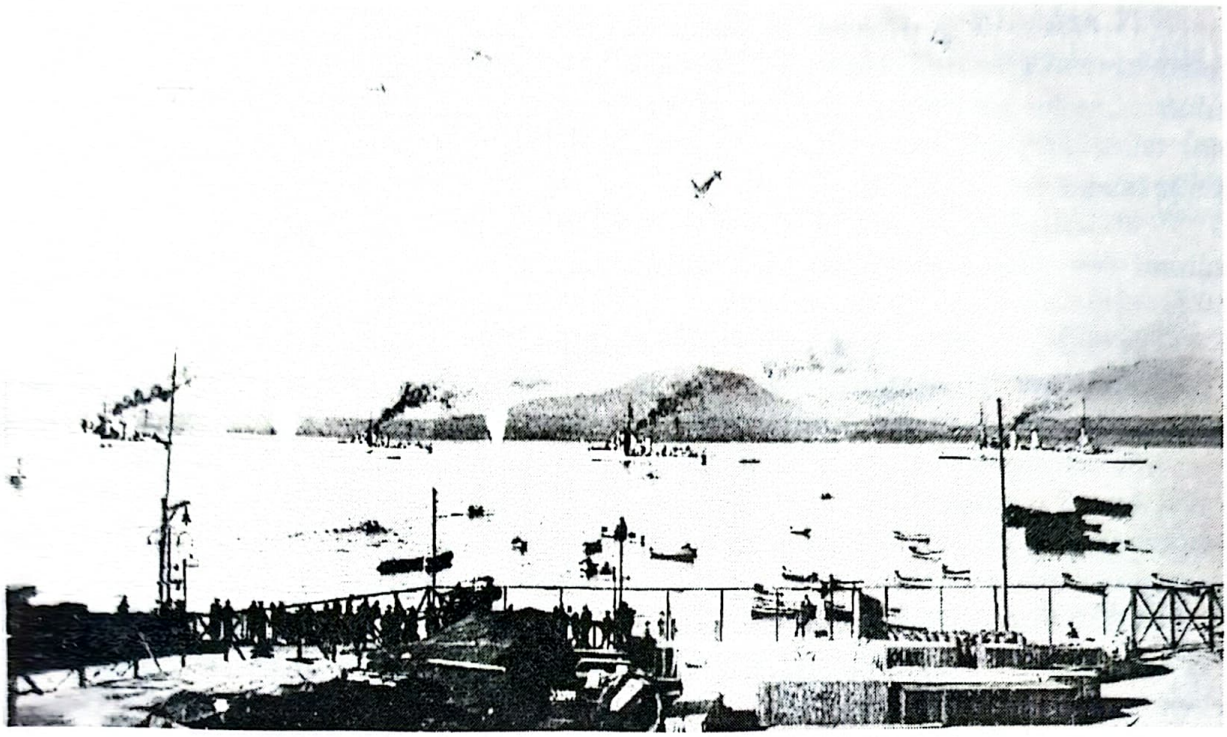
En vista de las manifiestas acciones dilatorias, el Contraalmirante abandonó el acorazado, haciendo ver a los sublevados que si el acta no era firmada ese día, él daría por terminadas sus gestiones.

Alrededor de las 15.00 horas desembarcó una comisión del «Almirante Latorre» llevándole al negociador una redacción imprecisa del acta, la que fue rechazada por éste y les indicó que no se dirigiría a bordo mientras no fuera enviado un proyecto claro y completo que debía firmarse antes de las 18.00 horas. Es evidente que los sublevados querían prolongar la situación; pero no terminar la mediación de von Schroeders, pues ello les aseguraba que el gobierno no tomaría medidas violentas, para reducirlos, mientras ellos se fortalecían.

En los momentos en que el delegado conferenciaba telegráficamente con el vicepresidente de la república señor Humberto Trucco, llegó otra delegación del buque con un proyecto definitivo de acta de arreglo, el cual se encabezaba diciendo que «el gobierno, creyendo que el movimiento efectuado por las tripulaciones ha sido inspirado en elevados ideales patrióticos, reconoce que los anima el más profundo amor a la patria».

El resto del documento recogía la proposición de von Schroeders, aceptando las declaraciones de las tripulaciones y comprometiéndose a estudiar la mejor forma de llevarlas a la práctica; las comisiones de jefes y oficiales que se formaran estarían integradas además y asesoradas por miembros de tripulación, no se tomarían represalias ni se buscarían responsables, se disolvería el Estado Mayor de las Tripulaciones y se entregaría el mando al delegado del gobierno. El documento debería ser firmado por el contraalmirante von Schroeders, por el intendente de la provincia señor Román Mery, por el obispo de La Serena monseñor José María Caro y por el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Pero el delegado recibía fuego por ambos lados, el gobierno encontraba que había actuado en forma excesivamente blanda y conciliatoria aceptando imposiciones de los sublevados que escapaban a sus poderes. En la conferencia telegráfica a que nos hemos referido, el Vicepresidente de la República le hizo ver que, en el acta confeccionada por él, había declaraciones que debían evitarse, porque serían mal recibidas por la opinión pública y por la oficialidad de la Armada. Le indicaba, además, la conveniencia de limitarse solo a la



FOTOGRAFÍA MOSTRANDO EL ATAQUE DE LOS AVIONES A LA ESCUADRA SUBLEVADA EN LA BAHÍA DE COQUIMBO.

aceptación de hechos y peticiones con el menor número posible de considerandos o declaraciones que podrían ser motivo de apreciaciones contradictorias, por lo que debería ceñirse a aceptar sobriamente los hechos.

El gabinete presiona al vicepresidente para que ponga fin a la sedición.

Desde las primeras horas de ese día el gabinete estaba presionando al Vicepresidente de la República para que pusiera fin a la mediación y actuase en forma vigorosa, pues se sentían respaldados por la opinión pública, por el Ejército y por la aviación[50].

Von Schroeders transcribió el documento recibido de los sublevados al Vicepresidente e informó que la comisión que le hizo entrega de él la integraba, además, el capellán Ramírez del «Almirante Latorre», la cual le mostró las comunicaciones recibidas de la escuadra del sur; en ellas se leía que habían recibido el compromiso de no terminar las negociaciones antes que ellos llegaran; pero a quienes no se les aceptaría introducir ningún cambio o imposición. ¿Qué objeto podría tener esperar la llegada de los buques que navegaban desde Talcahuano si garantizaban que no se harían modificaciones al proyecto de acta, más que continuar ganando tiempo?

[50] La apreciación del ministro Guzmán sobre la posición de la aviación, no puede tomarse en forma absoluta, pues si bien es cierto que las fuerzas que obedecían al subsecretario del ramo tuvieron una importancia vital para reducir a los rebeldes, hubo reparticiones adheridas al movimiento. Un radiograma recibido por los rebeldes, desde Talcahuano, decía el día 3: «La aviación a favor de nosotros».

La falacia de la posición de los amotinados queda ampliamente demostrada con el radio cursado a las 19.25 horas por el Estado Mayor de la Tripulaciones al «Blanco Encalada» conminándolos a embarcar en el destructor «Aldea», que había sido enviado a su encuentro, una delegación con sus peticiones, pues las exigidas por ellos ya habían sido aceptadas íntegramente por el gobierno.

El delegado, seguramente dándose cuenta que ya no tenía el respaldo irrestricto de las autoridades, propuso al gobierno las siguientes alternativas:

1. Si el acta redactada se consideraba inaceptable, romper las negociaciones a las seis de la tarde, hora en que se cumplía el ultimátum.
2. Proponer las modificaciones más indispensables, para lo cual debían enviárseles redactadas y aceptar firmarla una vez que llegara a Coquimbo la escuadra del sur. En su defecto sugería que fuera firmada de inmediato; pero ratificada solemnemente cuando aquellos arribaran[51].

Detención de Carlos Frödden

El contraalmirante von Schroeders, desde su llegada a Coquimbo, tuvo sospechas que el ex ministro de marina y del interior de Carlos Ibáñez, capitán de fragata Carlos Frödden, estuviese comprometido con la situación que se vivía en la escuadra. Como se recordará, había sido uno de los hombres de que se valió el ex Presidente para producir divisiones internas en la Armada con el propósito de dominarla y después había sido su factótum en el ministerio que lo acompañó hasta su caída.

Gran parte de esta aprehensión se basaba en que era vox populi en Coquimbo que había tratado de alejar del mando del «Almirante Latorre» al comodoro Hozven para tomar el cargo y reincorporarse a la Armada, todo lo cual habría fracasado por la oposición del contraalmirante Abel Campos[52].

Notó también el delegado la existencia de una cerrada amistad entre Frödden y el gobernador marítimo de Coquimbo, capitán de corbeta retirado Guillermo Valenzuela, llamándole la atención que esta autoridad no hubiera comunicado al ministerio el motín en la mañana del día 1° de septiembre, cuando tenía que haber conocido la situación, sino que lo hizo después de las 17.00 horas y con posterioridad a haberse recibido la comunicación de los sublevados.

Sospechando que sucedía algo anormal, cuando Valenzuela insistió en acompañar a von Schroeders a parlamentar a bordo del «Almirante Latorre», sin haber sido invitado, lo dejó esperando en la toldilla del acorazado, con un mensajero, durante todo el curso de la reunión.

Consultado directamente el Gobernador Marítimo sobre el lugar donde se encontraba Frödden, recibió como respuesta que en su fundo, cerca de Ovalle; pero hecha la misma

---

[51] El escritor izquierdista Patricio Manns, al transcribir la conversación entre el delegado y el Vicepresidente, la termina con las siguientes palabras del primero *«A mi consejo último me atrevo a agregar que debe tomarse en cuenta el gesto de noble solidaridad que la escuadra del sur ha dado a la del norte, y no esperarla significa para ellos sería traición»*. En las memorias del propio von Schroeders, nada dice de esa frase, terminando en el párrafo anterior; a pesar que copia, in extenso, la conversación. Nos parece algo agregado a posteriori, basado en otras comunicaciones en que el delegado transcribió los argumentos que daban los sublevados. (N. del A.)

[52] Esta versión la relata Patricio Manns tomada, según el autor, de un informe secreto del contraalmirante von Schroeders al ministro de marina.

pregunta al prefecto de carabineros de la provincia de Coquimbo, comandante Moreno, confirmó que estaba en los alrededores del puerto donde un pariente llamado Reinaldo Álvarez.

Con estos antecedentes, el Contraalmirante pidió al prefecto, que abrigaba iguales sospechas, que lo vigilara. Luego éste tuvo conocimiento que una comisión de la escuadra había sido vista, de noche, cerca de la residencia del ex comandante Frödden. Informado de ello, el delegado recomendó al gobierno su detención.

Apresado en un fundo de los alrededores de Coquimbo, fue llevado a Santiago; pero al poco tiempo fue puesto en libertad al no podérsele comprobar responsabilidad en los sucesos.

Empieza la desmoralización en los amotinados

Curiosamente, recién a estas alturas, cuarenta y ocho después de haberse comenzado las negociaciones, el gobierno envió al contraalmirante von Schroeders copia de los mensajes interceptados desde Talcahuano, la mayoría de los cuales hablaban de adhesiones y movimiento de buques, muchos de los cuales habían sido conocidos por el delegado por boca de los sublevados.

Mientras esperaba el Contraalmirante la respuesta del gobierno, trató de entablar una conversación franca y sincera con los tres suboficiales y sargentos que le habían llevado el acta y con el capellán Ramírez, que era el único oficial junto con el teniente Martínez, de nacionalidad paraguaya, que habían bajado a tierra, para conocer el ambiente que se vivía a bordo de los buques amotinados. Por ellos supo que había una gran parte de las tripulaciones que estaban dispuestas a terminar con todo, cuanto antes, pero que había un grupo intransigente que les hacía la tarea extremadamente difícil.

Otro aspecto que aquilató von Schroeders fue el inconveniente que se presentaría si se llegaba a firmar un acta, pues mientras el Estado Mayor de las Tripulaciones estaba exigiendo solemnizar el acto con las firmas de varios notables, por parte de ellos nadie daría la cara, escudándose en el anonimato y alegando que en el motín no había cabecillas. La cobardía moral de estos estaba arrastrando a sus compañeros al despeñadero.

Acta sin destino

La respuesta del gobierno con el documento que debía firmarse para poner fin al movimiento no difiere fundamentalmente del último propuesto, salvo algunos alcances y consideraciones, por lo que no es comprensible la desazón de von Schroeders al recibirla, ni que constituyera el punto de rotura de la negociación. Este decía:

"ACTA DEL GOBIERNO

Entre el representante del gobierno de la república, contraalmirante don Edgardo von Schroeders, premunido de amplios poderes de parte del gobierno de la nación, y el Estado Mayor de las Tripulaciones de la Armada, se ha llegado, con esta fecha, a los siguientes acuerdos destinados a poner término al movimiento de las tripulaciones de la Armada que se inició en la noche del 31 de agosto al 1° de septiembre de 1931:

1. Los representantes del Estado Mayor de las Tripulaciones que suscriben esta acta declaran que su actitud ha estado inspirada en ideales, a su juicio, justos y patrióticos.

2. El gobierno, en vista de esta declaración, hace por intermedio de su delegado con amplios poderes, contraalmirante von Schroeders, la promesa solemne de que no se tomarán represalias con motivo del movimiento a que se pone término, ni se buscarán responsables.

3. Impuesto el gobierno de las aspiraciones y de las causas que han originado el movimiento, estudiará con interés las ideas que se han manifestado y llevará a la práctica todas las que considere conducentes al bienestar de las tripulaciones, al prestigio de la Marina y al engrandecimiento del país.

4. Como ratificación de estos acuerdos, se disolverá el Estado Mayor de las Tripulaciones entregando el mando al delegado del gobierno, quien tomará las medidas del caso para volver a la normalidad. A fin de solemnizar esta ceremonia, los tripulantes formados jurarán mantener, en adelante, la más sólida disciplina y respeto a sus superiores.

Como manifestación exterior del profundo amor de todos a la patria y del juramento de respeto a sus superiores, se saludará con los cañonazos de ordenanza la bandera nacional y las insignias de los Comandantes en Jefe.

5. Para dar fe y constancia de esta acta, firman a continuación el representante del gobierno con amplios poderes, contraalmirante don Edgardo von Schroeders y como testigos ilustres el señor intendente de la provincia Román Mery, el obispo de La Serena Ilustrísimo don José María Caro y el representante de la Corte de La Serena.

A bordo del «Latorre», Coquimbo 4 de septiembre de 1931»

Para salvar la cobardía que inundaba a los cabecillas de no dar la cara, el gobierno aceptó que el acta podía ser firmada por TODOS los tripulantes o por parte de ellos.

El delegado envió el nuevo documento a bordo, haciendo presente que se trataba de un acta redactada al más alto nivel gubernamental la cual debería ser firmada antes de las veinticuatro horas de ese día, sin modificación alguna y cuya ratificación solemne se efectuaría cuando llegara la escuadra del sur.

El Vicepresidente de la República hizo llegar, por su parte, un mensaje al suboficial González que lo conminaba a aceptar las transacciones propuestas por el delegado. Éste decía:

«Cuando aún es tiempo, invocamos los más elementales sentimientos de patriotismo de las tripulaciones en este instante supremo a fin de que no asuman responsabilidades de la ruina y desgracia del país, que acarrearía la negativa de avenimiento razonable que hemos ofrecido. Les hacemos este último llamado como chilenos, en nombre de la patria y de la civilización»

Luego otro comunicado del gobierno daba un ultimátum a los amotinados exigiendo:

1° Aceptación del acta antes de las 24.00 de ese día, 4 de septiembre.
2° Reposición de todos los oficiales en sus puestos.
3° Regreso de los submarinos a sus bases.

Una comisión del «Almirante Latorre» bajó a tierra y entregó al delegado la negativa a suscribir el acta enviada por el gobierno con lo cual quedaron terminadas y fracasadas las negociaciones, lo que fue informado a Santiago junto con el regreso del contraalmirante, al día siguiente a la capital.

La última comunicación enviada por el gobierno, que esta vez la firmaba el propio Vicepresidente de la República y sus ministros, fue transmitida a través del recientemente nombrado gobernador de Coquimbo, comandante Fuenzalida y exigía la rendición incondicional en el plazo de dos horas, debiendo desembarcar las tripulaciones amotinadas, sin armas y someterse a los jefes de plaza.

Los sublevados llaman a la revolución social

El ultimátum del gobierno fue respondido por los sublevados en forma tal, que ya no dejaba dudas acerca de la injerencia política izquierdista del movimiento. Este decía:

«AL GOBIERNO DEL PAÍS
DEL ESTADO MAYOR DEL "LATORRE"

Declaramos ante la conciencia del país que en estos momentos las tripulaciones, al ver la actitud anti patriótica del gobierno y al considerar que el único remedio para la situación es el cambio de régimen social, hemos decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpa junto con nosotros una comisión de obreros que representa el sentir del proletariado de la nación, de la Federación Obrera de Chile y del "Partido Comunista". La lucha civil a que nos ha inducido el gobierno se transforma, en este momento, en una REVOLUCIÓN SOCIAL».

Firmaban este documento Ernesto González, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Mar; Manuel Astica Fuentes, Jefe del Estado Mayor del «Latorre»; Augusto Zagal y otros treinta y tres suboficiales, sargentos, cabos y marineros y tres representantes comunistas, los señores Domingo Solar R., Luis Jofré Barraza y Tobías Solar.

Los sediciosos se aprestan a combatir

Como una prueba de las divergencias que dividían a los sublevados y como una manera de postergar las reacciones del gobierno para controlar enérgicamente la situación, cerca de las 22.00 horas el Estado Mayor de las Tripulaciones despachó otro radiograma, esta vez al ministro de marina, donde le solicitaban que, considerando que la situación quedaría normalizada inmediatamente después que la escuadra del sur fondeara en Coquimbo, solicitaban como un acto inspirado en los fines patrióticos que, tanto el gobierno como los amotinados profesaban, se ordenara regresar a sus guarniciones a los regimientos que se habían despachado para reducir a las tripulaciones levantadas en Talcahuano, haciendo presente que, por su parte, no habían agravado el movimiento con hechos de violencia.

Cuando faltaban quince minutos para la medianoche del 4 de septiembre, el Estado Mayor de las Tripulaciones difundía una comunicación a todas las fuerzas comprometidas que decía textualmente:

"Al general del Estado Mayor del "Latorre": Las negociaciones que este Estado Mayor había realizado con el delegado del gobierno estaban a punto de finiquitarse debido a que para el delegado, el gobierno aceptaba la totalidad de las aspiraciones y peticiones; pero puestos a la consideración del gobierno los acuerdos arribados con el delegado, el gobierno dio una nueva forma al acta que pondría fin al movimiento en tal forma que en ninguna parte acepta

nuestras declaraciones y peticiones, sino que las ideas que ellas manifiestan siendo que el movimiento de las tripulaciones fue verificado, no para exponer ideas, sino para que se aceptaran nuestros principios y nuestras peticiones. Comunicamos esto a las 23.00 horas al delegado del gobierno y la situación se mantiene en suspenso, venciendo el plazo del gobierno a las 24.00 horas, por lo que es necesario que las tripulaciones mantengan la más estrecha unión y altos puntos de mira y esté prevenida para afrontar todas las eventualidades, pudiendo estar ciertos que el Estado Mayor en ningún momento claudicará a los sagrados intereses que representa».

Una vez vencido el plazo, a la medianoche, una última comunicación del Estado Mayor de las Tripulaciones al Vicepresidente de la República constituía una declaración de guerra, justificación de sus actos, crítica al gobierno y apelación sentimental:

«Vuestro telegrama invoca sentimientos que nosotros no consideramos elementales sino como los más elevados y puros del chileno. Ese amor a Chile rompió sus diques al ver que el gobierno, causalisado (sic) con la sangre de centenares de chilenos se embarcaba en el mismo mísero y desguazado barquillo que emplearon sus antecesores para emprender empresas dignas de hombres de corazón patriota y resuelto.

Confiábamos en el gobierno que vuestras señorías representan; pero con tristeza vemos que para conceder unas peticiones nacidas del derecho sentir de más de treinta mil hombres y que al aceptarlas obtendría esa normalidad que la patria necesita, se principia por quitar todo lo que es fundamental y concreto, proponiéndosenos aceptar un pacto que nos dejaría en las mismas condiciones que nos oprimían antes del 30 de agosto, con el aditamento de poder destruir nuestro (palabra ininteligible).

Además vuestro delegado, no respetando el sagrado deber de solidaridad que hemos contraído con los camaradas que se entregaron al azar de nuestra suerte, intentaba hacernos firmar un pacto que consagraría una ilegalidad, puesto que eso implicaba firmar un documento solemne que no se cumpliría enseguida.

Nuestras peticiones no contienen nada exagerado ni las hemos extendido en absoluto; solo hemos procurado defendernos para el futuro y obtener las realizaciones de nuestras aspiraciones.

Vuestras señorías tienen ante sí a los hombres leales, que exponiendo sus vidas se deciden a perderla o a obtener la completa realización de sus ideales. Esas modestas aspiraciones las indican nuestras peticiones».

Como el gobierno había declarado el estado de sitio, fueron puestas todas las fuerzas leales bajo el mando del ministro de guerra general de división Carlos Vergara Montero, quien nombró como jefe de su Estado Mayor al general de división Carlos Sáez Morales. A cargo de la guarnición de Valparaíso quedó el general Agustín Moreno Ladrón de Guevara y como subsecretario de aviación el coronel Ramón Vergara Montero, hermano del ministro[53].

[53] El general Vergara se resistía a nombrar a su hermano a cargo del arma aérea, porque podría ser considerado nepotismo; pero fue convencido por los ministros Marcial Mora Miranda y Leonardo Guzmán Cortés haciéndole ver que se necesitaba una persona con decisión que fuera capaz de neutralizar las pretensiones del desplazado subsecretario coronel Arturo Merino Benítez, quien fue dejado en disponibilidad y sin mando de tropa.

Capítulo V
La situación general del país

Ambiente huelguístico

En Santiago, los elementos políticos opositores habían empezado a ver la posibilidad de «hacer su agosto» con la situación que el gobierno no había podido solucionar por medio de negociaciones. El día 4, el líder comunista Elías Lafferte llamó a un paro a la movilización colectiva, compuesta por los tranvías y los autobuses, en solidaridad con los marineros amotinados y exigir el pago completo de los sueldos de todos los empleados públicos, la suspensión del pago de arriendos para obreros y empleados y la devolución de las especies entregadas en garantía a la Caja de Crédito Popular.

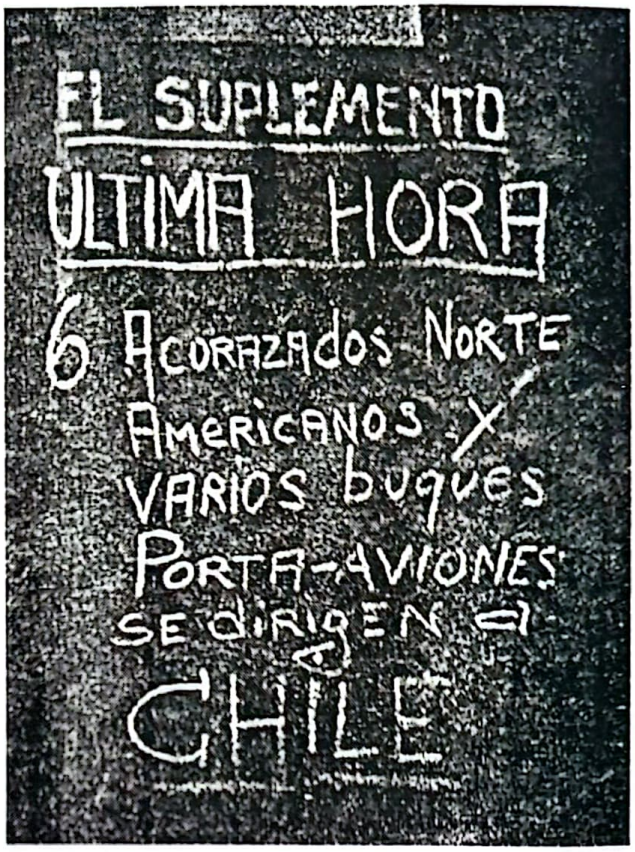
La víspera se había hecho una corrida de dinero en la Caja Nacional de Ahorros de Chillán y Concepción con el objeto de producir pánico por su posible quiebra, lo cual pudo ser desbaratado gracias a la enérgica actitud del ministro de guerra, general Vergara, quien hizo ubicar aviadores de la más segura confianza para que transportaran a empleados del Banco Central que llevaran billetes a esas cajas, como también a las de Valparaíso, Antofagasta e Iquique, después de haber convencido de su necesidad al ministro de hacienda Arturo Prat, quien aceptó la medida de mala gana.

Por otra parte, la sublevación de la marinería podría significar un grave peligro para la zona norte del país, especialmente para toda la región salitrera, que desde muchos años antes se encontraba profundamente trabajada por una activa campaña comunista y que en esos momentos sufría intensamente las consecuencias de la crisis económica.

El comandante de la Primera División del Ejército, general Pedro Vignola, había llamado la atención a la superioridad de la institución sobre los peligros que presentaba esta situación que, hábilmente explotada por los agitadores profesionales, sería un campo propicio para sus prédicas subversivas. Los buques podrían dirigirse en cualquier momento a Antofagasta o Iquique para tratar de levantar aquella región contra el gobierno, repitiendo la táctica de los revolucionarios de 1891.

El día 5 de septiembre ya nadie podía prever hasta donde el motín de la escuadra podría acarrear al país a situaciones conflictivas, sobretodo cuando se venía saliendo de una odiosa dictadura y aún la normalización constitucional no estaba afianzada.

Una mayor intranquilidad aún era provocada por el conocimiento que el movimiento subversivo iniciado en Coquimbo había comenzado a prender en distintos puntos. En Talcahuano se habían levantado los buques surtos en la bahía, los fuertes de la Artillería de



Pizarra de un diario porteño que anuncia la venida de buques norteamericanos a doblegar a los sublevados que produjo pánico en la ciudad.

Costa, los diques y el Apostadero Naval. Otro tanto había sucedido con la base aérea de Quintero y la Escuela de Comunicaciones Navales de Valparaíso. Se esperaba por momentos el pronunciamiento de la Artillería de Costa del primer puerto del país y se miraba, con recelo, la actitud que pudiera tomar el regimiento Maipo, cuyo personal tenía vinculaciones, más o menos estrechas, con el personal de la Armada.

En la capital la efervescencia de la gente fue subiendo de temperatura, las fuerzas montadas de carabineros comenzaron a patrullar la ciudad en prevención de desórdenes, los edificios públicos fueron custodiados por la policía, se apostaron ametralladoras en lugares estratégicos destinadas a rechazar cualquier desmán que quisieran producir las turbas, los alrededores de La Moneda fueron despejados, al público no se le permitía formar tumultos ni grupos numerosos obligándolos a circular, mientras el gobierno distribuía boletines oficiales que la gente se peleaba para conocer las últimas noticias.

La policía se vio en la necesidad que tener que desalojar doscientos estudiantes pertenecientes a las juventudes comunistas que se habían tomado la casa central de la Universidad de Chile y el gobierno obtuvo del Congreso la aprobación del estado de sitio por un lapso de treinta días.

La energía que demostraba el ministro de guerra casi lo llevó a cometer un desatino, que pudo tener fatales consecuencias, al ordenar el envío de un radiograma a los sublevados que los conminaba a rendirse en un plazo de una hora, pues en caso contrario, haría quintear y fusilar a sus compañeros que habían sido tomados presos en Talcahuano. Esta comunicación, que no había sido conocida por el ministro de marina, alcanzó a ser anulada cuando se había transmitido la mitad. Ello habría significado que los amotinados tomaran igual medida con los

oficiales prisioneros. Olvidaba el general Vergara que no estaba tratando con un estado mayor verdadero sino que con amotinados dirigidos, ya a esa altura, por elementos políticos anárquicos.

Ante el convencimiento que invadió al gobierno de que el motín de la escuadra era el inicio de una conjura de características internacionales, el ministro de relaciones exteriores, señor Luis Izquierdo, se entrevistó con el embajador de los Estados Unidos para hacerle presente que los rebeldes controlaban el mar y que estaban inspirados por agitadores que pretendían proclamar una «República Independiente en la Pampa», lo cual constituía una real amenaza para los puertos del norte. Esta reunión se llevó a cabo el 5 de septiembre y dos días más tarde el canciller se hacía acompañar de su colega de guerra para solicitar al gobierno norteamericano «los servicios de un especialista en propaganda comunista y en actividades de asistencia para contrarrestar las ramificaciones y los orígenes del movimiento en Chile».

El embajador norteamericano William Culbertson respondió que no le parecía que existiera un motivo real y que en caso de que fuese necesaria la ayuda, su recomendación a Washington solo podría ser sobre la base de *«una petición firmada por el gobierno chileno y por los líderes de los principales partidos políticos chilenos»*, lo que hacía virtualmente imposible una intervención militar de los Estados Unidos. El Departamento de Estado insinuó la posibilidad de ayudar con elementos militares, pero rechazando todo lo que se pareciera a una intervención directa en la política interna, pues era el gobierno chileno el que agitaba ante Washington el tema del comunismo.

El general Vergara solicitó, entonces, el suministro de bombas lacrimógenas para neutralizar los disturbios, de bombas para aviones de alto poder, pues las que poseía la Fuerza Aérea no eran capaces de perforar la cubierta blindada del acorazado «Almirante Latorre» y vender dos submarinos a Chile por parte de los Estados Unidos. En realidad el Ministro dudaba que estos últimos pudieran sernos transferidos; pero tan solo la promesa de hacerlo afianzaría la moral pública.

El Departamento de Estado replicó que el Washington Naval Armaments Treaty prohibía la venta de submarinos y para el resto de lo solicitado la disculpa era verdaderamente infantil, pues indicaban que las bases norteamericanas en Panamá no tenían acopio de gas y, porque el requerimiento chileno había sido hecho un día sábado, el gobierno no podía saber el tipo o la cantidad de bombas almacenadas en las bases de la Zona del Canal. Agregaba que aunque el material solicitado estuviera disponible, el cual podría ser embarcado en un avión comercial, el Secretario de Estado hacía notar que ello estaba prohibido por los acuerdos internacionales, por lo que Chile debía resolver sus problemas sin ayuda.

Aunque este hecho fue tratado en forma secreta, se filtró a la prensa y en la pizarra de un periódico de Valparaíso era posible leer, en un suplemento de última hora, que anunciaba que seis acorazados norteamericanos y varios buques portaaviones se dirigían a Chile, lo cual provocó pánico en muchos hogares porteños[54].

Es innegable la reacción adversa que se habría producido en todo el país si una iniciativa, como la descrita por la prensa de la época, hubiera tenido lugar.

---

[54] Patricio Manns cita una conversación entre el ministro de relaciones exteriores y el contraalmirante von Schroeders, tomada de «Recuerdos Íntimos del Motín de la Escuadra», obra inédita de este último, donde habría manifestado el secretario de Estado que si la aviación no era capaz de someter a los amotinados, vendría a dominarlos una escuadra norteamericana; a lo cual el marino le habría respondido que eso mismo se había tratado en una reunión en el ministerio de marina, pero que tuviese cuidado de no insinuarlo oficialmente, pues ello podría acarrear una reacción negativa en el país que pondría en peligro la estabilidad del gobierno.

La Milicia Republicana

La situación ocurrida en la Armada, agravada por los frecuentes trastornos ocurridos al interior de la Fuerza Aérea causados por la pugna entre los comandantes Ramón Vergara Montero y Arturo Merino Benítez, sumada a las actitudes anticonstitucionales que venía demostrando el Ejército desde hacía seis años, tuvo una enérgica reacción civilista que se tradujo en la formación de milicias y en la afluencia de ciudadanos a los regimientos y comisarías para engrosar las filas de los reservistas.

El gobierno recibió además el apoyo de las más disímiles instituciones, tales como la Asociación de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Instituto de Ingenieros, la Sociedad Agronómica, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la Asociación Odontológica, la Unión Ferroviaria, el sindicato de dueños de autobuses, el directorio de los oficiales en retiro del Ejército y de la Armada, el Cuerpo de Bomberos, la Asociación Médica, las colonias extranjeras residentes y los partidos políticos más importantes. Es decir, todas las fuerzas vivas de la nación se alineaban en contra del movimiento sedicioso.

Algunos de estos grupos civiles paramilitares se encontraban en una etapa de formación desde antes del estallido del motín, los cuales habían nacido para evitar nuevos cuartelazos, por lo que pudieron hacerse presente casi de inmediato. El día 3 de septiembre desfilaba la Legión Cívica de Valdivia con 500 integrantes, quienes ofrecieron sus fuerzas al regimiento Caupolicán de esa ciudad. Otro tanto ocurría con la Unión Cívica de la comuna de Ñuñoa con un número similar de adherentes. También en la capital surgió la Guardia de Reserva del Orden, liderada por un general del Ejército en retiro y que agrupaba a miembros de acaudaladas familias entre los 40 y los 50 años de edad. El Ejército Civil de la Clase Laboriosa tenía sus adherentes entre empleados y obreros, cuyo regimiento N° 2 lo constituían 200 operarios del matadero de Santiago.

Otras entidades similares fueron la Guardia Cívica Nacional, la del barrio Vicuña Mackenna, la de Providencia, cada una con 500 militantes. Organismos similares se crearon en provincias[55].

Para fortalecer las fuerzas militares fueron llamados los reservistas y los voluntarios. Se presentaban a los regimientos ofreciéndose para defender el prestigio de la república. Fueron recibidos por los regimientos Cazadores y Yungay, donde tuvieron instrucción militar y posteriormente juraron la bandera en el Parque Cousiño y desfilaron ante el Vicepresidente de la República.

Fue nombrado Jefe de Plaza en la capital el general Indalicio Téllez, el cual recientemente había sido reincorporado al Ejército después de haber sufrido la persecución del gobierno de Ibáñez, el que se dio a la tarea de reforzar las unidades de Santiago con voluntarios con o sin instrucción militar; llegando a contar en una semana con ocho mil adherentes. Este grupo recibió el nombre de Batallón Cívico Nacional y era comandado por oficiales del regimiento Buin.

El país vivía un clima de movilización nacional correspondiente al de una verdadera guerra civil. Las damas de la sociedad donaban sus joyas al Banco Central para financiar los aprestos bélicos, medio millar de jóvenes dueños de automóviles los ponían a disposición del

[55] Todas estas organizaciones formaron posteriormente la Milicia Republicana, creada el 24 de Julio de 1932 y que llegó a contar, en su mejor momento, con cincuenta mil voluntarios, fuertemente armados, de claro matiz anticomunista.

RESERVISTAS VOLUNTARIOS JURAN A LA BANDERA EN EL PARQUE COUSIÑO.

regimiento Cazadores y los veteranos de 1879 desfilaban frente al palacio de gobierno. En Valparaíso la guardia cívica desfilaba con la banda del regimiento Maipo.

Cuando el ministro de marina le comunicaba al contraalmirante von Schroeders, que en ese momento negociaba en Coquimbo, que la opinión pública era cada vez más adicta al gobierno, no estaba haciendo un bluf para obtener que los amotinados depusieran su actitud, era la realidad que vivía el país.

Por otro lado el Partido Comunista trataba de contrarrestar el apoyo que estaba recibiendo el gobierno y a través de su activo dirigente Elías Lafferte, que además lideraba la agrupación de pantalla llamada Federación Obrera de Chile, llamó a una huelga general a la cual adhirió la movilización colectiva de la capital y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, debiendo el Ejército encargarse de movilizar los convoyes que habían quedado detenidos en las estaciones[56].

Fracaso de la mediación

Desde que comenzó a vislumbrarse el fracaso de la mediación encomendada al contraalmirante von Schroeders, el ministro de guerra tomó las providencias para atacar al movimiento subversivo en cada uno de los lugares en que diferentes reparticiones se habían adherido. Como primera resolución ordenó al proveedor de Coquimbo no entregar víveres a los buques amotinados, pues era lógico que ellos empezaran a escasear.

[56] En esos años era manifiesta la injerencia del partido comunista en los sindicatos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

En esa ciudad se vivía gran ansiedad en todos sus habitantes por inquirir detalles de lo que estaba sucediendo, mientras el pánico se apoderaba de la población. Hombres, mujeres y niños corrían por las calles dando crédito a toda clase de rumores que circulaban. Algunos se agrupaban cerca del mar atentos a los movimientos de los buques.

Numerosas mujeres, algunas de ellas esposas de marinos embarcados, les hacían llegar sentidas cartas rogándoles e implorándoles que no persistieran en su absurda aventura. Algunas de ellas permanecían horas llorando en espera que los sublevados depusieran su actitud[57].

Hasta el sábado 5 a mediodía las actividades de la ciudad de Coquimbo se desarrollaron normalmente; pero al tenerse conocimiento de que la mediación del contraalmirante von Schroeders había fracasado, el pánico invadió a la gente con una sensación de dolor, desesperación e impotencia. Los primeros en huir fueron los que tenían algún medio de movilización para trasladarse a Ovalle, Vicuña o Andacollo; pero luego fueron los especuladores, que nunca faltan, los que cobraban cifras abusivas por el viaje. Los que no tenían posibilidad de partir se encerraban en sus casas haciendo el acopio de los víveres que su situación les permitiera.

El gobierno trata que se rindan los submarinos

El viaje de la escuadra del sur a Coquimbo constituía un apoyo militar para los sublevados y un problema para el gobierno; pero éste consideraba que si conseguía rendirla, contaría con los submarinos para doblegar el motín. Para ambos eran importantes estas naves.

Ya hemos relatado el zarpe de los buques desde Talcahuano hacia Dichato el 3 de septiembre, después de haber desembarcado a los oficiales, para continuar viaje al norte a la medianoche de ese día. Luego la información de que el crucero «Blanco Encalada» llevaba las peticiones del personal del Arsenal Naval. Enseguida el Estado Mayor de las Tripulaciones destacó al destructor «Aldea» para salir a su encuentro y transbordar a una delegación con sus exigencias.

Mientras los sublevados apuraban la navegación de la escuadra del sur y rogaban al transporte «Micalvi» zarpar con las carboneras llenas para abastecer los buques en que comenzaba a escasear el combustible, el gobierno discurrió evitar que ambas escuadras se unieran y atacar, hasta lograr la rendición de los que navegaban al norte.

El ministro de guerra envió una comunicación al buque madre de submarinos «Araucano» y a la flotilla de sumergibles, exigiendo que se sometieran al gobierno, bajo la garantía de que no sufrirían represalias e indicándoles que para ello debían recalar al puerto de San Antonio o a cualquier punto de la costa inmediato al lugar donde navegaban. En caso negativo serían bombardeados y destruidos.

El sargento señalero Orlando Robles, quien oficiaba de comandante en jefe de la escuadra del sur, contestó altivamente que la posición unánime y espontánea de su tripulación era que prefería derramar hasta la última gota de sangre antes de traicionar a los hermanos que se habían levantado en armas, obligados por la defensa de sus sagrados deberes y

[57] La situación que vivía la población ha sido descrita por el estudiante de derecho Luis Ramírez Aris que viajó junto con tres compañeros a Coquimbo. Es innegable la mayor cordura mostrada por las mujeres en Chile cada vez que el país se ha visto sometido a las más graves crisis.

respetables ideales. Terminaba agregando que continuaba al norte para reunirse con la escuadra, sin detenerse ante ninguna dificultad ni sacrificio, por grandes que ellos fueran y siempre bajo el lema de la Armada de «Vencer o Morir» .

Merino Benítez trata de sublevar la aviación

El gobierno sabía que contaba con las fuerzas de la capital, formadas por el Ejército y los carabineros, pero para someter a los sublevados precisaba de la aviación o de los submarinos. Como estos últimos no aceptaran su conminación a rendirse vio como único recurso utilizar a la Fuérza Aérea.

Esta joven arma de la defensa nacional se encontraba en una etapa depuradora después de haber sufrido un alto grado de descomposición.

El gobierno había decidido nombrar un Subsecretario de Aviación, autoridad de la cual dependía el arma, que fuera ajeno al escalafón de la institución para tener una versión no comprometida de los intentos de un grupo de oficiales para hacer volver al general Ibáñez a la primera magistratura y al comandante Arturo Merino Benítez a su mando. A ello se debía el nombramiento del hermano del ministro de guerra en el cargo, el cual ostentaba el grado de teniente coronel del Ejército.

Un acontecimiento como el sufrido por la Armada regocijaba a aquellos que buscaban la caída del gobierno.

La obra depuradora del arma pasaba por la eliminación de un grupo de oficiales, lo cual había sido propuesto, pero que no se había llevado a la práctica. Estos seguían ciegamente a su caudillo, comandante Merino y trataban de incorporar a su grupo al resto.

Cuando el nuevo subsecretario de aviación, comandante Ramón Vergara Montero, se dirigió a la base aérea de El Bosque, para disponer de las medidas preliminares para movilizar los aviones contra los marinos sublevados, se encontró con que un grupo de oficiales exigían que la empresa debía llevarla a cabo su líder, el comandante Merino.

Vergara debió utilizar todas sus dotes de convencimiento ante la situación que se le presentaba, haciendo presente la falta de patriotismo al deliberar en los momentos en que el país se jugaba su prestigio y su futuro con la grave crisis que vivía. Ante la actitud de rebeldía mostrada por los aviadores saltó a la palestra el capitán Marcial Arredondo, increpando a sus compañeros y haciendo presente que aunque no tenía ninguna simpatía hacia el nuevo subsecretario, estaba compenetrado de la gravedad del momento que se vivía y acataba las órdenes del gobierno y *«si algún aviador pretendía inutilizar los aviones, sería la primera vez que tendría que correr sangre en la Escuela de Aviación»*.

Ante esta actitud, los pilotos depusieron su resistencia; pero el comandante de la Escuela de Aviación, Manuel Francke[58], que estaba notificado de su exoneración, permitió que el personal de tropa a sus órdenes se agrupara en el exterior de las oficinas de la comandancia para exigir la reposición de Merino Benítez en la subsecretaría. Además hizo entrega de un memorándum que habría sido encontrado en manos de algunos suboficiales de la escuela y de la escuadrilla de bombardeo y en el cual se hacían peticiones similares a la

[58] El comandante Manuel Francke Mariotti procedía de la aviación naval cuando se creó la Fuerza Aérea Nacional (FAN).

de las tripulaciones de la Armada con respecto a la rebaja de sueldos y eliminación de personal[59].

Al anochecer de ese día fueron los oficiales de la propia subsecretaría quienes se presentaron a solicitar su retiro de la institución por no compartir las responsabilidades de las medidas que se iban a tomar contra los sublevados. Al ser recibidos, individualmente, por Vergara, se aclaró que habían sido impulsados a tomar esa actitud engañados por uno de los capitanes y se retractaron.

El vicepresidente de la república, Juan Esteban Montero, quien había delegado el mando de la nación en don Manuel Trucco para dedicarse a su candidatura a la primera magistratura, acudió a La Moneda y al conocer lo sucedido esa tarde con la Fuerza Aérea determinó que debía procederse de inmediato a ocupar el cantón de El Bosque con tropas de la Escuela de Infantería.

Ramón Vergara pidió al ministro del interior su relevo, para no entorpecer la misión que se le encomendaba y sugirió nombrar al comandante Diego Aracena, a quien se le acababa de entregar la jefatura de la Escuela de Aviación; pero el gobierno rechazó la petición, pues significaba simplemente doblegarse ante las actuaciones subversivas de los aviadores.

El ministro de guerra y jefe de las fuerzas, general Vergara, después de confirmar a su hermano al mando de la aviación, llamó a La Moneda a una reunión de los oficiales de planta de El Bosque donde dio a conocer lo delicado de la situación y la inquebrantable resolución de no omitir sacrificios en defensa de sus fueros.

Situación de las reparticiones navales en el resto del país

Como los cabecillas de la escuadra sublevada en Coquimbo empezaron a temer que la escuadra del sur se hubiera rendido, enviaron en su busca al destructor «Aldea» con instrucciones de interceptar al crucero «Blanco Encalada» y echarlo a pique si notaba en él algún acto que denotara que los había traicionado.

El encuentro se produjo frente a Valparaíso, dando seguridades el crucero que se dirigía a Coquimbo a unirse con el resto de los sublevados y ponerse a las órdenes del Estado Mayor de las Tripulaciones. El único oficial que viajaba abordo era un teniente 1° de sanidad, de apellido Mendoza, quien no se había desembarcado en Talcahuano cuando lo hizo el resto de la oficialidad.

El «Blanco Encalada» continuó al norte y al destructor se le ordenó mantenerse en las cercanías de Quintero para asegurarse que la base aérea de ese puerto, que se había plegado al movimiento, no sufriera algún peligro.

Suponía el Estado Mayor de las Tripulaciones que con la escuadra del sur navegaban los destructores «Riveros» y «Condell», los cuales junto al «Aldea» y al «Lynch», despachados desde Coquimbo, debían encargarse de defender la Escuela de Comunicaciones de Viña del Mar y la base aérea de Quintero; pero como veremos, los primeros no acompañaban a la formación que había zarpado de Dichato y el último no pudo ubicarla durante su navegación, por lo que se le ordenó retornar a Coquimbo junto al «Aldea».

[59] Según el subsecretario de aviación, teniente coronel Ramón Vergara, más tarde se habría comprobado que era un documento apócrifo.

Con respecto al Apostadero Naval de Talcahuano, el Estado Mayor de las Tripulaciones esperaba defenderlo con la Artillería de Costa, las escuelas de artillería, de grumetes, de torpedos y electricidad y todo el personal de los diques, fuerzas que consideraba suficientemente poderosas para repeler victoriosamente el ataque de la infantería del Ejército, por lo que no se consideró necesario enviar buques a ese puerto, que creían inexpugnable de un ataque por tierra.

Posteriormente, mediante los radios recibidos, los sublevados supieron que el blindado «Prat» y el destructor «Riveros» se encontraban en el puerto militar, siendo el último el enlace de las comunicaciones radiotelegráficas con ellos.

Cerca de la medianoche del día 4, el Estado Mayor de las Tripulaciones recibió un radio de la Escuela de Comunicaciones de Viña del Mar en la que pedían angustiosamente al destructor «Aldea» colocarse frente a la unidad, por temor de un ataque en cualquier momento.

Otro mensaje provenía de la base de Quintero, en el cual comunicaba la imposibilidad de enviar el avión que se les habían solicitado, pues el personal de tropa no tenía preparación para pilotearlo e insistían en que se destinara un buque a ese puerto para su mayor seguridad. Finalmente informaban que corrían rumores en el sentido que los regimientos Maipo y Coraceros estarían preparándose para embarcarse rumbo a Coquimbo y que el Cuerpo de Carabineros de la capital se habría plegado al movimiento.

Un tercer radio provenía de Talcahuano, en el que hacían presente que, a través del diario El Sur de Concepción, se les había comunicado que el gobierno había llegado a una transacción con la escuadra, pero que ellos seguían con el temor de que las tropas del Ejército intentaran apoderarse del apostadero, pues los regimientos avanzaban hacia ellos.

Primera acción de la aviación

La primera acción planificada con la Fuérza Aérea consistía en atacar a la escuadra del sur antes que pudiera reunirse con los buques amotinados en Coquimbo para obtener así que se entregaran los submarinos, con los cuales podrían amagar a las unidades de superficie. Para ello salió desde la base aérea de El Bosque, el día 5 de septiembre, el subsecretario comandante Vergara para atacar con bombas a los sumergibles y obtener su rendición.

Había mucha duda acerca de la posición que tomaría el personal de mecánicos de la Fuerza Aérea, el cual parecía congeniar con los amotinados de Coquimbo, por lo que se ordenó que acompañaran a los pilotos en sus misiones, evitando así la posibilidad de sabotajes.

Tras patrullar la zona en que navegaban durante casi todo el día, fueron avistados los buques al atardecer, por lo que decidieron no atacar, regresando los aviones a sus bases[60].

Los aviadores conocían la hora exacta de zarpe de la escuadra del sur desde Dichato, su rumbo y velocidad aproximada y por consiguiente era sencillo determinar la posición. Además ninguna de las naves tenía ni un solo cañón antiaéreo.

---

[60] En los informes de la aviación y en el libro de Ramón Vergara «Por Rutas Extraviadas», aducen haber avistado solo al atardecer a los buques, hecho por el cual no habrían atacado, pero en el registro de las comunicaciones entre ambas escuadras se puede ver el siguiente radio captado a las 10.05 horas del 5 de septiembre: «*A Escuadra del Norte de Escuadra del Sur: Envíe inmediatamente uno o dos destructores para escoltarnos resguardando uso de posible ataque aéreo*».

Esta actitud de los atacantes les permitió a los sublevados recalar sanos y salvos a Coquimbo y al gobierno perder una excelente oportunidad para batirlos o rendirlos. Las consecuencias de ello pudieron haber sido funestas, pues al fallar la única arma a la cual los amotinados le tenían algún respeto o temor, podría animarlos a zarpar al norte y dominar los regimientos de las guarniciones de Iquique o Antofagasta.

Las fechas de las acciones que se desarrollaron en Coquimbo, Talcahuano y Valparaíso se sobreponen entre sí, por lo que hemos preferido separar en capítulos aparte cada una de ellas.

Capítulo VI
Coquimbo

Llegada de la «escuadra del sur»

Hemos visto que el Estado Mayor de las Tripulaciones se encontraba preocupado por la suerte que podía correr la escuadra del sur, la cual navegaba desde Talcahuano a cargo del personal de gente de mar. Además la logística de las naves debía dejar mucho que desear desde el momento que habían zarpado sin estar preparados para una larga navegación. Por otro lado, las condiciones de las máquinas de los buques no eran las óptimas, pues se trataba de unidades que, con excepción de los submarinos, estaban en la reserva, lejos de las escuadras activa y de instrucción. Ya al anochecer del día 3 de septiembre el buque madre de submarinos «Araucano» consultaba por radio al crucero «Blanco Encalada» si le podía fabricar 250 raciones de pan para el día siguiente y la cantidad y clase de víveres con que contaba

Por otra parte, el destructor «Riveros», que había quedado en Talcahuano sirviendo de enlace de comunicaciones, informó a la escuadra del sur que la escampavía «Orompello» se había devuelto y fondeado en ese puerto y la «Elicura» había recalado a la isla Quiriquina, poniéndose a las órdenes de la Escuela de Grumetes. La escampavía «Colo Colo» había zarpado con posterioridad, pero se desconocía su posición.

La formación, que navegaba hacia el puerto nortino, estaba compuesta por el buque madre «Araucano», rodeado por los submarinos «Simpson», «Thomson, «Guacolda», «Quidora» y «Fresia» y las escampavías «Leucotón», «Janequeo» y «Sibbald». El crucero «Blanco Encalada» navegaba en forma independiente a solo 5 nudos de velocidad.

Cuando los destructores «Aldea» y «Lynch» zarparon de Coquimbo al encuentro de la escuadra del sur, fueron despedidos por las tripulaciones de los demás buques cantando *«La Internacional»*, himno oficial del Partido Socialista.

¡Ya era difícil continuar negando la paternidad política del movimiento!

Alrededor de las 17 horas del día 5 apareció la silueta del crucero «Blanco Encalada» seguido de un remolcador y dos submarinos. En todos los buques sublevados se izó empavesado y las tripulaciones formaron en cubierta. A los sones de las bandas, otra vez se cantó *«La Internacional»* socialista.

Como el «Araucano» y el resto de los submarinos no aparecían y el destructor «Aldea», que había salido en su búsqueda, no los había podido ubicar, las comunicaciones se hicieron más nerviosas, indicándoseles que se alejaran de la costa para prevenir un ataque; hasta que recibieron un radio informando que recalarían a Coquimbo esa noche. Lo hicieron en la

mañana del día 6. Solo faltaba el remolcador «Colo Colo» que, como dijimos, venía retrasado y solicitaba informaciones sobre la determinación que habían tomado las tripulaciones para proceder al respecto.

Captura del «Flora»

Cerca de las 21 horas se aprestaba a recalar en el puerto el vapor mercante de bandera extranjera «Flora», que navegaba desde Valparaíso cargado de animales vacunos, corderos, papas y verduras, cuando fue conminado por el «Almirante Latorre» a detenerse e incomunicar su radiotelegrafía. Su capitán, ignorante de lo que sucedía, respondió cumpliendo la orden y solicitando la información sobre el tiempo que duraría su detención, pues necesitaba cumplir su itinerario para recalar en Huasco y en Caldera al día siguiente. La respuesta fue que debía entrar al puerto y fondear a la cuadra del «Blanco Encalada», donde fue saqueado por los sublevados.

Una vez que el buque fue descargado y se le dio la autorización de zarpe, salió en su encuentro el destructor «Lynch» y lo apresó, tripulándolo con 10 hombres armados e incorporándolo a los sublevados.

La escuadra había así asegurado sus víveres para unos tres meses.

Apelación al gobierno

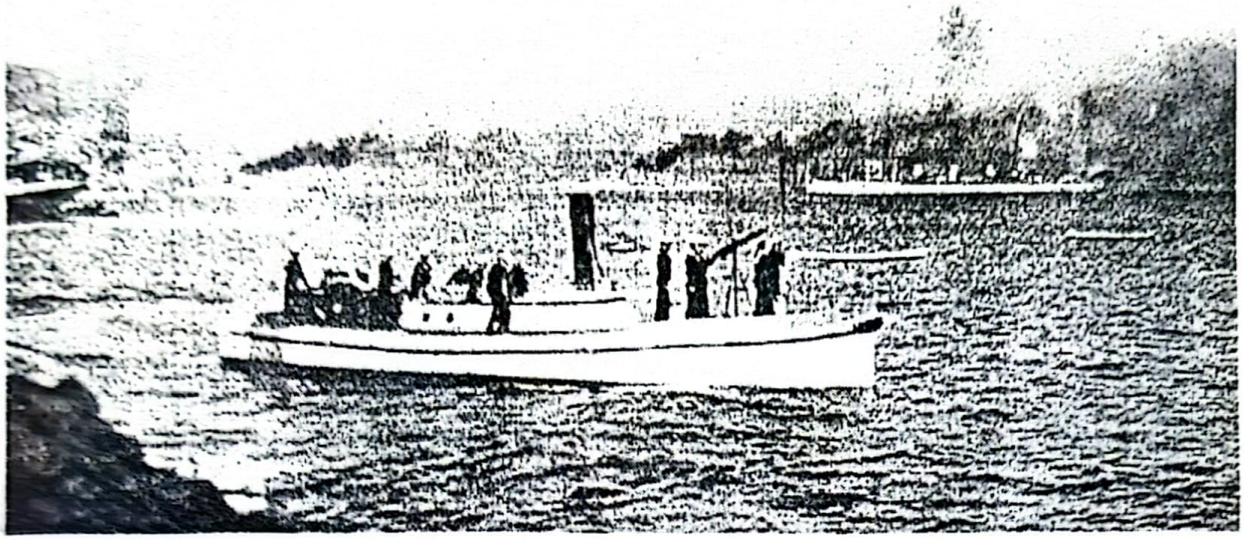
Los amotinados tenían conocimiento inmediato de las acciones que se estaban desarrollando para reducir al Apostadero Naval de Talcahuano mediante el enlace radial que mantenía permanentemente el crucero «O'Higgins», por lo que decidieron dirigirse a las más altas autoridades del país, como eran el Vicepresidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, el Arzobispo de Santiago y los presidentes de ambas ramas del Congreso Nacional para darles un ultimátum que firmaban anónimamente los Estados Mayores de las escuadras del norte y del sur. Este decía:

«Al gobierno: En conocimiento de las numerosas víctimas resultantes del ataque hecho por las tropas del gobierno al apostadero de Talcahuano, de la agresión de la caballería a la base de Quintero, de la concentración de aviones en Los Cerrillos y de la suspensión de entrega de víveres a la escuadra ordenada por el general Vergara, damos un plazo de dos horas, contadas desde la recepción de esta notificación, para que cesen las hostilidades en Talcahuano, Valparaíso y Quintero, la concentración de aviones, y se suspenda la orden de no entregar víveres. En caso contrario, procederemos a tomar represalias con los oficiales que tenemos en nuestro poder.- Estado Mayor de las Tripulaciones».

La respuesta del Vicepresidente, en conjunto con su gabinete, no se dejó esperar. Decía:

«Habiéndose agotado ayer los medios conciliatorios y comenzadas las operaciones de fuerza, el gobierno exige ahora la rendición incondicional desembarcándose inmediatamente las tripulaciones desarmadas y sometiéndose a las órdenes del comandante de la plaza.

Si así lo hicieran, el gobierno atenuará el rigor de las sanciones. De otro modo aplicará la ley marcial con toda su fuerza. El gobierno concede a Uds. una hora de plazo, contada desde el momento del recibo de esta comunicación. Caso contrario se procederá conforme a las medidas indicadas».



LANCHA DEL «ALMIRANTE LATORRE» QUE FUE ARMADA CON AMETRALLADORAS POR LOS AMOTINADOS PARA RECORRER LA BAHÍA DE COQUIMBO.

Firman: Trucco, vicepresidente; Marcial Mora, ministro del interior; Luis Izquierdo, relaciones exteriores; H. Walker, justicia; Carlos Vergara, guerra; E. Spoerer, marina; E. Matta F., fomento; Arturo Prat, hacienda; L. Guzmán, educación; Santiago Wilson, bienestar social; Carlos Martínez, tierras y colonización.

Preocupación en La Serena por posibles desmanes

Los cónsules de los Estados Unidos, Gran Bretaña, España y el Perú en La Serena fueron a bordo del «Almirante Latorre» para solicitar garantías que se evitaría el saqueo que estarían preparando los cesantes de la zona, quienes contarían con la pasividad de los carabineros[61].

Los amotinados dieron amplias seguridades que enviarían tropas a tierra si se producían desmanes, lo cual además lo hicieron saber a la intendencia de La Serena y a la gobernación de Coquimbo, pues su deber era proteger a la población civil. Esta posición estaba en abierta contradicción con un comunicado transmitido por la radio del «Almirante Latorre» al gobierno, anunciando que si no se accedía a las reiteradas peticiones del Estado Mayor de las Tripulaciones, procederían a bombardear la ciudad con los cañones de sus buques, lo cual produjo un éxodo de los pobladores de Coquimbo.

[61] La idea acerca de la pasividad de los carabineros estaba, al parecer, solamente en la mente de los cónsules, pues el comandante Ramón Vergara en sus memorias se refiere a la eficaz cooperación que recibió de ellos que quedaron bajo el mando del comando en jefe de la aviación.

Durante la sublevación los amotinados no pudieron contar con fuerzas de apoyo en tierra, limitándose a recorrer la bahía con embarcaciones menores, debidamente artilladas con marineros armados con fusiles, que desembarcaban, impertérritos, a aprovisionarse de toda clase de víveres. Los proveedores, aterrorizados, debían entregar cuanto se les exigía, contra un recibo de lo que se llevaban las tropas amotinadas a los buques.

El Ejército, previendo que en el regimiento Arica de La Serena pudiera haber sucedido una situación parecida a la del regimiento Maipo de Valparaíso, que relataremos en el próximo capítulo, había hecho un cambio de dotaciones, enviando a otra guarnición a la que se había desempeñado hasta entonces en esa ciudad. Esta prudente medida hizo que los sublevados esperaran, en vano, un levantamiento de la unidad.

Guerra de comunicaciones

En la tarde del sábado 5, el Estado Mayor de las Tripulaciones había decidido hacerse a la mar al día siguiente para evitar presentar un blanco inmóvil a los aviones que suponían que los atacarían, para lo cual el «Almirante Latorre» entregó petróleo a los destructores «Orella» y «Riquelme»[62].

El «Almirante Latorre» zarpó del puerto con rumbo norte y, después de navegar alrededor de una hora, recaló nuevamente para demostrar que podía hacerlo y disparar, sin los oficiales, como lo ponían en duda los artículos de prensa que aparecían en los diarios de la capital. Esto fue realizado llevando a bordo a una delegación de la Federación Obrera de Chile, FOCH[63].

Todos los buques, incluso el mercante apresado «Flora», permanecieron cruzando la boca del puerto en espera de los aviones que estimaban que estarían concentrados en el aeródromo de Los Cerrillos[64]. Allí se encontraban cuando arribó el «Araucano» con el resto de la escuadra del sur.

Como una manifestación de la intención de repeler el ataque, cada buque disparó un cañonazo en dirección al campo aéreo, a pesar que lo separaban treinta kilómetros, distancia imposible de alcanzar.

Envalentonados los amotinados con la llegada de los refuerzos del sur, iniciaron una serie de comunicaciones amenazantes dirigidas al ministro de guerra con el propósito de hacer desistir a éste del ataque.

A las 11.30 horas, haciendo referencia al comunicado del gobierno pidiendo la rendición de los submarinos mientras navegaban al norte, le radiaban:

«Los submarinos ya se encuentran incorporados a las escuadras de la Armada. Agradecería para otra ocasión dirigirse al comandante en jefe de las escuadras cuando necesite submarinos».

---

[62] El comandante del destructor «Orella» describió, posteriormente, que desde el encierro en su camarote sentía moverse a su buque como si navegara por encima de las rocas.

[63] La FOCH había sido fundada el 18 de septiembre de 1909. Hasta 1921 no fue propiamente un organismo combativo. Por indicación de Juan Emilio Recabarren, en la convención de Rancagua, el 25 de diciembre de 1921, adhirió a la Internacional Sindical Roja, de Moscú; paso que fue ratificado en la convención de Chillán de 1923. Recabarren la presidió desde 1919.

[64] Se trata del aeródromo Los Cerrillos de Coquimbo, no debe confundirse con el aeropuerto de igual nombre en Santiago. (N. del A.)

Luego: *«Estoy esperando en las afueras de Coquimbo el ataque de su gran Fuerza Aérea»*
Enseguida: *«Hoy nos hacemos a alta mar esperando su famosa escuadrilla»*.
Pronto de las comunicaciones sarcásticas pasaron a las amenazas, siempre dirigidas al jefe de la fuerza:

«Si a las 14.30 horas de hoy domingo no se rinden incondicionalmente las fuerzas militares de La Serena que se encuentran escondidas, destruiré esa ciudad».

Como la suspensión a la entrega de víveres era la acción que más había impactado a los amotinados, ello tampoco estuvo fuera del sarcasmo y dirigiéndose nuevamente al general Vergara le decían:

«Le doy las gracias por la orden de suspender la entrega de víveres. Aunque desistí de cumplir represalias con los oficiales por cuanto no creo dignos dichos actos, le manifiesto, como información, que ni la escuadra ni los oficiales sufrirán por falta de víveres».

Reconocimiento aéreo

En la mañana del 6 de septiembre estaba concentrada, en el aeródromo Tuquí de Ovalle, la Fuerza Aérea; la cual contaba con dos bombarderos pesados «junkers», catorce bombarderos livianos «falcon» y «vickers», dos aviones de ataque «wibault» y cuatro transportes «ford» y «fairchild», de los cuales dos estaban acondicionados como bombarderos; además tenían una gran cantidad de bombas, munición y combustible. Comandaba la operación el teniente coronel del Ejército Ramón Vergara Montero[65]. El Estado Mayor de la aviación quedó en manos del comandante Aracena.

A las dos de la madrugada el «Almirante Latorre» había ordenado que los buques zarparan dos horas más tarde, antes del amanecer, para repeler el ataque aéreo que se avecinaba y concentrarse en la extremidad sur oeste de la bahía en punta Porotos, al sur de punta Teatinos, donde se defenderían; pero las dificultades que encontraron los improvisados comandantes para navegar de noche, los obligó a retornar a Coquimbo, dejando solamente al submarino «Thompson»[66] y al vapor «Flora,» como observadores, en las afueras del puerto para evitar cualquier sorpresa.

El primer raid aéreo se inició poco antes del mediodía, con un solo avión, con el objeto de conocer la posición de los buques en la bahía, en el cual participó directamente el jefe del comando de aviación.

Durante el vuelo fue posible observar algunas unidades fondeadas y otras en movimiento, entre los cuales se encontraban los submarinos «Thompson» y «Simpson». La máquina picó hasta pasar a ras del agua y lanzar sobre uno de ellos cuatro bombas que no dieron en el blanco y les permitieron sumergirse. Tan solo el «Thompson» recibió un impacto sin mayores consecuencias.

El fuego antiaéreo de un destructor y los tiros de fusilería, hechos desde el «Almirante Latorre», les hizo alejarse después de haber sido alcanzado por varios proyectiles y sobrevolar

[65] Ramón Vergara tenía el grado de teniente coronel en el Ejército, pero al incorporarse a la nueva Fuérza Aérea lo hizo como comandante, razón por la cual se ha usado una u otra denominación al referirnos a su grado.

[66] El submarino Thompson tenía en su nombre un error de ortografía, el cual fue rectificado en las unidades que lo sucedieron con el mismo nombre; en efecto, la familia del héroe de la guerra de Pacífico era de origen escandinavo y su nombre correcto era Thomson.

el mercante «Flora», que en esos momentos entregaba víveres a un remolcador de la escuadra. Fue sintomático que desde este último buque los tripulantes hicieran señales con trapos blancos, pues era el primer signo que la desmoralización comenzaba a apoderarse de los amotinados.

Ataque de la aviación

La orden que había recibido Vergara, del jefe del Estado Mayor del Ejército, era atacar primero a los buques que navegaban desde Talcahuano, antes que entraran a Coquimbo, pues prácticamente carecían de armamento antiaéreo y se les había indicado la ubicación del escaso que portaban y la existencia de proyectiles abordo. Finalmente se le dio el orden de preferencia para atacar, el cual sería el siguiente: crucero «Blanco Encalada», minadores, remolcador «Sibbald», cazatorpedero «Lynch» y los submarinos; pero como hemos visto, ambas escuadras se reunieron en la boca del puerto antes del ataque.

El coronel Vergara modificó las órdenes recibidas y decidió tomar por objetivo principal al acorazado «Almirante Latorre». La decisión era sumamente arriesgada, pues los débiles aeroplanos atacarían al único buque que contaba con artillería antiaérea y que además tenía una cubierta protegida, de acero, de nueve pulgadas de espesor, que le hacía invulnerable a las bombas de que disponía la aviación[67].

Los sublevados estaban convencidos que los aviones se encontraban concentrados en Los Cerrillos de Coquimbo, hacia donde habían dirigido sus tiros de amenaza, por lo que por el hecho de encontrarse en Ovalle, aparecerían desde una dirección que no esperaban[68].

El ataque fue fijado para ese mismo día a las 17.00 horas y se decidió hacerlo en olas sucesivas hacia el acorazado, fijado como objetivo principal, y al resto de los buques como secundario. Se voló por la costa hasta Tongoy, para luego internarse en el mar, con el propósito de efectuar el ataque con el sol por la espalda, lo cual dificultaría el tiro antiaéreo. La altura para los bombarderos pesados fue fijada sobre los 2.000 metros para substraerse al ataque con armas livianas por parte de la escuadra. A los bombarderos livianos se les dejó libertad para determinar su táctica de ataque.

Los buques estaban totalmente desprevenidos al aparecer los aviones sobre la puntilla de Guayacán, situación solamente comprensible por el estado de indisciplina de una escuadra amotinada, a pesar que sabían que serían atacados por el aire y habían repelido la máquina de reconocimiento que había sobrevolado la bahía esa mañana.

El personal del «Almirante Latorre» se encontraba distraído y en descanso dominical en cubiertas y entrepuentes cuando los vigías dieron la alarma sobre la presencia de aviones por la banda de estribor.

No se alcanzó a tocar zafarrancho de combate, pero se organizó una defensa antiaérea lo más rápido que se pudo, cubriendo ametralladoras y cañones antes que los aviones pudieran alcanzar una posición vertical sobre los buques, única forma que podrían infringirles daño.

---

[67] Pasarían más de diez años antes que bombas lanzadas por aviones fueran capaces de hundir un acorazado, lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

[68] El suboficial Ernesto González Brion, jefe de los insurrectos, niega haber creído que los aviones se encontraban en Los Cerrillos; pero de otro modo no se explica que hacia esa dirección apuntaran los buques en tono de amenaza. El libro del susodicho está plagado de datos erróneos desde el momento que lo escribió como una defensa a su actuación y no como una investigación histórica.

Los destructores, que mantenían presión en sus calderas, zarparon hacia el norte y sostuvieron el fuego solamente con las ametralladoras, debido a que no había quien dirigiera los cañones. Los buques en movimiento y zigzagueando hacían más difícil aún que las bombas, lanzadas desde una gran altura, pudieran hacer blanco.

Los oficiales de estos buques continuaban encerrados y les fueron clausuradas las salidas a cubierta, lo que significaba una muerte segura si el débil casco de un destructor era alcanzado por una bomba. En el «Orella» el comandante Huber enfrentó enérgicamente a sus carceleros y obtuvo que se les permitiera salir durante el ataque, situación que aprovecharon para ponerse en contacto con los tripulantes y convencerlos que lo que estaba sucediendo era un asesinato inicuo ordenado por los cabecillas, protegidos en el acorazado, que obraban solamente por la fuerza impuesta por ellos.

Cuando los aviones lograron llegar a la posición vertical sobre los buques, rompieron su formación y cubrieron la bahía con bombas de diferentes tipos, mientras la desordenada artillería antiaérea trataba de alejarlos de sus posiciones. La principal defensa estuvo centrada en las ametralladoras, cañones antiaéreos y fuego de fusilería del «Almirante Latorre» y del «Araucano».

Uno de los aviones «Falcon» atacó a los destructores «Lynch» y «Orella», siendo recibido por la artillería del último que lo hizo desistir de la acción y retirarse.

Después de esta incursión, que duró alrededor de veinte minutos, los aviones regresaron a sus bases, cuatro bombarderos livianos habían recibido impactos, la mayoría más de uno, el bombardero pesado en que volada el jefe de la operación tenía cuatro perforaciones y el «Falcon» N° 4, que piloteaba el teniente Oscar Tapia Jiménez, fue derribado por las ametralladoras del «Hyatt» y debió aterrizar de emergencia detrás de las dunas de Playa Grande.

Por parte de la escuadra, una sola unidad había recibido daño, se trataba del submarino H-4 «Quidora», el cual había recalado a Coquimbo con sus máquinas en malas condiciones, al que le cayó una bomba de tamaño pequeño en sus cercanías que decapitó a un sargento y dejó a otro tripulante herido, los cuales se encontraban en cubierta. Esto bastó para que la desmoralización se apoderara de sus veintiún tripulantes y la nave atracara al muelle rindiéndose, donde fue abordado por los carabineros del puerto a cargo del teniente Oscar Soto quienes tomaron posesión de la nave.

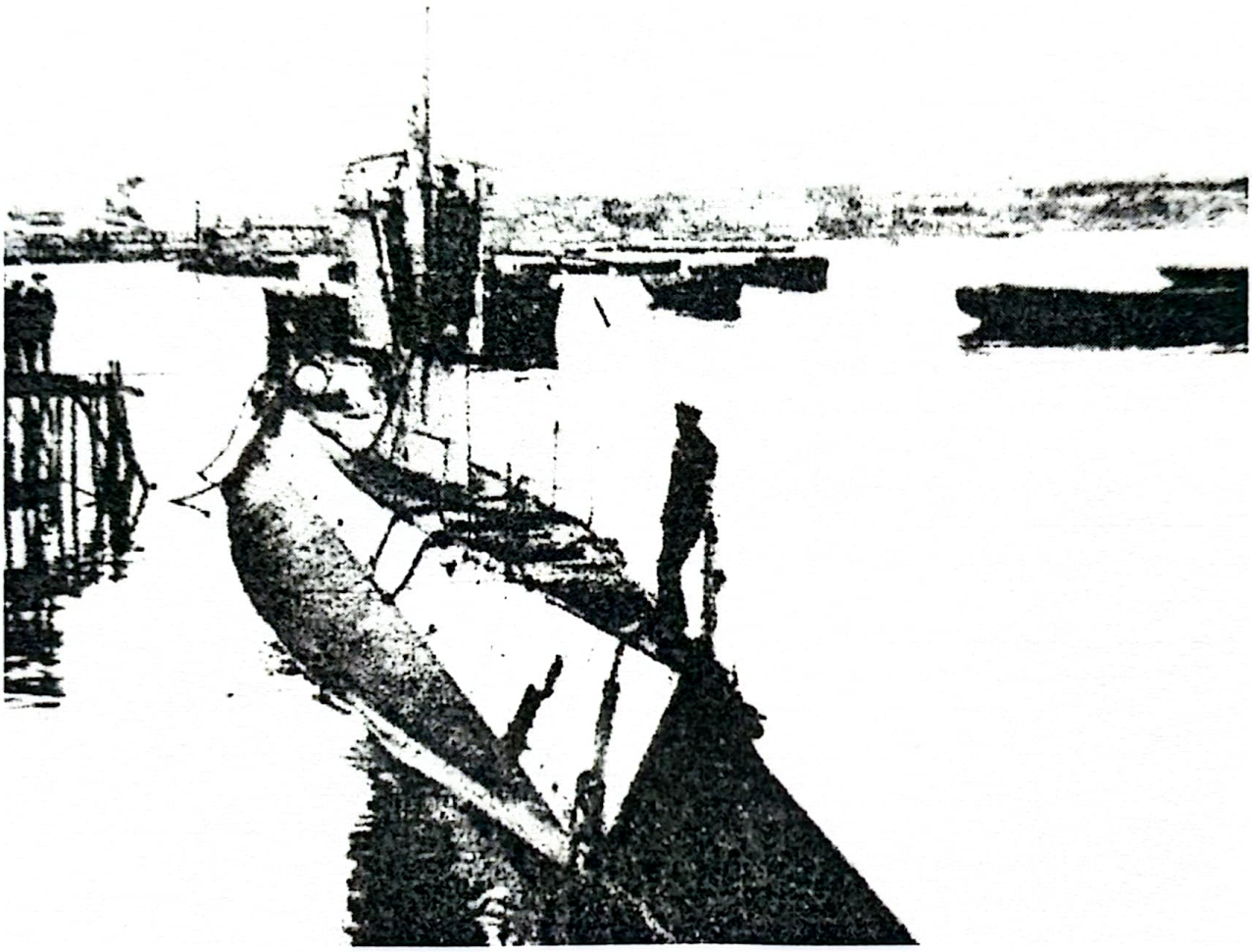
Durante el ataque, los aviones habían lanzado dos bombas de trescientos kilos, dos de cien, noventa y cinco de nueve y doscientos setenta y siete tiros de ametralladora. Los buques, por su parte replicaron con dieciséis granadas entre 6,45 y 101 milímetros, ciento siete proyectiles schrapnells de fragmentación entre 45 y 75 milímetros y cuatro mil trescientos veintinueve tiros perforantes y trazadores. De la cantidad de disparos realizados con armas menores no hay registro[69].

Cuando el teniente coronel Vergara preparaba sus aviones para lanzar un segundo ataque, recibió un telegrama del jefe del Estado Mayor del Ejército en el que se le ordenaba suspenderlo hasta nueva orden y que en caso de producirse la rendición de los amotinados sé le harían llegar instrucciones.

Los tripulantes que habían quedado heridos durante el enfrentamiento fueron atendidos en el hospital San Pablo de Coquimbo.

---

[69] El jefe de los insurrectos habla que se habrían disparado, por los buques, al menos dos mil balas por segundo, lo que queda desmentido por el recuento hecho por el Estado Mayor de la Armada después de la rendición.



SUBMARINO «QUIDORA» QUE HABÍA RECALADO A COQUIMBO CON SUS MÁQUINAS EN MALAS CONDICIONES, SE RINDIÓ DESPUÉS DEL BOMBARDEO.

Por su parte los sublevados, asustados de un nuevo ataque amenazaron al gobierno que si continuaba con las hostilidades romperían fuego contra La Serena.

Para amedrentar a la población desembarcó una comisión de la marinería con el objeto de entrevistarse con el Intendente y hacerle ver que si no impedía el ataque de las fuerzas leales, la ciudad sufriría el bombardeo por parte de escuadra sublevada.

La comisión no alcanzó a cumplir su objetivo, pues cuando se aprestaban a entrevistarse con la primera autoridad de la provincia, fueron recibidos con insultos, pifias y pedradas, por lo que optaron por regresar a bordo ante el rechazo de la población serenense.

Comentarios

El combate había demostrado el error del coronel Arturo Merino Benítez cuando en la reunión del día primero de septiembre, había manifestado que *«para echar a pique a los buques no había necesidad de pegarles ya que con solo unas tres bombas que cayeran al costado del "Latorre" eran suficientes para hundirlo»* y la veracidad de la réplica de su hermano, el capitán de navío Julio Merino Benítez. La bomba que cayó más cerca del acorazado fue un

artefacto de 300 kilos lanzado por un avión «Junkers» desde 1.600 metros que hizo impacto en el mar a quince metros del «Almirante Latorre» y a menos de diez del «O'Higgins» elevando una columna de agua de más de trescientos metros de altura.

La acción en Coquimbo, como combate de la aviación contra una escuadra alzada, militarmente constituyó un rotundo fracaso para los atacantes; pero el gobierno, para no mostrarlo ante la opinión pública, lo presentó haciendo presente que la táctica había consistido en tratar de no hundir los buques, sino que asustarlos para producir la desmoralización de los amotinados. Los pilotos, por su parte, recibieron con beneplácito esta teoría, pues no mostraba su fracaso ante la Marina, que constituía su gran rival. El argumento blandido por las autoridades de gobierno no resiste el menor análisis, pues las acciones que buscaron, desde el instante en que asumió la jefatura de la fuerza el general Carlos Vergara, estuvieron destinadas a hundir la flota amotinada, primero con la ayuda solicitada a los Estados Unidos y después tratando que obtener la rendición de los submarinos, cuando navegaban hacia Coquimbo, para contar con la disuasión de los torpedos.

Las condiciones para un ataque fueron las ideales, pues era una tarde con muy buena visibilidad y completa calma. Por otra parte las tripulaciones, sin la dirección de sus oficiales, no sabían utilizar debidamente la artillería antiaérea, desconociendo totalmente el moderno sistema de control recientemente instalado en Europa al «Almirante Latorre».

La incipiente aviación de esos años solo podría haber asegurado el éxito en un duelo con la escuadra si hubiera bombardeado a los buques chicos, como se le había ordenado al comandante Vergara, pues ellos podían haber sido dañados o hundidos más fácilmente, pero para eso habría sido necesario operar a baja altura desafiando la artillería antiaérea que trataría de rechazarlos.

Si bien la escaramuza no tuvo el resultado militar que se le quiso dar, se obtuvo la desmoralización de gran parte de los tripulantes, cuyo proceso ya se había iniciado durante los primeros días, como lo pudo notar el contraalmirante von Schroeders durante los últimos momentos de las negociaciones que había llevado a cabo.

Desmoralización y deserciones

Muchos tripulantes que habían adherido al movimiento o habían sido arrastrados a él por las circunstancias, empezaron a darse cuenta de la magnitud que estaba tomando su actitud y trataron de influir para terminar el motín, pero contaban con la fuerte oposición de los componentes del Estado Mayor de la Tripulaciones y de los elementos politizados que los acompañaban, así como también del poderoso comité del «Almirante Latorre».

Previendo las deserciones, el Estado Mayor de las Tripulaciones prohibió el zarpe de Coquimbo de los destructores, pues temían su defección apenas ellos abandonaran el puerto, lo que hicieron en la noche del 6 de septiembre.

En el destructor «Hyatt», al anochecer del sábado 5, el marinero Córdova abrió la puerta del camarote donde se encontraba recluido el guardiamarina Rossi y le dijo textualmente: *«Venga jefe, váyase a tierra; aquí tiene una chaqueta; el sereni*[70] *lo espera a babor; váyase, van a matar a los oficiales»*. A esa hora la tripulación había sido informada de la toma del apostadero

[70] Tipo de embarcación menor a remo.

de Talcahuano, con un saldo de gran cantidad de muertos y prisioneros. El oficial rechazó el ofrecimiento.

En este mismo buque, después del ataque aéreo, los oficiales notaron que la situación se había aflojado mucho y gran parte de la tripulación no estaba de acuerdo con el movimiento, por lo que comenzaron a trabajarlos sutilmente y prepararles en ánimo, poco a poco, para que depusieran su actitud. El mayor temor de los amotinados era que aparecieran de nuevo los aviones y hundieran al destructor.

Un importante número de tripulantes comenzó a recapacitar y entender que habían sido llevados a una aventura sin destino por elementos desquiciadores, que no perseguían otro fin que hacer caer al gobierno y aprovechar el caos para encaminar al país hacia su posición política. Dos practicantes del crucero «O'Higgins», que bajaron a tierra a dejar un herido, se negaron a regresar a bordo, poniéndose a disposición del director del hospital San Pablo, doctor Méndez. De creer al suboficial González, al comenzar a producirse las deserciones a bordo del «Almirante Latorre», se habría conjurado en el buque un grupo de «traidores», como los llama, con el fin de apresar a los cabecillas y entregarlos a las fuerzas del gobierno, los que incluso habrían tenido ametralladoras listas para realizar la aprehensión.

Los amotinados trataron de reprimir por la fuerza las deserciones que se veían venir. El día 6 de septiembre, al hacer uso de la palabra para arengar a los sublevados, uno de los cabecillas del «O'Higgins» notó el descorazonamiento de muchos tripulantes por el bombardeo, por lo que pidió autorización al Estado Mayor de las Tripulaciones para fusilar a algunos cabos, junto con oficiales, cuando zarparan a alta mar esa noche, pues tenían miedo de ser traicionados por la misma gente. Agregaba en su mensaje que había sido sorprendido un oficial con una pistola cargada al igual que a un guardiamarina y que temían un levantamiento para esa noche, lo cual sería funesto. La respuesta del Estado Mayor de las Tripulaciones no se hizo esperar, ordenando proceder enérgicamente contra todos los que traicionaran *«su justa y patriótica causa»*.

Amenaza de bombardeo a Coquimbo y a La Serena

Una vez que los aviones se retiraron, el Estado Mayor de las Tripulaciones citó a bordo a los que ejercían de comandantes de los buques «Blanco Encalada», «Araucano» y en los submarinos, para determinar la acción a seguir. Los acuerdos tomados fueron de amenazar con bombardear la ciudad de La Serena y asumir una actitud abiertamente revolucionaria cuya finalidad sería producir un cambio de régimen social, para lo cual contaban con la ayuda de una delegación de obreros del Partido Comunista, si las autoridades no se allanaba a llegar a un arreglo con ellos. Se redactó un ultimátum y se le comunicó por radio al gobierno.

La respuesta del general Vergara fue inmediata, decía: *«El gobierno no acepta sino una rendición completa, debiendo las tripulaciones desembarcar sin armas y quedar a disposición del comandante de la guarnición de La Serena que tiene instrucciones al respecto. De lo contrario se continuará procediendo con mayor energía aún»*.

La tripulación del crucero «O'Higgins» se negó a bombardear Coquimbo y La Serena, con lo cual la sublevación sufrió un serio revés. Algunos suboficiales, viendo la magnitud que tomaban los hechos, trataron de enviar una delegación al «Almirante Latorre» para que instruyera a sus delegados, que asistían a la reunión de los cabecillas, para que depusieran su actitud y

volvieran a la disciplina, lo cual trató de ser desbaratado por un sargento, de apellido Rojas, y por el cabo Solar que figuraban en los registros del Partido Comunista.

Entretanto el arzobispo de Santiago, monseñor Horacio Campillo, se dirigió por radio al capellán Ramírez del «Almirante Latorre» ofreciendo su mediación, en una comunicación que decía:

«Profundamente consternado ante los acontecimientos que se desarrollan en la Armada Nacional, traspasado mi corazón por la sangre hermana que se ha derramado y pueda derramarse ofrezco, de todo corazón, mi mediación como arzobispo.

Sería la más grande dicha que Dios podría entregarme el poder contribuir, en forma eficaz, a dar término a las dificultades que se han suscitado y ser un ángel de paz para que vuelva la tranquilidad a nuestra querida patria»

Este mensaje está registrado a las 22.00, a la misma hora en que al pasar lista el «Almirante Latorre», por señales destellos al resto de la flota, notó la ausencia de los destructores «Riquelme» y «Hyatt» que, amparándose en la oscuridad de la noche y en la neblina reinante, habían huido al sur para entregarse a las fuerzas del gobierno. Luego el buque insignia interceptaría un radio del ministro de marina a los fuertes de Valparaíso instruyéndolos para que no hicieran fuego contra ellos.

La misión del contraalmirante Campos

Temiendo un nuevo ataque aéreo, los sublevados trataron de emprender una acción de comando contra los aviones estacionados en Ovalle y para ello despacharon una lancha del buque insignia con marineros armados para sabotear el aeródromo, pero fueron rechazados por voluntarios y vecinos de Coquimbo, regresando con las manos vacías.

Desorientados los amotinados sobre el camino a seguir recurrieron al contraalmirante Abel Campos, que había permanecido detenido en su camarote, para que formara parte de una comisión que viajara a la capital para negociar una salida a la situación[71] y dejaron a los oficiales en libertad para desembarcar.

El oficial cirujano Eduardo Grove quiso intervenir ante el intendente de La Serena, Román Mery, para solicitar impunidad completa para los amotinados; pero la primera autoridad de la provincia le manifestó que las instrucciones que tenía eran las de entenderse únicamente con el almirante y con los comandantes, siempre que estos últimos contaran con la autorización del primero o del contralmirante von Schroeders.

El Estado Mayor de las Tripulaciones convocó, entonces, a una reunión al contraalmirante Campos y a los comandantes de buques Aylwin, Huber, Gallardo, Ward y Obrecht con el objeto de acordar los puntos que se someterían a la consideración del gobierno.

Otra vez recurriremos a la versión del comandante Huber sobre esta reunión, dice: *«Me fui al "Latorre" después de este toletole y ahí había que ver a esos 60 u 80 locos que hablaban sin sentido común tratando ya solo defender el cogote; el origen de la bolina que metieron se les olvidó, ya que no pedían puntos, sino que no se les aplicara la ley marcial».*

[71] Según el suboficial González, fue el contraalmirante Campos quien habría pedido expresamente viajar a Santiago para imponer al gobierno de la verdadera situación y planes futuros de la escuadra. Como ya lo hemos mencionado, el libro del suboficial González fue escrito para tratar de involucrar a la oficialidad en la rebelión, por lo que dudamos de la veracidad de esta versión.

Ante la falta de otros testimonios, pues el Comandante en Jefe de la Escuadra de Evoluciones no fue recibido por el gobierno, nuevamente debemos consignar la versión del suboficial González sobre la decisión de los puntos que el contraalmirante Campos debía presentar al Vicepresidente de la República, estos serían:

1. La escuadra no estaba decidida a rendirse, pero que deseaba llegar a un arreglo para que cesara la situación de sobresaltos en que estaba viviendo el país.
2. Si el gobierno se negaba a transar y continuaba con su política de intransigencia cerrada, el plan de operaciones futuro de la escuadra consultaba la ocupación militar de Coquimbo y La Serena, el bombardeo de Valparaíso, la recuperación de la plaza de Talcahuano y la continuación de las hostilidades hasta llegar al cambio de régimen social.
3. En el caso favorable, el Contraalmirante comunicaría por radio las condiciones del gobierno y en caso adverso, debería volver a Coquimbo, inmediatamente, para que corriera la misma suerte que las tripulaciones.
4. Mientras la comisión viajaba a Santiago, la escuadra zarparía para esperar el ataque de la aviación que se había anunciado para las primeras horas del lunes 7.

Esa misma noche partieron en un autocarril el contraalmirante Campos y el comandante Gallardo, mientras que el resto de los participantes a la reunión fue devuelto a sus respectivos buques.

Solicitud de mediación al arzobispo de Santiago

Es difícil poder conocer, a ciencia cierta, los pormenores de la situación abordo del «Almirante Latorre», donde se enfrentaban tres posiciones muy definidas: la de los integrantes del Estado Mayor de las Tripulaciones que eran la cara visible del motín, a pesar que habían tratado de actuar en forma anónima y que al rendirse arriesgaban a ser condenados a la pena de muerte; la de los desmoralizados con el bombardeo, que junto a los que habían sido conducidos a la aventura sin haberlo ellos pensado, solo querían la rendición y cuyos adeptos aumentaban minuto a minuto y finalmente la «Cheka», que eran los verdaderos cerebros del movimiento, encabezados por Astica y Zagal que tratarían, hasta el final, de mantener la sublevación, aún a costa de ejecutar a los desertores.

Cuarenta minutos después de recibirse el radio del arzobispo de Santiago ofreciendo su mediación fue contestado con un mensaje firmado por el Estado Mayor de las Tripulaciones y el contraalmirante Campos. Este decía:

«Al arzobispo Campillo del Estado Mayor de las Tripulaciones: Este Estado Mayor, en comunión conjunta con el almirante señor Campos, comandante efectivo de la escuadra, ha tomado nota, con gran placer, del telegrama que V. S. I. ha enviado al capellán señor Ramírez en el sentido de imponer grandes influencias morales para que no se siga derramando la sangre hermana de los chilenos. Las tripulaciones, en unión con sus jefes, piden se interponga, cuanto antes, ante el gobierno del país su alta influencia para que el gobierno contemple la verdadera situación, sin buscar represalias ni señalar responsables y se llegue a un arreglo honroso para la patria. Atentamente: almirante Campos, comandante efectivo de los buques y Estado Mayor de las Tripulaciones».

En la madrugada del lunes 7, mientras el contraalmirante Campos viajaba a la capital, los amotinados ordenaron a la escuadra zarpar para esperar a los aviones que debían atacar

en la boca del puerto; pero solamente cumplieron la orden el «Almirante Latorre», el «O'Higgins», el «Araucano», el «Blanco Encalada», el «Flora», los submarinos y los remolcadores.

Deserción de los destructores

Los destructores «Aldea», «Videla», «Serrano», «Orella» y «Lynch», desobedeciendo la orden del buque insignia de seguir sus aguas y aprovechando la obscuridad, pues todavía no amanecía, desertaron y se dirigieron a Valparaíso para entregarse a las autoridades.

Los marineros del destructor «Lynch», desmoralizados, entregaron la nave a su comandante, quien zarpó rumbo a Valparaíso. Al recalar, en la noche del día siguiente, desconociéndose aún que los amotinados se habían rendido, fue detenido por el fuego de los fuertes porteños, hasta que pudo avisar, a las 8.00 de la mañana, que iba dispuesto a someterse al gobierno. Fue abordado por un remolcador con tropas armadas que procedió a desarmar a la tripulación y a reemplazarla por fuerzas de la Artillería de Costa que había permanecido leal y a relevar a su comandante.

En el «Hyatt» la desmoralización había hecho presa y una vez que el personal del «Almirante Latorre» que había permanecido en esa unidad, volvió a su buque, se notó una actitud de liberación de la marinería que informó a sus oficiales que estaban solos, refiriéndose a que no tenían la vigilancia directa de los delegados del Estado Mayor de las Tripulaciones.

El marinero F. Córdoba se acercó al guardiamarina Rossi y le manifestó que el seudo comandante, condestable Seura, de acuerdo con el personal, le hacía entrega del buque. Rossi exigió la libertad del comandante y de todos los oficiales, a lo que Seura se negó respondiéndole que lo harían más tarde; pero la obtuvo para el teniente ingeniero Velasco, indispensable si se quería mover la nave.

El destructor pidió autorización al buque insignia para cambiar de fondeadero y en lugar de hacerlo se dirigió lentamente hacia la boca del puerto. Los cabecillas en el «Almirante Latorre» algo sospecharon y despacharon una lancha, la que logró escabullir el «Hyatt» y dio la máxima velocidad a sus máquinas cuando se vio fuera del alcance de la artillería.

Ya libres de sus perseguidores fue dejado en libertad el comandante Becerra, que tomó el mando, y el resto de la oficialidad. El mismo Seura comunicó la existencia de tres individuos peligrosos a bordo, el cabo González, el señalero Ferreti y un cabo de máquinas, los cuales, fueron dejados amarrados en sus coyes durante toda la navegación[72].

Al amanecer el «Hyatt» pudo observar que no era el único buque que había desertado, pues se encontró con su gemelo «Riquelme», sin saber si había sido enviado en su persecución.

Al acercarse a Valparaíso, también fueron recibidos por los disparos de una batería del Fuerte Vergara que no sabía de su deserción, hasta que logró comunicarse por radio para aclarar la situación.

En el destructor «Orella», cuando el comandante Huber llegó a bordo de su cita con el Estado Mayor de las Tripulaciones, toda la gente estaba decidida a no seguir respaldando el movimiento, por lo que la reunió en el entrepuente y con un llamado a la patria, respondieron afirmativamente todos. Restaba solamente reducir al seudo comandante, cabo Tello, quien permanecía en el puente de mando; pero no pudo resistir y se entregó.

---

[72] Coy es una hamaca que se usaba en los buques de guerra en lugar de litera.

Solamente restaba escapar, lo que se realizó a 28 nudos de velocidad, pasando por el lado del Latorre y decididos a ser baleados, pues no había otra forma de hacerlo. Favoreció la huida el hecho que el Estado Mayor de las Tripulaciones había ordenado zarpar para alejarse de la costa con el fin de capear a otro ataque aéreo anunciado para el amanecer del día siguiente.

Durante el viaje el comandante fue informado que el cabo Tello rondaba la santa bárbara con el fin de volar el buque, por lo que lo hizo vigilar de cerca y con la orden de dispararle al primer intento que hiciera.

Estas deserciones tuvieron un efecto multiplicador entre quienes deseaban terminar el movimiento y dirigirse a Valparaíso para entregarse. Especial violencia hubo en las acciones desarrolladas en el «O'Higgins» y en el «Blanco Encalada», donde se llegó a quitarle el mando al suboficial Cuevas para entregárselo al oficial médico Mendoza, a quien creían adepto al movimiento.

Dándose cuenta el suboficial González Brion que la sublevación se había derrumbado y haciendo un último esfuerzo para que las tripulaciones lo siguieran, tocó llamada general y las arengó tratando de cobardes, traidores, víboras y otros epítetos a los desertores que abandonaban el camino que, como hombres, habían elegido por propia voluntad y les propuso hundir los buques; pero la marinería insistió en dirigirse a Valparaíso para rendirse.

Entrega de los buques

En vista de lo ocurrido, los cabecillas decidieron rendirse y entregar los buques a sus comandantes, para lo cual enviaron un mensaje a todos ellos informando que el contraalmirante Campos había tomado el mando de la escuadra, siendo reemplazado durante su ausencia por el comandante del «O'Higgins».

A pesar de las instrucciones del gobierno de no realizar un segundo ataque aéreo, una vez que se hubo levantado la neblina que normalmente envuelve a esa región, el teniente coronel Vergara envió dos aviones en busca de los buques que se sabía se habían hecho a la mar de madrugada.

Una vez más quedó de manifiesto el caos que se produce cuando no se cumplen o se alteran las órdenes recibidas, pues el gobernador marítimo de Coquimbo había comunicado la salida de la escuadra rendida al sur, indicando que en primer lugar, a gran distancia, lo hacían los destructores, seguidos del «O'Higgins», el «Flora», los submarinos y un remolcador, cerrando el convoy el «Almirante Latorre». Un avión «Falcon», que rebuscaba entre el Limarí y Carrizal avistó a los destructores, de los cuales desconocía que se habían entregado y que navegaban al mando de sus oficiales, noticia que tenía el gobierno desde la medianoche anterior; pero que no había comunicado a la aviación, pues la orden era esperar instrucciones. Cuando el comandante del destructor «Videla» se vio atacado debió recurrir, por radio al contralmirante Campos, que ya se había hecho cargo del «O'Higgins», para que se suspendieran las hostilidades.

El teniente coronel Vergara, desde su base en Ovalle, ordenó al «O'Higgins» dirigirse a Los Vilos y al «Almirante Latorre» a Tongoy, advirtiéndoseles que de no hacerlo, serían bombardeados. A los hidroaviones, que desde Quintero habían sido trasladados al lago Peñuelas, se les manifestó estar alerta para atacar a la escuadra en Valparaíso en el caso que no obedecieran las órdenes impartidas.

El «O'Higgins», con los remolcadores, dio contra marcha hacia Coquimbo donde se entregó a efectivos del regimiento Arica. La tripulación amotinada fue desembarcada en ese puerto, quedando detenida en el liceo de hombres, bajo la custodia del jefe militar y de tropa del Ejército. En este buque los sublevados habían detenido, junto a los oficiales, al suboficial mayor Humberto Figueroa, quien denunció a los principales cabecillas.

La superioridad de la Armada envió a ese puerto, en avión, al capitán de navío Juan T. Gerken, que se desempeñaba como comandante de los Arsenales de Valparaíso, a tomar el mando de la escuadra.

Al llegar este jefe, se encontró que el buque estaba tripulado solo por militares, mientras que la tripulación se encontraba en tierra por lo que debió pedir que le enviaran a todo el personal que no presentara acusaciones por su actuación para poder zarpar. Posteriormente fue exonerada de la Armada alrededor de las tres cuartas partes de la dotación.

El «Almirante Latorre» continuó al sur en compañía de un submarino, el cual se sumergió ante la presencia de uno de los aviones de exploración.

La entrega del «Almirante Latorre» a sus oficiales tuvo una característica muy especial, pues el mando no le fue devuelto a quien correspondía, que era el comodoro Hozven, en quien personificaban los amotinados a su enemigo, sino que al segundo, comandante Obrecht, permaneciendo el titular detenido en su camarote con centinela de vista. La actitud observada por el subalterno durante el amotinamiento había presentado situaciones muy dudosas.

A las 14.00 horas del día 7, el comandante Obrecht radió el siguiente mensaje a la superioridad naval: *«Hoy a las 13.30 todos los oficiales han sido reconocidos en sus puestos por toda la tripulación Armada. Después de juramento solemne a la bandera y a la patria, han expresado su lealtad al gobierno».*

Luego, dirigiéndose al ministro de marina, comunicó: *«De acuerdo con radio 566 se ha tomado medidas necesarias que situación presente aconseja. Sería imposible, por el momento, establecer categóricamente los que han tomado parte movimiento. —Se tiene con centinela vista a tres de ellos. Reitero US. Lealtad gobierno jurada tripulación y en el buque reina tranquilidad—. Conviene apresurar orden zarpar Valparaíso. Comandante Obrecht».*

Llama poderosamente la atención que se haga abstracción de una situación tan anormal, en ambas comunicaciones, como es la de traer prisionero al comandante del buque. Como dijo el defensor de Hozven en el Consejo de Guerra: *«De este radio se desprende la monstruosa conclusión de que viniendo el comandante Obrecht a cargo del «Latorre» y teniendo el control de la situación, ya que había hecho apresar a tres posibles cabecillas, no fue al camarote del Comodoro, el verdadero jefe de la nave, para ponerlo en libertad y entregarle el mando que por mandato supremo tenía y cuya insignia había defendido tan honrosamente».*

El Comodoro había sido el chivo expiatorio, no solamente de las tripulaciones sublevadas, sino que también de los almirantes que propiciaban negociar y parlamentar con los amotinados. El contraalmirante von Schroeders, en los primeros días de la sublevación, durante sus fatigosas gestiones negociadoras en Coquimbo, el 3 de septiembre comunicó al gobierno que no había quejas especiales de parte de los insurgentes contra los jefes y oficiales; pero se hacían fuertes cargos al comodoro Hozven como causante de la situación, debido a su dureza e intransigencia, solicitando su transbordo inmediato.

Tal vez, de todos los oficiales detenidos la noche del 31 de agosto, la actitud de Hozven fue la más enérgica, como lo requerían las circunstancias, lo que el tiempo se encargaría de demostrar.

El teniente coronel Vergara, que aún ignoraba la rendición, intimidó al «Almirante Latorre» en el sentido de que si no cumplía sus órdenes sería bombardeado, lo cual obligó a su comandante a responder que las órdenes que había recibido del gobierno eran dirigirse a Valparaíso, pero que en vista de las circunstancias, lo haría hacia donde le indicaba el comando de la aviación. Nuevas contraórdenes de éste lo hicieron mantenerse sobre las máquinas a cinco millas de Tongoy y posteriormente fondear en dicho puerto.

El crucero «Blanco Encalada», que seguía al acorazado, navegó directamente a Valparaíso, pues ya no le quedaba carbón.

Junto con el comandante Gerken fue enviado por vía aérea, a Coquimbo, el capitán de fragata Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda[73] para que tomara el mando del «Araucano», el que junto a los submarinos se dirigieron a Talcahuano, a los cuales el crucero «O'Higgins» debió transbordarles oficiales para la navegación, pues como se recordará, habían zarpado del puerto sureño tripulados exclusivamente por gente de mar.

A pesar del ping pong de órdenes y contraórdenes, logró al fin el gobierno manejar la situación y por medio del teniente coronel Vergara se le notificó al «Almirante Latorre» zarpar a Valparaíso, quedando a cargo del Ejército todo el litoral, al mando del general Moreno, a cuyo comando quedó subordinada la aviación.

Todos los oficiales de ambas escuadras, fueron restituidos en sus cargos y a mediodía del 8 de septiembre, con las tripulaciones formadas en cubierta, hicieron un juramento a la bandera y expresaron su lealtad a la patria y al gobierno.

El día 9 entraron a Valparaíso los buques, desde las ocho de la mañana, con un intervalo de tres horas entre ellos, vigilados por la aviación. En el buque insignia se suicidó el preceptor Juan B. Riveros criticando a los que habían intervenido en el movimiento, lo que fue respondido por el suboficial González con la explicación de que el suicida estaba loco.

El «Almirante Latorre» se entregó, finalmente, en la base de Quintero, donde fue abordado por el comandante de la Escuela de Infantería del Ejército acompañado de oficiales y tropa de esa unidad y de la Artillería de Costa, quienes tomaron posesión de la nave y procedieron a desarmar a la tripulación y quitar los cierres de los fusiles y los blocs de los cañones.

La tripulación formada escuchó el decreto supremo que nombraba comandante al capitán de navío Daniel Valenzuela. Tan solo entonces se dejó en libertad al comodoro Roberto Hozven, que se había transformado en el blanco de la ira de los amotinados.

Cuando los oficiales de la Escuela de Infantería abordaron el «Almirante Latorre», encontraron desparramadas en la cubierta una gran cantidad de hojas impresas a mimeógrafo que en algún momento de la sublevación no alcanzaron a ser distribuidas; pero que constituyen la más clara evidencia del trasfondo político del movimiento y de su finalidad y que es fácil darse cuenta que no pudieron haber sido escritas por alguien formado en la institución, sino por un agitador profesional. Éstas decían:

«Compañeros tripulantes de la Armada: Habéis empezado valientemente la lucha por nuestro mejoramiento económico; hoy que la oligarquía chilena se niega a oír nuestras reclamaciones, debéis manteneros hasta el final, para terminar definitivamente con el régimen causante de todas las injusticias que agobian a las clases trabajadoras de Chile.

[73] El comandante Rodríguez alcanzó, posteriormente, el grado de Vicealmirante y se desempeñó como Comandante en Jefe de la Escuadra durante la Segunda Guerra Mundial.

Las organizaciones obreras ven con honda simpatía que vosotros, al levantaros contra las injusticias sociales, empezáis a colocaros en el puesto que os corresponde, como parte integrante de nuestra clase y quiere marchar a vuestro lado en la batalla por la emancipación definitiva.

Hermanos marineros: El ultimátum que habéis recibido a vuestras peticiones de mejoramiento económico por la clase ladrona que nos gobierna y que ha estrujado la savia de nuestro pueblo, os está probando que si no vais unidos con los trabajadores y si abandonáis las armas, seréis barridos por la burguesía que nos gobierna.

Compañero marino: Tu tienes los buques ya, dad armas a tus hermanos de miserias y en 48 horas, los consejos de marinos, soldados, obreros y campesinos le habrán dado a Chile un gobierno donde la miseria no impere.

Marino hermano: Date cuenta que lo que habéis hecho es lo más grande y si no lo llevas hasta al final, si no te unes con los trabajadores, seréis aniquilados por la oligarquía. Marino: el triunfo es tuyo: para que nada ni nadie te lo quite, únete con los trabajadores.

Ten presente: no dejes el arma».

Capítulo VII
Talcahuano

La situación social, moral y disciplinaria del puerto militar en la época

Fue en Talcahuano donde se registraron los hechos más violentos durante el amotinamiento de las tripulaciones. Existen dos situaciones que explicarían la virulencia que adquirió la sublevación en dicho puerto militar; la primera de ellas y posiblemente la más importante, se refiere a las condiciones en que vivía gran parte de la población, donde se incluían los obreros del dique y personal de gente de mar.

En 1930, esto es un año antes de la sublevación, se había desempeñado como Comandante en Jefe del Apostadero Naval el contraalmirante Edgardo von Schroeders, el mismo que hemos visto negociando con los amotinados en Coquimbo y en una nota al ministro de marina le informaba, crudamente, de la realidad que se vivía en ese puerto. Decía en ella que el 34% de los grumetes, recién transbordados a la Escuela de Artillería, sufrían enfermedades venéreas *«lo cual es el punto más digno de ser seriamente meditado por parte de todos los que estamos encargados de velar por la eficiencia de la institución, ya que la salud y la moral, como la higiene y la cultura del personal está a ella íntimamente ligada»* y agregaba: *«Es inútil que la Armada posea el más moderno material si los encargados de su empleo, en tiempo de guerra, estarán físicamente minados. Nada se saca con cuidar el cañón si se descuida al hombre que está detrás y lo ha de servir»*.

Más adelante hacía presente que los escasos esfuerzos desplegados para cambiar la situación se habían perdido lastimosamente debido a lo exiguo de ellos; y las deplorables condiciones sanitarias y el alcohol estaban perdiendo a una generación joven que había llegado al puerto robusta y entusiasta después de su viaje de instrucción.

Cerca de mil mujeres estaban contagiadas con enfermedades venéreas, las que buscaban curación, pero el hospital contaba con solamente 30 camas para cualquier mal.

Al igual que la población civil, el personal naval vivía en miserables condiciones de habitabilidad y ejercían su influencia corruptora las cantinas, cabarets, vinerías y prostíbulos.

La situación era mucho más grave todavía si se consideraba que en Talcahuano tenían su emplazamiento las más importantes escuelas de la institución, tales como las escuelas de grumetes, de artillería, de torpedos y de máquinas.

No puede extrañar la propagación de las ideas marxistas en un ambiente como el descrito, donde el personal naval convivía con los civiles que habían sido soliviantados por las prédicas anárquicas de los políticos.

La otra situación que apunta a las debilidades institucionales del puerto militar es el hecho que había sido escenario de situaciones que minaban severamente la disciplina en la Armada. Debe recordarse que allí se fraguó «la conspiración de los Luises», la cual después de abortar y que se llamó a retiro a los subversivos, fueron reincorporados e incluso uno de ellos premiado por el gobierno de Ibáñez.

En Talcahuano, el presidente Arturo Alessandri había pretendido quitar el mando de la escuadra al contraalmirante Soffia para entregarlo al contraalmirante Acevedo, de quien esperaba que lo siguiera en su aventura política y al que le unían vínculos de amistad y de la logia.

Finalmente ese puerto había sido la cuna y la principal sede de los oficiales mayores, que liderados por los ingenieros, constituyeron el arma utilizada, también por Ibáñez, para debilitar la oposición que tenía su candidatura presidencial en la Marina.

No había sido, precisamente, un ejemplo de sobriedad, profesionalismo, prescindencia política y disciplina los años que se habían vivido en Talcahuano antes de la sublevación de las tripulaciones.

La Escuela de Torpedos se pliega a la rebelión

Los días 1° y 2 de septiembre comenzó a notarse una gran inquietud en el Apostadero Naval donde fue posible observar pequeños grupos de personal que cuchicheaban en voz baja, como si estuvieran poniéndose de acuerdo en algo en que debían participar.

Los oficiales advirtieron que algo anormal sucedía, por lo que pusieron sus sospechas en conocimiento del jefe del apostadero, contraalmirante Roberto Chappuzeau y del jefe del Estado Mayor, comandante Silvestre Calderón quienes, increíblemente, las desecharon por inverosímiles y no tomaron ninguna precaución.

En la Escuela de Torpedos se celebró una reunión de oficiales, en el casino, el día 1° de septiembre, después de la cual, cada uno retiró pistolas y municiones.

Poco antes de las diez de la mañana del día siguiente, el director del establecimiento, comandante Guillermo Ilabaca, citó a todo su personal al que informó de la sublevación ocurrida en la escuadra y dio detalles sobre el encierro de los oficiales en sus camarotes y que las causas que habían originado el movimiento subversivo eran las contenidas en un pliego de peticiones.

La alocución de Ilabaca tiene que haber producido una gran desorientación, tanto en el personal, como entre los oficiales, pues en lugar de condenar los hechos, trató de restar importancia al pliego de peticiones y centró sus argumentos en el apresamiento de los oficiales y en la situación en que se encontraba el gobierno. Dijo: «*...que esto no era motivo para apresar a la oficialidad ni de tanta importancia para proceder contra el gobierno, quien en esos momentos se encontraba en una situación precaria*». Terminó la conferencia haciendo presente «*que el movimiento tenía carácter y principios comunistas*».

Enseguida ofreció la palabra a los suboficiales y sargentos que se encontraban presentes, instándolos a que hablaran francamente y dándoles garantía que nadie sería castigado, sino que les explicaría las dudas que tuvieran. Tomó entonces la palabra el preceptor Luis Henríquez Acevedo, quien comentó el pliego de peticiones presentado. Se dio por terminada la reunión, para volver a ser convocada más adelante y dar cuenta de las novedades.

La nueva citación fue a las 13.00 horas, informándose que en una asamblea de jefes y oficiales con el contraalmirante Chappuzeau se había acordado que todos, en conjunto,

oficiales y gente de mar, enviaran un telegrama a los amotinados *«llamando a nuestros compañeros a la concordia»* y procedió a consultar a los presentes quienes estaban de acuerdo con ello; pero hubo silencio total. Una segunda pregunta sobre quienes no estaban de acuerdo, tampoco tuvo respuesta. Sin saber si el personal de su escuela era leal o se plegaría al movimiento terminó para los oficiales el día miércoles 2.

Junto con el llamado a la concordia, Chappuzeau envió a un grupo de oficiales a Santiago, cuando más necesarios eran sus servicios en el apostadero, para ofrecerle su apoyo al gobierno; pero los cuales, al llegar a la capital, fueron devueltos de inmediato a sus unidades, no comprendiéndose que pudieran abandonarlas en las críticas circunstancias que se estaban viviendo.

A la mañana siguiente fue citado el personal de la Escuela de Torpedos a una nueva reunión con su comandante y, ante la sorpresa general, este manifestó que él y sus oficiales habían decidido abandonar el plantel. La noticia causó gran desconcierto y algunos manifestaron que no deseaban que ello sucediera.

Los suboficiales y personal de chompa fueron autorizados a reunirse para tomar una determinación, en la cual el preceptor Henríquez hizo presente a sus compañeros las graves consecuencias que podrían derivar al tomar una posición subversiva, como lo habían hecho los tripulantes de la escuadra en Coquimbo y se habría decidido pedir a los oficiales que no abandonaran sus puestos e impedir la entrada de civiles a la repartición[74].

Los oficiales esperaban reunidos las conclusiones del personal y cuando terminaron de exponer lo tratado, el comandante Ilabaca manifestó su resolución de seguir frente al establecimiento; pero un guardiamarina lo interrumpió haciéndole presente que, como oficial, no podía aceptar imposiciones del personal de tropa por lo que abandonaba, en forma inmediata, la escuela. Como esta actitud fue seguida por el resto de la oficialidad, el comandante Ilabaca hizo llamar al suboficial más antiguo y ordenadamente le entregó el mando.

El «Araucano» se subleva

En el buque madre de submarinos «Araucano», su comandante Luis Muñoz Valdés, al ver que la tripulación se negaba a enviar el telegrama sugerido por el contraalmirante Chappuzeau, ordenó a su segundo comandante Alberto Consiglio, en previsión de lo que pudiera suceder, que los guardias marinas retiraran los cierres de los fusiles y encerraran a la tripulación bajo llave, haciendo además que los oficiales portaran su arma de servicio.

En la noche, un grupo de obreros del dique y varios marineros se juntaron frente al molo y comenzaron a lanzar piedras, insultos e incluso efectuaron algunos disparos contra el «Araucano» que estaba atracado al muelle. Los oficiales, que por orden del comandante del buque, habían cubierto las ametralladoras, contestaron el fuego; pero al sonido de los disparos acudió imprudentemente al lugar el contraalmirante Chappuzeau, siendo detenido por los exaltados.

Con la máxima autoridad naval como rehén hubo que sacar de su encierro a la tripulación que comenzó a largar las amarras del buque y se negó a obedecer las órdenes que se les impartían en sentido contrario.

[74] En esta versión parece corroborarse, una vez más, la participación de agitadores políticos. Lo que quería evitar el personal de la Escuela de Torpedos al impedir su entrada a la repartición.

En esas circunstancias subió a bordo el jefe de Estado Mayor, comandante Silvestre Calderón e informó que traía noticias que todo se encaminaba hacia un arreglo en Coquimbo, por lo que era conveniente deponer la actitud de rebeldía de la marinería; pero el comandante del buque, al ver que la desobediencia de sus subordinados persistía y que la oficialidad no lograba hacerse respetar, decidió que lo mejor sería que los oficiales desembarcaran para evitar nuevos incidentes. Iguales actitudes tomaron sus colegas del destructor «Riveros», del minador «Leucotón» y de las escampavías «Janequeo» y «Colo Colo». Se autonombró jefe de la «escuadra del sur» el contramaestre Orlando Robles Osses, quien ordenó su zarpe a la isla Quiriquina. Solo el destructor «Riveros» recibió instrucciones de mantenerse en el puerto, listo para recibir órdenes del comité revolucionario.

A las 03.00 horas el «Araucano» comunicó al «Almirante Latorre» el apoyo incondicional a los insurrectos de Coquimbo y luego el desembarque de los oficiales y el zarpe de los buques.

Otras adhesiones

Los obreros del dique, tras una reunión que se llevó a efecto cerca del mediodía del día 3, se dirigieron al comandante del Apostadero Naval para manifestarle su resolución de adherirse incondicionalmente a los amotinados de Coquimbo y entregarle el manifiesto que hemos conocido en el capítulo tercero y que fue transmitido por radio al «Almirante Latorre». Como se recordará, este documento contenía nueve puntos, algunos de los cuales eran manifiestamente de índole política, tales como la división de la tierra, la socialización de las industrias, el derecho de las fuerzas armadas a organizarse en entes gremiales, el castigo a los que habían llevado al país a la bancarrota y la imposición del pago de un porcentaje de las fortunas de los millonarios para cancelar las deudas del país. En el aspecto profesional exigían el cierre por cinco años de las escuelas militares y navales, la reincorporación al servicio de los obreros del arsenal que habían sido exonerados, beneficios para el personal provisorio y la infaltable exigencia que no se tomaran represalias contra los responsables.

La controvertida orden del contraalmirante Chappuzeau para que los oficiales abandonaran sus puestos dio ventaja a los sublevados para que se plegaran otras reparticiones navales, como quedó demostrado cuando el comandante Fidel Alviña, de la Artillería de Costa, se vio obligado a entregar su mando.

El Ejército inicia el ataque

Una vez que todos los oficiales y el Contraalmirante hubieron hecho abandono del apostadero, la marinería, en conjunto con los obreros del arsenal, alarmados por el giro que tomaba la situación, se dirigieron por radio al Estado Mayor de las Tripulaciones en el «Almirante Latorre», pidiendo que se suspendieran las negociaciones para forzar al gobierno a abandonar el ataque contra esa localidad y agregaban que contaban con toda la tropa naval, siendo dudosa la posición de la perteneciente al Ejército.

La orden dada por el contraalmirante Chappuzeau de hacer abandonar el apostadero por parte de los oficiales fue muy controvertida, con ello quería evitar que cayeran prisioneros como había sucedido en las escuadras en Coquimbo, lo cual habría constituido un grave

La «Puerta de los Leones», era el único acceso a la base naval desde la ciudad de Talcahuano.

escollo para la reconquista del recinto debido al ensañamiento con que fue defendida la base y la presencia de líderes comunistas, pues ellos habrían sido usados como rehenes para tratar de quebrantar la decisión del gobierno; pero por otra parte éstos dejaban a sus familias en la base, las que también podrían ser víctimas de los sublevados. Finalmente si había unidades cuyo personal rechazaba el motín y querían resistirlo, al quedar sin sus mandos fueron arrastrados por los acontecimientos a plegarse a la rebelión.

La ocupación del apostadero por las tropas leales era una operación atrevida y no era aventurado pensar en un estrepitoso fracaso. Ese foco de insurrección constituía un grave peligro y era necesario extirparlo rápidamente, pues desde allí se difundía propaganda para organizar una revolución; pero para ello se imponía la necesidad de correr el riesgo.

El ministro de guerra confió la captura al comandante de la III división del Ejército, general Guillermo Novoa Sepúlveda, quien debía intentarlo lo más pronto posible e instauró la censura de prensa.

El teniente coronel Ramón Vergara destacó aviones de transporte del grupo 3 de Temuco y la escuadrilla de anfibios de Puerto Montt, para que cooperaran a la acción. Estos se mantuvieron en las cercanías de Concepción al mando del capitán de bandada Andrés Soza. Estas unidades cumplieron misiones de reconocimiento y transporte desde la desembocadura del río Maule por el norte hasta la isla Mocha por el sur y la isla Santa María por el oeste.

El general Novoa trató de conseguir que los rebeldes se entregaran sin derramamiento de sangre, por lo que comisionó al capitán de corbeta Alberto Consiglio para exigir la rendición incondicional, dando para ello plazo hasta las 13.00 horas.

Consiglio se dirigió al recinto naval a las 06.30 de la mañana del sábado 5 en un automóvil, acompañado del teniente coronel Miguel Quezada Calvo, llevando un sobre sellado dirigido al preceptor Pacheco, que se había erigido en el jefe del apostadero.

Los emisarios llegaron a la puerta de Los Leones[75], donde los recibió el suboficial Gerardo Espinoza, quien los hizo pasar. Después de una deliberación de media hora, recibieron como respuesta que no aceptaban el ultimátum.

Novoa contaba con los regimientos Silva Renard de artillería, Guías de caballería y Chacabuco de infantería, todos ellos acantonados en Concepción; a los cuales reforzó con el O'Higgins de Chillán y el Húsares de Angol. Además comisionó al segundo comandante del crucero «Blanco Encalada» para que tomara contacto con los oficiales que habían desembarcado de su buque y del «Araucano», «Riveros», «Leucotón», «Colo Colo» y «Janequeo», para que formaran un destacamento de infantería, que marcharía junto, a los efectivos del Ejército, para rescatar la base naval.

El general Novoa distribuyó sus fuerzas enviando a la península de Tumbes, por los cerros que bordean el apostadero, por detrás del edificio de la comandancia, al destacamento naval, encabezado por el comandante Luis Muñoz Valdés, como vanguardia; seguida por algunos efectivos del regimiento Chacabuco; mientras el grupo Silva Renard ocuparía el fuerte El Morro y el propio jefe de la fuerza, al mando del Chacabuco, con el Guías y el Húsares avanzarían, a través de la ciudad, hacia la entrada principal del recinto.

Los sublevados habían dispuesto, para la defensa de la parte alta de la península de Tumbes, cañones de 57 mm. y ametralladores de 37 mm., a cargo del suboficial Alejandro Palavicino; pero éste no estaba de acuerdo con la sublevación, por lo que dio la orden de no disparar contra las tropas del Ejército que atacaban por el flanco sur, lo cual hizo que la radio estación de la base informara haber sido traicionados por la Artillería de Costa.

En el fuerte Punta de Parra, el teniente Fernando de la Paz Besoaín se defendió valientemente de los amotinados, matando a siete marineros que le intimaban rendirse y logró encerrarse en el polvorín, desde donde expresó a sus captores que en el caso que quisieran apresarlo, volaría con él.

Los amotinados se aprestaron a resistir, para lo cual redujeron los miembros del comité revolucionario, dejando solamente adeptos que apoyarían incondicionalmente a los cabecillas, lo cual procedieron a informar por radio al «Almirante Latorre». Junto con consultar acerca de la actitud a tomar, hacían presente que si se les ordenaba defender el recinto, lo harían hasta el último momento, en vista que cinco regimientos se encontraban en Concepción con instrucciones «dudosas».

Ante este estado de cosas, el Estado Mayor de la Tripulaciones, desde el «Almirante Latorre», desafió al gobierno en el sentido que las negociaciones no podrían continuar mientras no se aceptaran sus peticiones en forma completa y favorable. En el caso de violencias contra el apostadero, la escuadra adoptaría medidas recíprocas. Otras comunicaciones instaban a los sublevados de Talcahuano a resistir y organizarse.

Los combativos obreros de la cuenca del carbón habían expresado su apoyo a los amotinados, mientras la Federación Obrera de Chile, FOCH[76], trataba de organizar a los trabajadores urbanos, consiguiendo que desde Magallanes les enviaran ayuda económica y voces de aliento. El transporte «Micalvi» recibió por radio la orden de dirigirse a la zona del

[75] Se conoce como puerta de Los Leones al único acceso que tenía la base naval desde la ciudad de Talcahuano.

[76] Como vimos en el capítulo anterior, con fecha 25 de diciembre de 1921 la FOCH había adherido a la Internacional Sindical Roja, de Moscú a instancias del líder Juan Emilio Recabarren

carbón y trasladar, debidamente armados, a los obreros de Lota y Coronel que desearan adherirse a la causa de los sublevados, pero el buque fue apresado por los carabineros en Lebu.

En el apostadero los amotinados habían acumulado, en la puerta de Los Leones, el máximo de elementos que pudieron trasladar, tales como durmientes de ferrocarril, para hacer los parapetos de defensa, lo que indujo a Novoa a enviar el ataque principal por el cerro, pues una embestida frontal tendría como resultado una verdadera carnicería.

Los preparativos para el rompimiento de las hostilidades fueron seguidos por los amotinados y comunicados por radio al Estado Mayor de las Tripulaciones en el «Almirante Latorre», quienes los instaban a defenderse y no omitir sacrificio alguno para impedir la caída de la base, mientras ellos enviaban refuerzos. Por otra parte amenazaban al gobierno con el bombardeo de las ciudades del norte si no se retractaba de la acción.

A las 09.45 horas se dirigieron al Vicepresidente de la República en los siguientes términos:

«El Estado Mayor de las Tripulaciones considera que las movilizaciones de tropas que ha ordenado el gobierno no responden, en absoluto, a los deseos de paz y patriotismo que dice sustentar. Las tripulaciones manifiestan terminantemente que el gobierno tome el peso de la verdadera situación y se abstenga de manifestaciones hostiles, pues solo precipitará los acontecimientos que las escuadras están decididas a afrontar en cualquier momento».

El destructor «Riveros», que como dijimos había quedado en la bahía para el enlace de las comunicaciones, recibió instrucciones, a las 09.45 de la mañana, cuando aún faltaban más de tres horas para que se cumpliera el plazo dado para rendirse, que si las tropas acantonadas ya en Talcahuano retrocedían, con sus cañones impidiera que volvieran a avanzar hacia el apostadero.

El presidente del comité revolucionario, Gerardo Espinoza, se había embarcado en el «Riveros» y cerca de las diez de la mañana fue llamado urgentemente desde la base, por cuanto observaban el avance de tropas por detrás de los cerros, debido a lo cual ordenó a los buques que dirigieran su artillería hacia ese lugar.

No hay claridad en el mando de los sublevados

Minutos antes de las 13.00, hora en que se cumplía el ultimátum, el preceptor Pacheco se dirigió por radio a su jefe político, el presidente del comité revolucionario (la «Cheka» local), que se encontraba a bordo, haciéndole presente la proximidad del término del plazo y que hacía falta quien dirigiera las acciones, pues habían muchas opiniones.

Una nueva comunicación le daba cuenta que las tropas del Ejército ya se hallaban en la estación del ferrocarril[77], parapetadas tras las bodegas de carga, por lo que insinuaba que el «Riveros» tomara posición para bombardearlas

Desde el «Blanco Encalada», que había zarpado de Talcahuano para unirse a los amotinados de Coquimbo y en esos momentos se encontraban muchas millas al norte, animaban y daban instrucciones para la defensa del apostadero. Es así como el preceptor Pacheco recibió los siguientes mensajes del crucero:

[77] La estación del ferrocarril en Talcahuano se encontraba, entonces, vecina a la puerta de Los Leones.

Al «Riveros»: *«Organice defensa ese buque para impedir, por cualquier motivo, que el Ejército tome el apostadero. Morir con gloria o vencer con honor. 134005»*.

A Talcahuano: *«"Latorre" mandará refuerzos inmediatamente. 141205»*.

Al preceptor Pacheco: *«Conforme hablamos antes de salir, tiene Ud. poder para nombrar a uno que tenga aptitudes para mandar. Es conveniente que "Prat" fondee en la bahía para resguardar. 141705»*

Al preceptor Pacheco del «Almirante Latorre»: *«Tiene Ud. el mando con amplios poderes. Organice marinería para defensa. Solo debe atacar en caso de ser atacado. 144505»*.

A raíz de estas últimas instrucciones se cursó el siguiente mensaje a todas las dependencias de la base naval:

«Comunico a las fuerzas de este apostadero que, según radio archivado en la central, acábase de nombrarme Comandante en Jefe del Comité de esta plaza por el Estado Mayor a flote. He nombrado Comandante en Jefe de las fuerzas de defensa al sargento 1° José Pavez. El lema es vencer con honor o morir con gloria».

El comando rebelde se instaló en el edificio de la Escuela de Artillería y cada veinte minutos se comunicaba con Coquimbo por radio. Los reflectores en poder de la marinería rastreaban los cerros previniendo la posibilidad de un ataque por sorpresa de parte de los regimientos, cuya presencia ya había sido detectada.

El ataque

El general Novoa dio la orden de ataque alrededor de las 15.00, correspondiéndole al grupo Silva Renard ser el primero en entrar en acción para ocupar el fuerte El Morro; lo que consiguió rápidamente y desde donde obtuvo un excelente campo de tiro sobre los buques en la bahía. Esta unidad rompió el fuego contra el «Riveros» que, amenazante, se acercó a tierra apuntando a las baterías que había instalado el Ejército en las cercanías del fuerte. El primer disparo fue certero e hizo blanco en el puente del buque, destrozándolo en gran parte e inutilizando una pieza de artillería cercana. Se le siguió disparando, siendo alcanzado por varias granadas, causando un efecto suficiente para que el destructor izara bandera blanca y se retirara a la isla Quiriquina a desembarcar muertos y heridos. Desde allí continuó haciendo fuego contra los cerros por donde avanzaba la infantería.

El crucero «Prat» se encontraba en reparaciones en el dique[78] y era imposible hacer uso de todos sus cañones, por lo que se abrió fuego con los que apuntaban hacia tierra. Los primeros disparos fueron tan mal dirigidos que, lejos de ayudar a los defensores, fueron a caer dentro de la población provocando algunas bajas. Trató este buque de apuntar a la artillería emplazada en El Morro, desde donde recibió respuesta inmediata, recibiendo un impacto en su costado de estribor.

La táctica adoptada por el general Novoa era atacar simultáneamente por la puerta de Los Leones y por los cerros, de manera de coger a los defensores entre dos fuegos.

El avance lateral les daba la ventaja de poder hacerlo desde la altura, misión en la cual se distinguió el coronel de infantería Agustín Benedicto.

[78] Los rebeldes del norte habían insistido que se colocara a este crucero acorazado en la bahía para defender la base con sus cañones de 9.4 mm, pero era imposible por encontrarse en el dique.

EN EL COMBATE DE TALCAHUANO HUBO UN APRECIABLE NÚMERO DE BAJAS, ENTRE MUERTOS Y HERIDOS, TANTO DE PARTE DE LOS REBELDES COMO DE LAS TROPAS DEL GOBIERNO.

Mientras Benedicto, Muñoz Valdés y el grupo de oficiales de marina se descolgaba hacia su objetivo, un destacamento del regimiento O'Higgins avanzó hacia la estación de ferrocarriles, donde una bala mató al corneta Jorge Olivares, quien se encontraba a solo dos metros del comandante de la unidad, teniente coronel Ariosto Herrera Ramírez, quien marchaba a la cabeza de ella.

El general Novoa y su ayudante, el capitán Goñi, llegaron hasta la puerta de Los Leones siendo recibidos con nutridas ráfagas de ametralladoras y andanadas de tiros disparados desde el edificio del casino de oficiales, que se encontraba contiguo y donde se habían parapetados los rebeldes y debió refugiarse en una garita. Varios soldados murieron en la refriega.

Al apreciar la reciedumbre del ataque con que eran recibidas sus tropas, Novoa titubeó en seguir adelante y ordenó no continuar con el objeto de estudiar y preparar mejor la operación; pero el comandante del O'Higgins, contrariando las instrucciones que recibía, continuó el ataque, a la cabeza de sus hombres[79].

La Cruz Roja Chilena improvisó una posta para atender a los heridos en un edificio cercano.

[79] El después general de brigada Ariosto Herrera Ramírez protagonizó un movimiento subversivo en 1938, destinado a derrocar al presidente Pedro Aguirre Cerda.

Los cañones del regimiento Chacabuco, ubicados en lo alto de una colina, cubrieron a las fuerzas que habían avanzado desde el cerro y éstas cargaron contra las tropas que protegían la plaza del apostadero, las que estaban compuestas por la Escuela de Grumetes, civiles e incluso los bomberos del puerto. Los defensores capitularon.

El general Novoa hizo entonces entrar al apostadero al capitán de corbeta Edison Frederick con otros oficiales para exigir a los rendidos la entrega de las armas. Fue, indudablemente, una acción muy psicológica del jefe de las fuerzas atacantes hacer que las tripulaciones se entregaran a sus oficiales.

Aún faltaba por someter a los fuertes que no podían disparar sus cañones en la dirección de la refriega y a los arsenales, donde se atrincheraban grumetes y obreros, a quienes se había repartido armas.

Fue preciso que entrara en acción nuevamente la artillería, debiendo los atacantes desalojar edificio por edificio, hasta someterlos después de una tenaz resistencia .

La base naval había sido defendida por aproximadamente 1.000 hombres, de los cuales el sesenta por ciento eran civiles.

Mensajes por radio

La captura de la radio estación fue realizada en los primeros momentos. El operador había pedido al «Almirante Latorre» que lo atendiera de preferencia para que recibieran el detalle del ataque en el instante que se producía.

El operador, con el apodo de «Volpone», alcanzó a enviar varios radiogramas dando cuenta de lo que sucedía, transmitiendo todos los pormenores del combate hasta que los asaltantes tomaron el recinto. Llama la atención la sangre fría con que informaba los sucesos. Del registro de radios captados podemos citar:

Sin registro de hora: *«Somos atacados por el Ejército, vienen por el cerro, abandonamos la radio. Nos replegamos».*

Sin registro de hora: *«Lucha en la bahía. El "Riveros" dispara contra las baterías de tierra del Ejército; primero disparó el Ejército. Estamos solos en la radio. Que el "Blanco" venga. La orden es romper el fuego, orden del Comité».*

16.00 horas: *«¿tenemos?... apuro. Diga si viene el "Blanco" a este puerto».*

Sin registro de hora: *«.....sigue el fuego. Siento silbar las balas. De la ciudad le disparan al "Riveros"».*

16.16 horas: *«El morro rompió el fuego, se le contestó. "Riveros" arrió el pabellón e izó parlamento sin autorización. Acabo de ordenar suspender el fuego. los herid.....provocaré una reunión de tripulantes caracterizados. Den instrucciones».*

16.25 horas: *«Sigue el tiroteo, el "Prat" hace fuego contra El Morro. Al "Prat" le tocó un cañonazo a estribor. El Morro dispara contra el "Prat". El Ejército no puede entrar por la puerta de Los Leones. Hay un regimiento frente a la puerta, se le dispara desde los cerros del apostadero. Oigo crepitar las ametralladoras. La caballería avanza por los cerros detrás del apostadero. A la calle cerca del hospital le dispara un cañón de los buques. Un regimiento se tomó el fuerte Borgoño[80]. El Morro se lo tomaron los milicos. Anoche el almirante juró que las tropas no avanzarían sobre el apostadero; no ha cumplido».*

[80] Esto no era efectivo, pues el fuerte Borgoño se rindió al día siguiente.

Sin registro de hora: «*"Riveros" está disparando a toda fuerza. Las ametralladoras disparan desde la calle*».

16.37 horas: «*.....la escuadra a tomarse los fuertes? No sé. Vamos a quedar prisioneros. El Comité pide instrucciones. ¿Qué hacen ahí?*».

16.45 horas: «*Cesó el fuego en las calles; sigue disparando con sus cañones el «Prat» contra El Morro. Estaré hasta el último momento. Vencer o morir*».

17.07 horas: «*El "Riveros" dispara desde la Quiriquina a los milicos que están en los cerros, «Prat» sigue disparando al fuerte Morro. Cuando me vaya me llevaré o quebraré las válvulas para que no puedan trabajar los milicos. La gente de la Escuela de Artillería se rindió*».

Sin registro de hora: «*Vienen entrando los milicos al apostadero. Cuando haya un largo es señal que los milicos entraron en la radio. Sigue el tiroteo; de los cerros siguen disparando. Los otros operadores se fueron a la radio de arriba. Quedamos dos, Sanhueza y yo. El cañón de la calle del apostadero disparando a los cerros. Sobre el Borgoño, el "Riveros"*».

Sin registro de hora: «*Tengo dos heridos a bordo, deben haber muchos y sigue el tiroteo en las calles; luego se tomarán la radio. Cuando deje de transmitir estaré hasta cuando lleguen los milicos. Parece que van a vencer*».

Sin registro de hora: «*(¿El "Riveros"?)... no se ha visto, parece que se fue detrás de la Quiriquina. No piensan darnos instrucciones. ¿Qué dice el Comité del "Latorre"? Con el ruido de los cañonazos apenas oigo*».

Sin registro de hora: «*Silban las balas que da gusto*».

17.35 horas: «*Cerro haciendo fuego contra la radioestación. Las granadas explotan al lado de afuera y caen al agua. Hacen fuego del cerro*».

Sin registro de hora: «*Me quedan pocos minutos de vida. Operador Volpone*».

Sin registro de hora: «*Los cañonazos no me dejan oír. El Ejército entró al apostadero, porque no había quien los dirigiera; el presidente del Comité está a bordo del "Riveros"*».

Sin registro de hora: «*Están disparando sobre la radioestación del muelle de la gobernación hacia la casa del almirante. Cuando abandone la radio haré un largo. La casa del lado está acribillada a balazos. Di cuenta de todo al Comité. ¿Cuántos heridos hay abordo?*».

Sin registro de hora: «*Se tomaron la radio. Llegó un guardiamarina con tropas y nos quitó las pistolas. Estamos quedando yo y Aravena, a Sanhueza deben haberlo hecho prisionero*».

Sin registro de hora: «*Escuela de Artillería está prisionera. Hay cien hombres entre la escuela y los obreros del arsenal*».

Sin registro de hora: «*Instrucciones pide el Comité. Llegaron los milicos.*» (*Última comunicación).*

Un buque leal

Cuando las tropas leales lograron conquistar los sitios de la base naval, se encontraba en reparaciones el submarino H-3 «Rucumilla», el que fue puesto en servicio por el comandante Muñoz Valdés, el mismo que organizó la columna de infantería con los oficiales de marina y se descolgó por los cerros para entrar al apostadero

Se hizo a la mar con una tripulación formada exclusivamente por oficiales. Fue el único buque leal durante el motín, el cual constituyó una seria preocupación una vez que se hubieron rendidos los amotinados, pues navegaba con torpedos y todo su armamento, pero sumergido y sin comunicación alguna, por lo que no había forma de avisarle que los buques sublevados se habían entregado y no disparara sus torpedos contra ellos.

Últimas escaramuzas

La lucha más cruenta tuvo lugar en los arsenales que se hallaban defendidos por unos cuatrocientos hombres, entre marineros y obreros.

La resistencia fue quebrantada por la acción de la artillería, cayendo un gran número de prisioneros; los que totalizaron seiscientos ochenta y tres hombres en todo el apostadero.

El regimiento Húsares de Angol ocupó la Escuela de Torpedos.

La base naval quedó a cargo del capitán de corbeta Alberto Consiglio y del teniente coronel Miguel Quezada.

Durante la refriega, la población de Talcahuano huyó para protegerse del bombardeo por caminos interiores hacia el fundo Galaz, donde se había improvisado una cancha de aterrizaje para los aviones trasladados de Temuco.

Al caer la noche del 5 quedaban aún en poder de los amotinados la isla Quiriquina y los fuertes Punta de Parra y Borgoño, los que fueron sometidos al día siguiente al atardecer.

El comité revolucionario se rindió incondicionalmente.

Cuando los fuertes izaron bandera blanca, también lo hicieron el blindado «Prat» y el cazatorpedero «Condell», mientras los minadores «Orompello» y «Elicura» zarparon mar afuera protegidos por una espesa niebla, hasta que fueron ubicados por los aviones que los obligaron a entregarse.

El submarino «O'Brien», que también se había hecho a la mar e iba al mando del sargento Luis Fermeño, recaló a Tomé para informarse de lo ocurrido. Al tomar conocimiento de la situación, se entregó, siendo ocupado por tropas del Ejército.

La isla Quiriquina resistió aún por dos días más.

Con fecha 7 de septiembre fue nombrado el comandante Superintendente de Arsenales, capitán de navío José A. Goñi, como Comandante en Jefe del Apostadero Naval.

Posteriormente, una vez que el crucero «Blanco Encalada» recaló a Talcahuano después de su rendición, fueron embarcados en él el doctor Carlos Soto Rengifo y los cabecillas hacia Valparaíso, custodiado por un submarino y un avión.

Durante todo el combate hubo un apreciable número de bajas, entre muertos y heridos, tanto de parte de los rebeldes como de las tropas del gobierno; pero las cifras fueron silenciadas[81].

El control militar

Un par de días después de haber sido reconquistada la base llegó a Talcahuano el regimiento Tucapel, desde Curicó, a reforzar a las fuerzas militares.

Los prisioneros fueron concentrados primeramente en la Quiriquina, quedando a cargo de esta unidad; pero como en los edificios de la isla no había capacidad para alojarlos a todos, cerca de cuatrocientos fueron destinados a la vieja fragata «Lautaro», que cumplía funciones de pontón en una ensenada cercana a la costa.

[81] El ministro de educación doctor Leonardo Guzmán cita el nombre de siete militares muertos, pero silencia la cantidad de los amotinados que cayeron.

El mayor Manuel Hormazábal, a cargo de los detenidos del pontón, tuvo que establecer un régimen de turnos para el aseo, trabajos, distracción, higiene, atención sanitaria, servicio de embarcaciones, agua, víveres, etc., pues la capacidad de la nave no era para más de un centenar y medio de tripulantes. En consideración a la falta de espacio se hizo indispensable, desde el primer momento, organizar a los prisioneros para que pudieran salir a cubierta a tomar aire y sol, por algunas horas, sin comprometer la seguridad requerida.

El control del Ejército continuó durante algunos meses.

Capítulo VIII
Valparaíso

La situación en el regimiento Maipo

Los fuertes de Valparaíso, los cuarteles navales de la zona y la base aérea de Quintero fueron escenarios de enfrentamientos en los que la acción del Ejército logró reducirlos; pero la situación más delicada se produjo en el regimiento de infantería Nº 2 Maipo.

Los largos años que esta unidad cubría la guarnición del primer puerto hacía que existieran muchos contactos entre soldados y personal de la Armada, circunstancia por la cual la propaganda extremista también se había infiltrado en ella.

El día 4 de septiembre, esto es con anterioridad a que la aviación efectuara su ataque a los buques en Coquimbo, el ministro de guerra, general Vergara recibió informaciones intranquilizadoras que obligaban a dudar de la disciplina del regimiento porteño, por lo que dispuso que el subdirector de la Escuela Militar, teniente coronel Ramón Díaz se dirigiera, esa misma tarde, a Valparaíso asumiendo a su llegada el mando de la unidad.

El gobierno, por otra parte, había designado comandante de la plaza al general Agustín Moreno Ladrón de Guevara el que, como primera medida al hacerse cargo de sus funciones, quiso dirigirle la palabra al personal de tropa del Maipo.

El cabo músico del Ejército, Alejandro Carrasco, en forma secreta al principio y desembozadamente después de conocer los alzamientos ocurridos en Talcahuano y Quintero, había hecho «correr» y firmar un pliego y tarjetas individuales de adhesión a los marineros del «Almirante Latorre», lo que llegó a conocimiento del general Moreno y, a pesar de haber exigido que se mantuvieran dentro del orden, el documento continuó distribuyéndose.

La tarjeta que firmaron los suboficiales y algunos soldados era del siguiente tenor:

«Al Comité a bordo del "Latorre", Coquimbo. Suboficiales y tropa regimiento Maipo estarán con ustedes en todo momento».

Esta adhesión debía ser transmitida a la marinería, para lo cual el propio cabo Carrasco debía obtener su envío radiotelegráfico. Éste trató de cumplir su cometido gestionando que la transmisión se hiciera desde la estación de radio de la Escuela Naval; pero allí fue sorprendido por el oficial de guardia y detenido.

A primera hora del día 6 llegó el general Moreno al regimiento y reunió a todo el personal, incluidos los oficiales, en los comedores y les explicó, en forma clara y precisa, la situación existente. Al terminar preguntó a los suboficiales si estaban de parte del gobierno,

a lo cual los interlocutores guardaron el más profundo silencio. El general repitió la consulta que fue respondida solamente por el vice sargento Lobos que contestó: «*Yo estoy con Ud. mi General*».

Un inoportuno llamado telefónico urgente desde Santiago sacó al General de la reunión, no regresando a ella. El comandante Díaz tomó entonces la palabra y volvió a explicar la situación, pero sin hacer ninguna pregunta, sino que manifestando que él era el comandante del regimiento y que todos le debían obediencia.

En ese momento pidió la palabra el vicesargento Carlos Morales Parada quien le manifestó que todos los suboficiales estaban dispuestos a prestar, a su comandante, un juramento de fidelidad, a lo que éste espetó: «*No necesito juramento sino que exijo obediencia absoluta, y al que no lo haga lo mato como a un perro*». Enseguida ordenó el acuartelamiento de la unidad.

El comandante de la plaza aquilató la situación y manifestó a Díaz que el regimiento no le inspiraba ninguna confianza y estimaba que constituía un peligro para Valparaíso, por lo que había decidido enviarlo a San Antonio con su armamento, pero sin munición.

El viaje se iniciaría a las ocho de la noche en cincuenta buses especialmente contratados.

Ante la eventualidad que el regimiento se negara a cumplir la orden de traslado, se dispuso que la Escuela de Infantería, al mando de su comandante, coronel Rosalindo Araneda, se situara en la caleta El Membrillo; el destacamento Andino N° 2, al costado del estadio de Playa Ancha y dos escuadrones de carabineros al oriente del cuartel. Además se nombraron oficiales de enlace entre las diferentes unidades.

A las seis de la tarde se reunió al regimiento para leer la orden de traslado y enviar al personal a preparar sus equipajes para embarcar a las 19.30.

A cargo del cuartel debía quedar un teniente con un destacamento compuesto por el personal de la banda de músicos, el que relevó al oficial de guardia y dispuso que formaran patrullas para efectuar rondas dentro del recinto, relevándose cada dos horas.

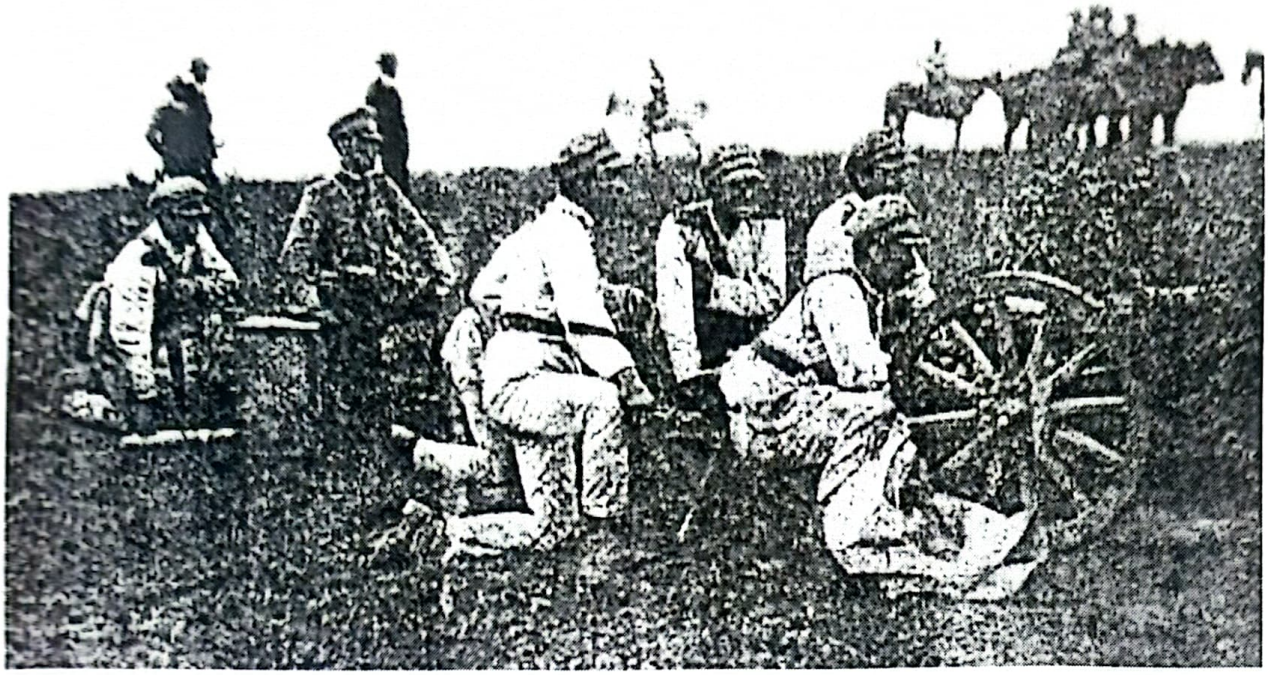
Cuando la primera compañía empezaba a subir a los vehículos, llegó el oficial de enlace de la Escuela de Infantería a comunicar al comandante Díaz que su unidad había abandonado sus posiciones en la caleta El Membrillo y avanzaba hacia el Maipo. Inmediatamente Díaz dispuso que el mismo oficial fuera a pedir al comandante de la unidad que detuviera el avance, pero éste se negó a hacerlo si no hablaba primero con él.

El comandante del Maipo dejó su puesto en manos de su segundo, teniente coronel Santiago Murphy, y se dirigió a hablar con el coronel Araneda.

En esos momentos una de las patrullas de ronda del Maipo, al pasar cerca de la muralla trasera del cuartel vio asomar una cabeza por encima de ella y de inmediato le gritó el ¡Alto! ¿Quién vive? Sin obtener respuesta. A los pocos minutos volvió a aparecer la misma cabeza y ante la nueva intimación de la patrulla, recibió un grosero grito muy chileno. El sargento no esperó más y disparó su fusil.

En previsión de un posible amotinamiento del Maipo se habían colocado patrullas en los edificios vecinos al cuartel, las que manejaban más de cincuenta y seis armas automáticas. El disparo salido del regimiento fue interpretado como un signo que éste se había rebelado y una lluvia de balas disparadas por todas ellas se abatió sobre la unidad.

El personal del regimiento se encontraba formado en el patio del cuartel empezando a embarcarse, pero al sentir las descargas supuso que era víctima de un asalto y abandonando la formación corrieron a buscar armas y municiones para defenderse y desde la terraza del edificio empezó a contestar el fuego.



El ejército ocupa sitios estratégicos del puerto de Valparaíso.

En la Escuela Naval, los cadetes montaban guardia, armados, desde hacía algunos días y al observar los fogonazos creyeron que se trataba de un ataque a su unidad y contestaron también con carabinas y ametralladoras.

Ya era de noche, por lo que se combatía a obscuras, pues las luces de la calle y del cuartel habían sido apagadas por las balas de los combatientes.

El regimiento Maipo contestó el fuego con gran celeridad y con una violencia increíble. Hubo ametralladoras que dispararon más de 45.000 tiros sin una pausa y sin atascarse.

El comandante Díaz había sido sorprendido por las descargas en plena calle, pero pudo, tras grandes esfuerzos, salvar un terreno barrido por las descargas de ambos contendores, logrando llegar al sitio donde se encontraba el coronel Araneda, quien ignoraba el origen de lo ocurrido.

Díaz logró explicar que su unidad no se había rebelado, por lo que la Escuela de Infantería y el destacamento Andino ordenaron suspender el fuego; ante lo cual el Maipo hizo otro tanto.

Debido a que se combatió a obscuras, las bajas no fueron muchas, en el Maipo hubo dos muertos, veinte heridos y toda la caballada totalmente sacrificada.

Este enfrentamiento, a pesar de lo que se le atribuyó, no tuvo relación directa con el motín de las tripulaciones de la Armada; pero la unidad había sido minada.

Es fácil imaginarse el pánico y desconcierto que produjo en Valparaíso esta situación. La balacera se había producido a la hora en que la gente salía de los cines y aterrorizados corrían tratando de llegar a sus casas. Una sirena ululaba llamando a los policías que se encontraban francos a sus cuarteles y los rumores hablaban de un ataque de la flota amotinada. Unas dos mil personas huyeron del puerto.

Oficiales del Maipo declararon más tarde, ante un Consejo de Guerra celebrado en San Bernardo, que después de haber tenido en sus manos tarjetas y pliegos firmados por sus subalternos, se limitaron a romperlos y a pedir que fuesen leales al gobierno, sin tomar iniciativa alguna para castigar a los autores. Aún más, el cabo músico Carrasco, al que nos hemos referido, estuvo en cuatro oportunidades de huésped del regimiento.

El ministro de guerra disolvió la unidad, cambiando su nombre por Regimiento de Infantería Valparaíso[82], siendo reemplazado su comandante por el teniente coronel Ariosto Herrera, a quien hemos visto en el ataque a Talcahuano.

Los suboficiales involucrados fueron condenados a la expulsión del Ejército.

La sublevación se extiende

El motín también alcanzó a la Escuela de Comunicaciones de Las Salinas en una forma confusa, pues el personal de gente de mar solicitó y obtuvo la autorización de su comandante Eduardo Merino, para enviar un telegrama a los sublevados de Coquimbo. Presumiblemente Merino creyó que era para llamarlos a la cordura; pero en lugar de ello expresaron su apoyo incondicional al movimiento. Los sublevados no tuvieron actitudes vejatorias con sus oficiales y el comandante abandonó la repartición, refugiándose en su casa durante la rebelión.

Como la escuela controlaba el camino público, los automóviles que transitaban fueron detenidos y en algunos casos desvalijados sus ocupantes.

El día 2, los amotinados de Valparaíso, se tomaron los fuertes del puerto, pero veinticuatro horas más tarde eran recuperados por contingentes formados por oficiales de la Armada en retiro y de la Artillería de Costa.

Estas improvisadas dotaciones cubrieron una batería del fuerte Vergara, la que quedó al mando del capitán de corbeta en retiro Alberto Barboza, en previsión de un posible ataque por el mar de los buques sublevados.

Apenas el general Vergara había tenido sospechas de una posible infiltración en el regimiento Maipo, dispuso el traslado a Valparaíso de la Escuela de Infantería, de los regimientos Yungay y Andino y de un regimiento de carabineros constituido por efectivos de tránsito. El regimiento Tacna permaneció en la capital listo para ser enviado, en caso de necesidad, a reforzar a las fuerzas leales del puerto.

La radioestación naval de Valparaíso se había plegado al movimiento desde la tarde del día 3 y así lo habían dado a conocer al Estado Mayor de las Tripulaciones por medio de un mensaje en el que el personal de suboficiales, cabos y marineros *«inspirados del más sano altruismo se adhieren incondicionalmente a la justa causa de sus hermanos»*. Este apoyo debía proporcionarles a los sublevados del norte un importante contacto con las tripulaciones de este puerto.

En Valparaíso el cuartel Silva Palma fue tomado por los carabineros de tránsito a cargo del coronel Humberto Arriagada.

Todos estos hechos produjeron gran inquietud entre los habitantes de Valparaíso que salían a las calles para inquirir noticias ante el temor de un ataque sorpresivo de los insurrectos

[82] Con fecha 23 de diciembre de 1931 un decreto devolvió al regimiento su nombre tradicional de Maipo, el que conserva en la actualidad.

y se mantenían largas horas a la orilla del mar observando el horizonte por si se acercaban los buques amotinados.

El depósito de marineros[83], que estaba al mando del capitán de corbeta Fernando Aranda, fue la única repartición de Valparaíso en que los suboficiales y gente de mar no se plegaron a la sublevación.

Alzamiento y sometimiento del Grupo de Aviación N° 2 de Quintero

Tal como lo había temido el gobierno, el día 2 de septiembre el personal de tropa del Grupo de Aviación N° 2 de Quintero, manifestó al Estado Mayor de las Tripulaciones, su adhesión al manifiesto, agregando que esperaban la aceptación de él por parte del gobierno; curiosamente se refirieron además a un tema que agradaba de sobremanera a los aviadores, que era que se mantuviera la separación de la Fuérza Aérea de la Armada[84].

El comandante de la base, Humberto Marín[85], discurrió la conveniencia de trasladar los aviones al lago Peñuelas para prevenir un posible ataque de la escuadra del sur, que navegaba en esos momentos desde Talcahuano hacia Coquimbo. El capitán Rafael Sáez, precaviendo lo que podría suceder, había ordenado armarse a los oficiales y quitar los cierres de carabinas y fusiles.

La tropa se reunió cerca de los muelles y, acicateados por el suboficial Manuel Poblete Vera, el sargento Jarret y el aviador Sandoval, decidieron pedir al comandante Marín no armar los aviones ni trasladarlos al lago Peñuelas, a lo que el jefe curiosamente accedió.

En la noche del 3, los suboficiales se reunieron en su casino y tomaron la decisión de adherirse a la sublevación de la escuadra; a esta asamblea se unió, posteriormente, el médico de la base, doctor Vivanco, aconsejando a los revoltosos actuar con rapidez y alabando las peticiones de los amotinados.

Un grupo, vestido de civil, se trasladó en un automóvil a Valparaíso para tomar contacto con otras unidades sublevadas, pero no encontraron con quien hacerlo. De regreso a Quintero pasaron a la Escuela de Comunicaciones de la Armada, que aún no había sido reducida por el Ejército y remitieron un mensaje de adhesión a los rebeldes de Coquimbo.

El Estado Mayor de las Tripulaciones, desde el «Almirante Latorre», agradeció el apoyo y pidieron que se les enviara un avión. A cambio de ello, la escuadra despacharía al destructor «Aldea» para que los defendiera de cualquier ataque, el cual zarparía de inmediato para Quintero. Cuando este buque se acercó a la costa produjo gran incertidumbre entre los sublevados, pues al no poder identificarlo no sabían si se trataba de una unidad rebelde o enemiga

El radiograma del Estado Mayor de las Tripulaciones logró ser interceptado, por lo que Marín alcanzó a dar la orden que ninguna máquina levantara vuelo, aunque para ello se tuviera que usar las armas de fuego.

---

[83] El depósito de marineros funcionaba en el actual edificio de la Academia de Guerra Naval en el cerro Playa Ancha.

[84] El 21 de marzo de 1930, durante la administración Ibáñez, se dictó el decreto supremo 1167 que despojaba a la Armada de su arma aérea y creaba la Fuérza Aérea Nacional, fusión que fue muy resistida por la Marina. El ministro de marina, comandante Frödden había negado reiteradamente que ello fuera a ocurrir.

[85] El comandante Luis Humberto Marín Manubens había sido uno de los oficiales aviadores navales que pasaron a formar parte de la Fuérza Aérea Nacional.

Los sargentos se negaron a obedecer y el suboficial Poblete capitaneó a los sublevados a tomarse la maestranza, los almacenes y los hangares. Como no disponían de armas, comenzaron a buscarlas para dotar con ellas a aviadores y obreros.

El comandante trató inútilmente de arengar a la tropa insurrecta para hacerlos cambiar de actitud, pero el suboficial Poblete lo interrumpió manifestando *«que ya el mando estaba en su poder, que él sería responsable de lo que sucediera y que prefería que el Comandante se retirase del lugar en que estaba»*.

El segundo comandante, capitán Sáez, trató de imponerse; pero tampoco fue escuchado. Por el contrario le pidieron que entregara la base a los rebeldes y que gestionara, ante el gobierno, aceptar sus peticiones. Ante su negativa, quedaron los oficiales prisioneros en el casino de suboficiales.

La escuadra sublevada insistía en el envío de aviones por lo que los solicitaron repetidamente a la base aérea de Quintero, petición imposible de ser cumplida debido a que el personal de tripulación no estaba capacitado para el pilotaje de las máquinas.

Como la base de Quintero insistía en el envío de buques para su defensa, pues su condición se agravaba, la escuadra del norte ordenó a su homóloga del sur que destinara a los cazatorpederos «Condell» y «Riveros», pues ignoraba que el último no había zarpado de Talcahuano, con instrucciones de tomar las providencias aconsejables para defenderlos, pero no utilizar la artillería sino en caso obligado de inminente peligro para el buque o para la base. Si los aviadores eran atacados debían inutilizar los aviones. Como el «Condell» demorara su llegada, desde la base le pedían por radio, angustiosamente, que estaban en inminente peligro y que desarrollara su máximo andar.

La Escuela de Comunicaciones se había encargado de informar la llegada a la zona del regimiento Yungay y había insistido en el envío de un buque que fondeara, inmediatamente, frente a esa repartición, pues esperaban el ataque de un momento a otro. La respuesta que recibieron del Estado Mayor de las Tripulaciones fue de mantener la defensa de la unidad y de su radioestación a toda costa y con sus propios medios.

A las cinco veinte de la mañana del día 5 radiaron un mensaje general informando que se encontraban rodeados por el regimiento Coraceros por la parte alta de la radioestación.

Este regimiento sitiólo con la caballería, hasta rendirlo. Se temía que opusiera cierta resistencia, pero se sometió inmediatamente. Una vez controlado, su jefe, general Germán Vergara Luco, ordenó al capitán Torreblanca y a dos ayudantes que se trasladaran a Quintero mientras las tropas se preparaban para reducir la base aérea, pero fueron hechos prisioneros al acercarse.

El Coraceros partió a las órdenes del segundo comandante disponiendo un avance en dos columnas envolventes por ambos costados del casino de suboficiales, donde se encontraban los detenidos; cada columna contaba con alrededor de treinta hombres, con un teniente al mando.

Por el flanco derecho le correspondió al teniente Carlos Vío Valdivieso, quien al acercarse fue recibido por una balacera ejecutada por tres individuos que disparaban desde los árboles. Como avanzaban a caballo, tuvieron que desmontar y arrastrarse hasta que lograron capturar a los atacantes.

En el intertanto la otra sección llegaba al casino y liberaba al comandante Marín y al resto de los oficiales. No hubo muertos.

Cuando Marín había decidido trasladar las máquinas de Quintero al lago Peñuelas, se encontró que los rebeldes habían botado el combustible de los hidroaviones al mar, por lo que hubo necesidad de requisar gasolina desde las casas particulares, para abastecerlos.

Desde este embalse decolaron los botes voladores «Dornier Wall» para patrullar la costa desde Valparaíso al norte mientras llegaban rendidos los buques de la escuadra.

Estos aviones fueron aprovisionados con cargas completas de bombas y combustible y debían mantenerse en vuelo para escoltar a los buques desde Pichidangui. Hasta ese punto la labor la habían realizado los aviones de Ovalle. En esta forma la navegación fue mantenida en observación permanente para evitar que alguna unidad se acercara a algún punto de la costa para desembarcar a los cabecillas, marinos o civiles.

Al día siguiente del asalto a la base aérea, le correspondió al Coraceros llevar a los prisioneros a San Felipe. La caravana la formaban tres microbuses con tropa, dos con los presos y otra con el equipaje. Antes de entrar a la ciudad fueron atacados por una poblada organizada, la cual tuvieron que dispersar usando munición de guerra; con lo cual lograron amedrentarlos, tomarlos prisioneros y poder entregar a los detenidos en el regimiento Yungay.

El regimiento Coraceros se encargó, además, de reducir al resto de las reparticiones de la Armada amotinadas en Las Salinas.

Los artilleros de costa, que se encontraban a cargo del polvorín, se hicieron fuertes; pero finalmente fueron rendidos, al igual que los fuertes Vergara, Valdivia, Yerbas Buenas y Reñaca.

Capítulo IX
Los juicios

El Consejo de Guerra de San Felipe

El triunfo del gobierno en sofocar la sublevación había sido completo, el general Vergara, como ministro de guerra y comandante en jefe de las fuerzas, se conquistó la admiración y adhesión de todos cuantos vieron su enérgica actuación para restaurar, sin vacilaciones, el orden público y el principio de autoridad.

La opinión pública reclamó, desde el primer momento, la aplicación de sanciones ejemplarizadoras a los cabecillas para cortar de raíz los factores de perturbación, que constituían bochornosos testimonios que afectaban gravemente el prestigio de Chile en el exterior y que desde los sucesos de 1924 se habían hecho endémicos.

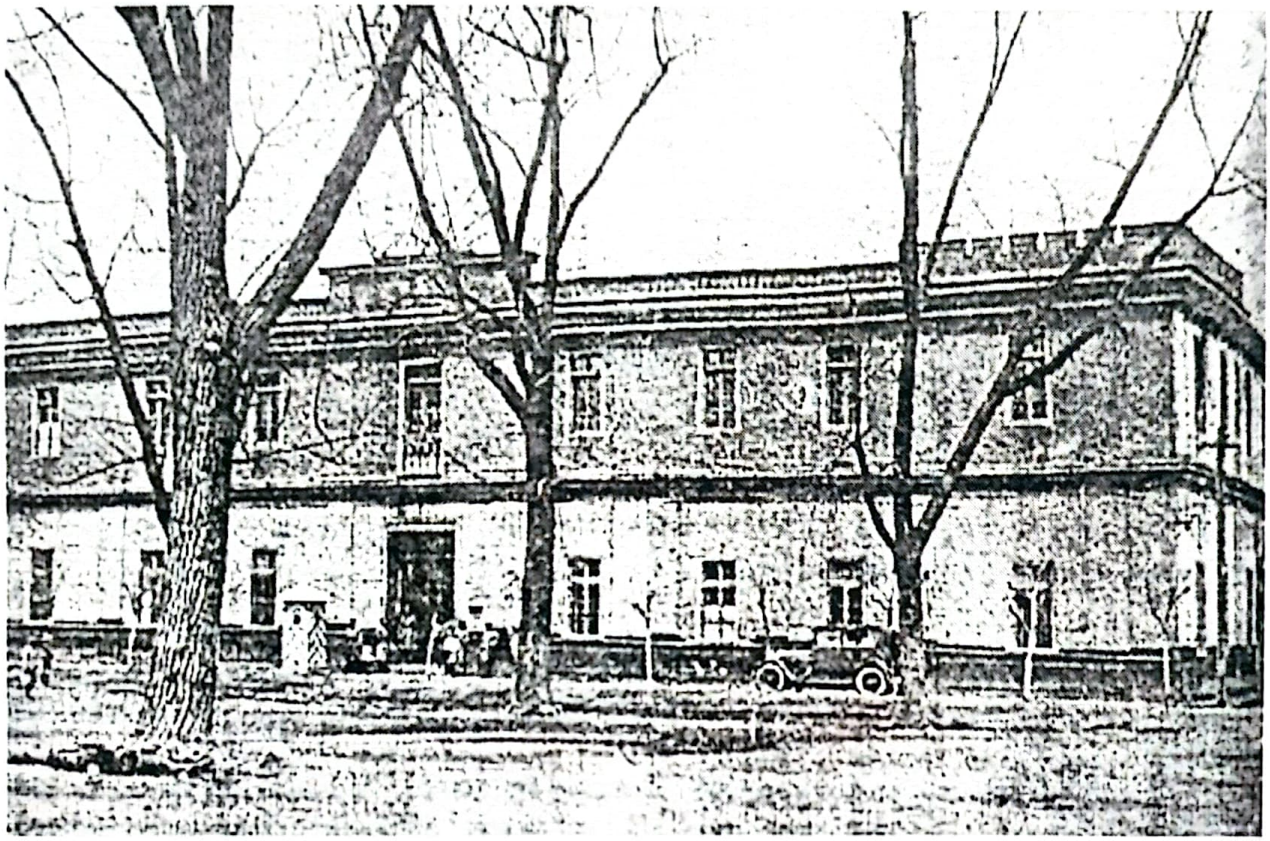
Los delitos cometidos por las tripulaciones eran de tal magnitud y gravedad que bajo ninguna circunstancia podían quedar sin castigo. Estos fueron resumidos:

1° Levantarse en armas contra el gobierno y hacer uso de sus armamentos contra las fuerzas armadas de la nación.
2° Apresar a los oficiales y tomar el mando de los buques.
3° Llamar a la revolución social por medio de la radio.
4° Ejercer la piratería al apresar al vapor «Flora».

A estos cargos debían agregarse los gravísimos delitos, que debían probarse, de sedición e infiltración política en la Armada, en el Ejército y en la Fuerza Aérea.

Los tripulantes del «Almirante Latorre» involucrados fueron trasladados y recluídos en el regimiento Yungay de San Felipe, donde se estableció un Consejo de Guerra que debía juzgarlos. Otros tribunales funcionaron en Valparaíso para los inculpados de esta plaza y de los destructores; en Coquimbo para los tripulantes del crucero «O'Higgins»; en Talcahuano para los de dicho puerto y de la escuadra del sur; en San Bernardo para los implicados del regimiento «Maipo» y otro, también en Valparaíso, para los aviadores de la base aérea de Quintero.

El Consejo de Guerra de San Felipe estaba presidido por don Armando Vergara e integrado además por los capitanes de fragata Roberto Cuevas e Inmanuel Holger, capitanes de corbeta Manuel de la Maza y Enrique Cordovez Madariaga, que actuó además como fiscal, los tenientes Carlos Schirmer R., Kaare Olsen y Manuel Quintana y el notario de San Felipe Ernesto Aragón.



REGIMIENTO YUNGAY DE SAN FELIPE DONDE FUERON LLEVADOS LOS INSURRECTOS DEL «ALMIRANTE LATORRE» Y DONDE FUNCIONÓ UNO DE LOS CONSEJOS DE GUERRA.

El fiscal pidió la pena de muerte para el suboficial Ernesto González Brion por haber asumido como jefe del Estado Mayor de las Tripulaciones, para el armero mayor Victorino Zapata por haber tenido a su cargo el régimen disciplinario a bordo, para el sargento despensero Lautaro Silva que era miembro del comité ejecutivo (la «Cheka»), verdadero centro político de la sublevación, para los cabos Manuel Astica, Augusto Zagal, Víctor Villalobos, Juan Bravo, Luis Pérez, René Jara, Eleodoro Labra y Manuel Bastías por haber sido los promotores del movimiento. Presidio perpetuo para los sargentos Moisés Pino y Juan Méndez, para el cabo José González y para el radiotelegrafista Guillermo Steembecker.

La defensa trató de inculpar a los oficiales quienes, según ella, habrían tenido conocimiento de la situación y habrían apoyado en todo momento a los tripulantes. Los defensores fueron abogados y oficiales de Ejército, algunos de los cuales cumplieron un brillante papel al obtener la rebaja de las penas a las que estaban condenados sus defendidos.

El capitán Humberto Garrido defendió al cabo electricista Manuel Bastías quien, como hemos visto, fue el mensajero de Astica para citar a los tripulantes a las reuniones previas donde se dieron las instrucciones para ejecutar el motín y que además había sido acusado de querer hacer explotar la santabárbara. El Consejo de Guerra lo había condenado a la pena de muerte y después de los alegatos del capitán Garrido, ella le fue rebajada a quince años de cárcel.

El capitán Aravena se encargó de la defensa del «comodoro Steembaker» y, tras un notable alegato, abstuvo su absolución al probar que había actuado bajo la constante amenaza de los suboficiales rebeldes.

Manuel Astica, principal cabecilla de la rebelión, hizo su propia defensa y obtuvo que el tribunal le conmutara la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

Los abogados defensores fueron los señores Emilio Morales Delpiano, Osvaldo Fuenzalida Correa, Juan Rosetti, Guillermo Fuentes y Carlos Ríos Talavera, quienes actuaron de acuerdo e hicieron más tarde una presentación al ministerio de guerra con respecto a los vicios legales que estimaban que adolecía el fallo dictado en San Felipe, recurso que posteriormente fue dirimido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Como la defensa actuó de consuno, todos los inculpados esgrimieron iguales argumentos, los cuales apuntaban a involucrar a los oficiales y a negar la participación comunista en el motín. El primer argumento les permitía disminuir sus culpas de insubordinación y la segunda evitar que se les acusara de infiltración política y sedición.

La participación del Partido Comunista, que como hemos visto, parece indudable, no pudo ser fehacientemente probada y siempre estos la negaron, a pesar que los tripulantes Víctor Prado, Pedro Fuentes, Julio Bustos y Pedro Alarcón firmaron la adhesión a dicho partido político y se transformaron en los censores de la correspondencia de los oficiales.

Se acusa a los oficiales

Terminada la primera instancia en el Consejo de Guerra de San Felipe, que era el que mayor trascendencia tenía por incluir entre los procesados a los promotores visibles de la asonada, éstos comenzaron a agitar a la opinión pública, por medio de la prensa, buscando inculpar a oficiales en los hechos.

El marinero Luis Pérez, que fue uno de los condenados a muerte, actuando de vocero de los procesados, relató a la revista Sucesos, de fecha 24 de septiembre, acerca de la actuación que habrían tenido los oficiales en el motín. Según Pérez, los tripulantes tenían el respaldo de la casi totalidad de los oficiales de la escuadra, quienes los habrían alentado para seguir adelante con su accionar e incluso les habrían ofrecido ayuda técnica, lo cual ellos habrían rechazado. Este marinero había sido miembro del comité ejecutivo, por lo que cumpliendo órdenes del Estado Mayor de las Tripulaciones tendría que haberse apersonado a varios oficiales durante la rebelión. Un capitán de corbeta le habría solicitado que le llevaran el pliego de peticiones para firmarlo, pues ellos padecían los mismos problemas que la tripulación y que lamentaba no poder prestarles ayuda personal; pero si desde la reclusión de su camarote podía serles útil, estaba a su disposición.

Con respecto al capitán de corbeta Ramón Beytía, quien fue juzgado por un Consejo de Guerra que funcionó en la Escuela de Comunicaciones de Las Salinas y condenado en primera instancia a la separación del servicio y luego absuelto por la Corte Marcial, Pérez lo inculpó diciendo que le habría manifestado al Estado Mayor de las Tripulaciones que se sentía avergonzado de portar galones y del ejemplo que le estaban dando sus subordinados, pues ellos como jefes deberían estar encabezando el movimiento. Habría manifestado además que sería una lástima que la sublevación fracasara.

El capitán Roberto Valle que, como hemos visto, entregó el arma que falló cuando la disparó el comodoro Hozven contra sus captores y a quien también condenó el Consejo de

Guerra de Las Salinas y recibió posteriormente la absolución de la Corte Marcial, se habría ofrecido para organizar el control antiaéreo en el caso que hubiera un segundo ataque de la aviación. Igual ofrecimiento habrían tenido del oficial de telecomunicaciones, siendo su oferta rechazada, aduciendo que los sargentos y suboficiales estaban suficientemente preparados.

Cita el marinero Pérez a varios otros oficiales, sin detallar cargos concretos, sino que insistiendo que las palabras de aliento recibidas eran espontáneas, pues a ninguno se le consultaba su parecer sobre el movimiento.

Continuando con las declaraciones aludidas es citado el comandante Obrecht, a quien le habrían manifestado los sublevados en Quintero, antes de desembarcar detenidos, que confiaban en su caballerosidad y hombría en el caso que se quisieran tomar represalias por parte de los oficiales, quien les habría asegurado que podrían contar con él y con ellos en todo momento; pero que apenas fue sofocada la revuelta, la primera medida que habría tomado la oficialidad habría sido la de encerrar a los que creían que eran los cabecillas en garitas y confeccionar una lista con los nombres de todos los que, según su criterio, deberían ser castigados y los cargos respectivos; los que fueron entregados al fiscal, de manera que cuando éste los interrogó para establecer responsabilidades, ya lo sabía todo.

La defensa de González Brion

El suboficial preceptor y jefe del Estado Mayor de las Tripulaciones Ernesto González Brion se defendió tratando de inculpar, por un lado a los oficiales que los habrían apoyado y por otra a los marineros y cabos que habrían arrastrado a la revuelta a los sargentos y suboficiales, haciendo recaer finalmente la culpa en el comodoro Hozven quien, con la dureza de su arenga, había precipitado el alzamiento.

El testimonio de González apuntaba al hecho que lo que se preparaba el lunes 31 era una petición escrita que debía ser elevada al supremo gobierno por conducto regular a través de los comandantes de los buques para que no se hiciera efectiva la rebaja anunciada de los sueldos; ella había sido propiciada por los cabos y tenía el asentimiento de todo el personal de tripulación del grado de cabo hacia abajo.

Al ser informado de ello el comodoro Hozven y reunir en la toldilla del «Almirante Latorre» delegaciones de todas las unidades, se habría dirigido al personal en términos sumamente duros y amenazado con la expulsión de la institución a todos los que apoyaran la petición. La consecuencia de la enérgica arenga incitó a los propiciadores a reunirse clandestinamente y decidir actuar de hecho tomándose los buques.

Según las palabras de González, tan solo unas pocas horas antes, cuando ya todo estaba decidido, habría llegado ello a conocimiento de los sargentos y suboficiales, los que se habrían plegado unánimemente con el objeto que el movimiento pudiera ser dirigido *«por hombres más preparados, serenos y experimentados»*.

La formación del Estado Mayor de las Tripulaciones y los comités en cada uno de los buques habría tenido por objeto ser la voz de los tripulantes y mantener el régimen disciplinario a bordo.

Siempre según González, la presencia comunista no habría tenido otro objeto que tratar de obtener el cese de las hostilidades en Talcahuano y Quintero, pero no se habría llegado a ningún acuerdo práctico con ellos y todo habría quedado reducido a *«simples escaramuzas de papel»*.

La falta de apoyo de la población y las noticias conocidas a través de los radios interceptados, que señalaban la condena que estaban recibiendo de la opinión pública, habría constituido uno de los motivos principales del desaliento de la marinería y del desbande de los buques.

Finalmente el suboficial González criticó que tanto el sumario, como el Consejo de Guerra, no buscaron identificar a los iniciadores de la rebelión, sino que se concretaron a sancionar a los que habían actuado después de su estallido, sin querer consignar los hechos que constituían un cargo a los oficiales, tan comprometidos como las tripulaciones en los hechos.

El Consejo de Guerra de Valparaíso

En Valparaíso, el Consejo de Guerra funcionó en la cárcel pública para juzgar a las tripulaciones comprometidas de los destructores «Orella», «Aldea», «Serrano», «Hyatt», «Riquelme» y «Lynch», al personal de la Escuela de Comunicaciones, del cuartel Silva Palma y de la subsección de artillería y municiones.

Las acusaciones del fiscal fueron por sedición y levantarse en armas contra el Estado, procediendo a hacer prisioneros a los jefes y oficiales, usando con ellos actos de vejámenes y crueldad.

Los abogados defensores basaron su alegato en que se había tratado de una defensa económica, haciendo presente que debían ser analizados a la luz de los acontecimientos del año 1924, en que se habían iniciado los primeros movimientos revolucionarios en Chile, estimando aquellos como la influencia de éstos; expusieron, además, que el movimiento no tenía otro móvil que la persecución de un bienestar económico, sin pretensiones de poder. Finalmente elogiaban, en algunos casos, la generosidad de los oficiales para ofrecer sus conocimientos al servicio de la causa.

El fiscal pidió la pena de muerte para catorce inculpados y otras penas mayores para treinta y tres de los ciento veintiocho suboficiales recluidos. El Consejo de Guerra, que fue presidido por el ministro de la Corte señor Molina López y formado por oficiales de la Armada, emitió su fallo condenando a la pena capital al radiotelegrafista del «Lynch» Alejandro Caldera, quien había sido el jefe de todo el movimiento de comunicaciones durante la rebelión; presidio perpetuo para el artillero del «Orella» GumercindoTello, que había actuado de comandante de su buque y organizado un servicio de espionaje en toda la escuadra, para el sargento 1° Joel Poblete, para el cabo electricista Roberto Sepúlveda y para el practicante del «Lynch» Bienvenido Polidoro Manríquez; quince años para el electricista Manuel Solís y para el cabo artillero del «Serrano» Manuel Pantoja.

Consejos de Guerra de La Serena, Talcahuano, San Bernardo y Quintero

En La Serena se constituyó otro de los Consejos de Guerra, que funcionó en el liceo de la ciudad, para procesar a los amotinados del «O'Higgins». Fue presidido por el presidente de la Corte de La Serena señor Navarrete y formado por el capitán de fragata Gastón Kulchewsky G. y otros oficiales. Este tribunal condenó a muerte al jefe de los insurrectos del crucero, suboficial Desiderio Cerpa y a José Basáez, Guillermo Pizarro y José Gallardo. A 20 años a numeroso personal; otros a 15 y 10 años de presidio.

La infiltración y los sucesos acaecidos en el regimiento Maipo de Valparaíso fueron juzgados por un Consejo de Guerra que se constituyó en la Escuela de Infantería de San Bernardo.

El Consejo de Guerra de Talcahuano se constituyó en la Escuela de Artillería Naval y condenó a muerte al sargento señalero Orlando Robles Osses que, como se recordará, se había erigido en el Comandante en Jefe de la escuadra del sur; al maestre de víveres Carlos Cuevas y al preceptor Eliseo Sepúlveda. A presidio perpetuo a los preceptores León Téllez Lemmett y Luis Henriquez Acevedo y a los suboficiales Gerardo Espinoza y Francisco Morales, quien hacía radiodifusión del movimiento y mantenía el contacto radial con los sublevados del norte. Otros cuarenta individuos fueron condenados a penas de reclusión menores y nueve más expulsados de la institución. Todos los condenados quedaron recluidos en la isla Quiriquina.

Otro Consejo de Guerra en el puerto sureño debía procesar a los oficiales; pero no debía iniciar su labor hasta que la concluyera su congénere que funcionaba en Las Salinas.

Durante esta demora fue elegido Presidente de la República el señor Juan Esteban Montero, quien fue luego derrocado, enseguida Marmaduke Grove estableció la «República Socialista», a continuación Carlos Dávila se tomó el poder, también a nombre del Partido Socialista; en estas circunstancias, el ministro de marina contraalmirante en retiro Manuel Montalva decidió suspender el tribunal especial y fallar de acuerdo al dictamen del fiscal.

La infiltración y los sucesos acaecidos en el regimiento «Maipo» de Valparaíso fueron juzgados por un Consejo de Guerra que se constituyó en la Escuela de Infantería en San Bernardo y que estuvo formado por oficiales del grado de capitán, pero la presunción de que los acontecimientos pudieran afectar a militares de más alta graduación, obligó a reemplazarlos por otros cuyos nombramientos recayeron en los generales Indalicio Téllez, Ricardo Ludwig, Canales y Acasio Rodríguez; los coroneles Berríos y Toledo y en el auditor general de guerra, Hernán Santa Cruz. El tribunal absolvió a los jefes y oficiales de toda responsabilidad, dispuso

el retiro del coronel Ernesto García Fernández y decretó la expulsión de las filas del Ejército a los suboficiales firmantes de la tarjeta de adhesión y a otros que continuaban con su prédica demoledora. En total alrededor de cuarenta individuos debieron abandonar las filas.

En una de las salas del Juzgado del Crimen de Valparaíso funcionó el Consejo de Guerra que debía decidir la suerte de los implicados en la base aérea de Quintero. Como esta entidad debía juzgar también el comportamiento de jefes y oficiales, fue conformado por personeros de alta graduación. Lo presidió el juez Federico Peña y lo integraron los generales del Ejército Ricardo Ludwig y Acasio Rodríguez y los comandantes de la Armada Luis A. Caballero, Alberto Brito y Rodolfo Turenne. Fiscal fue el comandante de aviación Adilio Jessen. Los abogados defensores fueron los señores Salcedo, Gándara, Otero Bañados, Budge y la señorita Fanny Laibovitch.

El Consejo de Guerra absolvió al comandante de la base Humberto Marín, al segundo comandante Rafael Saenz y al teniente Sothers, encargado de la sala de armas, quien aparecía comprometido en el sumario. El suboficial Manuel Poblete fue condenado a la pena capital.

Documentos comprometedores

Una vez pronunciada la condena a muerte para el suboficial preceptor Ernesto González Brion por el Consejo de Guerra de San Felipe, su hermana Berta tomó contacto con él, quien le manifestó que habrían oficiales involucrados y que tenía documentos que así lo probaban, los cuales habían quedado en su camarote del «Almirante Latorre», envueltos en un paquete de color café y escondido bajo un zapato viejo; pero que seguramente ya habrían sido destruídos.

Berta alquiló un automóvil y, junto con una funcionaria de Investigaciones que se ofreció a acompañarla, o quizás para vigilarla, se dirigió a Quintero, con el pretexto de llevarle algunos objetos a su hermano. Iba armada con un revólver.

Después de grandes dificultades logró subir a bordo del «Almirante Latorre» y entrar al camarote, siendo vigilada por dos oficiales, un escribiente y la funcionaria de Investigaciones a la que hemos hecho referencia.

Mientras se practicaba un inventario de todas las pertenencias de González, Berta ubicó el zapato y los papeles bajo él, pero en lugar de abalanzarse a tomarlos, lo que habría significado que se los habrían quitado de inmediato, ella ubicó la maleta de su hermano, cuya llave le había sido entregada en San Felipe y la abrió, lo que produjo de inmediato la orden que debía ser revisado su contenido.

Como contenía cartas de mujeres, fotografías familiares, cintas y recuerdos, los marinos no siguieron revisando y continuaron el inventario, momento que aprovechó la hermana para tomar el paquete que contenía los documentos, echarlos adentro de la maleta, ponerle llave y arrojarla al suelo debajo de una mesa. Continuó con la recolección de objetos y del inventario.

Como la hora había avanzado, la invitaron a cenar a bordo, lo que hizo en compañía de la funcionaria de Investigaciones en el mismo camarote. Enseguida desembarcaron con la maleta y otras pertenencias.

Entre los documentos de la maleta que no fueron revisados en detalle había una carta, de puño y letra, del capitán de corbeta Roberto Valle y dirigida al Comité del «Almirante Latorre», en la que expresaba *«estoy seguro que el gobierno no sabe que también muchos*

oficiales piensan como ustedes y están en todo con ustedes» y más adelante sugería que debían manifestarle, lo por él expresado, al contraalmirante von Schroeders, que se dirigía a negociar con ellos y más aún, debían hacerse acompañar por oficiales en las conversaciones.

De regreso Berta no logró hablar con su hermano, sino que solamente lo divisó a través de las rejas, indicándole a él y al cabo Augusto Zagal, que tenía los documentos y se dirigió a Santiago, donde los dio a conocer la prensa.

Los principales diarios de Santiago, tales como El Diario Ilustrado y El Mercurio, los publicaron incluyendo las firmas de los oficiales.

El abogado que había defendido a algunos de los reos en el Consejo de Guerra de San Felipe, Osvaldo Fuenzalida Correa, hizo llegar al primero de los periódicos una copia fotográfica de los documentos rescatados por la hermana de González Brion, los cuales contenían la firma de cincuenta y ocho jefes y oficiales frente a las peticiones de las tripulaciones que hemos conocido. En la carta con que el abogado Fuenzalida remitía a la prensa los comprometedores papeles decía textualmente:

«No solo el capitán de corbeta señor Valle manifestó por escrito y de su puño y letra su decidida adhesión a los sublevados.

También lo hicieron otros: el capitán de corbeta señor A. Valenzuela B. manifestó su decidida adhesión, por medio de una carta de tres pliegos que él tituló "Observaciones al pliego de peticiones de las tripulaciones de la Armada". Le acompaño estas "Observaciones". En ellas el señor Valenzuela propone modificaciones al pliego de peticiones, amplía éstas, señala rumbos para el futuro gobierno, propone medidas de índole económica, y se revela como un experto entendido en los problemas que tan gravemente agitan hoy día a la opinión.

Consta en los documentos que también le incluyo, que varios oficiales adhirieron, con su firma, a las «observaciones» del capitán señor Valenzuela.

Como Ud. ve, han tenido razón las defensas de los reos cuando siempre sostuvieron que el movimiento de Coquimbo no era de índole comunista; que solo tendía a evitar el cercenamiento de los sueldos y que, en esta campaña, estaban eficazmente secundados por sus jefes.

Resulta grotesco, entonces, que se apliquen sanciones tan severas a los subalternos, a quienes se tilda de indisciplinados y se deje en la más absoluta impunidad a los jefes que los alentaron y no supieron defenderlos.

Finalmente haré mención a los documentos más sensacionales.

Ellos prueban que, por lo menos 58 jefes y oficiales de marina adhirieron, con sus firmas, al movimiento sedicioso de Coquimbo. Como Ud. ve, no estaba equivocada la defensa de los reos de San Felipe cuando aseguró que tenía en su poder los documentos originales, conteniendo las firmas de los oficiales adheridos.

Me parece que se ha probado, hasta la saciedad, que los reos de San Felipe no son los más culpables, y que, por supuesto, no merecen las terribles sanciones que se les han acordado.

Como ya lo he dicho, de todo esto se desprende una consecuencia consoladora: el movimiento no fue comunista; y una desconsoladora: en nuestra Marina, por lo menos en gran parte de sus miembros, primaron los mezquinos intereses económicos, a los grandes principios de lealtad y disciplina para con su patria.

Saluda atentamente al señor director. (Firmado) Osvaldo Fuenzalida Correa»

La lista de firmas que acompañaba el documento y que tenía como título *«Nos declaramos conformes»*, contenía las observaciones de algunos oficiales que es interesante consignar[86]:

«Buenas ideas; pero se han desprestigiado con el proceder» (firmado por el capitán Aylwin).

«Con las observaciones que detallo en las tres páginas adjuntas» (firmado por el capitán Athos Valenzuela).

«Conforme con las observaciones del capitán Valenzuela. No conforme con el procedimiento que se ha seguido» (firmado por el teniente Foxley).

«Conforme con las observaciones del capitán Valenzuela. No conforme con el procedimiento que se ha seguido» (firmado por el oficial Germain).

«Buenas ideas conforme a las observaciones del capitán Valenzuela. Procedimiento vergonzoso. Si no hubo necesidad de nuestras firmas antes de nuestra reclusión, ahora que se me ha despojado de mi autoridad de oficial, no creo tenga valor alguno; por lo tanto solo firmo. R. Campos»[87].

El decano de la prensa nacional analizaba la demora en presentarse estos documentos, cuyos facsímiles llegaban ahora a su poder y lo atribuía a que la defensa debería haber estado esperando el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de un recurso de inconstitucionalidad de los Consejos de Guerra, entablado por los abogados defensores. Al fallar el alto tribunal rechazando el recurso, salían ellos a la luz.

La publicación de El Mercurio transcribía íntegramente las observaciones al pliego de peticiones que hacía y firmaba el capitán de corbeta Athos Valenzuela B. En ella analizaba cada uno de los puntos, mostrándose conforme con algunos, pero opinando en todo tipo de materias, desde que el pescado debía venderse más barato para favorecer al pueblo, hasta las plazas de almirantes y jefes que deberían suprimirse, pasando por la forma de dejar de servir la deuda externa, impuesto a las tierras no cultivadas, cambios en la ley de retiros. , etc., etc.

Después de la firma del capitán Valenzuela, el documento tiene una post data suscrita por dos firmas, de las cuales solo una es reconocible, la del teniente 2° H. P. Foxley que dice:

«Procedimiento que creo se debía haber seguido.

Los tripulantes de la escuadra debían haber hecho presente respetuosamente y por conducto regular que deseaban que su reclamo llegara a conocimiento del gobierno; manteniendo así la lealtad hacia sus oficiales, la que debían haber considerado sagrada». Hay dos firmas.

Comentarios

Los documentos principales, citados como una prueba irrefutable de que hubo oficiales involucrados, solamente estarían apuntando a algunos casos puntuales, como el del capitán

[86] La lista con las firmas constituye hojas totalmente separadas del texto del petitorio, por lo que es imposible afirmar si realmente se referían a ese documento o a otro. De lo que no cabe duda es que las observaciones del capitán Valenzuela corresponden a él, pues analiza uno por uno los puntos planteados.

[87] Esta observación es una prueba irrebatible que las firmas fueron obtenidas cuando los oficiales ya se encontraban cautivos. *(Nota del Autor).*

Athos Valenzuela, lo que confirmaron algunos sumarios instruidos. El detalle con que este oficial analizaba cada una de las peticiones indicaba que el pliego lo había estudiado en detalle para sugerir las modificaciones.

Por otra parte, las observaciones y la post data indican que estas firmas fueron obtenidas mediante presión, seguramente durante las horas de cautiverio de los oficiales, pues tienen fecha 3 de septiembre, día en que el contraalmirante von Schroeders se encontraba en plena negociación con los sublevados. Esto es corroborado por la observación de un oficial de apellido Varela, quien estampó que los artículos 121 al 161 del código de procedimiento penal establecían que toda firma arrancada en estado de reclusión y violencia no tenía valor alguno. Para evitar represalias solo firmó con las letras C.P.P. (Código de Procedimiento Penal).

Sumario a los oficiales

El ministro de marina, contraalmirante Enrique Spoerer, ordenó la instrucción de un sumario administrativo para sancionar las responsabilidades de jefes y oficiales, siendo nombrado fiscal el director de la Escuela Naval, comandante Julio Allard.

El capellán del «Almirante Latorre», monseñor Julio Ramírez, aseguró que habían firmado bajo amenaza de muerte, mientras el capitán de corbeta Julio Santibáñez afirmó que hubo oficiales comprometidos.

El capitán de fragata A. Rodríguez replicó aduciendo que estos habían aparentemente apoyado el movimiento, pues tuvieron que ceder cuando se les amenazó de muerte inmediata, posición que fue aceptada por el fiscal.

La trascendencia de la determinación que debía tomarse hacía recomendable que el fiscal consultara al Consejo de Almirantes, lo que no hizo y fue motivo de enérgicas protestas de los inculpados, por lo que el ministro de marina revocó el dictamen y aceptó la formación de un Consejo de Guerra que se encargara del caso.

Este tribunal encontró culpables solamente a los capitanes de corbeta Ramón Beytía y Roberto Valle, a los que se les separaba del servicio; los afectados apelaron a la Corte Marcial Naval que los absolvió. El resto había incurrido solamente en faltas disciplinarias, cuya sanción quedaba en manos del gobierno.

El oficial artillero del «Almirante Latorre» capitán Valle fue sindicado por los amotinados, durante los juicios de guerra, como la persona que había ayudado a preparar las baterías antiaéreas del acorazado.

El Consejo Naval se reunió para establecer los castigos que había indicado el Consejo de Guerra, cuyo veredicto fue revocado por el ministro de defensa nacional, el que decretó la separación del servicio de alrededor de cincuenta y ocho oficiales[88]. El proceso había durado diez meses.

[88] El historiador Carlos López Urrutia hace subir esta cifra a ochenta, lo que significaba la tercera parte de los oficiales en servicio

Nuevo proceso a los oficiales

Conjuntamente con ser dados a conocer los documentos que hemos mencionado más arriba, los condenados a muerte enviaron un telegrama al Colegio de Abogados solicitando el nombramiento de profesionales para que defendieran su causa frente a la nueva situación producida.

Esta entidad nombró a cuatro de sus miembros, quienes se reunieron para iniciar de inmediato una acción en común, y el gobierno, por su parte, a insinuación del ministro de marina, ordenó seguir un nuevo proceso a los oficiales.

Se encargó al auditor de la Armada, Osvaldo Prieto Castro, iniciar una investigación para establecer la culpabilidad de los mandos en la cual declararon, entre otros, el contraalmirante Abel Campos y el comodoro Roberto Hozven.

Terminada la investigación dejaron sus cargos el Comandante en Jefe de la Escuadra de Evoluciones, contraalmirante Abel Campos; el Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Valparaíso, vicealmirante Francisco Nieto; el Comandante en Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, contraalmirante Roberto Chappuzeau; el Comandante en Jefe de la Escuadra de Instrucción, capitán de navío Roberto Hozven; el comandante del crucero «O'Higgins», capitán de navío Héctor Díaz; los comandantes de destructores «Riquelme», «Videla» y «Aldea», capitanes de fragata Alejandro Yánquez, Humberto Aylwin y Luis Bahamondes y a numerosos otros jefes de reparticiones y segundos comandantes, por la responsabilidad que involucra el mando.

Aplazamiento de las ejecuciones

El fallo pronunciado por el Consejo de Guerra de San Felipe fue notificado a los reos a las 09.00 horas del 17 de septiembre, ninguno de los cuales quiso firmarlo.

Los vocales y el fiscal del tribunal llevaron el expediente a Valparaíso para gestionar la firma del ministro de guerra, general Vergara, quien autorizó el cumplimiento de la sentencia telefónicamente.

Acto seguido se ordenó al regimiento Yungay prepararse para los fusilamientos de los condenados a muerte y, por razones que ignoramos, se decidió que la ejecución la cumpliera el Cuerpo de Carabineros. Debía hacerse efectiva antes de la medianoche; pero faltaba la firma del ministro de guerra.

Todos los condenados fueron conducidos a la cárcel pública, con custodia militar, y encerrados en celdas especiales. Al poco rato a los que se les había decretado la pena capital fueron visitados por un sacerdote.

La sentencia llegó a La Moneda alrededor de las 22.00 horas.

El vicepresidente Trucco reunió a sus ministros y la leyó ante ellos, haciéndolo con voz angustiada al llegar a la parte de los fusilamientos; enseguida pidió la opinión a sus secretarios de Estado.

El general Carlos Vergara, que como hemos visto había sido el hombre que con su energía conjuró el peligro que se cernía sobre el país, no titubeó en ponerse de pie y hacer presente que la sentencia debía cumplirse, pues de otra manera podrían renovarse los focos de indisciplina y se demostraría desconfianza en los hombres que habían formado el Consejo de Guerra de San Felipe.

El ministro de relaciones exteriores, Luis Izquierdo, tomando una posición que no lo comprometiera, opinó que no se pronunciaba sobre el fondo del problema y que proponía postergar el cumplimiento de la sentencia para hacer una verdadera selección y determinar quienes deberían ser fusilados y quienes merecían otras penas.

El ministro de justicia, Horacio Walker Larraín, adhirió a la idea de la postergación, para no empañar las festividades del 18 de septiembre. Igual predicamento suscribieron los ministros de marina, contraalmirante Enrique Spoerer y de hacienda, Arturo Prat Carvajal.

Los ministros Santiago Wilson, Carlos Alberto Martínez y Leonardo Guzmán fueron decididamente partidarios de indultar a los condenados a la pena capital.

Marcial Mora se mostró contrario a que hubiera ejecuciones en el día patrio y partidario de esperar la sentencia de los Consejos de Guerra de Quintero, Valparaíso, Talcahuano y San Bernardo para aplicar un criterio homogéneo en todos ellos.

El ministro Enrique Matta Figueroa opinó que la sentencia era incompleta, pues no se había propuesto pena alguna para tres contraalmirantes ni para el comandante de un regimiento y demagógicamente dijo: «*Si los contraalmirantes Campos, Chappuzeaux y Hozven y el coronel García (comandante del regimiento Maipo) fuesen condenados a muerte, revelaríamos verdadero espíritu de justicia y de nivelación democrática. Entonces podría aceptar fusilamientos*» y pedía una revisión del proceso.

Esta diatriba produjo la reacción inmediata del general Vergara, la que fue calmada por el contraalmirante Spoerer, proponiendo el nombramiento de una comisión especial para que investigara la actuación de los jefes, la que se llevó a efecto como ya lo hemos visto.

El vicepresidente Trucco agradeció a sus ministros y expresó que había una opinión unánime de postergar las ejecuciones, lo que produjo la amenaza de renuncia al gabinete del general Vergara.

El ministro de justicia hizo presente, entonces, que creía que muy poco se podían modificar las sentencias del Consejo de Guerra, porque no había, ni siquiera, una solicitud de indulto, a lo que replicó el propio Vicepresidente que él ya las había pedido a San Felipe, debidamente firmadas por los interesados, las que llegarían dentro de unos momentos.

¡Quedaba claro que las consultas no eran más que para compartir las responsabilidades de una decisión que Trucco ya tenía tomada y que hacía inútil la labor realizada para juzgar a los que habían cometido tan grave atentado contra las instituciones patrias!

Mientras esperaban las solicitudes de indulto, el Vicepresidente logró convencer a su ministro de guerra que no hiciera efectiva su renuncia.

El Partido Comunista otra vez llama a la insubordinación

El día 26 de septiembre el Partido Comunista lanzó una proclama pidiendo que se iniciara una campaña de agitación popular hasta conseguir la libertad de los inculpados y en uno de sus puntos abogaba por «*el reconocimiento a los marineros y soldados del derecho de petición*», frase que, pasados varios años, el ex cabo Astica recordaba haber pronunciado en la primera reunión subversiva en el «Almirante Latorre».

El acuerdo pedía lo siguiente:

1° Libertad inmediata de los obreros, marineros y soldados procesados o condenados.

2° Pago de sus sueldos correspondientes a los meses de agosto y septiembre a los obreros de los arsenales y apostaderos navales y a la marinería de la escuadra.

3° Devolución a los marineros y soldados procesados de sus haberes acumulados en las cajas de retiro y montepío.
4° Reconocimiento a los marineros y soldados del derecho de petición.
5° Derogación de todas las leyes de represión social vigentes.
6° Declarar iniciada una campaña de agitación pública hasta conseguir los objetivos arriba indicados.

Siete diarios comunistas explotaron, con grandes titulares, los incidentes ocurridos: *«Los culpables de todo habían sido los oficiales, los hijos de los burgueses. La marinería, que forma parte del proletariado y hace causa común con él, fue solo una víctima engañada».*

Esta campaña buscaba conseguir la libertad de los cabecillas encarcelados y conceder una pensión a los ochocientos sesenta y cinco hombres, entre tripulantes y obreros del arsenal de Talcahuano, expulsados de las filas de la Armada.

Conmutación de penas

Casi diariamente el Partido Comunista organizaba mítines para obtener el indulto de los condenados, ya fuera en la Plaza de Armas de Santiago, frente a la cárcel capitalina o en el mismo salón de honor de la Universidad de Chile. Uno de los oradores más fogosos era el entonces estudiante de derecho de la Universidad Católica Luis Hernández Parker y que luego sería nombrado secretario general de las juventudes comunistas. Hernández exigía *«libertad inmediata para los héroes de la Marina».*

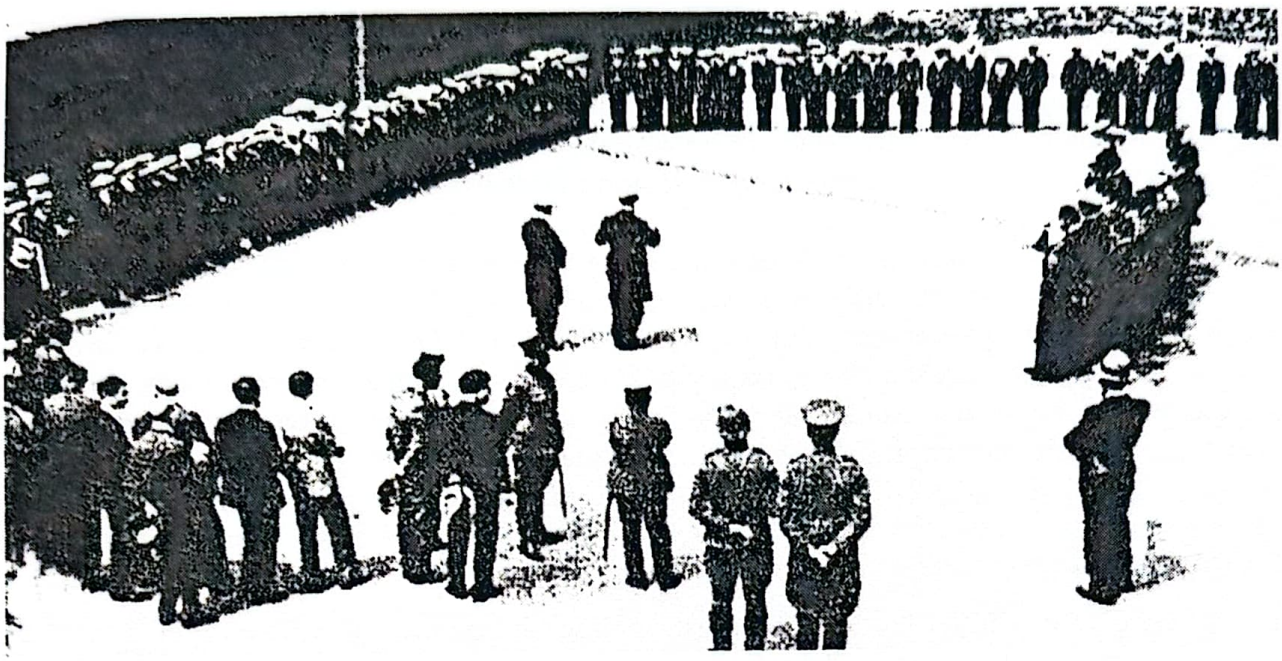
Uno de los primeros en alzar su voz pidiendo clemencia para los rebeldes fue el ex presidente Arturo Alessandri Palma, quien en un discurso, durante su proclamación como candidato a la primera magistratura, tan solo dos días después del fallo del Consejo de Guerra, pidió a la ciudadanía que lo acompañaran en su petición del indulto al Vicepresidente de la República, pues la génesis del movimiento habían sido los cinco años de la dictadura de Carlos Ibáñez en que el país había vivido un régimen de tiranía, fuera de la Constitución y la ley que los de arriba habían dado el mal ejemplo a los de abajo.

Con fecha 16 de octubre el gobierno conmutó las penas de muerte por las de presidio perpetuo, mediante un decreto firmado por el vicepresidente Trucco y su ministro de justicia Horacio Walker Larraín. Los beneficiados eran Orlando Robles, Carlos Cuevas Gallardo, Eliseo Sepúlveda Mora y Pedro Pacheco Pérez por los sucesos de Talcahuano; Manuel Poblete Vera por la situación de Quintero; Desiderio Cerpa Crespo, José Basáez Jiménez, Guillermo Pizarro Sepúlveda y José Gallardo Parra procesados en Coquimbo; Ernesto González Brion, Víctor Villalobos Martínez, Juan Bravo Quiñones, Lautaro Silva Silva, Luis Pérez Barrientos y Victorino Zapata Salinas condenados en San Felipe y Alejandro Caldera Holm, por el tribunal de Valparaíso.

Degradación de los condenados

El día 20 de octubre en la cárcel de Valparaíso y en el patio del regimiento Yungay de San Felipe se procedió a la degradación de los insurrectos condenados.

Esta sanción está contemplada en los casos de traición a la patria, de degeneración personal o de grave delito cometido a la institución.



La fiscalía del Consejo de Guerra lee las sentencias a los reos.

A la ceremonia que se efectuó en Valparaíso concurrieron delegaciones de cada uno de los buques, a los que se les hizo formar en cuadro en el patio del recinto carcelario; enseguida entraron el fiscal Sanfuentes, su secretario, algunos jefes de carabineros y periodistas; luego lo hicieron los suboficiales y marineros condenados, quienes se instalaron en el centro del cuadro.

El secretario del fiscal leyó las sentencias y el decreto de indulto, extendido por el Vicepresidente de la República, que conmutaba las penas de muerte por las de presidio perpetuo. Enseguida se llamó al frente a un suboficial que arrancó de los reos las jinetas, botones, escudos y demás insignias que los distinguían como miembros de la Armada, mientras los tambores redoblaban.

En el regimiento Yungay se cumplió igual ceremonia frente a la tropa formada de esa unidad militar y ante la presencia del fiscal Cordovez y del secretario, teniente Fernando Tisné.

El 1° de mayo de 1932 los amotinados que se encontraban en la cárcel, aprovechando que se desarrollaba en Santiago el Congreso Internacional Obrero Latinoamericano, se declararon en huelga de hambre. Arturo Alessandri intercedió por ellos ante el gobierno y los delegados los visitaron; pero su actitud fue considerada una intromisión en los asuntos internos chilenos.

El apoyo a los condenados fue creciendo en los círculos políticos de izquierda. La convención del Partido Socialista y la Asamblea Radical se unieron a la Federación de Estudiantes y a los partidos Demócrata y Comunista para exigir la amnistía. El periódico izquierdista La Crónica se encargó de recolectar fondos, siendo uno de sus más pródigos contribuyentes el ex presidente Arturo Alessandri, quien se lamentó *«que mientras los oficiales que habían dado el ejemplo de quebrantar la ley estaban libres, sus hombres se podrían en la cárcel»*.

La actividad del Partido Comunista no se quedó solamente en actuar para obtener la liberación de los presos, sino que nominó al preceptor Eliseo Sepúlveda, uno de los cabecillas de Talcahuano y al suboficial Ernesto González Brion como candidatos a parlamentarios por las circunscripciones aledañas a Valparaíso, tratando de obtener un apoyo a los rebeldes. González obtuvo 5.000 sufragios de 24.000 emitidos y Sepúlveda 172 de 5.500 votantes de los distritos de San Antonio y Melipilla.

Indultos y premios

Don Juan Esteban Montero fue elegido Presidente de la República para suceder a la administración provisoria de Manuel Trucco. Desde el inicio de su mandato debió resistir la presión de los políticos de izquierda que pedían el indulto de los condenados y así borrar todas las consecuencias de su actuación. Montero tenía fama de ser un hombre honesto y un reputado jurista, pero también era conocida la debilidad de su carácter. Así es como el 2 de mayo de 1932 negó el indulto solicitado para González Brion y dos días más tarde le conmutó las penas a tres condenados por la de relegación: a Ernesto González Brion y Aníbal Marfán a Aysén y a Pedro Sanhueza Henríquez a Temuco. Un mes después era derribado su gobierno y reemplazado por una junta formada por Arturo Puga, Eugenio Matte y Rolando Merino, creando la autonombrada «República Socialista».

El 14 de junio el nuevo gobierno concedió la amnistía a todas las personas condenadas o procesadas por delitos de carácter político y les facilitó el balcón de La Moneda para que le dirigieran la palabra al pueblo.

El vicepresidente de la república Abraham Oyadenel, que asumió a la caída del segundo gobierno socialista, sometió a la consideración del Congreso Nacional, el 21 de diciembre de ese mismo año, un proyecto de ley para otorgar derecho a pensión a todos los expulsados del servicio de la Armada por faltas y no delitos o bien reincorporarse a la institución, sancionado cuando ya gobernaba Arturo Alessandri.

A pesar que el Senado dio su aprobación por una abrumadora mayoría, quedaron flotando en el ambiente las vibrantes palabras de Horacio Walker cuando, pidiendo que se rechazara la iniciativa, dijo:

«No se defiende el régimen constitucional consagrando la tesis de que en Chile hay delincuentes privilegiados, que son los que intentan subvertir el orden público, los que intentan producir la guerra civil y la anarquía.

No se defiende el régimen constitucional buscando las soluciones cómodas o las más sentimentales, buscando las soluciones que dan fácilmente popularidad barata, esa popularidad barata en aras de la cual se ha quemado, muchas veces, incienso aún en este recinto».

El gobierno de Arturo Alessandri Palma fue aún más lejos y el 31 de octubre de 1933 le otorgó a Ernesto González Brion el retiro del servicio de la Armada y la pensión correspondiente. Luego en 1934 lo envió en comisión a México para que estudiara las escuelas agrícolas, lo cual hizo al senador Carlos Aldunate Errázuriz protestar:

«Ese indultado, que dos años antes desembarcaba en Valparaíso con grillos y cadenas, se reembarca en octubre pasado en el mismo puerto con rumbo a México, con todos los honores de su misión oficial, acaso con pasaporte diplomático y con buena provisión de letras de cambio a su orden, graciosamente expedidas por el Banco Central "por orden del ministro". ¡Qué honores y qué granjerías para los traidores a la patria!».

A su regreso se le nombró agente del servicio de Investigaciones en Antofagasta y posteriormente, inspector. En octubre de 1941, después de transcurridos diez años del motín, se le llamó a retiro[89].

[89] En 1933 uno de los condenados se desempeñaba como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Epílogo

Don Juan Esteban Montero asumió la Presidencia de la República el 1° de diciembre de 1931; pero ello no significó que la insubordinación que se había producido en las fuerzas armadas en 1924 hubiera terminado, sino que, muy por el contrario, ahora aliadas a elementos políticos de todos los colores harían aparecer a Chile como un paradigma de la inestabilidad y de los desmedidos apetitos de efímeros líderes que se creían llamados a ser los «salvadores de la patria».

Antes de un mes de gobierno, el Presidente debió enfrentar la primera asonada revolucionaria en Copiapó, donde un grupo subversivo asaltó al regimiento Esmeralda, siendo condenado el capitán Guillermo Villouta Ruiz junto a sus cómplices. El teniente coronel Marmaduke Grove Vallejos fue sindicado como el cabecilla, lo que nunca pudo probarse; pero más tarde él sería quien promoviera la amnistía de los condenados.

Tres meses después, en marzo, fue descubierto en Valparaíso un nuevo complot destinado a derrocar al presidente Montero y llevar nuevamente al poder al general Ibáñez, el que fue desbaratado. Aparece aquí un ambicioso periodista que también trataba de escalar el poder, llamado Carlos Gregorio Dávila Espinoza, junto al general Ambrosio Viaux Aguilar y al ex teniente Alejandro Lazo Guevara, que fuera ayudante de Ibáñez en el movimiento militar de 1924. Al parecer este hecho tuvo estrecho contacto con la masonería a través de Eugenio Matte Hurtado.

En el mes de mayo, el gobierno declaró el estado de sitio y ordenó la detención de Carlos Dávila, del comandante Arturo Merino Benítez y el ex teniente Alejandro Lazo quienes querían reponer a Ibáñez en La Moneda.

La exoneración del comodoro del aire[90] Marmaduke Grove y su substitución en la subsecretaría de aviación por el comandante Ramón Vergara Montero hizo que el primero se atrincherara en la Escuela de Aviación, desde donde resistió la orden del gobierno.

Cuando el ministro de guerra, general Carlos Vergara Montero, ordenó a la Escuela de Aplicación de Infantería que acudiera a reducir a los revoltosos, su comandante Pedro Lagos, que había tenido una actitud contemporizadora e indefinida, se plegó a las fuerzas sublevadas.

---

[90] El teniente coronel del Ejército Grove pasó a la Fuerza Aérea, donde llegó al grado de comodoro del aire, que correspondía al actual de general de esa institución.

Marmaduke Grove se transformó así en el nuevo hombre fuerte, acudiendo a La Moneda después de un teatral alarde realizado por los aviones de su arma.

Desde el primer instante quedó claro quienes componían el grupo conspirador, pues lo acompañaban el coronel Pedro Lagos, quien le abría paso, el comandante Arturo Merino Benítez, Eugenio Matte, Carlos Dávila, el general Arturo Puga y una treintena más de hombres sin figuración o guardaespaldas. Los visitantes pidieron la renuncia inmediata del presidente Montero y proclamaron «la República Socialista de Chile»[91].

Doce días duró la «República Socialista» y fue encabezada por una junta de gobierno que presidía el general Puga y la conformaban además Matte y Dávila. El comodoro del aire Marmaduke Grove, como el poder detrás del trono, se reservó para sí el ministerio de defensa nacional, colocando como jefe de la aviación al comandante Arturo Merino Benítez, cargo que desempeñó por solamente ocho días debido al rechazo que encontró.

Grove contaba con las fuerzas del regimiento Cazadores, de la aviación y del Cuerpo de Carabineros, dispuestos a defenderlo; pero La Moneda fue rodeada por el regimiento Buin, al atardecer, cuando los aviones ya habían regresado a su base. A las 11 de la noche ingresaron al palacio los almirantes Carlos Jouanne y Julio Merino Benítez y el capitán de navío Vicente Merino Bielich. Ese día el Comodoro del Aire había notificado a Jouanne, quien se desempeñaba como Director General de la Armada, que cursaría su baja de la institución; era el afectado quien ahora acudía, acompañado de sus colegas a exigir, a nombre del Ejército, la renuncia de Grove y de Matte.

Grove quiso ganar tiempo con ofertas contemporizadoras mientras incitaba al pueblo por la radio: *«El gobierno socialista se encuentra amenazado por la reacción, por los eternos enemigos de la causa popular. Es preciso que el pueblo se arme para defender sus intereses, que salga a las calles, que vuele a defender al gobierno, a garrotazo limpio, si no tiene otras armas que el garrote».*

Pero no hubo tal defensa y Grove, acompañado de su hermano Jorge, Eugenio Matte, Carlos Millán y Carlos Charlín salían, dos días más tarde, deportados a la isla de Pascua.

Una nueva junta de gobierno tomaba las riendas del país. La componían solo civiles: Carlos Dávila, Alberto Cabero y Nolasco Cárdenas. Antes de un mes Dávila sacaba una autorización a los ministros de guerra Pedro Lagos y de marina Francisco Nieto para pasar a denominarse «Presidente Provisional de Chile».

Cuando todo presagiaba que las asonadas militares y las ambiciones personales continuarían hundiendo al país y ya no se tenía confianza alguna en los mandos castrenses, algunos jefes del Ejército y de la Armada se pronunciaron contra este estado de cosas y la necesidad de ponerle fin. Fue el general Pedro Vignola, desde la guarnición de Antofagasta,

[91] El general Arturo Puga se instaló en el sillón presidencial. Con satisfacción, ufano y sonriente procedió a dar órdenes destinadas a organizar el gabinete. No dejó de provocar hilaridad esta actitud, porque los que estaban presentes, como todos los que le conocían, no daban crédito a las aptitudes políticas del General retirado y menos creían en el socialismo que aparentaba seguir, porque sólo dos meses antes había rondado por esas mismas oficinas presidenciales, del brazo de Ladislao Errázuriz, el más conspicuo líder conservador, rogando ser reincorporado al Ejército. Ahora, gracias a los increíbles vaivenes del destino, le correspondía presidir el gobierno de la República Socialista, al lado del vilipendiado ex embajador en Washington Carlos Dávila y del serenísimo gran maestre de la masonería Eugenio Matte.

quien dio el primer paso contra el gobierno, siendo seguido de inmediato por la guarnición de Concepción, quienes conminaron a Dávila a entregar el poder.

Aprovechando la confusión reinante, el comodoro Arturo Merino Benítez y el general Pedro Lagos pretendieron retomarse el gobierno.

Derrocado el «Presidente Provisional de Chile», asumió la conducción del país el ministro del interior general Bartolomé Blanche, quien se vio obligado, debido a la animosidad existente contra el Ejército, a entregar el mando al presidente de la Corte Suprema don Abraham Oyanedel, quien llevaría a la nación a los cauces constitucionales.

Las elecciones presidenciales fueron fijadas para octubre de 1932 y presentaron sus candidaturas el ex presidente Arturo Alessandri Palma, apoyado por los partidos liberal, radical y demócrata; Marmaduke Grove por los socialistas; Héctor Rodríguez de la Sotta por los conservadores; Enrique Zañartu Prieto por una fracción liberal, denominada democrática y Elías Lafferte por el Partido Comunista. El triunfo correspondió ampliamente al León de Tarapacá.

El ministerio de hacienda fue asumido por Gustavo Ross Santa María, quien con gran capacidad consiguió que la economía comenzara a recuperarse.

El temor de la ciudadanía a que se volviera a los cuartelazos y a que las ambiciones de los personajes salidos de las filas del Ejército volvieran a poner en jaque al gobierno constitucional, condujo a la formación de un verdadero ejército civil, formado por ciudadanos pertenecientes a todas las clases sociales.

Esta institución se conoció como «Milicia Republicana» y figuraron en ella militares, marinos, profesionales, parlamentarios, etc. Su finalidad era tener una fuerza capaz de oponerse a cualquier intento de golpe de Estado. Existió entre 1932 y 1938. Gran parte de su armamento había pertenecido el Ejército, habiéndole sido proporcionado por el gobierno de Arturo Alessandri.

La idea de su gestación comenzó a formarse durante los efímeros días de la «República Socialista» debido a la actitud del Partido Comunista que había propuesto la organización de *«Soviets de Obreros, Campesinos, Soldados y Marineros»* y llamado a armar al pueblo, *«a escasos meses del motín de la escuadra»*.

El Ejército mantuvo una constante antipatía por esta institución; pero no así la Armada y el Cuerpo de Carabineros que aplaudieron públicamente su surgimiento.

El 19 de mayo de 1933 el Director General de la Armada, vicealmirante Olegario Reyes del Río, planteaba en una orden del día *«En otras ocasiones similares de nuestra historia, la organización de cuerpos cívicos, semejantes a las actuales milicias, pusieron término a los largos períodos de inestabilidad gubernativa y reintegraron el país a la paz interna. La Armada considera conveniente a la salud de la república la existencia de las milicias republicanas, estimulándolas como un cuerpo cooperador de sus funciones en orden a mantener la paz social y la tranquilidad interna y para que S.E. el Presidente de la República pueda desarrollar su trabajo de reconstrucción nacional»*[92].

La Milicia Republicana llegó a contar con cincuenta mil voluntarios, fuertemente armados, repartidos en 18 regimientos a lo largo de todo el país y constituyó, de hecho, un contrapoder irresistible a las fuerzas armadas.

---

[92] Sin embargo la reacción de la oposición política a esta orden del día fue inmediata. Las organizaciones socialistas protestaron enérgicamente contra esta actitud de la Armada.

Palabras finales

La crisis de 1925 pudo tener un desenlace igual a la de 1891; pero lo que lo impidió fue que las fuerzas armadas se encontraban con una situación interna muy distinta a la de entonces. En 1891 ellas eran disciplinadas y siguieron a sus jefes, quienes estaban exentos de ambiciones personales y emprendieron los caminos que creían que era su deber tomar. El Ejército estimó que le correspondía defender la permanencia del Presidente de la República en su cargo y la Armada que su juramento la obligaba a defender la Constitución Política del Estado. En cambio en 1925 la disciplina estaba corrompida y ellas eran obligadas a seguir las ambiciones de sus jefes.

La crisis de 1891 dejó centenas de muertos debido a que desembocó en una guerra civil en la cual, finalmente, se enfrentaron dos ejércitos disciplinados, a pesar que uno de ellos era improvisado; pero su duración fue de 9 meses, en cambio en 1925 no hubo un enfrentamiento, sino que una seguidilla de golpes militares hizo al país padecer sus efectos durante seis años.

En 1891, una vez concluida la guerra civil, las fuerzas armadas volvieron por sus fueros y entregaron la dirección del país a quienes designaba la Constitución para ello; a diferencia de 1925 en que cada caudillo subvertía la disciplina de los regimientos o grupos que lo siguieran para derrocar al que anteriormente había desempeñado el mismo papel.

A pesar que el motín de la escuadra constituyó uno de los hechos más graves en que se ha visto envuelta nuestra república, nunca fue investigado seriamente ni sus promotores fueron identificados en forma clara. Sus ejecutores alcanzaron a permanecer muy pocos meses en la cárcel y luego recibieron el perdón e incluso cargos públicos.

Los diferentes conglomerados políticos interpretaron los hechos según sus propias conveniencias y tomaron posiciones de acuerdo a los dividendos que les podían rendir.

Como hemos visto, el país venía saliendo de una serie de cuartelazos militares que se repetían desde hacía siete años y que habían culminado cuando Carlos Ibáñez alcanzó la primera magistratura; pero cuyo gobierno había terminado abruptamente con el más monumental fracaso económico, que tenía a la nación sumida en la paralización de sus industrias, en la moratoria de la deuda externa y en una abismante cesantía.

Al producirse el levantamiento de las tripulaciones, el mayor temor del gobierno provisorio era que el control de la situación derivara en un nuevo gobierno militar del cual, tal vez, no quedaría ausente el mandatario depuesto.

Las dos oportunidades en que Ibáñez había enfrentado al Ejército contra la Armada, en una de las cuales redujo a prisión a los vicealmirantes Nef y Gómez Carreño, que constituían verdaderos símbolos de la institución, habían causado profundas heridas, además que la Marina no podía perdonar al caudillo de ser la causa de su descomposición interna al lanzar a los oficiales ingenieros contra los ejecutivos, del descabezamiento del alto mando naval cuando se nombró a un capitán de fragata como ministro de marina, de imponerle una organización similar a la del Ejército haciendo depender sus departamentos administrativos del ministerio en la capital, lo que los desvinculaba de la flota, y del perdón y de la reincorporación que había decretado para los oficiales golpistas que habían sido condenados en la «conspiración de los Luises».

Al producirse el motín, las autoridades navales mostraron dos actitudes contrapuestas: la de reprimir de inmediato a los rebeldes, que encontraron su apoyo en el ministro de guerra, y la de negociar con los sublevados como si se tratara de discutir un pliego de peticiones con un sindicato de una empresa, que fue la que prevaleció en un principio y encontró en el contraalmirante von Schroeders a su interlocutor.

Por otro lado, la debilidad del gobierno provisional era manifiesta; al ser depuesto Carlos Ibáñez asumió la Vicepresidencia de la República el presidente del Senado Pedro Opazo Letelier, quien por su parentesco con la esposa del ex mandatario, debió resignar el cargo en su ministro del interior Juan Esteban Montero, quien fue Vicepresidente del Vicepresidente, pero al decidir éste presentarse como candidato a los próximos comicios, delegó el puesto en Manuel Trucco quien, en definitiva, gobernó como Vicepresidente del Vicepresidente del Vicepresidente.

Esta débil base de apoyo hacía temer al ejecutivo que una acción violenta contra los revoltosos acabara con su mandato y lo devolviera a los militares, por lo que se inclinó por el camino de las negociaciones que propiciaban los marinos «blandos». Solo su fracaso hizo ver al gobierno que el terreno se le ponía difícil y la asonada tomaba los tintes de revolución.

El nombramiento del general Vergara para que se hiciera cargo de la represión le daba la confianza que este jefe había mostrado grandes desavenencias con Ibáñez, lo que era un seguro para que el triunfo no lo aprovechara el caudillo.

Las elecciones presidenciales fueron disputadas por Juan Esteban Montero, que contó con el apoyo de los partidos de la derecha y Arturo Alessandri Palma, proclamado por la izquierda, en una lucha muy singular, pues el primero, que era un dignísimo jurista, no tenía mayor interés en mezclarse en la ardua lucha partidista, en cambio el León, no aspiraba a otra cosa que volver al solio de O'Higgins. Montero ganó, pero no iba a tener tranquilidad, pues los partidos políticos, que habían sido sojuzgados durante tantos años, trataban de sobresalir; para lo cual cada uno trató de aprovechar el motín en su beneficio o influyó para perdonar a los culpables.

Al gobierno del vicepresidente Trucco y a su sucesor el presidente Juan Esteban Montero les convenía no agitar a la izquierda, pues esperaban restarle sus votos a Alessandri, por lo que les era conveniente centrar, como causa de lo sucedido, el problema de la rebaja de sueldos.

Luego, los dos efímeros gobiernos de la «República Socialista», que sucedieron a Montero cuando fue derrocado, trataron como héroes a los cabecillas de la revuelta y los premiaron generosamente, haciendo recaer las causas del movimiento en los malos tratos que recibían las tripulaciones de sus oficiales y en los excesos que cometían. Como todo ello, aunque

fuera cierto, estaba contra la ley, trataron de involucrar a la oficialidad como los cerebros de la rebelión, pero que por cobardía habrían convencido a los tripulantes que dieran la cara, mientras ellos los impulsaban tras bambalinas.

Los políticos adeptos a la Unión Nacional y al Partido Conservador encontraron un excelente argumento para culpar a Arturo Alessandri y así impedir su protagonismo político y destruirlo definitivamente. Inventaron su participación en el complot de Dover y lo divulgaron, en tal forma, que a los contemporáneos, afectos a sus ideas, no les cabría duda de su veracidad. La causa que habría impulsado al León a hacerlo era derrocar a su archi enemigo Carlos Ibáñez, pero los hechos se habían retrasado y estallado el motín cuando aquel ya no gobernaba.

Les ayudaba a hacer creible su posición la condena tibia que Arturo Alessandri había hecho del movimiento y haber querido involucrarse demasiado en los hechos para congraciarse con la izquierda y cuando llegó a la Presidencia de la República en 1932, haber indultado al principal cabecilla, concediéndole pensión y premiándolo con un puesto público en el extranjero.

A los ibañistas también les gustaba esta explicación, pues destruía políticamente a su gran enemigo y lo hacía aparecer como promotor de la más grande felonía y traición que se había cometido contra la república y contra la patria.

El Ejército, que tuvo una activa participación en la represión del movimiento y muchos de sus miembros oficiaron como defensores de los procesados, no tenía interés en que se especulara sobre la indisciplina reinante en las fuerzas armadas ni se recordara que habían sido sus oficiales jóvenes quienes la habían promovido en 1924, pues muchos de sus miembros soñaban con el regreso de su líder, Carlos Ibáñez, a La Moneda.

Surgió así como la gran fuerza, sin contrapeso, pero muy luego fue sobrepasada por la ambición de algunos jefes que, unidos a los de la naciente Fuerza Aérea, no se conformaron con volver a sus cuarteles y, junto a elementos políticos, derrocaron al presidente Montero y arrastraron al país a las negras etapas de la «República Socialista».

La joven Fuerza Aérea gozaba con el papel de héroe y de triunfadora que le había asignado el gobierno y la prensa, al haber doblegado con sus débiles máquinas a una escuadra poderosa; ello le daría poder para liberarse de la tutela del Ejército y de la Armada y despegar definitivamente como una fuerza independiente con el material que las otras dos ramas poseían. Por ello no era conveniente sacudir que también se había insubordinado, como pudo apreciarse con los hechos sucedidos en Quintero y la infiltración política que sufrió el grupo de aviación N° 2.

Encontró así el camino para vencer la resistencia que le había puesto la Marina para entregarle su arma aérea y la oposición de los pilotos navales y la tuvo interdicta, para contar con sus propios aviones, durante veinticuatro años.

La Armada, herida profundamente, con un gran número de sus miembros alejados de las filas y sabiendo que efectivamente habían existido oficiales involucrados y muchos de sus mandos exonerados por la responsabilidad que les cabía en la disciplina de sus buques, no pudo hacer oír su voz y pregonar que había sido víctima de una infiltración política extremista por lo que se encerró en sus labores profesionales y su reconstrucción.

¿Y el Partido Comunista? Como hemos visto, a nadie le convenía que se supiera la verdad y su acción no fue investigada suficientemente, pues era preferible darle a los hechos el carácter de una protesta por la rebaja de sueldos decretada por el ministro Blanquier y la cual había sido promovida por la oficialidad que había usado a las tripulaciones para ejecutarlo, siendo ellos tan afectados, como sus subordinados con la medida.

Si nos remontamos a los hechos acaecidos en 1925 en Talcahuano, que habían llevado a la Federación Obrera de Chile FOCH, a apoyar, dentro del recinto naval, a los conspiradores, fue la primera vez que las tripulaciones sacaron la voz contra sus jefes; pero nadie relacionó ello con el motín.

La FOCH era el organismo de fachada del Partido Comunista; había sido fundada el 18 de septiembre de 1909, pero hasta 1921 no fue propiamente un organismo combativo. El 25 de diciembre de 1921, por indicación de Juan Emilio Recabarren en la convención de Rancagua, adhirió a la Internacional Sindical Roja, de Moscú; paso que fue ratificado en la convención de Chillán de 1923. Recabarren la presidió desde 1919.

El hecho que el gobierno se había visto obligado a mantener efectivos de Investigaciones en el acorazado «Almirante Latorre» para detectar posibles infiltraciones políticas, tampoco fue mencionado.

La existencia de una imprenta clandestina a bordo del buque insignia, cuya procedencia jamás se estableció, pero que fue denunciada por el comodoro Hozven, no formó parte de la investigación.

La llegada de los cabos despenseros Astica y Zagal a la Marina, especialmente del primero que tenía un nutrido currículum de activista político, que había sido enviado a formar sindicatos en las salitreras y que a pesar de su cortísimo tiempo en las filas se transformó en el mentor y director del movimiento, en un medio acostumbrado a la estricta disciplina y respeto a la antigüedad, son hechos que tampoco encontraron explicación.

El Partido Comunista supo aprovechar la oportunidad que le ofrecían las disputas internas para pasar desapercibido como organizador del motín. En forma increíble muchas de las autoridades negaron la participación marxista, pero estaban muy cercanos los hechos de haber llamado a la revolución social, de los manifiestos políticos de los sublevados, del embarque de miembros del partido en el «Almirante Latorre» en Coquimbo y del llamado para que los obreros que controlaban políticamente en la zona del carbón acudieran a reforzar a los amotinados en el Apostadero Naval de Talcahuano.

Mucho se ha dicho, durante los 68 años transcurridos desde el motín, que no hubo infiltración marxista, que lo había organizado el Comité de París, que los oficiales estaban comprometidos, etc.; pero lo cierto es que por las conveniencias de cada grupo, partido o entidad, los hechos fueron investigados y manejados en formas diferentes de manera que les permitiera llevar aguas a sus respectivos molinos.

Bibliografía

ALDUNATE PHILLIPS, R.; 1969: *La Revolución de los Tenientes*. Escuela Lipo-topográfica La Gratitud Nacional. Santiago, Chile.

ARANCIBIA CLAVEL, P.; GÓNGORA ESCOBEDO, A.; VIAL CORREA, G.; 1996: *Jorge Alessandri 1896-1986. Una biografía*. Editorial Zig Zag. Santiago, Chile.

ARANEDA BRAVO, F.; 1979: *Arturo Alessandri Palma*. Editorial Nascimento. Santiago, Chile.

BELLO CODESIDO, E.; 1954: *Recuerdos Políticos. La Junta de Gobierno de 1925*. Editorial Nascimento. Santiago, Chile.

BRAVO RÍOS, L.; 1955: *Lo que supo un Auditor de Guerra*. Editorial del Pacífico S.A. 2ª Edición. Santiago, Chile.

BRAVO VALDIVIESO, G.; 1997: *El patio trasero*. Editorial Andújar. Santiago, Chile.

CANNOBBIO, M.; 1995: *Cronicón Histórico. Testimonios de la Historia Política*. Ernesto Carmona Editor. Santiago, Chile.

CASTEDO, L.; 1982: *Resumen de la Historia de Chile*. Tomo IV. Editorial Zig Zag. Santiago, Chile.

DONOSO, A.; 1934: *Conversaciones con don Arturo Alessandri*. Editorial Ercilla. Santiago, Chile.

DONOSO, R.; 1954: *Alessandri Agitador y Demoledor*. Fondo de la Cultura Americana. México.

EDWARDS, A.; 1992: *La Fronda Aristocrática en Chile*. Editorial Universitaria. 13ª Edición. Santiago, Chile.

FERMANDOIS, J.; 1997. Abismo y Cimiento. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

GONZÁLEZ, E.; 1932: *El Parto de los Montes o la Sublevación de la Marinería*. Talleres Gráficos Cóndor. Santiago, Chile.

GONZÁLEZ VIDELA, G.; 1975: *Memorias*. Editora Nacional Gabriela Mistral Ltda. Santiago, Chile.

GUZMÁN CORTÉS, L.; 1965: *Un episodio olvidado de la Historia Nacional. Julio-noviembre de 1931*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

HORMAZÁBAL GONZÁLEZ, M.; 1989: *Por los Caminos de la Democracia 1920-1940*. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile.

LÓPEZ URRUTIA, C.; 1969: *Historia de la Marina de Chile*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

LÓPEZ URRUTIA, C.; 1976: *Breve Historia Naval de Chile*. Editorial Francisco de Aguirre. Santiago, Chile.

MALDONADO PRIETO, C.; 1988: *La Milicia Republicana. Historia de un Ejército Civil en Chile, 1932-1936*. Servicio Universitario Mundial. Santiago, Chile.

MANNS, P.; 1972: *Revolución de la Escuadra*. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, Chile.

MERINO CASTRO, J.T.; 1998: *Bitácora de un Almirante*. Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile.

MERINO SAAVEDRA, J.T.; 1932: *La Armada Nacional y la Dictadura Militar*. Taller Imprenta Dirección General de Prisiones. Santiago, Chile.

MONTERO MORENO, R.; 1959: Confesiones Políticas. 2ª edición. Santiago, Chile.

SABELLA, A.; 1997: *Norte Grande*. LOM Ediciones. 2ª Edición. Santiago, Chile

SÁEZ, C.; 1934: *Recuerdos de un Soldado*. Tomos I y III. Biblioteca Ercilla. Editorial Ercilla. Santiago. Chile.

SATER, W.F.; 1980: «Hispanic American Historical Review 1980». *The Abortive Kronstadt: The Chilean Naval Mutiny of 1931*. Duke University Press. Estados Unidos.

SOMERVELL, P.; (1984): «Annual Conference of the Society for Latin American Studies». *Naval Affairs in Chilean Politics, 1910-1932*. Society for Latin American Studies. Newcasttle, Inglaterra.

TEITELBOIM, V.; 1997: *Un muchacho del Siglo Veinte*. Editorial Sudamericana. Santiago, Chile

TROMBEN, C.; 1987: *La Aviación Naval de Chile*. Imprenta de la Armada. Valparaíso, Chile.

VALTIN, J.; 1941: *La Noche Quedó Atrás*. Editorial Claridad S.A. Buenos Aires, Argentina.

VERGARA MONTERO, R.; 1933: *Por Rutas Extraviadas*. Imprenta Universitaria. 2ª Edición. Santiago, Chile.

VIAL CORREA, G; 1996: «Historia de Chile 1891-1973». *Alessandri y los Golpes Militares*. Tomo III. Editorial Santillana del Pacífico S.A. Santiago, Chile.

VIAL CORREA, G.; 1996: «Historia de Chile 1891-1973». *La Dictadura de Ibáñez (1925-1931)*. Vol. IV. Editorial Fundación. Santiago, Chile.

VON SCHRODERS, E.; 1933: *El Delegado del Gobierno y el Motín de la Escuadra*. Imprenta Universo. Santiago, Chile.

Diarios y Revistas:

EL DIARIO ILUSTRADO. Lunes 12 de octubre de 1931.

EL MERCURIO de Santiago. 12 de octubre de 1931.

LA ÉPOCA. 31 de octubre de 1931. *Los Sucesos de la Armada*. Una sucinta exposición de don LUIS HENRÍQUEZ ACEVEDO.

REVISTA SUCESOS. Desde el 10 de septiembre al 22 de octubre de 1931.

REVISTA ZIGZAG. Desde el 5 de septiembre al 24 de octubre de 1931.

Otros Antecedentes:

Cartas del comandante del destructor «Orella» Leonardo Huber a su hermano Fernando de fecha 20 de septiembre de 1931 y 6 de enero de 1932. (Gentileza del almirante ERNESTO HUBER VON APPEN).

Conversación con el Almirante JORGE SWETT MADGE, testigo del hecho. 19-XII-97.

Defensa del capitán de navío don Alberto Hozven Azaola, hecha ante el Consejo de Guerra por el capitán de fragata don Juan Agustín Rodríguez Sepúlveda. (Gentileza de su hijo R.P. JUAN AGUSTÍN RODRÍGUEZ GAZITÚA)

Entrevista, realizada con fecha 9.2.99, al comandante Carlos Aguirre Vío, oficial artillero del destructor «Hyatt».

Entrevista, realizada con fecha 18.2.99, al coronel (R) Carlos Vío Valdivieso, teniente del regimiento Coraceros, que le correspondió reducir la base aérea de Quintero.

Entrevista al capitán de navío (R) Guillermo Leyghton Leyghton, guardiamarina de guardia del crucero «O'Higgins». Con fecha 9 de marzo de 1999.

Informe del comandante Luis Muñoz Valdés en el proceso. Información del contraalmirante Paul Balaresque.

«La Sublevación de la Marinería de la Escuadra Activa y de Instrucción, ocurrida en el Puerto de Coquimbo el día Martes 1 de Septiembre de 1931». Raúl Rossi Contreras, Contralmirante IM (R). (Oficial del destructor «Hyatt» el día del motín) (Gentileza de su hija Sra. Valeria Rossi).

«La Sublevación de las Tripulaciones de la Escuadra». Septiembre 1931. Trabajo para la cátedra de Historia de Chile IV. Instituto de Historia, Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Baldomero Estrada Turra, alumno J. Mauricio Corvalán Constantino, ayudante Ximena Recio Palma. Viña del Mar, diciembre de 1986.

Radiogramas transmitidos y recibidos desde los buques sublevados. Archivo Jorge Guarello Fitz Henry.

ÍNDICE

Agradecimientos 7

Introducción 9

Capítulo I
El desquiciamento político

Los excesos de los políticos 13

La inoperabilidad del sistema impuesto después de la revolución de 1891 14

Arturo Alessandri Palma entra en escena 15

La «cuestión social» 17

La crisis económica y la obstrucción parlamentaria al ejecutivo 18

La corrupción administrativa 19

El Presidente busca apoyo en los cuarteles 20

Las elecciones parlamentarias de 1924 22

La Unión Nacional contraataca conspirando 23

Comentario final 24

Capítulo II
La Indisciplina de las Fuerzas Armadas

Primera parte
El Ejército y los políticos

La situación económica y social de las fuerzas armadas 28

Despreocupación del parlamento por las inquietudes castrenses 29

La oficialidad joven se hace presente en el Senado 30

La protesta toma visos de rebelión 32

Alessandri trata de capitalizar la rebelión 32

¡No hemos venido a pedir, sino a exigir! 34

Acelerada aprobación de los proyectos de ley 34

La Junta Militar 35
El golpe militar del 11 de septiembre de 1924 37
La Armada logra la disolución de la Junta Militar
Resentimiento en el Ejército 38
El golpe militar del 23 de enero de 1925
Detención de los almirantes Nef y Gómez Carreño 41
La indisciplina a nivel del personal de tropa 42
El regreso de Alessandri. Oposición de la Armada 43
Alessandri trata de estrechar vínculos con las Fuerzas Armadas 44
El plan de Carlos Ibáñez 45
Ibáñez no renuncia 46
Ibáñez se fortalece 48
Oposición de la Armada 49
La elección presidencial 50
Ibáñez continúa como ministro de guerra 52
Ibáñez trata de neutralizar a la Marina 54
Ibáñez, ministro del interior 55
Presidencia de Ibáñez 56
El coronel Carlos Vergara 58
Buenos Aires y París centros de conspiración 59
La crisis económica 60
La caída de Ibáñez 62
El Vicepresidente del Vicepresidente del Vicepresidente 62
La rebaja de sueldos a la administración pública 63

Segunda parte
La situación de la Armada

La verticalidad del mando 65
Aislamiento político 66
Inquietud de la oficialidad 67
Alessandri trata de hacer presión al parlamento con las Fuerzas Armadas 69
Alessandri pretende enfrentar a la Armada contra el Ejército 70
La posición de la Armada en el movimiento militar de 1924 72

La Aviación Militar 74
Ibáñez trata de subvertir la disciplina de la Armada 75
El arresto de los almirantes 75
El complot contra la Armada 76
Consecuencias 78
En Talcahuano la marinería da su opinión política y se amotina en 1925 78
La mediación de Agustín Edwards 80
La sublevación de los Luises 82
El «derrumbe de la Marina» 82

Capítulo III
El motín

La rebaja de sueldos 85
El Partido Comunista 86
El contagio pudo venir de Inglaterra 86
Ingreso de los cabos despenseros 89
Un ambiente propicio 90
Ambiente huelguístico en el ámbito nacional 91
Petición de las tripulaciones al gobierno 92
Decisión de amotinarse 95
Falta de medidas adecuadas para controlar el peligro 97
El motín en el acorazado «Almirante Latorre» 98
La situación en el crucero «O'Higgins» 99
La situación en los destructores 101
Comentarios 103
El primer pliego de peticiones 103
El gobierno discute como actuar 105
El segundo pliego de peticiones 107
La misión von Schroeders 109
Crisis ministerial 109
Donde negociar 111

El «comodoro» Steembecker 111
Las instrucciones del gobierno 112

Capítulo IV
Las negociaciones

Primera reunión del delegado a bordo 115
Apoyo de las tripulaciones de Talcahuano 118
Discrepancias del delegado con los sublevados 120
Otras dificultades y nuevos apoyos al motín 121
Von Schroeders busca un acuerdo 122
Segunda reunión del delegado abordo 123
Formación de la «escuadra del sur» 124
Discrepancias del delegado con el gobierno 125
El incendio se extiende 125
Proposición de acta de arreglo 126
Tercera reunión del delegado a bordo 129
El gabinete presiona al vicepresidente para que ponga fin a la sedición 131
Detención de Carlos Frödden 132
Empieza la desmoralización en los amotinados 133
Acta sin destino 133
Los sublevados llaman a la revolución social 135
Los sediciosos se aprestan a combatir 135

Capítulo V
La situación general del país

Ambiente huelguístico 137
La Milicia Republicana 150
Fracaso de la mediación 141
El gobierno trata que se rindan los submarinos 142
Merino Benítez trata de sublevar la aviación 143
Situación de las reparticiones navales en el resto del país 144
Primera acción de la aviación 145

Capítulo VI
Coquimbo

Llegada de la «escuadra del sur» 147

Captura del «Flora» 148

Apelación al gobierno 148

Preocupación en La Serena por posibles desmanes 149

Guerra de comunicaciones 150

Reconocimiento aéreo 151

Ataque de la aviación 152

Comentarios 154

Desmoralización y deserciones 155

Amenaza de bombardeo a Coquimbo y a La Serena 156

La misión del contraalmirante Campos 157

Solicitud de mediación al arzobispo de Santiago 158

Deserción de los destructores 159

Entrega de los buques 160

Capítulo VII
Talcahuano

La situación social, moral y disciplinaria del puerto militar en la época 165

La Escuela de Torpedos se pliega a la rebelión 166

El «Araucano» se subleva 167

Otras adhesiones 168

El Ejército inicia el ataque 168

No hay claridad en el mando de los sublevados 171

El ataque 172

Mensajes por radio 174

Un buque leal 175

Últimas escaramuzas 176

El control militar 176

Capítulo VIII
Valparaíso

La situación en el regimiento Maipo 179
La sublevación se extiende 182
Alzamiento y sometimiento del Grupo de Aviación Nº 2 de Quintero 183

Capítulo IX
Los juicios

El Consejo de Guerra de San Felipe 187
Se acusa a los oficiales 189
La defensa de González Brion 190
El Consejo de Guerra de Valparaíso 191
Consejos de Guerra de La Serena, Talcahuano, San Bernardo y Quintero 191
Documentos comprometedores 193
Comentarios 195
Sumario a los oficiales 196
Nuevo proceso a los oficiales 197
Aplazamiento de las ejecuciones 197
El Partido Comunista otra vez llama a la insubordinación 198
Conmutación de penas 199
Degradación de los condenados 199
Indultos y premios 201

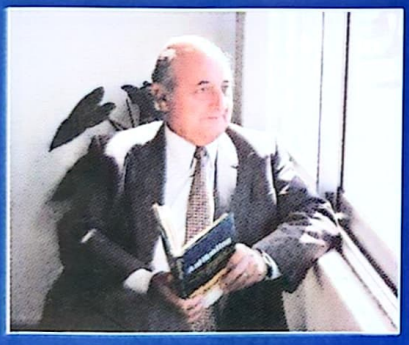
Epílogo 203
Palabras finales 207

Bibliografía 211

El primero de septiembre de 1931 se produjo un motín en los buques de la escuadra chilena que se extendió a otras reparticiones navales e incluso afectó a unidades del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Mucho escribieron los contemporáneos y testigos de estos hechos, atribuyendo las causas a motivos que cada autor quiso hacer resaltar, pero también acallando la participación o influencia de otros.

Este libro es el resultado de años de paciente investigación, de cuidadoso examen de las fuentes nacionales y extranjeras, de entrevistas a los actores que aún viven y de un riguroso proceso de interpretación de los mismos.



Germán Bravo Valdivieso. (Santiago, 1933)

Germán Bravo ingresa a la Escuela Naval en 1949, alcanzando el grado de teniente segundo en 1956, año en que se retira de la Armada.

En 1978 se titula como Ingeniero Constructor Naval en la Universidad de Concepción, recibiendo el «Premio Universidad», en reconocimiento a su rendimiento académico.

Germán Bravo ha sido un apasionado de la Historia y los procesos políticos, especialmente los relacionados con nuestro país.

En 1997 publica su primer libro *El patio trasero*, obra que ya agotó su tercera edición.

Su vida laboral está ligada a su profesión.